Vínculos

Espacios seguros para mujeres y jóvenes en América Latina y el Caribe

Pablo Emilio Angarita Cañas
y Carolina Sánchez Henao —Editores—

Connections

Safe spaces for women and youth in Latin America and the Caribbean

IDRC | CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international
Canada

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Instituto de Estudios Regionales
—INER—

CLACSO

Autores

Pablo Emilio Angarita Cañas
Carolina Sánchez Henao
Natalia Cardona Berrío
Beatriz Elena Hernández Chaverra
Óscar Quinto Mosquera
Tarik Weekes
Deanna Ashley
Ricardo Williams
Nadia Robinson
María Virginia Díaz
Elena Flores
Jenny Patricia Espinoza
Denia Matamoros
Laura Romero Ríos
Ana Mireya Campanur Sánchez
Rebeca Cucue Campus
Araceli García Jerónimo
Óscar Daniel Torres Rosales
Pedro Olivera Gutiérrez
Rosalinda Piedra Ledezma
Paulina Reyes Sánchez
Blanca Cristal Torres Espinoza
Gilberto Lenin Torres Lázaro
Anabella Amado Alemán
Iván Rocael Monzón Muñoz
Miguel Alejandro Saquimux
Gabriela Paredes
Anabella Aldana
Jacinta Leticia Corio López
Susana Abigail Cedillo Díaz
Marta Yolanda Gallego Ramírez
Juana Yocelyn Raymundo Cedillo
Cecilia de León Matom
Jeimy Clariza López Carrillo
María Loida Ceto Brito
Hilaria Guzmán
Maya Varinia Alvarado Chávez
Judith Erazo
Luis Monterrosa
Javier Martínez
Alexandra Abello-Colak
Jenny Pearce

Vínculos

Espacios seguros para mujeres
y jóvenes en América Latina y el Caribe

Connections

Safe spaces for women and youth
in Latin America and the Caribbean

CLACSO
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO - Secretaría Ejecutiva
Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva
Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial
Lucas Sablich - Coordinador Editorial

LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES
CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

ISBN: 978-987-722-477-1
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Vínculos : espacios seguros para mujeres y jóvenes en América Latina y el Caribe / Pablo Emilio Angarita Cañas ... [et al.] ; editado por Carolina Sánchez Henao ; Pablo Emilio Angarita Cañas ; prólogo de Jenny Pearce. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Medellín : INER - Instituto de Estudios Regionales - Universidad de Antioquia ; Observatorio de Seguridad Humana de Medellín ; Ottawa : IDRC/CRDI - International Development
Research Centre, 2019.
ISBN 978-987-722-477-1

1. Mujeres. 2. Jóvenes. I. Angarita Cañas, Pablo Emilio, ed. II. Sánchez Henao, Carolina, ed. III. Pearce, Jenny, prolog.
CDD 305.42

Vínculos

Espacios seguros para mujeres
y jóvenes en América Latina y el Caribe

Connections

Safe spaces for women and youth
in Latin America and the Caribbean

Pablo Emilio Angarita Cañas y Carolina Sánchez Henao
—Editores—

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Instituto de Estudios Regionales
—INER—

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Observatorio de Seguridad Humana
Medellín

IDRC | CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international

Canada

Vínculos
Espacios seguros para mujeres y jóvenes en América Latina y el Caribe

Connections
Safe spaces for women and youth in Latin America and the Caribbean
Pablo Emilio Angarita Cañas y Carolina Sánchez Henao

Editores
Editores académicos: Pablo Emilio Angarita Cañas y Carolina Sánchez Henao.

© Pablo Emilio Angarita Cañas, Carolina Sánchez Henao, Natalia Cardona Berrío, Beatriz Elena Hernández Chaverra, Óscar Quinto Mosquera, Tarik Weekes, Deanna Ashley, Ricardo Williams, Nadia Robinson, María Virginia Díaz, Elena Flores, Jenny Patricia Espinoza, Denia Matamoros, Laura Romero Ríos, Ana Mireya Campanur Sánchez, Rebeca Cucue Campus, Araceli García Jerónimo, Óscar Daniel Torres Rosales, Pedro Olivera Gutiérrez, Rosalinda Piedra Ledezma, Paulina Reyes Sánchez, Blanca Cristal Torres Espinoza, Gilberto Lenin Torres Lázaro, Anabella Amado Alemán, Iván Rocael Monzón Muñoz, Miguel Alejandro Saquimux, Gabriela Paredes, Anabella Aldana, Jacinta Leticia Corio López, Susana Abigail Cedillo Díaz, Marta Yolanda Gallego Ramírez, Juana Yocelyn Raymundo Cedillo, Cecilia de León Matom, Jeimy Clariza López Carrillo, María Loida Ceto Brito, Hilaria Guzmán, Maya Varinia Alvarado Chávez, Judith Erazo, Luis Monterrosa, Javier Martínez, Alexandra Abello-Colak, Jenny Pearce.

ISBN: 978-958-5596-34-4, ISBNe: 978-958-5596-35-1

Primera edición: noviembre de 2019

Fotografía portada: Víctor Hugo Agudelo Rúa. Interacción comunitaria de jovenes, Colombia
Diseño de cubierta y diagramación: Imprenta Universidad de Antioquia
Corrección de estilo: Koleia Bungard
Catalogación: Yulieth Taborda Ramírez
Primera evaluación de todos los capítulos: Alexandra Abello-Colak (LSE) y Markus Otto Gottsbacher (UNODC - México). Evaluación final de todo el libro: Comité Editorial CLACSO.

Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana
Observatorio de Seguridad Humana de Medellín
Calle 67 N.º 53-108
Universidad de Antioquia, Bloque 14, oficina 104
http://www.repensandolaseguridad.org/
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais.
EEUU 1168 | C1101 AA Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel [54 11] 4304 9145/9505 | Fax [54 11] 4305 0875 | e-mail clacso@claso.edu.ar |
http://www.clacso.org

Hecho en Colombia

Imprenta Universidad de Antioquia
Teléfono: [574] 219 53 30. Telefax: [574] 219 80 13
Correo electrónico: imprenta@udea.edu.co

Libro elaborado en el marco del Proyecto «Voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros de América Latina y el Caribe» con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá (IDRC). Los puntos de vista expresados aquí no representan necesariamente los del IDRC o su Junta de Gobernadores.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Instituto de Estudios Regionales —INER—

IDRC | CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international

Canada

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Contenido

Agradecimientos 15

Prólogo. Espacios de violencia y espacios de paz en América Latina y el Caribe
Jenny Pearce 19

Introducción 19
Un proceso de investigación que transgrede fronteras 20
Lugares y sujetos 22
Diálogos epistemológicos 23
Innovaciones metodológicas: agencia y enfoque *desde abajo* 25
Espacios de violencia, espacios de paz: ¿qué hemos aprendido? 25
Referencia 27

Prologue. Spaces of Violence, Spaces of Peace in Latin America and the Caribbean
Jenny Pearce 28

Introduction 28
Boundary Transgressing Research Process 29
Sites and Subjects 30
Epistemological Dialogues 31
Methodological Innovations: Agency and the *'Enfoque desde abajo'* 33
Spaces of Violence, Spaces of Peace: What have we learned? 34
Reference 35

Introducción general 36
Enfoques y métodos aplicados. La coproducción de conocimientos 42
Hallazgos y aprendizajes 44
Organización del libro y sus capítulos 46
Referencias 47

1. Espacios seguros en Medellín: reflexiones con jóvenes y mujeres desde la coproducción de conocimiento
Carolina Sánchez Henao, Natalia Cardona Berrio, Beatriz Elena Hernández Chaverra, Óscar Quinto Mosquera y Pablo Emilio Angarita Cañas 51

Introducción 51
Panorama de violencia e inseguridad 55
Signo trágico de violencia y muerte 56
Violencia e inseguridad en las comunidades seleccionadas 58
Comuna 1 (Popular) 59
Comuna 6 (Doce de Octubre) 60
Los problemas de inseguridad desde la perspectiva de las mujeres y los jóvenes de las comunas 1 y 6 61
«Espacios seguros» desde una perspectiva situada 63
Acciones del Estado que buscan generar seguridad 66
Construcción y adecuación de espacios físicos 68
Militarización y uso de recursos tecnológicos para la seguridad 71
Estrategias para mujeres y jóvenes 74
Iniciativas comunitarias de mujeres y de jóvenes frente a la violencia y la inseguridad 76
Conclusiones 84
Referencias 87

2. Construcción de paz y prevención de la violencia: perspectivas y aprendizajes desde abajo
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Equipo de Construcción de Paz Desde Abajo (CPDA) 97

Introducción 97
Una manera de ver las cosas 99
Trabajo con el grupo de Familias del Sur 100
Trabajo con trabajadores independientes 101
Metodología 102
Desarrollo de la experiencia 104
Lecciones aprendidas 104
Trabajo con el grupo parroquial de Popotlán 105
Metodología 106
Desarrollo de la experiencia 108
Lecciones aprendidas 109

Mesa de Prevención Unidos por la Paz, La Chacra, San Salvador 110
Metodología 110
Desarrollo de la experiencia 111
Lecciones aprendidas 113
Centro Escolar José Martín Vilaseca 113
Metodología 114
Desarrollo de la experiencia 115
Caracterización de Popotlán: pasado, presente y futuro 115
Lecciones aprendidas 118
Elementos procesuales: aprendizajes 118
Enfoque, metodología y teoría del cambio 119
Diálogos y mediación 119
Atender las víctimas y el sufrimiento 120
El desafío de la sobrevivencia 121
Instancias organizativas 121
El lugar de la juventud 122
Conclusiones 123
Referencias 125

3. K¨ujb´ab´k´u´l: la confianza como pilar de la historia, la memoria, la defensa de la vida y el territorio en Nebaj, Quiché, Guatemala
Jacinta Leticia Corio López, Susana Abigail Cedillo Díaz, Marta Yolanda Gallego Ramírez, Juana Yocelyn Raymundo Cedillo, Cecilia de León Matom, Jeimy Clariza López Carrillo, María Loida Ceto Brito, Hilaria Guzmán, Maya Varinia Alvarado Chávez y Judith Erazo. 129

Introducción 129
Nebaj: características territoriales y poblacionales 134
Diálogo entre espacio seguro y la red de la vida: Nociones desde la cosmovisión maya/ixil 135
Problemáticas generadoras de violencias 138
Despojo territorial 139
Genocidio 139
Vinculación de la historia a otros factores sociales, económicos y políticos que generan violencia 141
Afecciones e impactos de las violencias en las jóvenes y sus comunidades 142
Migración 143
Violencia como relación social 143

Violencia contra las mujeres 144
Violencia sexual 146
Embarazos en niñas y adolescentes 147
Juventud y suicidio 148
Adicciones y trata de personas 149
Alcoholismo 149
Drogas 151
Intervenciones del Estado y otros actores 152
Visiones de seguridad e iniciativas de la comunidad 153
Acciones comunitarias para la construcción de confianza 154
Alcaldía Indígena de Nebaj 155
La Universidad Ixil 156
Creatividad y desafíos de las mujeres ixiles 156
Recuperación de vínculos y prácticas comunitarias frente a la inseguridad 157
Iglesias y espiritualidad 158
Impacto de acciones comunitarias en la institucionalidad 159
Propuestas para mejorar incidencia de iniciativas comunitarias 159
Reflexiones finales 160
Referencias 162
Fotografía 163

4. Construcción de seguridad humana: la experiencia del municipio de Sanarate, Guatemala
Anabella Amado Alemán, Iván Rocael Monzón, Miguel Saquimux, Gabriela Paredes y Anabella Aldana 167

Introducción 167
Panorama general de la violencia en Guatemala y Sanarate 168
El contexto de la violencia en Sanarate 170
El camino recorrido: riquezas y desafíos de la metodología 172
Generalidades metodológicas 172
El proceso de investigación-acción 175
El desafío de la investigación académica y comunitaria 177
Hallazgos del trabajo con la comunidad 177
La dinámica de la violencia en Sanarate 177
Representaciones del concepto de violencia en la comunidad 179
Factores que generan o agravan la violencia en el municipio, en opinión de los actores sociales 180

Grupos en situación de vulnerabilidad 181
Hacia las representaciones del espacio seguro 182
Mecanismos comunitarios de respuesta a la violencia 183
Principales respuestas identificadas 185
Propuestas de acción planteadas por participantes (antes del proceso de formación) 187
Respuestas desde el Estado con respecto a la sociedad civil 188
Fortalecimiento de capacidades locales para construir espacios más seguros 189
Hallazgos durante los módulos de formación de actores locales 189
Conclusiones 191
Referencias 192

5. Voces e iniciativas comunitarias de las mujeres. Construir espacios seguros en un contexto patriarcal en Tegucigalpa, Honduras
María Virginia Díaz, Jenny Espinoza, Mercedes Elena Flores y Denia Matamoros 197

Introducción 197
El panorama general de pobreza, desigualdad, violencia y femicidio en el Distrito Central 198
Transformaciones de los barrios en espacios violentos 201
Los principales generadores de violencia que afectan a las comunidades 203
Los hombres 203
El Estado 203
Funcionarios locales 204
Transporte público 205
Maras y pandillas 205
Los impactos de las violencias en la vida de las mujeres y en los escenarios 206
Los detractores de la paz y la seguridad de las mujeres 207
Un espacio seguro desde la perspectiva de las mujeres 209
Miopía y misoginia del Estado versus espacios seguros 211
Las intervenciones formales y los abordajes reales 212
Percepciones de funcionarias y funcionarios 214
Frente a la violencia en los centros educativos 216
Expresiones religiosas 216
Organizaciones no gubernamentales 217
Creación de alternativas económicas 219
Desnaturalización de las violencias 219
Promoción de la salud y el conocimiento en sexualidad 220

Resistencias y luchas de las mujeres en contextos de muerte y despojo 221
Algunas propuestas para la construcción de espacios seguros desde las mujeres 222
La garantía de derechos 223
Oportunidades laborales 224
La presencia estatal 225
Empoderamiento comunitario..... 225
Conclusiones 226
Referencias 228

6. Communities, Crime Control and Policy Change for Safer Spaces in Jamaica
Tarik Weekes, Deanna Ashley, Ricardo Williams, Nadia Robinson 233

Introduction 233
Overview of the Security Context: The Anxiety to Reduce Homicide Rates 236
The Communities Selected 241
Richmond, in St. James 244
Almond, in St. Andrew 245
Researching Safer Spaces (Methods) 247
Action Workshops 250
Limitations 250
Perspectives from the Community About a Safer Space (Findings) 251
Co-offending, Male Youth and Expectations 252
Problematic Relations with the Police 254
'Residents' Perceptions of 'Feeling Safer' 256
Building Safer Spaces: Community Perspectives and Current Responses 257
Conclusion 261
References 263

7. El caso de la comunidad autónoma de Cherán, México, y la resistencia de sus mujeres
Laura Romero Ríos, Ana Mireya Campanur Sánchez, Rebeca Cucue Campus, Araceli García Jerónimo y Óscar Daniel Torres Rosales 271

Introducción 271
Contexto estatal y violencia en el municipio de Cherán 273
Desarrollando perspectivas críticas sobre la violencia en Cherán 279
La construcción de seguridad y los espacios seguros en la comunidad de Cherán 280

El autogobierno y la seguridad en las fronteras 281
La seguridad en el interior de la comunidad 284
La ilusión de la comunidad ideal y la violencia hacia las mujeres 287
La desvalorización de la participación de la mujer en las decisiones comunitarias 288
La imagen familiar y la invisibilización de sus violencias 290
El control económico sobre las mujeres de Cherán 290
El control del tiempo, el espacio y el cuerpo de las mujeres 291
La vida en la familia y la sucesión de la violencia 293
La transversalidad de las violencias y la construcción de espacios seguros 295
Conclusiones. El tercer gobierno comunal y los desafíos en la atención de la violencia hacia las mujeres 298
Referencias 300

8. El sentido del cuidado en la seguridad comunitaria del municipio de Tancítaro, Michoacán, México
Pedro Olivera Gutiérrez, Rosalinda Piedra Ledezma, Paulina Reyes Sánchez, Blanca Cristal Torres Espinoza y Gilberto Lenin Torres Lázaro 305

Introducción 305
El escenario de la investigación 307
Mujeres y jóvenes en el contexto de violencia 310
El proyecto de Gobierno de Unidad y la nueva administración 312
Hallazgos de la investigación 313
La configuración de violencia 314
Expresiones de la violencia 314
Dimensiones de la violencia 318
Configurantes de la violencia 319
Las razones de la violencia en Tancítaro 321
La violencia contra las mujeres 323
La seguridad en Tancítaro 325
Las acciones del Estado para la seguridad 325
Repensar la seguridad en Tancítaro 326
Dimensiones y generadores de la seguridad 327
Configuradores del cuidado y la seguridad 329
Tomar conciencia de las propias violencias 330
Construir un orden dialógico 330
Las redes de apoyo 331

Conclusiones 332
Referencias 333

9. Construcción de espacios seguros. Lecciones del diálogo de saberes con jóvenes y mujeres de América Latina y el Caribe
Alexandra Abello Colak y Pablo E. Angarita Cañas 337

Introducción 337
Nuestra investigación en el contexto de la crisis regional 338
Potencialidades de la *coproducción de seguridad desde abajo* 341
Elementos, dimensiones y dinámicas para la construcción de espacios seguros 346
Respuestas institucionales frente a la violencia y la construcción de espacios seguros 350
A manera de conclusión: retos que sugiere la investigación 353
Referencias 358

Agradecimientos

Este libro es el resultado de múltiples actores que, agrupados en diversos colectivos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y México, contribuyeron a su realización y con los cuales hemos contraído una inmensa deuda de gratitud.

Iniciamos con un reconocimiento y a la vez agradecimiento a la voz de las mujeres y de los jóvenes que nos compartieron sus experiencias de convivir en entornos violentos y de padecer sus consecuencias, de enfrentarse a las inseguridades sin renunciar a la esperanza de su transformación.

A los equipos de investigación de cada uno de los países participantes, conformados por investigadores universitarios y por miembros de organizaciones sociales y comunitarias. Se sumaron los aportes de funcionarios públicos que desde su rol brindaron sus conocimientos durante el proceso de investigación; resaltamos en particular las valiosas informaciones suministradas para este proyecto y sus contribuciones a la elaboración de los textos finales que integran esta obra.

En el caso de Colombia, agradecemos a funcionarios de Medellín, cuyos nombres omitimos para evitar incomodarlos, pero cuya información y comentarios fueron de inmenso valor. Nos referimos en especial a los que participaron en grupos focales o atendieron nuestras entrevistas: inspectores de policía, comisarios de familia, fiscales, funcionarios de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Juventud, miembros de la Defensoría del Pueblo, y docentes de instituciones educativas de la Comuna 6, en particular de la Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo.

Resaltamos el trabajo mancomunado de la Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental, y de Núcleo de Pensamiento (Comuna 6). Al igual que, en la Universidad de Antioquia, agradecemos los aportes intelectuales de investigadores del Instituto de Estudios Políticos, del Instituto de Estudios Regionales (INER) y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; las permanentes recomendaciones de los miembros del Grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana y

su línea Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, adscrito al INER hasta marzo 2019 y en la actualidad integrado a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Del equipo de trabajo, merecen mención especial Alexandra Fernández Rojas, quien fue coinvestigadora (entre agosto de 2017 y marzo de 2018); el sociólogo Héctor Pardo, pasante de investigación; el doctorando de Ciencias Sociales Gustavo Urrego; Carolina Escobar Serna, auxiliar administrativa y todo el equipo administrativo del INER. Especial reconocimiento hacemos a las luces recibidas de parte de la profesora de la Universidad de Antioquia Alejandra Restrepo, experta en estudios de género, así como de la profesora Alexandra Agudelo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, experta en la temática de juventud. Del mismo modo, resaltamos los atinados comentarios de diversos investigadores de las organizaciones no gubernamentales: Corporación Región, Corporación Mujeres que Crean, Corporación Educativa Combos, Corporación Convivamos, Corporación Cívica Mundo Nuevo, Corporación Picacho con Futuro y Corporación Casa Mía.

En El Salvador, agradecemos a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en particular al Equipo de Construcción de Paz Desde Abajo (CPDA), y a las vendedoras y los vendedores de la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños (ANTRAIVEAS); a los vecinos de la colonia Popotlán, a los estudiantes del Centro Escolar Vilaseca de Popotlán, a los agentes de pastoral de la parroquia San Gabriel Arcángel, y a la Mesa de Prevención de La Chacra, quienes participaron en las actividades de esta iniciativa.

En Guatemala, queremos agradecer a la Universidad Rafael Landívar y su Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE) que trabajaron conjuntamente con el equipo de investigadores comunitarios del municipio de Sanarate, en particular con las asociaciones, los profesores y los estudiantes de los centros educativos participantes del proceso. En el municipio de Nebaj, especial agradecimiento a las jóvenes ixiles, investigadoras comunitarias que participaron conjuntamente con las profesionales del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP).

En Honduras, agradecimientos para las lideresas de la colonia Ramón Amaya Amador y de la colonia Villanueva, quienes, en su condición de investigadoras comunitarias, participaron durante todo el desarrollo del proyecto en conjunto con las investigadoras académicas del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H) y OXFAM (Honduras). Especialmente agradecemos el acompañamiento permanente de Sandra Isabel Ruiz Alvarado, María Elena Méndez Ordóñez y Xiomara Sierra.

En Jamaica, especial reconocimiento a los investigadores de la University of West Indies y de la Violence Prevention Alliance, así como a la organización social New Generation Youth Club y al Cambridge Police Youth Club.

En México, gracias al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al equipo del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y a los investigadores comunitarios de los equipos del Programa de Reconstrucción del Tejido Social de Cherán y de Tancítaro. Gracias por el acompañamiento permanente a Gabriel Mendoza Zárate y al padre Jorge Atilano González Candia. Gracias también por el trabajo de Fernando Barajas y Rosario Barragán como coinvestigadores en la primera fase del proyecto.

A las asesoras internacionales, profesoras de la London School of Economics and Political Science, Jenny Pearce y Alexandra Abello-Colak; al igual que a Tom Greenwood, por su permanente apoyo con las traducciones de inglés a español y su acompañamiento al equipo de Jamaica.

Queremos hacer un reconocimiento a los profesionales expertos que evaluaron los primeros borradores de estos capítulos, quienes además nos acompañaron como comentaristas en el tercer encuentro en Guatemala, de la Red de Investigadores Comunitarios y Académicos: Ana Mercedes Peña, de la Cruz Roja noruega en Colombia; Sara Martínez, del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica (CIPREVICA); Joaquín Salazar y Marina Jaramillo, de Comundo (Suiza-Nicaragua); Sandra González, de la Corporación Región (Colombia); Isabel Aguilar, del CRS (Guatemala), y Dimas Pérez, de ATD Cuarto Mundo (Guatemala). De igual manera, agradecemos el juicio crítico y la evaluación final de los capítulos, emitidos por Alexandra Abello-Colak (LSE) y Markus Otto Gottsbacher (UNODC-México). Exaltamos el paciente trabajo de corrección de estilo de todo el libro, realizado por Koleia Bungard, labor fundamental para finalizar esta obra en el tiempo planeado.

Resaltamos los agradecimientos a las organizaciones internacionales que contribuyeron con sus fondos a la subvención de este proyecto: Catholic Relief Services (CRS) Centroamérica, quienes además de aportar recursos para adelantar el proyecto en El Salvador y en Sanarate, Guatemala, financiaron los encuentros presenciales de la Red de Investigadores Comunitarios y Académicos realizados en Medellín, Colombia, en abril de 2017 y en San Salvador en septiembre de 2018. También agradecemos al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá, por la subvención a los demás países participantes en este proyecto. Igualmente, agradecemos al CIPREVICA por su aporte fundamental para la financiación del encuentro de la Red de Investigadores Comunitarios y Académicos, realizado en Antigua, Guatemala, en mayo de 2019. De las agencias subvencionadoras, queremos mencionar

en particular a Isabel Aguilar, Regional Technical Advisor for Youth-Related Violence Prevention - Catholic Relief Services, Latin America and Caribbean Office; a Markus Gottsbacher, oficial principal de programa del IDRC, entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, y a Adrian Di Giovanni, Senior Program Specialist, Law & Development del IDRC, desde febrero de 2019 hasta la fecha.

Finalmente, y no por ello menos importante, queremos agradecer a las familias de cada una de las personas participantes en esta obra, por apoyarnos con su afecto y con el tiempo que les quitamos para dedicarlos al proyecto. A todos, reiteramos nuestra eterna gratitud.

El equipo de investigación

Prólogo
Espacios de violencia y espacios de paz en América Latina y el Caribe

Jenny Pearce[1]

Introducción

Este libro se puede leer en muchos niveles. Uno de ellos puede no ser muy obvio para aquellos que están acostumbrados a leer sobre violencia e inseguridad en América Latina. Es el nivel que le da a este libro un estatus de originalidad y una contribución que va más allá de la región: el ser una forma de conocimiento destinada no solo a interpretar el mundo, sino a cambiarlo (¡para citar rápidamente a un famoso pensador del siglo XIX!). En general, este texto visibiliza la importancia de un *proceso de investigación* ajustado al tipo de conocimiento que produce. Aquí se conectan el proceso y el resultado, lo que debería propiciar un debate más amplio con respecto a *cómo* y *qué* sabemos de la naturaleza de la violencia y la agencia social para reducirla, no solo en América Latina y el Caribe, sino en otras regiones del mundo en donde la violencia es crónica. Esta visión es particularmente relevante en contextos donde el Estado reproduce la violencia, con terribles impactos, en especial en periferias excluidas. La violencia se experimenta con mayor intensidad entre los pobres, pero, como lo muestra este libro, ellos también deben ser parte de la solución. El problema radica en que las lógicas económicas, políticas y sociales

1 Jenny Pearce es politóloga especialista en América Latina. Es investigadora y profesora en el Latin American and Caribbean Centre (LACC) de la London School of Economics and Political Science. E-mail: j.pearce3@lse.ac.uk. Traducción del inglés: Koleia Bungard.

son casi imposibles de combatir para las personas que viven estas realidades, pues los poderosos y los ricos condicionan estas lógicas por medio tanto de sus acciones como de sus inacciones. Al centrarse en un proceso de investigación que incluye a las comunidades más vulnerables que viven las violencias y las criminalidades que suceden todos los días, y al valorar su conocimiento y experiencia, se hace evidente su capacidad de actuar y de suscitar cambios. Este es el mensaje central que les deja este libro a otras regiones del mundo.

Este prólogo se ocupa, primero, del amplio significado de este *proceso de investigación* y, luego, de los desafíos y los hallazgos empíricos, epistemológicos y metodológicos clave que se discuten en detalle a lo largo del libro.

Un proceso de investigación que transgrede fronteras

El proceso de investigación abordado en este libro transgredió muchas fronteras. Hubo fronteras entre países, barreras lingüísticas, fronteras en torno a la educación, el conocimiento y la experiencia, y entre etnias, géneros y generaciones. Con todos los riesgos que esto conlleva, este proyecto decidió enfrentarlos y construir procesos conjuntamente para superar las dificultades, promover el aprendizaje mutuo y proyectar futuras colaboraciones.

Como se documenta en el texto, este proceso reunió a académicos, activistas y líderes comunitarios de cinco países de América Latina y uno del Caribe, incluyendo comunidades indígenas en México y Guatemala. Sin embargo, la colaboración no solo consistió en contribuir con los capítulos compilados en este libro. Durante dos años los participantes trabajaron juntos por medio de reuniones presenciales, llamadas regulares vía Skype y algunas visitas a los sitios en donde se llevaban a cabo las investigaciones. Los participantes también acordaron compartir un marco metodológico general, encontrar una base conceptual común y todos estuvieron de acuerdo en la importancia de investigar *con* quienes viven en medio de violencias cotidianas. También compartieron el compromiso de *intercambiar* el conocimiento que surgió de la experiencia cotidiana con aquellos que estaban «por fuera» de la experiencia, es decir, aquellos que han sido capacitados en herramientas y enfoques académicos y que no viven en los espacios más inseguros. Con respecto a esto, los académicos tuvieron que hacerse preguntas como: «¿cómo sé lo que sé?» o «¿cómo no solo extraigo el conocimiento, sino que trabajo con aquellos que lo producen de manera que se garantice que sean valorados como la fuente misma del cambio?».

Por supuesto, América Latina es una fuente de respuestas creativas a estas preguntas y, para muchos participantes, el proceso resonó en cuanto a sus valores y a las prioridades de investigación preexistentes. Aun así, sobrepasar los límites es una de las tareas más desafiantes para los seres humanos de todos los orígenes e inclinaciones. Para muchas personas, un «espacio seguro» es homogéneo y cómodo, pues allí están excluidas las diferencias. En este estudio, los «espacios seguros» fueron resignificados tanto por el resultado como por el proceso de investigación, pues exigió una mirada profunda a las subjetividades y a las relaciones que, justamente, complejizan la investigación al incluir nuevas comprensiones de nuestras variadas subjetividades al lado de los límites que establecemos nosotros como investigadores con respecto a los «investigados».

El equipo de trabajo debatió sobre algunos conceptos, aplicó la metodología con diversos grados de uniformidad y la adaptó a contextos muy diferentes y a previos intereses de investigación. Los participantes también se acercaron seriamente a las diversas preferencias y tradiciones epistemológicas. Lo menciono tras haber asistido a las tres reuniones presenciales, una en Medellín, Colombia, otra en San Salvador, El Salvador, y una más en Antigua, Guatemala. La discusión abierta alrededor de las diferencias en los contextos, junto con la colaboración seria en torno a las preguntas clave y al marco compartido, sin tener que estar de acuerdo en todo, marca, sugeriría yo, un paso muy importante en las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, ya que se ocupa de la crisis de violencia e inseguridad en la región.

El marco conceptual compartido fue el de «espacios seguros». En las conclusiones de este libro se amplía nuestra comprensión del significado del espacio como la unión del «territorio», las «condiciones materiales para la supervivencia» y las «relaciones». El espacio está en un eje y el tiempo está en el otro. La violencia está en el tiempo y en el espacio y se reproduce entre las generaciones en diversos espacios de socialización. Este proceso de investigación que trasciende las fronteras, plantea una discusión que atraviesa los diferentes casos sobre cómo los déficits y las desigualdades materiales, las violencias estatales en nombre de la 'seguridad', las especificidades culturales, de género y generacionales de la experiencia y la comprensión de la violencia, así como las diversas formas de criminalidad, se cruzan y se reproducen a través del tiempo y el espacio. La decisión de trabajar con jóvenes y mujeres también plantea estas diferencias entre géneros y generaciones y nos anima a darles importancia a los variados espacios de socialización en los que se vive la violencia y la inseguridad y a todas las expresiones de violencia. Esto, a su vez, planteó preguntas sobre qué es un «espacio de paz» y quiénes son los agentes que pueden construirlo.

Lugares y sujetos

Este estudio de investigación-acción desarrollado en diversos territorios se enriquece con los variados sujetos que lo componen, desde comunidades indígenas en zonas rurales de Nebaj, Guatemala, y Cherán, México, pasando por mujeres activistas comunitarias en Tegucigalpa, Honduras; Medellín, Colombia, y Tancítaro, México; ciudadanos de zonas rurales y urbanas de Kingston, Jamaica; padres y jóvenes en Sonsonate, Guatemala, hasta estudiantes en Popotlán, San Salvador. La atención se centra en las principales víctimas de la violencia en estos sitios, hombres y mujeres jóvenes de diferentes edades. Los hombres jóvenes también son, a menudo, los principales perpetradores, lo que representa una paradoja que, a la vez, plantea preguntas importantes sobre cómo comprender las masculinidades violentas sin suponer que todos los hombres jóvenes son violentos. Muchos de ellos están atrapados en hogares y comunidades violentas, en donde unirse a las pandillas para convertirse en actores criminales es casi inevitable. Sin embargo, un punto relevante en esta investigación-acción es que todos estos sujetos son considerados agentes potenciales de cambio.

Solo en un caso se intentó trabajar con hombres jóvenes involucrados en pandillas, lo que resultó ser muy problemático. Aun así, en todos los lugares hubo un esfuerzo por ver a los hombres jóvenes como parte de la solución, no solo como parte del problema. En cuanto a las mujeres, en casi todas partes se les considera sujetos de cambio y a la vez víctimas. En Jamaica, algunas veces se las ve como colaboradoras de pandillas, sin embargo, en su mayoría, ellas aparecen como sujetos vitales para comprender el significado tanto de los espacios de violencia como de las posibilidades de paz.

Otro asunto relacionado con los «lugares de investigación» es que algunos de los países participantes han experimentado una guerra real y otros no. Colombia, Guatemala y El Salvador están en la primera categoría, mientras que Jamaica, México y Honduras no han experimentado la guerra, aunque Honduras fue una base para las operaciones militares estadounidenses durante las guerras en América Central durante la década de los años ochenta. Entonces, las violencias de posguerra y aquellas que suceden en lugares donde no se han dado guerras, nos hacen pensar en la violencia como un fenómeno y en sus significados en América Latina, un fenómeno visto desde las realidades cotidianas de las comunidades y desde los variados sujetos que allí habitan. Entre estos últimos, la investigación no excluye a funcionarios estatales y políticos, ni a actores de la sociedad civil. Sus voces y roles también están presentes y son explorados en estos capítulos, representando otros niveles para pensar en el cambio y reflexionando sobre los obstáculos que existen para alcanzarlo.

Diálogos epistemológicos

Me ha impresionado mucho el uso de múltiples epistemologías en estos estudios. Esto nos da una idea real del tipo de conocimiento que emerge a partir de las expectativas diferenciadas con respecto al conocimiento en sí mismo. La cosmovisión maya amplía las formas de entender el significado de lo «seguro», lo que presenta elementos no reconocidos en ningún otro lugar. Cabe destacar aquí la importancia que se le da a la confianza como soporte de la comunidad ixil. Sin embargo, no se trata solo de confianza dentro de la comunidad, sino que esta confianza también se requiere en la relación con la tierra, el territorio, el agua, el aire y los bosques que son vitales para la vida. La confianza significa que es posible creer en la presencia continua de lo que es determinante para la vida humana. Los mayas reconocen esta sinergia emocional/material que es, a la vez, una fuente de confianza que hace posible la vida y la supervivencia, pero también la confianza entre las personas que posibilita traspasar las fronteras. Esta confianza permite abrirse frente a quienes han sido lastimados por el miedo y la inseguridad; hace posible acciones individuales y colectivas.

En El Salvador, los investigadores aportaron la influencia epistemológica de la enseñanza católica, en donde el «espíritu crítico» importa. Aquí, la educación y la formación liberan el potencial emancipador de quienes carecen de bienes materiales, pero que tienen la capacidad intelectual de cualquier otro grupo humano. De hecho, la importancia del pensamiento crítico aparece en otros estudios como un punto esencial para pensar la violencia misma. El caso de Jamaica se basa, tal vez, en una epistemología más clásica de las ciencias sociales, donde el énfasis está tanto en medidas objetivas como subjetivas del problema. Si bien utiliza métodos cualitativos, esta investigación en particular revela mucho sobre la violencia en una comunidad rural y una urbana, con historias distintas. Es el único caso en el que a las mujeres se les ve ayudando a las pandillas y no solo como víctimas. Sin embargo, esto no revela necesariamente el amplio potencial que estas mujeres tienen para organizarse, lo que sí se presenta en Tegucigalpa, en donde la base está en la epistemología feminista.

En la capital hondureña, y en las trece colonias en donde trabajaba el equipo, sobresale el papel conscientemente feminista que resalta las violencias experimentadas desde la perspectiva de las propias mujeres. Esto llama la atención, pues no es nada común en las indagaciones sobre violencia en América Latina. No solo nos permite ver cómo el espacio íntimo del hogar también puede ser un espacio peligroso

para las mujeres, sino que muestra cómo el patriarcado tiene un rol activo tanto en la violencia estatal como en la criminal. La violencia contra las mujeres no solo es perpetrada por determinados agentes, sino que la impunidad hace que sea difícil para ellas obtener justicia por los crímenes en su contra, incluidos los casos extremos de feminicidio. Además, los actores criminales se esfuerzan cada vez más por controlar el espacio y el territorio por sobre el cuerpo de las mujeres.

Por último, pero no menos importante, podríamos reconocer una «epistemología de la paz» que no se ha desarrollado como tal. Sin embargo, en Tancítaro, Cherán y San Salvador, existe una clara orientación hacia las respuestas no violentas y hacia la formación de participantes en la investigación en torno a dichos valores y a la visión de paz de Adam Curle. Al mismo tiempo, emergen en todos los casos las condiciones materiales que llevan a que la violencia se reproduzca. Esto también tiene que ver con una epistemología de la paz y con la idea de la paz que argumenta que esta no significa simplemente la ausencia de violencia. La falta de empleo, la desigualdad, la exclusión y la discriminación se presentan como temas clave en las experiencias cotidianas de violencia.

Y en el caso de Jamaica, esto también invita a reconocer las experiencias particulares de las mujeres como vitales tanto dentro de la objetividad de las ciencias sociales, como en las subjetividades que impactan la vida social y que a menudo solo se pueden captar a través de las relaciones de confianza generadas en la construcción sincera y cercana de lazos comunitarios. Al no poder pagar un taxi que la lleve a su casa en la noche, entre la parada del autobús y su hogar, una mujer se expone a los riesgos de las calles mal iluminadas y a todo el terror que esto puede traer. Darse cuenta de que existe esta fuente particular de miedo y que tiene impactos en una mujer joven o en una madre, es una pieza trascendental para transgredir las barreras intergeneracionales de lo que sabemos sobre la reproducción de la violencia.

Cuando el miedo permea la capacidad de moverte por tu vecindario, cuando volver a la casa no significa necesariamente estar en un espacio íntimo, cómodo y seguro, los niños crecen internalizando esas barreras del miedo que marcan las relaciones sociales.

Estas diversas epistemologías no compiten entre sí, más bien enriquecen los estudios y este libro, y muestran cómo un diálogo entre epistemologías puede revelar mucho más de lo que podría hacer una única teoría del conocimiento aplicada a la crisis de violencia en América Latina y el Caribe.

Innovaciones metodológicas: agencia y enfoque *desde abajo*

Por supuesto, el objetivo de este libro es mostrar cómo el diálogo entre los conocimientos, no solo las teorías del conocimiento, puede decir mucho más sobre la violencia que la investigación extractiva basada en una forma de conocimiento académico. Las jerarquías y los estatus de conocimiento no facilitan tal empresa. Sus límites son rígidos y a menudo institucionalizados, atrapados en la palabra «disciplina». Las discusiones metodológicas en los capítulos son muy claras sobre las dificultades a este respecto. Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de tomar en cuenta las voces de las mujeres y de los jóvenes, de darles la oportunidad de hablar sobre la complejidad de la vida en las periferias, ofrece visiones que rara vez se comparten a través de otros métodos de investigación. Los sujetos son aquí actores y agentes potenciales, no son vistos como víctimas trágicas, o como personas marginadas a las que tenemos que compadecer, o criminales que deben ser encarcelados. Las condiciones que generan violencia y criminalidad resultan aquí más evidentes.

Es posible distinguir entre el crimen organizado y el comportamiento de los jóvenes que pueden o no tomar esa dirección si se les ofrece el apoyo necesario y se les brindan condiciones. Muchos de los capítulos hablan de «prevención de la violencia», porque la violencia emerge como algo que se reproduce y que podría reducirse o «prevenirse». Aquí encontramos a muchos ciudadanos que se han organizado para enfrentar la violencia y buscar alternativas a través de grupos comunitarios y de autodefensa, lo que permite aclarar los múltiples orígenes, incluidos aquellos materiales, de la violencia y el crimen. Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar aquí un papel vital, a través de su gran capacidad para ejercer presión, visibilizar, acompañar procesos en el terreno y ofrecer capacitación. Y este enfoque *desde abajo* resulta vital en contextos en donde muy pocos confían en el Estado y en sus agentes de seguridad. Aquí, la agencia de reducción de la violencia desde abajo, es una de las pocas formas que existen para exponer la violencia que reproduce el Estado.

Espacios de violencia, espacios de paz: ¿qué hemos aprendido?

A lo largo de estos textos puede verse, entonces, que los países de América Latina y el Caribe no representan un caso patológico de violencia extrema. Es claro que muchos países (no todos) de la región, ciudades y sectores particulares, sufren violencia extrema y crónica. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, también es posible

encontrar acciones y mecanismos para evitar que este se siga reproduciendo. La metodología de coproducción de conocimiento pone esto en primer plano, no para «demostrar» que siempre es exitoso, sino para exponer los muchos esfuerzos que existen para abordar la violencia y la inseguridad entre quienes viven estas realidades, y ver cómo podrían recibir un mejor apoyo. Esto seguramente representa un aprendizaje para muchos países y regiones del mundo asolados por la violencia y el crimen. Los variados casos muestran que las violencias que importan no pueden tratarse selectivamente. Toda violencia es importante y sus múltiples expresiones muestran cómo se reproduce y muta en el tiempo y el espacio. Solo porque sea ejercida por el Estado con su «derecho» a usarla, la violencia estatal no es menor que la violencia de un esposo que golpea con regularidad a su esposa, o la de un grupo del crimen organizado que compite por rutas de tráfico de drogas matando a los jóvenes que actúan para el otro grupo. El punto importante sobre la violencia son los significados que trae y genera (véase Pearce, 2019).

También aprendemos que los espacios donde las personas se sienten «seguras» deben ser construidos conjuntamente entre quienes viven las violencias cotidianas y los actores de la sociedad civil que los apoyan (incluidos los académicos). La represión del Estado podría llegar a ser beneficiosa para los políticos como una «solución rápida» para los votantes desesperados; sin embargo, con el tiempo genera más violencia y una desconfianza catastrófica en la policía. Los ciudadanos a menudo aceptarán cualquier solución al problema y, al principio, pensarán que la policía podría ser esa solución. No obstante, si la policía está militarizada, si los mismos policías son corruptos y abusivos, no puede comprenderse para qué sirve la «vigilancia». La policía es una alternativa a la militarización, debería generar confianza ciudadana para que se denuncien los delitos, se utilicen pruebas para procesar cuando sea necesario y se ponga fin a la impunidad mediante el uso de la ley administrado de manera equitativa. En algunos casos en este libro, en vez de acudir a la policía, los ciudadanos se acercan a los criminales para buscar justicia. En todos los casos, la falta de confianza en la policía es evidente.

Estos capítulos nos cuentan una historia sobre cuán inseguros se sienten muchos ciudadanos de América Latina y el Caribe y sobre las pocas opciones que tienen. La historia también nos cuenta de qué manera, con apoyo, estas personas están preparadas para actuar, no solo contra la violencia, sino contra las condiciones que reproducen esa violencia. Entiéndase como construir «seguridad humana»; o como construir «paz», el punto es que la «seguridad» hace parte de la «paz». La palabra 'seguridad', sin embargo, se ha limitado a las formas represivas que se dan para facilitarla. Por lo tanto, al «humanizar» la seguridad, al permitir que las comunidades

contribuyan con el conocimiento que tienen sobre la violencia y la inseguridad, y al reconocer la importancia de la «confianza» en el sentido maya más amplio, la paz acaba haciendo parte de lo que entendemos por seguridad.

Referencia

Pearce, Jenny. 2019. *Politics without Violence: Towards a Post Weberian Enlightenment.* London: Palgrave Macmillan.

Prologue
Spaces of Violence, Spaces of Peace in Latin America and the Caribbean

Jenny Pearce[1]

Introduction

This book can be read on many levels. One level may not be so obvious to those who are used to reading about violence and insecurity in Latin America. It is the level which gives this book a claim to true originality and a contribution beyond the region. This contribution is to form of scholarship aimed not only to interpret the world but to change it (to slightly misquote a famous thinker of the nineteenth century!) Thus, this text visibilizes the significance of the *research process* to the kind of knowledge that is produced. It connects process and outcome, and this should start a wider debate about *how* as well as *what* we know about the nature of violence and the social agency to reduce it, not only in Latin America and the Caribbean, but in other global regions where violence is chronic. This is particularly relevant in contexts where the State reproduces violence, with terrible impacts on the margins. It is amongst the poor that violence is experienced most intensely, but, as this volume shows, they must be part of the solution. The problem lies in economic, political and social logics, which are almost impossible for people living these realities to combat alone. The powerful and the wealthy condition these logics through their actions and inactions. By focusing

1 Professor Jenny Pearce is a political scientist that specialises in Latin America. She is a research professor at the Latin American and Caribbean Centre (LACC) in the London School of Economics and Political Science. E-mail: j.pearce3@lse.ac.uk.

on a research process *with* the poorest communities who live the violence and criminalities that are reproduced everyday, and by and valuing their knowledge and experience, their capacity to act, their agency for change, becomes very clear. And that is the message of this text for other regions of the world.

This prologue will thus talk first about the wider significance of the *process* of research and then about the key empirical, epistemological and methodological challenges and findings, which are, of course, discussed in detail in the text.

Boundary Transgressing Research Process

The research process discussed in this book transgressed many boundaries. There were inter-country borders, linguistic barriers, boundaries around education, knowledge and experience and between ethnicities, genders and generations. The research decided to confront these, with all the risks involved, and to build processes together for overcoming the boundaries, mutual learning, and future collaborations.

As the text documents, the research process brought together scholars and community activists and actors from five Latin American and one Caribbean country. And within Latin America there were indigenous communities in Mexico and Guatemala who participated. The collaboration was not, however, just to contribute distinct, edited chapters to a book. Over two years, participants worked together through face to face meetings, regular skype calls and some visits to each other's research sites. They agreed to share a framework for an overarching methodology, to find some common conceptual ground and all accepted the importance of researching *with* those living amidst everyday violences. They also shared a commitment to *exchange* knowledge arising from everyday experience with those 'outside' that experience, ie. those trained in academic tools and approaches, and who do not live in the most insecure spaces. The academics had to ask questions about 'how do I know what I know'? 'How do I not just extract knowledge, but work with those who produce it in ways that ensure they are valued as the source of change?'.

Of course, Latin America is the source of creative responses to these questions, and for many participants, the process resonated with their pre-existing values and research priorities. Nevertheless, boundary crossing is one of the most challenging tasks for humans of all backgrounds and dispositions. A «safe space» for many is homogenous and comfortable in its exclusion of differences. In this research process, «safe spaces» were resignified by the research outcome, but also by the research

process, which demanded a deep look at the complex subjectivities and relationships that make complex research possible, including new understandings of our varied subjectivities and the boundaries we establish between us as researchers as well as the 'researched'.

The research team disputed some concepts, applied the methodology with varying degrees of uniformity, adapted it to very different contexts and prior research interests. They engaged seriously with each other's distinct epistemological traditions and preferences. I speak from having attended the three face to face meetings in Medellin, Colombia; San Salvador, El Salvador; and Antigua, Guatemala. The open discussion on differences in contexts, alongside the serious collaboration around the key questions and shared framework, without having to agree on everything, marks, I would suggest, a very important step in inter Latin American and Caribbean social science, as it faces the crisis of violence and insecurity in the region.

The shared conceptual framework was that of «safe spaces». The conclusions of the book extend our understanding of the meaning of space as composed of 'territory', 'material conditions for survival' and 'relationships'. Space is on an axis, with time on the other. Violence is located in time and space. It is reproduced inter-generationally through varied socialisation spaces. The boundary crossing research process, raises cross case discussion about how material deficits and inequalities, state violences in the name of 'security', cultural, gender and generational specificities of experience and understanding of violence, and varied forms of criminality, intersect and reproduce through time and space. The decision to work with young people and women also raises these inter gender and inter-generational differences and encourages us to give significance to the varied spaces of socialisation in which violence and insecurity is lived and to all the expressions of violence. This in turn, raised the question of what is a 'space of peace' and who are the agents that can build it?

Sites and Subjects

This multisite action research study is enriched by the varied subjects that form a part of it. From indigenous communities in rural Nebaj, Guatemala and Cheran, Mexico, to women community activists in Tegucigalpa, Honduras, Medellin, Colombia and Tancitaro, Mexico, to rural and urban citizens in Kingston, Jamaica, to parents and young people in Sonsonate, Guatemala, to school children in Popotlan, San Salvador. The focus is on the main victims of the violence in these sites, young men and women of varied ages. Young men, are also often the main perpetrators. This is a paradox

that also raises important questions, about how to understand violent masculinities while not assuming that all young men are violent. Many are trapped in violent households and communities, where joining gangs and becoming criminal actors is almost unavoidable. The important point about the action research, however, is that all these subjects are considered potential agents for change.

Only in one case was it possible to attempt to work with young men involved in gangs, and that proved very problematic. But everywhere there was an effort to see young men as part of the solution not just the problem. And women, almost everywhere are understood to be subjects of change as well as victims. In Jamaica, they appear at times as collaborators with gangs. Mostly, however, women emerge as vital to understanding the story of both spaces of violence and of the possibilities of peace.

Another issue about 'sites of research' is that some of the countries have experienced actual war, and others not. Colombia, Guatemala and El Salvador are in the former category and Jamaica, Mexico and Honduras have not experienced war, although Honduras was a base for US military operations during the wars in Central America of the 1980s. So, post war and non war violences make us think about violence as a phenomenon and its significances in Latin America, seen from the lived realities of communities and the varied subjects within them. Amongst the latter, the research does not exclude state functionaries and politicians, as well as civil society actors. Their voices and roles are also present and explored in the chapters. They represent other levels for thinking about change and obstacles to it.

Epistemological Dialogues

I am very struck by the varied epistemologies in use in these studies. This in itself gives us real insights into what kind of knowledge emerges from assumptions about knowledge itself. The Mayan cosmovision opens up ways of understanding the meaning of being «safe», which brings in elements not recognized anywhere else. Notably, it brings in the importance of confidence as a basis for community amongst the Ixil. This is not just confidence within the community, however, but it also requires confidence in land, territory, water, air and the forests that are vital for life. Confidence means that it is possible to rely on the ongoing presence of what is vital to human life. The Mayans recognise this emotional/material synergy, which is both a source of the confidence that makes life and living possible, but also the trust between people,

that enables the boundary crossing. It makes possible the openness to others that fear and insecurity erode. It makes individual and collective agency possible.

In El Salvador, the researchers brought in the epistemological influence of radical Catholic teaching. Here a 'critical spirit' matters. It is due to the education and formation which unleashes the emancipatory potential of those poor in material goods, but with all the intellectual capacity of any group of human beings. Indeed, the importance of critical thinking appears in other studies as essential also to thinking about violence itself. The Jamaican case study, perhaps, is rooted in a more classical social science epistemology, where the emphasis is on objective as well as subjective measures of the problem. While using qualitative methods, the Jamaican research, does reveal a great deal about violence in one rural and one urban community, with distinct histories. It is the only one where women are visibilized for sometimes helping the gangs and not just as their victims. However, it does not necessarily reveal women in their wider potential for agency. This really emerges in Tegucigalpa, with the strong feminist epistemology, which is the basis of this case.

In the Honduran capital, and the thirteen *colonias* where the team worked, the role of a consciously feminist standpoint, highlights the violence experienced from the perspective of women themselves. This is still surprisingly rare in explorations of violence in Latin America. It not only enables us to see how the intimate space of the home can also be a dangerous space for women, we see how patriarchy itself plays a role, both in state and criminal violence. Violence against women is not only perpetrated by agents of the former, but impunity makes it hard for women to get justice for crimes against them, including the ultimate one of femicide. And criminal actors increasingly play out their efforts to control space and territory on the bodies of women.

Last, but not least, we might recognize a 'peace epistemology'. This is not elaborated as such. However, in Tancitaro and Cheran, and San Salvador, there is clearly an orientation towards non violent responses and formation of research participants around such values, and around Adam Curle's relational understandings of peace. At the same time, the *material* conditions for violence reproduction emerge in all the case studies. This also coheres with a peace epistemology, and those understandings of peace which argue it cannot mean just the absence of violence. Lack of employment, problems of inequality, exclusion and discrimination, all emerge as key themes in the everyday experiences of violence.

And in the case of Jamaica, this also links to acknowledging the particular experiences of women as vital to objective social science as well as to the subjectivities that impact on social life and which can often only be picked up through the confidence generated by building sincere and close relationships in the community. When you cannot afford a taxi to take you to your front door after dark, a woman is exposed to the risks of poorly lit streets between the bus stop and her home, and all the terrors that that can bring. Picking up on this particular source of fear and its impacts on being a young woman and/or a mother, are vital components for transgressing the intergenerational boundaries of our knowledge of violence reproduction. When fear permeates your capacity to move around your neighbourhood, when you do not necessarily go back to a safe and comfortable intimate space, children grow up internalising the boundaries of fear that mark social relationships.

These various epistemologies are not in competition. Rather they enrich the studies and the book, and show how a dialogue between these epistemologies can reveal so much more than any single theory of knowledge applied to the crisis of violence in Latin America and the Caribbean.

Methodological Innovations: Agency and the *'Enfoque desde abajo'*

Of course, the aim of this book is to show how dialogue between knowledges, not just theories of knowledge, can tell us so much more about violence than extractive research based on one form of academic knowledge. Hierarchies of knowledge and status do not make such an enterprise easy. They are rigid, often institutionalised boundaries, which the word 'discipline' captures. The methodological discussions in the chapters are very transparent about the difficulties.

However, at the same time, the very fact of taking the voices of women and young people seriously, of giving opportunity to talk about the complexity of life on the peripheries, communicates insights that are rarely shared through other research methods. The subjects are treated as potential actors and agents, not as tragic victims or the marginalized to be pitied and the criminalized to be incarcerated. The conditions which generate violence and crime become more apparent. We can distinguish between organized crime and youth behaviour which can take the former direction or perhaps might not, if the right support and conditions are offered to young people. Many of the chapters talk of 'violence prevention', because violence

emerges as something which reproduces and which could be reduced or 'prevented'. We meet the many citizens who have organized to address violence and find alternatives through self defence and community committees which seek to make clear the multiple, including material, origins of violence and crime.

Civil society organizations can play a vital role here, through their enhanced capacity to lobby, to visibilize, to accompany processes on the ground and to offer training. And this focus from 'below', becomes vital in contexts where very few trust the state and state security actors. Here, violence reducing agency from below, is one of the few ways of exposing the violence reproducing state.

Spaces of Violence, Spaces of Peace: What have we learned?

So, through these texts, Latin America and the Caribbean do not emerge as a *pathological* case of extreme violence. Certainly, many countries (not all) in the region, and particular cities and areas within countries, suffer extreme and chronic violence. However, action on this violence and its mechanisms of reproduction is possible, and does take place and despite serious obstacles. The methodology of co-construction brings this action to the fore. Not to 'prove' it is always successful, but to show the many efforts to address violence and insecurity amongst those who live these realities, and how they could be better supported. This surely represents learning for many countries and areas of the world blighted by violence and crime.

The varied cases show that the violences that matter cannot be treated selectively. All violence matters, and its multiple expressions show how it reproduces and mutates through time and space. State violence is no less a question of violence because it is exercised by the state with a so called 'right' to use it, than the violence of a husband who regularly beats his wife. Or of the organized criminal group competing for trafficking routes by killing the youth who acts for the other group. The important point about violence is the meanings it bears and generates (cf. Pearce, 2019).

We also learn that spaces where people feel «safe» have to be co-constructed, by actors who live everyday violences alongside civil society actors who support them (including academics). Repression by the State might be politically profitable for politicians as a 'quick fix' for desperate voters, however, over time it generates more violence and a catastrophic mistrust in the police. Citizens will often accept any solution to the problem, and at first, will think the police might be a solution. However, if the police are militarized, if they themselves are corrupt and abusive,

the very understanding of what 'policing' is for, is lost. The police is an alternative to militarization. It should build citizen confidence so that crimes are denounced, and evidence used to prosecute where necessary and end impunity through confidence in the rule of law equitably administered. In some cases, in this book, citizens look to criminals for justice rather than the police. And in every case, the lack of trust in the police is apparent.

These chapters tell us a story of how unsafe many citizens of Latin America and the Caribbean feel and how few options they have. They also tell a story of how with support they are prepared to act. Not just against violence but also on the conditions which reproduce violence. This can be framed as building 'human security' or as building 'peace'. The point is that 'security' is part of 'peacefulness'. However, the very word 'security' has been hijacked by repressive forms of delivering it. Thus, by 'humanizing' security, by enabling communities to contribute their knowledge of violence and insecurity and the importance of 'confidence' in the wider Mayan sense, peace is brought back into the meaning of security.

Reference

Pearce, Jenny. 2019. Politics without Violence: Towards a Post Weberian Enlightenment. London: Palgrave Macmillan.

Introducción general

En este libro se exponen los principales hallazgos, las metodologías empleadas, así como algunas recomendaciones para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, resultados del proyecto de investigación e intervención «Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios seguros en América Latina y el Caribe», el cual se desarrolló durante más de dos años en algunas localidades de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y México, financiado por el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá y la Catholic Relief Services (CRS). En cada país hubo un equipo responsable de la coordinación y la ejecución del mismo en el cual participaron investigadores e investigadoras profesionales que trabajaron conjuntamente con mujeres y jóvenes, líderes y lideresas de las comunidades, siguiendo el enfoque y la metodología de coproducción de conocimientos. La coordinación general del proyecto estuvo a cargo del Observatorio de Seguridad Humana, línea del grupo de investigación interdisciplinario sobre Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia (Colombia). El proyecto contó con la asesoría de las expertas internacionales, profesoras Jenny Pearce y Alexandra Abello-Colak, de la London School of Economics (LSE).

La mayoría de las localidades en las que se adelantó el proyecto son urbanas, solo dos municipios son habitados por población predominantemente indígena, uno es Nebaj en Guatemala y el otro es Cherán, ubicado en el estado de Michoacán, México.

La realización de este proyecto, cuyos resultados se presentan en este libro, surgió con la intención de buscar alternativas desde la sociedad civil ante la generalizada preocupación frente al incremento de la violencia y la inseguridad durante el presente siglo en países de la región. Adicionalmente, ante el fracaso de las políticas implementadas por los gobiernos para enfrentar dicha situación, con esta investigación se pretendía ofrecer propuestas para incidir en las políticas públicas.

A propósito de la problemática de violencia que se vive en Latinoamérica, el estudio sobre los homicidios en el mundo, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), revela que el número total de homicidios en el mundo aumentó, y pasó de 395 542 en 1992 a 464 000 en 2017. No obstante, la tasa mundial de homicidios, que se mide por cada 100 000 personas, disminuyó de 7,2 en 1992 a 6,1 en 2017, debido al aumento en la población mundial durante el mismo período. Pero, ese promedio mundial de 6,1, al ser examinado por continente y por país, muestra grandes diferencias. Por ejemplo, mientras que tres continentes tienen sus tasas de homicidios por debajo del promedio mundial (Asia con 2,3, Europa con 3,0 y Oceanía con 2,8), en África la tasa llegó a 13 y en las Américas fue de 17,2; lo cual, al ser discriminado por regiones, muestra tasas aún más preocupantes, pues en el Caribe la tasa promedio fue de 15,1, en Suramérica de 24,2 y en Centroamérica con 25,9, con lo cual continúa siendo la región más violenta del mundo (UNODC, 2019). Si se examina por país, se encuentran tasas aún más altas (cuadro 1).

Cuadro 1
Tasas de homicidios en veinte países

Países	2016	2017	2018	Países	2016	2017	2018
Chile	3,6	3,3	2,7	Rep. Dominicana	15,8	14,9	10,4
Ecuador	5,6	5,8	5,7	México	16,2	19,5	25,8
Argentina	6,6	5,2	5,2	Puerto Rico	20,0	19,7	20,0
Nicaragua	7,0	7,0	6,0	Colombia	24,4	24,0	25,0
Perú	7,2	7,8	7,8	Guatemala	27,3	26,1	22,4
Uruguay	7,6	7,8	11,2	Brasil	25,7	29,7	25,0
Bolivia	10,8	8,5	6,3	Honduras	59,0	42,8	40,0
Paraguay	8,8	9,8	5,1	Jamaica	50	55,7	47,0
Panamá	9,3	10,2	9,6	El Salvador	81,2	60,0	51,0
Costa Rica	11,8	12,1	11,7	Venezuela	59,0	89,0	81,4

Fuente: InSight Crime (2017, 2018, 2019).

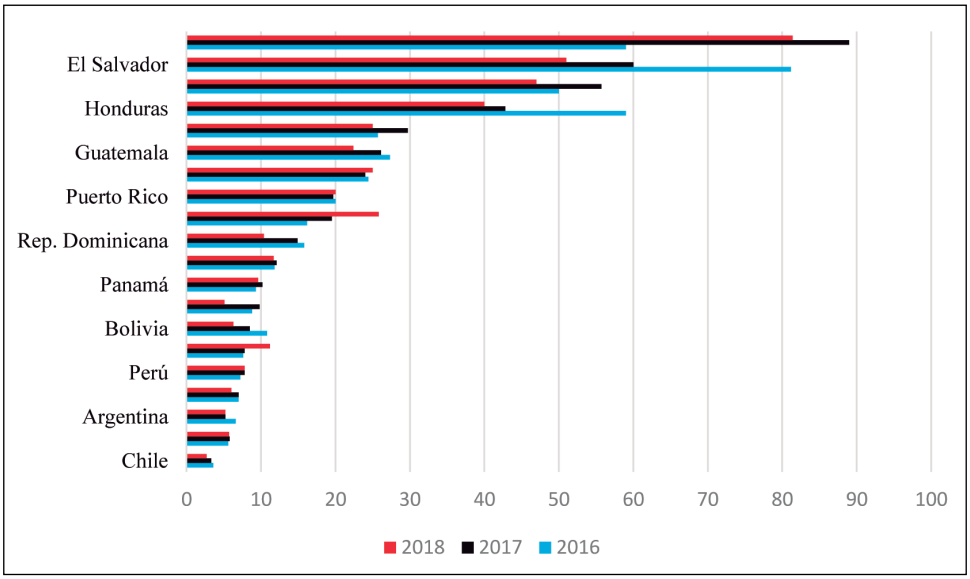
El mismo estudio de la UNODC señala que adultos y adolescentes de sexo masculino de entre 15 y 29 años corren el mayor riesgo de ser víctimas de homicidio en todo el mundo. Asimismo, mientras los asesinatos de hombres representan más del 50 % del total de los asesinatos, en el grupo de niñas y niños menores de edad, las tasas de asesinatos son aproximadamente similares y, aunque las mujeres y las niñas representan una proporción mucho menor de víctimas de homicidio en general que los hombres, siguen siendo, con mucho, las que soportan la mayor carga de los homicidios cometidos por sus parejas íntimas y por su familia (UNODC, 2019).

Al referirse a las causas que generan este incremento de la violencia en Latinoamérica, el estudio citado señala que, entre las principales causas de la violencia están la desigualdad, el desempleo, la corrupción, la inestabilidad política, los estereotipos de género (machismo) y el crimen organizado. Diversos analistas de la violencia en la región han debatido sobre si existe o no una relación entre pobreza y violencia o entre esta y la desigualdad socioeconómica (Gutiérrez, 2001). Pues bien, el estudio del UNODC afirma que «Los países con una marcada desigualdad de ingresos tienen más probabilidades de tener una mayor tasa de homicidios que aquellos con brechas más pequeñas», por ello, de manera categórica sostienen que «Si el crecimiento económico no se reparte equitativamente en la sociedad, la violencia puede subir» (UNODC, 2019, p. 9) (Original en inglés. Traducción propia).

Adicionalmente, dicho estudio considera que «Las maras y el narcotráfico son elementos clave en esa relación de crimen organizado y la alta tasa de homicidio». Del mismo modo, ven con mucha preocupación que «el creciente número de jóvenes desempleados y socialmente desfavorecidos está contribuyendo al aumento de los crímenes violentos, incluidos los homicidios, en América Latina, debido a una combinación de muchos jóvenes sin perspectivas y bandas criminales dispuestas a reclutarlos» (UNODC, 2019, p. 26) (Original en inglés. Traducción propia).

En este contexto de incremento de las más variadas formas de violencias, desde la violencia física directa (homicidios y feminicidios), hasta las simbólicas y estructurales, se realizó el presente proyecto, cuyos resultados se exponen en este libro. Se trata de un proyecto de investigación y al mismo tiempo de intervención, formulado con el propósito de tener mayor comprensión de los múltiples factores y actores que generan inseguridad, especialmente hacia los jóvenes y a las mujeres, que son dos de los grupos sociales más afectados por las diversas formas de violencia y de manifestaciones de inseguridad, en lugares específicos de los seis países en los cuales se ejecutó el proyecto (gráfico 1).

Gráfico 1
Tasas de homicidios en América Latina y El Caribe (2016, 2017 y 2018)



Fuente: InSight Crime (2017, 2018, 2019).

La investigación buscaba no solo comprender esta dura realidad, sino incidir en su transformación. Por ello, el proyecto también se propuso rescatar para potencializar las acciones positivas que realizan los Estados, en procura de ofrecer espacios seguros y, con especial énfasis, se buscó visibilizar y fortalecer las diversas iniciativas adelantadas por las comunidades para resistir de manera no violenta a las múltiples agresiones que sufren las mujeres y los jóvenes en sus países y en los contextos socioculturales y políticos de las localidades específicas en las que se llevó a cabo el estudio.

Desde la formulación del proyecto se evidenciaba la existencia de un «considerable crecimiento en la literatura referida a la violencia en la región, así como sobre la gobernanza de la seguridad». Reconocíamos la producción de valiosos referentes conceptuales acerca de la «seguridad ciudadana» y la interpretación del registro de datos empíricos sobre la situación de la región, elaborada por diversas instancias académicas y organismos especializados en asuntos de seguridad (Basombrío, 2013; Bailey y Dammert, 2005; Frühling, 2009 y 2012), lo cual revelaba que no estábamos frente a un campo inexplorado. No obstante, pese a la existencia de abundantes

estudios y recomendaciones al respecto, la situación se perpetúa sin mostrar signos de cambio y, por el contrario, en algunos lugares tiende a empeorar, como lo demuestran los estudios que señalan el agravamiento de la problemática de violencia e inseguridad ante la creciente sofisticación del crimen organizado, la persistente violencia intrafamiliar, las agresiones contra las mujeres, y la estigmatización y la violencia contra los jóvenes que continúan siendo víctimas y principales operarios instrumentalizados por las máquinas de guerra. Todo esto ha puesto en evidencia las grandes limitaciones que presentan las reformas implementadas en la región en el sector de la seguridad (UNODC, 2019). Este contexto fue el que motivó la urgencia de la realización de esta investigación, con unos precisos alcances condensados en sus objetivos.

Antecedentes y objetivos del proyecto

Desde el diseño inicial de este proyecto, durante todo el proceso de ejecución y hasta el momento de elaborar el informe final consignado en este libro, se trabajó de manera conjunta entre diversos colectivos e instituciones de América Latina y el Caribe[1] compuestos por investigadores e investigadoras con experiencia y con trayectorias de participación en la prevención de diferentes tipos de violencia que afecta a jóvenes y mujeres y, algunos, con experiencia en la generación de conocimiento sobre cómo construir la seguridad humana *desde abajo* y procurar la convivencia pacífica en contextos de violencia crónica. En el pasado reciente, varias de estas entidades habían recibido apoyo financiero del IDRC o de la CRS para realizar investigaciones, lo que a estos organismos internacionales les generaba confianza, pues, además, valoran el esfuerzo y la creatividad puesta en juego ante la problemática tratada y dados los innovadores métodos participativos que involucran directamente a las comunidades afectadas en la búsqueda de soluciones.

El objetivo general del proyecto consistió en

1 El Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, como línea del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, de la Universidad de Antioquia, tuvo la función de coordinar académica y administrativamente el conjunto del proyecto. En Jamaica, Violence Prevention Alliance y University of West Indies; en el Salvador, la Universidad Centroamericana (UCA); en Guatemala, en el municipio de Nebaj, el Equipo de Estudios y Acción Psicosocial (ECAP), y en Sanarate, el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE) de la Universidad Rafael Landívar (URL); en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz (CIAS); en Honduras, el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT), el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H) y OXFAM (Honduras). Los nombres de cada uno de los integrantes de estas instituciones aparecen al comienzo de cada capítulo.

> […] coproducir conocimiento con residentes de comunidades vulnerables de seis países de América Latina y el Caribe, respecto a los procesos institucionales e informales involucrados en la construcción de espacios seguros para reducir la violencia contra las poblaciones más vulnerables, particularmente mujeres y jóvenes.

Para lograrlo, se formularon cinco objetivos específicos:

1. Identificar los principales generadores de violencia en las comunidades seleccionadas de cada país, diferenciando sus impactos respecto de las condiciones generacionales y de género.
2. Identificar las respuestas de la comunidad a la violencia crónica y analizar cómo estas respuestas impactan sobre la recurrente violencia sexual y de género, y otras formas de violencia letal y no letal, así como en la naturaleza del tejido social en cada contexto.
3. Analizar los impactos de las intervenciones del Estado y de otros actores clave sobre las iniciativas comunitarias que contribuyen a construir espacios seguros, así como la incidencia de estas iniciativas comunitarias sobre las intervenciones institucionales.
4. Fortalecer la capacidad de las comunidades para influir en la formulación de políticas y en los debates públicos de manera que se logren respuestas locales más eficaces a la crisis de seguridad regional.
5. Crear una red internacional de investigadores/as comunitarios/as y expertos/as académicos/as para compartir la realidad de la violencia y las estrategias para construir espacios más seguros en estos seis países.

Tal y como se había previsto, la realización del proyecto fue muy compleja debido a su problemática, de realidades sometidas a violencias crónicas, algo de por sí altamente sensible. A esto se sumaron los ritmos disímiles impuestos por particularidades culturales y las especificidades propias del comportamiento de los múltiples actores involucrados en el desarrollo de la propuesta. Las diferencias idiomáticas también representaron un reto adicional, pues, mientras en la mayoría de países la lengua común es el español, en Jamaica contábamos con una comunidad anglófona y en el municipio de Nebaj, Guatemala, para la mayoría de la población su lengua maya es el ixil. Por fortuna para todos los equipos, esta dificultad se tradujo en valiosos aprendizajes, varios de los cuales encontrará el lector a lo largo de este libro.

Enfoques y métodos aplicados. La coproducción de conocimientos

Hasta el presente, las políticas estatales para enfrentar la inseguridad y las violencias continúan estando, de manera recurrente, «centradas en las capacidades y limitaciones institucionales de los Estados». Son reiterados los discursos oficiales acerca de la «insuficiencia del número de efectivos de la fuerza pública», de la necesidad de modernizar los cuerpos policiales, lo cual en muchos casos consiste en invertir ingentes recursos en más tecnologías, expansión de la videovigilancia, adquisición de sofisticados y costosos equipos y otras medidas en la misma dirección; a lo sumo se llega a proponer la «policía de proximidad» o «policía comunitaria», pero en la práctica se subestima el rol que puedan tener las comunidades para enfrentar inteligentemente su problemática. Todo esto devela la gran brecha en la comprensión de la forma en que las personas que viven en medio de niveles crónicos de violencia y de múltiples formas de inseguridad, sobre el terreno, pueden responder a los retos cotidianos para que enfrenten esa situación sin apelar a violencias privadas o a graves manifestaciones de «fascismo social» (Santos, 2006).

En nuestro proyecto logramos acercarnos a una mejor comprensión de cómo las respuestas informales e institucionales a la violencia y la inseguridad en cada caso, pueden prevenir o permitir la construcción de espacios más seguros, a partir del reconocimiento de la diversidad de experiencias de inseguridad, según los diferentes grupos poblacionales y las particularidades de la localidad. Sabíamos que tendríamos que «enfrentar desafíos específicos en cuanto a la ética, la epistemología, la metodología y la seguridad» (Wheeler y Pearce, 2009).

Este libro da cuenta de la metodología empleada en este proyecto que, aplicando una modalidad de la investigación–acción–participación (IAP), tomó como hilo conductor la *coproducción de conocimientos,* de acuerdo con los dos principios enunciados desde su formulación: uno, el tener en cuenta el conocimiento de los residentes de las comunidades afectadas –en especial los y las jóvenes y las mujeres–, en un proceso dialéctico de reflexión, respetuoso de sus experiencias y de sus propias formas de conocimiento, en el que investigadores e investigadoras de la academia puedan vincular su saber específico al de las comunidades para, mediante ese diálogo de saberes, lograr un nuevo conocimiento. Y, dos, ese conocimiento producido les ayuda a los y las participantes a tener mejor comprensión de sus

realidades, mejorar su capacidad de contribuir a la construcción de comunidades seguras y justas, así como a influir en la formulación de políticas democráticas.[2]

Con base en esta metodología y su figura de *investigadores comunitarios e investigadoras comunitarias,* se logró consolidar el compromiso de los académicos y las académicas, yendo más allá de un acercamiento a las comunidades «estudiadas», para lograr mayor nivel de comprensión de sus desafíos y apoyar soluciones positivas para ellos. En medio de las usuales tensiones, propias de toda obra humana, se logró el acercamiento conjunto –entre líderes, lideresas comunitarias, académicos y académicas– a las realidades y sus contextos. Se superó la tradicional metodología de las ciencias sociales de «observación participante», se contribuyó a que las comunidades tuvieran un papel coprotagónico en el proceso de investigación, en tanto todos los participantes fueron tomados como sujetos cocreadores de la investigación y, en calidad de tales, contribuyeron a la realización del pensamiento creativo, ambiente propicio para obtener unos resultados que esperamos haber logrado comunicar a lo largo de las páginas de esta obra.

La coproducción de conocimientos fue el común denominador metodológico del proyecto en los seis países, aunque el enfoque tuvo diversas aplicaciones. Por ejemplo, en Honduras, se orientaron en el enfoque de la seguridad humana desde abajo, y en Jamaica y en Sanarate, Guatemala, en una seguridad integral. El equipo de El Salvador, por sus condiciones históricas prefirió trabajar desde la paz desde abajo, y las colegas del municipio de Nebaj, atendiendo a sus tradiciones culturales optaron por el enfoque del buen vivir de los pueblos o Ti´ichajil, en lengua ixil. De manera similar, en los dos municipios del estado mexicano de Michoacán, el enfoque aplicado fue el del buen convivir. En Medellín, pese a la experiencia del Observatorio centrada en la seguridad humana, en este proyecto deliberadamente no se partió de este enfoque pues se quería, de manera desprevenida, captar el sentir de las comunidades al respecto, y encontramos que los y las participantes tienen una comprensión de seguridad integral que, aunque podría ser homologada con la seguridad humana, no la denominan como tal y que, ni el equipo investigador pretendió imponer en la recolección de información ni en el análisis realizado con las comunidades. En síntesis, pese a las diferencias en la manera de enunciar cada enfoque, como puede apreciarse

2 Desde sus inicios en el año 2008, esta metodología de investigación del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín se ha venido aplicando en varios trabajos y países, y ha contado con las contribuciones de las profesoras Jenny Pearce y Alexandra Abello-Colak. En este proyecto, la metodología se aplicó de acuerdo con las particularidades de los equipos de cada país y de sus específicos contextos socioculturales.

en cada uno de los capítulos de este libro, todos coinciden en señalar que, en el fondo, estamos trabajando con el mismo propósito y desde un enfoque similar, con lo cual, más que verse como obstáculos, las diferencias constituyeron verdaderas riquezas de mutuos aprendizajes en lo cultural, lo conceptual, lo metodológico y lo humano.

Además de los métodos participativos y la coproducción de conocimientos, varios equipos hicieron uso de recursos tecnológicos como el *software* cualitativo de análisis de datos, *AtlasTi,* lo cual facilitó que la diversidad de información recogida fuese sistematizada y analizada. Para ello se ofreció una capacitación en la que participaron tanto investigadores comunitarios e investigadoras comunitarias como académicos y académicas, y cuyo ejercicio ha dejado un cúmulo de materiales de trabajo, susceptible de ser procesado y publicado, más allá de este libro. Aquí, por razones prácticas de extensión y accesibilidad al público en general, solo es posible exponer la «punta de iceberg».

Hallazgos y aprendizajes

El proceso investigativo y de interacción entre comunidades, académicos y funcionarios públicos generó resultados en cada localidad, algunos muy específicos que podrá verse en cada uno de los capítulos.

Entre los aspectos comunes encontrados están, por una parte, lo ya mencionado acerca de las políticas públicas que, con algunas variantes, le dan predominancia al uso de la fuerza y de las tecnologías, frente a políticas sociopreventivas o acciones sociales que cuenten con el respaldo de las comunidades. En general predomina la desconfianza hacia instituciones como la policía, dado que en mayor o menor grado con frecuencia se develan relaciones problemáticas con las mismas organizaciones delincuenciales que les corresponde enfrentar. La cultura patriarcal sigue siendo un gran obstáculo, pues, pese a importantes avances legislativos para su transformación, en la práctica el machismo sigue predominando en todos nuestros países, con expresiones en lo institucional y en la cotidianidad de las personas y familias, con casos más dramáticos como podrá verse en los capítulos sobre México y Honduras.

Del conjunto de hallazgos que emergen en este proyecto, en esta introducción queremos resaltar los *vínculos* que inspiraron el título de este libro y que surgieron del proceso de reflexión en torno al concepto de «espacios seguros». Como mencionamos antes, con base en los diferentes enfoques y métodos empleados aquí, se suscitaron interesantes y profundos debates en torno a la categoría *vínculos* que, al confrontarla con las prácticas, vivencias e interpretaciones realizadas por los equipos de cada país, al finalizar este proyecto podemos resaltar como un rasgo común y

general a todos los lugares de los seis países. Se trata de reconocer que el *espacio seguro,* más allá de ser algo material, un espacio físico en sí, ante todo está constituido por las relaciones que construyen las personas, el *vínculo* que se establece entre ellas, pues, al final y principalmente, es de estas relaciones que depende que un espacio sea seguro o inseguro. Por ello, como lo reitera en este libro el equipo de El Salvador (capítulo 2), el problema de los «espacios inseguros» devela, sobre todo, la existencia de conflictos, de relaciones problemáticas entre personas, las cuales deben ser tratadas desde la lógica de construcción de paz; de ahí que, construir «espacios seguros», visto a contraluz, es avanzar en la construcción de relaciones de convivencia pacífica, o de *buen vivir,* como lo llaman en Nebaj, o de *buen convivir* para la construcción del tejido social, según nuestros hermanos mexicanos.

Sin desconocer la importancia de la infraestructura física de los lugares en donde se da la convivencia, y la importancia de su mejoramiento material, simbólico y estético, lo que revela la investigación en todos los países es que, para que existan espacios seguros, el factor determinante son los *vínculos.* Son estos los que pueden hacer que un mismo espacio, trátese de una sede comunitaria, una iglesia, un parque, la casa o la calle, sea seguro o inseguro y que, según el tiempo (pasado o presente) y el horario del que se trate, el mismo lugar pueda mutar de ser seguro a convertirse en inseguro y viceversa.

Las relaciones y *vínculos* entre los seres humanos que habitan un lugar, y de estos con la naturaleza –añadirá la comunidad de Nebaj– es quizá el hallazgo más revelador que el lector encontrará expresado de diversas maneras en cada capítulo de este libro, con las particularidades de cada lugar. Este es un asunto fundamental que deberán tener en cuenta quienes gestionan políticas públicas y toman decisiones que afectan la vida de las familias, las comunidades y la sociedad en general. También, es un aprendizaje para quienes participaron en este proyecto y para otras comunidades que así no hayan vivido esta experiencia, podrían extraer lecciones para ser aprovechadas en sus realidades.

Los incontables aprendizajes dejados por la interacción horizontal entre los equipos de trabajo de los seis países involucrados también es otra ganancia de este proyecto. Desde abril de 2017 hasta mayo de 2019, se realizaron catorce sesiones virtuales en las que participaron los equipos de investigación de todos los países y se trataron temas específicos de orden conceptual y metodológico, así como los avances en cada uno de los lugares de aplicación. Adicionalmente, se realizaron tres reuniones presenciales con la participación de investigadores académicos e investigadoras académicas, comunitarios y comunitarias, de los equipos de los seis países (en el caso de Guatemala participaron dos equipos, el de Sanarate y el de Nebaj). En estas

reuniones también participaron delegados y delegadas de las agencias financiadoras IDRC y CRS, y las asesoras internacionales del proyecto.

La primera reunión presencial se realizó en Medellín en abril de 2017 y tuvo como resultado el ajuste de la estrategia metodológica del proyecto con acuerdos básicos en múltiples aspectos. La segunda reunión se llevó a cabo en San Salvador en septiembre de 2018 y permitió evaluar los avances logrados, reflexionar sobre los hallazgos y las experiencias metodológicas y registrar aprendizajes que permitieron a los equipos hacer ajustes en la implementación del proyecto. En mayo de 2019, en Antigua, Guatemala, se realizó un tercer encuentro que fue transmitido vía *streaming* y en el que se revisaron borradores de los informes finales de cada país, los cuales fueron sometidos a la revisión de pares de otros países, especialistas externos al proyecto, quienes participaron como invitados al evento y cuyas evaluaciones dejaron sustanciosas enseñanzas.

Organización del libro y sus capítulos

Esta obra, además del prólogo escrito por la profesora Jenny Pearce, en inglés y español, y de esta introducción, consta de nueve capítulos, los ocho primeros organizados siguiendo el orden alfabético del nombre del país en el cual se realizó la experiencia.

El primer capítulo fue elaborado por el colectivo investigador de Medellín, Colombia, y el segundo por el equipo de El Salvador, con participación de múltiples voces coordinadas por investigadores de la Universidad Centroamericana (UCA). En el caso de Guatemala, el capítulo tercero, está dedicado al municipio de Sanarate, elaborado por un equipo liderado por investigadores del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE) de la Universidad Rafael Landívar (URL), mientras que el capítulo cuarto está dedicado a la experiencia vivida en el municipio de Nebaj, con la elaboración del colectivo de compañeras del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). En el capítulo quinto se expone el trabajo adelantado en Honduras por las investigadoras comunitarias que trabajaron junto a las investigadoras del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H), y de OXFAM Honduras.

La experiencia de las dos localidades de Jamaica se presenta en el capítulo sexto, elaborado por investigadores de la Violence Prevention Alliance, adscrita a la University of West Indies, quienes trabajaron conjuntamente con miembros de la organización social New Generation Youth Club y el Cambridge Police Youth Club. El trabajo realizado en México se expone, en el capítulo séptimo, el caso de

Cherán, en un texto elaborado por investigadoras comunitarias del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social del municipio de Cherán e investigadores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mientras que el caso del municipio de Tancítaro, se expone en el capítulo octavo, realizado por integrantes del equipo de Educación del buen convivir del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social (PRTS), conjuntamente con investigadores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez del mismo municipio.

Se cierra el libro con el capítulo noveno en donde se intenta hacer una lectura global, de tipo transversal a los ocho capítulos, con la pretensión de generar una reflexión acerca de las lecciones aprendidas en el conjunto del proyecto. En ese sentido, más que una síntesis de lo expuesto, en cada capítulo, se formulan unas ideas en las que se dejan reflexiones críticas para los mismos participantes comunitarios y académicos, así como para las autoridades, otras organizaciones sociales o comunidades que pudiesen estar interesadas en realizar una experiencia similar. Finalmente, queda el juicio crítico de quienes lean este libro, quienes darán su veredicto y sabrán aprovechar de la mejor manera este esfuerzo colectivo que continúa su marcha.

Coordinación del proyecto y el equipo de investigación
de Colombia, noviembre de 2019

Referencias

Bailey, John y Dammert, Lucía (eds.). 2005. Seguridad y reforma policial en las Américas. Experiencias y desafíos. México, D.F.: Siglo XXI Editores.

Basombrío, Carlos (ed.). 2013. ¿A d*ónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad en América Latina.* Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars. En: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/3772/3917>.

Frühling, Hugo. 2009. *Violencia y policía en América Latina.* Quito: Flacso.

Frühling, Hugo. 2012. *La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y El Caribe. Cómo medirla y cómo mejorarla.* Washington: BID. En: <http://www.iadb.org>.

Gutiérrez Sanín, Francisco. 2001. «Democracia. Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos» en *Análisis Político.* Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. N.º 43. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/assets/own/analisis43.pdf>.

InSight Crime. 2017. Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2016. En: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-insight-crime-sobre-homicidios-2016/>.

InSight Crime. 2018. Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2017. En: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/>.

InSight Crime. 2019. Balance de InSight Crime sobre los homicidios en 2018. En: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/>.

Santos, Boaventura de Sousa. 2006. *Reinventar la democracia; reinventar el Estado.* Buenos Aires: Clacso.

UNODC -United Natons Office on Drugs and Crime- [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito]. 2019. *Global Study on Homicide,* brochure 1: Executive summary. Viena, 8 de julio. En: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>.

Wheeler, Joanna y Pearce, Jenny (eds.). 2009. *Violence, Social Action and Research.* Brighton: IDS Bulletin.

justicia
WILDLANDS

1

Espacios seguros en Medellín: reflexiones con jóvenes y mujeres desde la coproducción de conocimiento

*Carolina Sánchez Henao,[1] Natalia Cardona Berrio,[2] Beatriz Elena Hernández Chaverra,[3] Óscar Quinto Mosquera[4] y Pablo Emilio Angarita Cañas[5]**

Introducción

Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia y fue considerada en 1991 como la más violenta del mundo por sus altos índices de violencia homicida.[6] Esta

---

1 Politóloga y especialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social e investigadora del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, línea Observatorio de Seguridad Humana. Editora académica de este libro.

2 Politóloga, especialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social. Magíster en Psicología. Investigadora del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, línea Observatorio de Seguridad Humana.

3 Lideresa comunitaria de la Comuna 1, Popular, integrante de la Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental de Medellín e Investigadora comunitaria del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, línea Observatorio de Seguridad Humana.

4 Líder comunitario de la Comuna 6, Doce de Octubre. Integrante de Núcleo de Pensamiento e investigador comunitario del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, línea Observatorio de Seguridad Humana.

5 Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo. Profesor titular de la Universidad de Antioquia. Investigador del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, línea Observatorio de Seguridad Humana. Editor académico de este libro

6 Con más de 6 000 homicidios.

* Reconocemos y agradecemos a quienes fueron la voz de este capítulo, mujeres y jóvenes de las comunas 1 y 6 que compartieron sus experiencias, (in)seguridades y esperanzas con el equipo de investigación. Además, al equipo interno de trabajo: Carolina Escobar, administradora de empresas, por su participación como auxiliar administrativa de este proyecto e interlocutora en el análisis de información; así como al sociólogo Héctor Pardo, por su apoyo en la elaboración de transcripciones y en la parte académica; quienes realizaron su práctica y pasantía, respectivamente, en el marco de este proyecto y se graduaron durante la ejecución del mismo.

violencia se ha concentrado históricamente en comunidades afectadas por bajos niveles de desarrollo humano, como las comunas[7] 1 y 6, en donde la desigualdad social y el narcotráfico han obligado a sus habitantes a vivir en espacios inseguros.[8] Las políticas estatales de seguridad implementadas en estas comunidades, han sido ineficientes y, en ocasiones, han acentuado las causas de la inseguridad y la violencia. Si bien desde el año 2011 se han reducido los homicidios en ambas comunas, persisten otras formas de violencia que afectan principalmente a mujeres y jóvenes, como el reclutamiento forzado, la violencia sexual, la estigmatización de la población juvenil, el desplazamiento forzado, entre otras formas de control por parte de actores legales e ilegales.

En el marco de esta problemática se desarrolló el proyecto de investigación «Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios seguros en América Latina y el Caribe». El propósito ha sido contribuir a la construcción de espacios seguros y a la reducción de la violencia contra mujeres y jóvenes, mediante el análisis participativo de las intervenciones realizadas por las instituciones estatales, las comunidades y otros actores.[9]

En Medellín fueron escogidas las comunas 1 y 6 que, con algunas diferencias en su composición topográfica y habitacional, tienen grandes similitudes tanto socioeconómicas como en sus dinámicas de violencia e inseguridad (gráfico 1.1). Los hallazgos obtenidos en esta investigación revelaron muchas similitudes respecto a la realidad de jóvenes y mujeres, con algunos matices que serán señalados en su momento.

En este capítulo se expone el trabajo colaborativo adelantado durante dos años entre el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM), del grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana,[10] y dos organizaciones sociales de Medellín: la Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental

---

7 Unidad administrativa en la cual se subdivide el área urbana de una ciudad media o principal de Colombia, que agrupa barrios o sectores determinados.

8 Los conceptos de *violencia* e *inseguridad* usados en este texto, aunque parecieren ser tomados como sinónimos, son claramente diferentes; aun así, se interrelacionan. Por ejemplo, la inseguridad generada por la desatención en salud a habitantes de comunas periféricas, no son resultado de violencia directa y, al contrario, el uso legítimo de la fuerza para contrarrestar grupos armados, aunque conlleve violencia puede constituir seguridad para los pobladores.

9 En la percepción de los participantes de esta investigación es poco relevante el accionar de otros actores (Iglesias, empresa privada, etc.) en torno a la construcción de espacios seguros, por ello este informe está centrado en los actores estatales y comunitarios.

10 Adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia hasta marzo de 2019, cuando migró a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad.

(CMZN)[11] y el Núcleo de Pensamiento (NUPEN)[12] con el objetivo de coproducir conocimientos sobre la creación de espacios seguros desde la perspectiva de las mujeres y los jóvenes.

Con base en la metodología de *coproducción de conocimiento desde abajo,*[13] el equipo de investigación —que incluyó investigadores comunitarios, miembros de las organizaciones antes mencionadas e investigadores académicos— realizó un trabajo de campo centrado en la voz de quienes habitan los territorios de estudio. Para la comprensión, formación y reflexión en torno a la construcción de espacios, se efectuaron diez interacciones comunitarias[14] con grupos de jóvenes y mujeres (cuadro 1.1), un cine-foro con jóvenes, como estrategia para generar confianza y sensibilización con respecto al tema, y un taller con estudiantes de noveno grado de una institución educativa de la Comuna 6, en el cual se logró identificar diferencias en la comprensión de hombres jóvenes y mujeres jóvenes sobre los espacios seguros. La metodología de investigación permitió integrar los saberes de los investigadores académicos e investigadores comunitarios que acompañaron las diversas fases del proyecto.

Cuadro 1.1
Población participante en las interacciones comunitarias

	Comuna 1	Comuna 6
Cantidad promedio	15 mujeres (jóvenes, adultas y adultas mayores)	12 jóvenes (hombres y mujeres)
Rango de edad promedio	Entre 30 y 45 años. La menor tenía 14 años y la mayor 80 años	Entre 13 y 19 años

Fuente: elaboración propia a partir de la información de campo.

11 Surge hace 23 años en la Zona Nororiental de Medellín. Es un espacio formativo en participación política, promoción y divulgación de los derechos humanos de las mujeres, las violencias basadas en género y de reflexión frente al conflicto armado urbano (OSHM, 2012).

12 Su objetivo es «crear espacios de formación social para jóvenes, líderes, lideresas, mujeres, infantes, adultos mayores y comunidad en general de la ciudad para facilitar el adecuado avance de procesos de participación ciudadana y la movilización social para el cambio» (NUPEN, 2018).

13 Desarrollada colectivamente por el Observatorio de Seguridad Humana, organizaciones comunitarias de Medellín e investigadoras del Reino Unido (Observatorio de Seguridad Humana, 2014; Abello-Colak y Pearce, 2019).

14 Los investigadores comunitarios prefieren llamar «interacciones comunitarias» al trabajo que realizan con sus comunidades en el marco del proyecto. Esto corresponde a lo que usualmente los académicos llaman «trabajo de campo».

Se realizaron además dos grupos focales con funcionarios públicos[15] y con expertos, seis entrevistas con mujeres y jóvenes representantes de procesos organizativos, así como con funcionarios del gobierno local para profundizar en la información recolectada. En la Comuna 1 se realizó una acción de incidencia política denominada *Mujeres construyendo espacios para la seguridad humana y la paz en sus comunidades.* Asimismo, se adelantaron tres sesiones de discusión de los hallazgos con las organizaciones acompañantes del proyecto y, en la última fase, se hicieron dos ejercicios de convalidación del informe final con los involucrados en la investigación y con funcionarios y expertos. Sumado a esto resultó altamente provechoso el diálogo constante y el intercambio de ideas y reflexión, con los investigadores académicos y comunitarios de los otros países participantes del proyecto.

Siguiendo el enfoque metodológico del OSHM, las principales categorías analíticas de este proyecto[16] se construyeron de manera provisional y fueron precisadas a partir de las nociones de jóvenes y mujeres participantes, aplicando lo que se conoce como teoría situada. El análisis incluyó las experiencias de personas participantes de las comunas 1 y 6, así como también las visiones del equipo de investigación y de expertos académicos.[17]

Este capítulo, además de la introducción y las conclusiones, está compuesto por cuatro apartados en los que se presentan los hallazgos. El primero, ofrece un panorama general de la violencia en Medellín; el segundo, expone cómo la construcción de espacios seguros involucra cuatro esferas (individual, interpersonal, colectiva y estatal), en cuya confluencia se da la garantía de derechos y libertades. En el tercer apartado se analizan las acciones del Estado y sus alcances en cuanto a la generación de espacios seguros para las mujeres y jóvenes, se constata la prevalencia de una tendencia militarista en la respuesta a la violencia y la inseguridad y adicionalmente, se devela la limitación que tienen los habitantes de apropiarse de espacios construidos por el Estado, ante el control ejercido por grupos armados. Finalmente, el capítulo da cuenta de las iniciativas comunitarias de jóvenes y mujeres que sirven de blindaje ante la violencia y generan formas

15 Inspectores de policía, comisarios de familia, fiscales, funcionarios de la Secretaría de la Mujer y Secretaría de Juventud, y miembros de la Defensoría del Pueblo.

16 Actores de (in)seguridad, espacios seguros/inseguros, factores generadores de (in)seguridad, iniciativas comunitarias, intervenciones estatales e incidencia política.

17 Jenny Pearce, Alexandra Abello, Vladimir Montoya, Carlo Emilio Piazzini, Alejandra Restrepo, Alexandra Agudelo, Gustavo Urrego, Ángela María Estrada e Isabel Aguilar. Además de los integrantes del grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana que han sido interlocutores permanentes.

alternativas para habitar, apropiarse y construir espacios para la vida digna y segura en sus comunas.

Panorama de violencia e inseguridad

Medellín, capital del departamento de Antioquia, con una población de 2 486 723 habitantes,[18] está organizada en 16 comunas urbanas y 5 corregimientos. A mediados del siglo pasado, Medellín era considerada la capital industrial de Colombia, no obstante, con el inusitado incremento poblacional por diversas olas migratorias de desplazados del campo a causa de la violencia y a razón de las expectativas de empleo por el crecimiento industrial, se produjo un gran déficit en infraestructura vial, alcantarillado y servicios públicos (transporte, educación, salud, vivienda, agua potable y energía eléctrica), lo que originó múltiples conflictos.

La falta de empleo se agudizó en los años ochenta con la crisis del sector textil al tiempo que apareció la oferta del narcotráfico que ilusionó a pobres y a ricos, generando una nueva dinámica económica y social con profundo impacto en las prácticas culturales y políticas de la sociedad antioqueña, marcadas por múltiples formas de violencia. Emergió el *sicariato* y la idea del enriquecimiento fácil. Esta idea se apoyó en tradiciones culturales de admiración por quienes desafiaban las normas (bandidos y contrabandistas) o eran infractores a pequeña escala, lo que ha permitido el fortalecimiento de múltiples ilegalismos y de redes criminales que, en décadas recientes, ha incluido estrechas relaciones entre políticos, empresarios y mafiosos criminales (Angarita, 2019).

En la década de los años noventa, la exacerbación de la violencia criminal del Cartel de Medellín tocó las puertas del poder estatal y sacudió la sensibilidad nacional e internacional, que obligó a realizar importantes cambios, como la promulgación de un sinnúmero de leyes de control a los narcotraficantes y sus dineros ilícitos;[19] mientras que se descalificaban socialmente ciertos comportamientos ostentosos. La presión social obligó a sus detentadores a ser discretos frente a la amenaza de caer en prisión o ser extraditados a los Estados Unidos. En las dos últimas décadas, con relación al negocio de las drogas ilícitas, existe una reacción de rechazo social que pervive con nuevas formas de ilegalismos que penetran la economía legal, que siguen alimentando el sector financiero y que, en los sectores populares, en muchos casos, se solapa con las múltiples formas de sobrevivencia.

18 De los cuales el 52,9 % son mujeres y 47,1 % hombres a 2015.

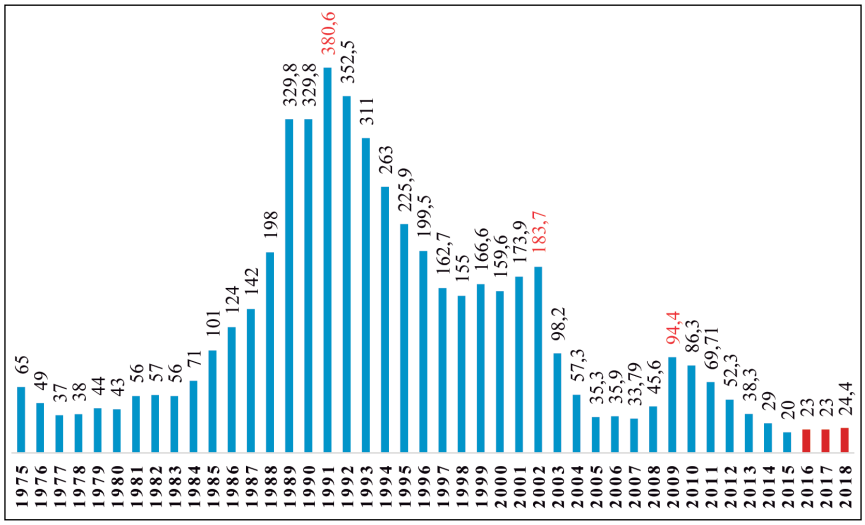
19 A propósito, véase Iturralde 2010.

Signo trágico de violencia y muerte

En los últimos cuarenta años, en la ciudad fueron asesinadas alrededor de noventa mil personas. El pico más alto de muertes violentas[20] fue en 1991, con más de seis mil homicidios. En el año 2003 se dio la negociación con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y sus bloques con presencia en la ciudad, particularmente el Bloque Cacique Nutibara liderado por alias Don Berna. Bajo sus órdenes y en el marco de la desmovilización de estos grupos paramilitares, se promovió la parálisis del transporte urbano y se obligó a los grupos armados locales, conocidos como combos, a evitar los homicidios, lo cual incidió en que desde el año 2004 hasta el 2008 se presentara un descenso más significativo de homicidios en la ciudad. Esto no significó, sin embargo, la desaparición de estos grupos ni la solución definitiva a los problemas de violencia e inseguridad. Para el período 2016-2018, los índices de homicidios presentaron una leve tendencia al aumento (gráfico 1.1) que el gobierno municipal le atribuye a la «confrontación entre bandas criminales y problemas de convivencia». Cabe resaltar, que del total de las víctimas de homicidios ocurridas entre 2003 y 2013, el 52 % eran jóvenes (PDM, 2016).

Gráfico 1.1

Tasas de homicidios en Medellín (1975-2018)



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC, 2018), la Policía Nacional 2018 y el INMLCF 2017.

20 Las muertes violentas, además de los homicidios, incluyen suicidios, accidentes de tránsito y otras causas.

Adicionalmente, se presentan dos graves situaciones: de las más de ocho millones de personas desplazadas forzosamente en Colombia hasta el año 2018 (ACNUR, 26 de diciembre de 2018), Medellín registró un total de 107 978 desplazados desde la ciudad hacia otros territorios entre los años 1986 a 2015 y mantuvo la tendencia de los últimos años, con 3 211 personas desplazadas en 2017, frente a 4106 en 2016 (MCV, 2017, p. 6). La segunda situación es la desaparición forzada, que en Medellín asciende a 4226 personas desaparecidas entre 1986 y 2015, sin investigación judicial o condena por siquiera un caso. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2015, «El departamento de Antioquía fue en el que ocurrió el mayor número de desapariciones presuntamente forzadas» (INMLCF, 2016), y Medellín, con once casos, fue la ciudad de Colombia con el mayor número de desaparecidos.

El control territorial ejercido por actores armados ilegales es una particularidad del conflicto que ha vivido Medellín y que, además, ha tenido un papel determinante en la configuración del orden social vigente. En el siglo pasado, el conflicto social giraba en torno a la disputa por el suelo y por contar con un espacio físico para la vivienda. En cambio, al finalizar la segunda década de este siglo, predomina el intento de ejercer el control sobre sectores de población, bajo la lógica de «el que da protección exige obediencia» (Schmitt, 1997). Es así como en la capital de Antioquia se han configurado territorios en los que actores armados han implantado soberanía y órdenes sociales híbridos (Abello-Colak y Van der Borgh, 2018), al mezclar las normas legales del Estado con las reglas impuestas por los grupos armados. Como lo ilustra Dávila (2018), estos grupos, al tiempo que producen homicidios, también «contribuyen a su prevención»; en este contexto el acatamiento de la ciudadanía a la legalidad y a las reglas de los grupos amados implica que «las reglas informales coadyuvan y obstruyen el sistema formal de manera coetánea; coadyuvan al encausar [sic] las conductas sociales, resolver asuntos litigiosos y generar mercados en zonas periféricas con mínima presencia estatal, asimismo, obstruyen al producir delitos, vulnerar los derechos de los habitantes y generar negocios ilícitos» (Dávila, 2018, p. 159).

Los controles territoriales por parte de grupos armados expanden otras formas de violencia como la extorsión, conocida como «vacuna», que se ha extendido a casi todos los barrios de la ciudad, con el pretexto de «prestar seguridad» (Bedoya, 2010 y 2017; SISC, Alcaldía de Medellín y OSHM, 2018) en espacios públicos y alrededores, calles, y demás sitios de circulación. Este fenómeno se ha naturalizado, muchas personas lo aceptan como otro impuesto más con el que se debe vivir en

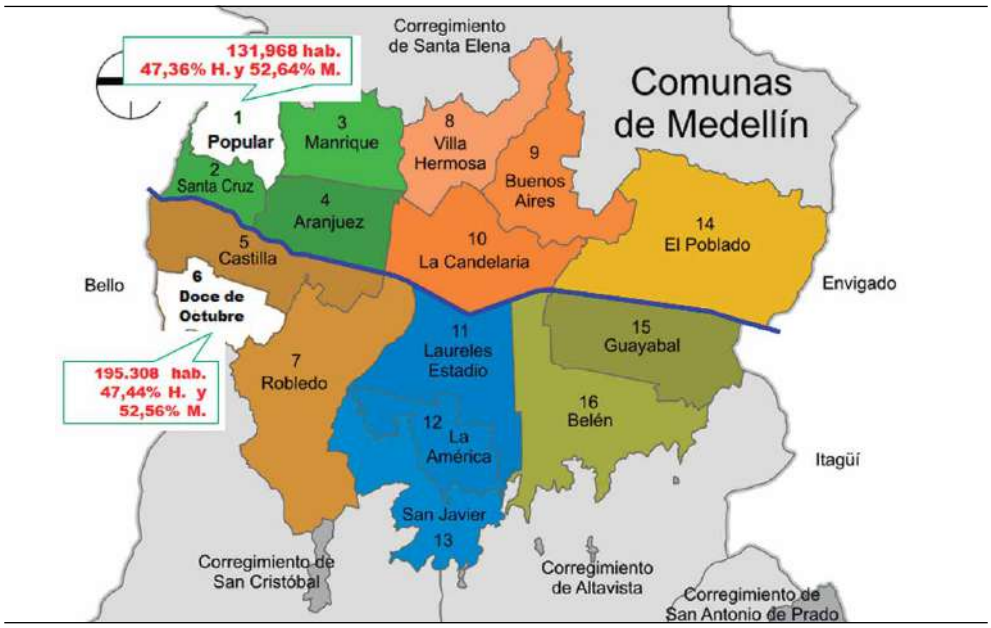
la ciudad.[21] A pesar de este control, o a razón del mismo, para el año 2018 solo el 41 % de la población se sentía segura.[22]

Violencia e inseguridad en las comunidades seleccionadas

A continuación, en el gráfico 1.2, se presentan algunos rasgos fundamentales de las comunidades seleccionadas para el estudio.

Gráfico 1.2

Mapa de las comunas de Medellín y número de habitantes en las comunas 1 y 6



Fuente: adaptación de mapa del sitio *Medellintespera* (s. f.) mediante inclusión de datos a partir del perfil demográfico.

21 Las «vacunas» son aplicadas a comerciantes y a tenderos. Según lo señalan investigadores de la Alcaldía Municipal (SISC, 2018), y lo registran medios de comunicación (Pareja, 2016), para las viviendas las tarifas «varían entre 1.000 y 5.000 pesos semanales (equivalente en dólares entre 30 centavos y 1.55). Las personas pagan para que no les roben, no los amenacen o expulsen de sus barrios». Las víctimas del conflicto armado, que por esta razón reciben una pequeñísima indemnización económica por parte del Estado, también son obligadas a pagar esta vacuna, al igual que los contratistas de obras públicas, el «80 % de las obras de la ciudad están extorsionadas» (Pareja, 2016).

22 Según encuesta de percepción y victimización (MCV, 2018a).

Comuna 1 (Popular)

La Comuna 1 está ubicada en la Zona Nororiental de Medellín, su extensión total es de 309,91 hectáreas (Alcaldía de Medellín, 2015a). Los grupos etarios de mayor presencia en la comuna son los comprendidos entre 0 y 29 años con un porcentaje del 52,90 % (Alcaldía de Medellín, 2015a, pp. 41-42). Esta comuna tiene la tasa más alta de desempleo en toda la ciudad con 14,9, que en el caso de las mujeres (11,9) supera la tasa general de Medellín (10) (MCV, 2018). Además, presenta problemáticas de informalidad laboral y baja distribución equitativa de los ingresos de sus habitantes. La tasa de homicidios (cuadro 1.2) para los años 2010-2016 pasó de 108,8 por cien mil habitantes en 2010 a 11,5 en 2016 y luego descendió a 9,2 y a 6 para los dos años siguientes (SISC, 2019).

Cuadro 1.2
Homicidios Comuna 1 – Popular

Años	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa	28	17	23	31	136	108,8	20,4	28,8	16,3	10	6,1	11,5	9,2	6
Nº.	33	24	24	44	179	137,0	26,0	37,0	21,0	13	8,0	15,0	12,0	10

Fuente: SISC, 2019.

La dinámica de conflicto en la Comuna 1 en años recientes ha estado marcada por el control hegemónico que ejercen dos bandas criminales: los Triana[23] y San Pablo, las cuales derivan su nombre de los sectores que controlan: La Silla, El Hoyo de San Pablo, La 29, La Avanzada, La 38, Los Terranovas, El Filo, Los Chicos Malos (de la vía al municipio de Guarne), La Torre (Insuasty *et al.*, 2016). Estas bandas han contribuido a mantener un nivel bajo de homicidios, en medio de una tensa calma y una inseguridad naturalizada expresada en fronteras invisibles y otras prácticas de control social hacia la población, como el monopolio de la producción de víveres de la canasta familiar que distribuidores y tenderos de los barrios se ven obligados a adquirir. Además, estas bandas controlan la extorsión, el tráfico de estupefacientes y generan desplazamiento forzado.

23 Banda conformada desde los años ochenta, se le investiga por el homicidio de la lideresa afrodescendiente Ana Fabricia Córdoba ocurrido el 7 de julio de 2011.

Comuna 6 (Doce de Octubre)

La Comuna 6 tiene una extensión de 383,56 hectáreas y comprende 12 barrios. Con 195 308 habitantes, es la segunda comuna más poblada de Medellín. La mayoría de su población es joven y joven adulta, entre los 15 y los 44 años (Alcaldía de Medellín, 2016a, p. 14). En esta comuna coexisten 36 combos delincuenciales[24] (Personería de Medellín, 2017) que han marcado dinámicas de confrontación armada dejando saldos de homicidios que representa para 2017 una tasa del 13,8 por cada cien mil habitantes y de 11,3 para el año 2018 (cuadro 1.3).

Cuadro 1.3
Homicidios Comuna 6 – Doce de Octubre

Años	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa	26,9	20,9	28,8	41,9	105,6	67,8	49,8	26,6	25	20,7	11,9	11,3	13,8	11,3
N.º	50,0	39,0	54,0	79,0	200,0	129,0	95,0	51.0	48	40,0	23,0	22,0	27	22

Fuente: SISC, 2019.

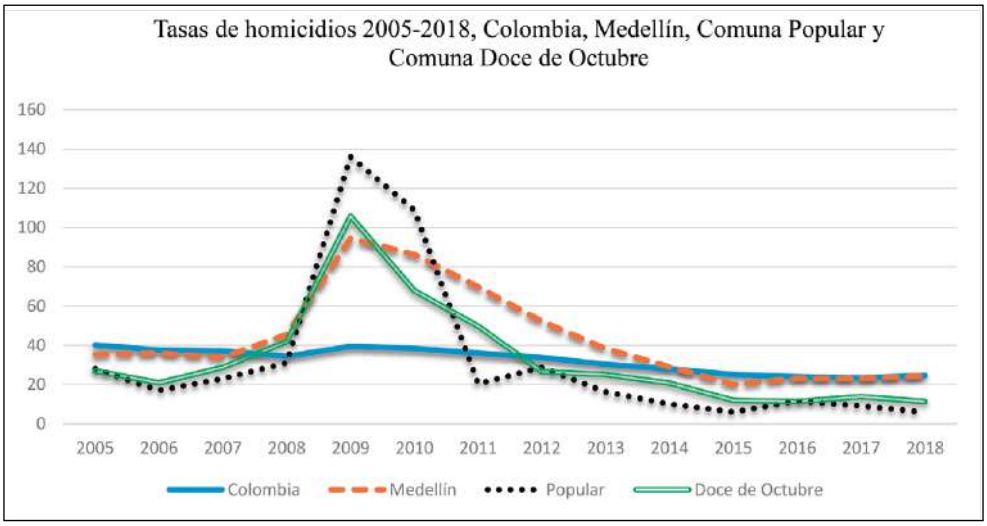
En el año 2015, el Doce de Octubre fue la segunda comuna con mayor número de casos de desaparición de mujeres, con 14 casos registrados (Personería de Medellín, 2016) y para el año 2014 fue la comuna con mayor número de casos de mujeres víctimas de presuntos delitos sexuales, con 80 eventos (Alcaldía de Medellín, 2015b, p. 108).

En síntesis, la violencia homicida en Medellín ha logrado una notoria disminución respecto a la presentada en la década de los años ochenta y noventa. En el caso de las comunas 1 y 6, se ha presentado un descenso de los homicidios después de 2009, a tal punto, que en el último quinquenio en ambas comunas la tasa de homicidios es inferior al promedio de la ciudad y de Colombia (gráfico 1.3). Un importante factor que ha contribuido a este descenso ha sido el control ejercido por los grupos armados ilegales. Pervive entonces una preocupación por las nuevas expresiones de la violencia, cuyas prácticas culturales y sociales socavan el tejido social, evidencian una

24 Entre estos se encuentran: La Oficina del Doce, El Chispero, El Polvorín, Los Machacos, La Imperial, Los Ototos, Los Rieles, El Baratón, París o La 402, La Conejera, La Matecaña, La Calle del Silencio, La Calle del Pecado, Los Negritos, Los Tatos, El Plan o Jardín, San Martín de Porres, Los Chichos, Picacho, Los Ranchos, La 78, La Invasión, Los Bananeros, El Pino, Kennedy, El Ventiadero, El Bulevar, La Pradera, Santander, La Torre, Cruz Roja, Los Broster, Los Buchepájaros, Cotranal, Los Cachorros y La Arboleda.

crisis de valores en la sociedad y ponen en cuestión la legitimidad de las instituciones democráticas, en particular aquellas que ejercen la autoridad y son responsables de la seguridad y la convivencia.

Gráfico 1.3
Comparativo de homicidios



Fuente: elaboración propia con datos del SISC 2018, la Policía Nacional 2018 y el INMLCF 2017.

Los problemas de inseguridad desde la perspectiva de las mujeres y los jóvenes de las comunas 1 y 6

A pesar de las reducciones en los índices de homicidios en la ciudad y en las comunidades en particular, la investigación mostró que hay varios factores de inseguridad que persisten y que afectan de manera diferenciada a las mujeres y a las y los jóvenes de las comunas 1 y 6. Según la Alcaldía de Medellín (2016b) en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, en 2015, el 50,01 % de las viviendas tienen a mujeres como jefes de hogar. Esto quiere decir que la mitad de los hogares en Medellín tienen la responsabilidad exclusiva en las mujeres, suponiendo una sobrecarga en lo económico y en el cuidado de los otros integrantes del hogar. A esto se suma la violencia contra las mujeres, que «lastima su salud física y mental, limita sus posibilidades de autonomía económica, provoca su desescolarización y obstaculiza su plena participación social y política» (EAFIT-Secretaría de Mujeres, 2018, p. 18). La violencia sexual es,

también, la más recurrente y suele producirse en el interior de la familia. «Los feminicidios continúan siendo la más extrema violencia»[25] (EAFIT-Secretaría de Mujeres, 2018, p. 18).

En 2017 se presentaron 1997 casos de delitos sexuales,[26] en los cuales el 87 % de las víctimas eran mujeres, principalmente en el rango de edad de 0 a 17 (77,4). La violencia que afecta a las mujeres tiene unas particularidades: «la violencia sexual se concentra entre la primera infancia y la adolescencia (0 a 17 años), la violencia de pareja en la adultez (25 a 39 años), mientras que el feminicidio es una amenaza latente» (Corporación Mujeres que crean, *et al.*, 2018, p. 204). Esto sumado a la inseguridad a causa del acoso sexual callejero, una problemática que reconocen las mujeres jóvenes de las comunas 1 y 6. Estas mujeres cargan, además, con restricciones impuestas por sus padres y demás autoridades en torno a la libre circulación por sus barrios. Bajo el argumento de cuidarlas terminan restringiendo sus derechos.

Por su parte, las mujeres adultas señalan dificultades para ejercer liderazgos debido a las prácticas de persecución realizadas por otros líderes de la comunidad que limitan el ejercicio social y político hacia los que no comparten sus ideas (mujer adulta, interacción de mujeres N.° 1, 12/03/2018). Las habitantes de las comunidades también evidencian dificultades para el tránsito por sus barrios, por la infraestructura de andenes y por calles estrechas; y señalan que los equipamientos construidos por las agencias gubernamentales no son diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. Esto constata lo que se ha venido planteando en estudios anteriores: Los procesos de planificación de las ciudades tienen sesgos eminentemente masculinos (Massolo, 2007) generando un desequilibrio en la oferta de espacios y en la forma en que las mujeres se apropian de estos con respecto a los hombres.

Con respecto a los jóvenes, en las últimas décadas, han sido las principales víctimas de la violencia letal. Entre 2017 y 2018, 362 jóvenes, de entre 12 y 14 años fueron asesinados (*El Tiempo*, 23 de diciembre de 2018) y según un informe de la Personería, las principales víctimas de los conflictos violentos en Medellín son jóvenes entre los 15 y los 25, quienes son, al mismo tiempo, los de «mayor riesgo de pertenencia a los grupos ilegales»,[27] de ahí que el secretario de seguridad afirme «60.000 jóvenes

25 De las mujeres que han sido víctimas de violencia solo 53 % denuncia, las que no lo hacen se debe a miedo a retaliaciones, desconfianza en el sistema de justicia y por proteger a su familia (EAFIT-Secretaría de las Mujeres, 2018).

26 Sobre este delito existe altísima impunidad, toda vez que en el 68 % de los casos no fue posible individualizar al agresor.

27 Según cifras del Observatorio del Delito de la Policía Nacional, entre 2017 y septiembre de 2018, habían sido capturados 3 212 jóvenes de 14 a 17 años.

están en riesgo de entrar a "combos"». (*El Tiempo*, 23 de diciembre de 2018), además de sufrir amenazas constantes de reclutamiento y posibles desplazamientos.[28]

Los datos arrojados en esta investigación evidencian que los riesgos antes mencionados son originados en las presiones socioeconómicas y la violencia intrafamiliar. Los grupos al margen de la ley se benefician al reclutarlos o utilizarlos, ya que fortalecen su estructura criminal (Personería de Medellín, 2019) y contribuyen en otras actividades comerciales, sexuales y operativas que acrecientan su estructura económica.

Los jóvenes participantes de esta investigación identificaron el «adultocentrismo»[29] como uno de los factores que contribuye a su inseguridad y que, unido a prácticas clientelares tradicionales, limitan su participación política y social, en escenarios de deliberación y toma de decisiones frente a proyectos juveniles en las comunas. Según los y las jóvenes participantes en esta investigación, los adultos obstaculizan su participación efectiva cuestionando sus intervenciones e intentando imponer sus ideas.

«Espacios seguros» desde una perspectiva situada

De acuerdo con los jóvenes y mujeres participantes en esta investigación, un espacio seguro está determinado por varios ámbitos o esferas y tiene como base la cualidad relacional. Comprende cuatro tipos de relaciones: i) de las personas consigo mismas (esfera individual), ii) entre diversas personas (esfera interpersonal), iii) de las personas con los ámbitos colectivos (esfera colectiva) y iv) de las personas con el ámbito estatal (esfera estatal). Cada una de estas esferas se expresa en un territorio y se relacionan con las condiciones físicas o materiales de este.

El espacio seguro se configura cuando la confluencia de relaciones en las esferas personal, interpersonal, colectiva y estatal, permiten la garantía de derechos, la posibilidad de que los seres humanos se desarrollen libremente, el establecimiento de vínculos de confianza y la apropiación de los lugares en los que se expresan cada una de las esferas (gráfico 1.4).

---

28 Por ejemplo, en la Comuna 6 opera la banda criminal Los Bananeros, investigada por la Fiscalía «por el desplazamiento forzado de un núcleo familiar formado por una mujer y sus tres hijos de 9, 13 y 17 años de edad, quienes fueron presionados para abandonar el sector en febrero de 2017. Esta familia fue víctima de constantes amenazas, lesiones y el joven de 17 años fue obligado, en varias oportunidades, a trabajar para este combo delincuencial» (El Mundo.com, 2018).

29 La imposibilidad para valorar a la juventud desde los propios parámetros que ella construye y no únicamente constituido desde «el saber» de los adultos. Este saber adulto que determina y se reproduce en una amplia serie de prácticas sociales (desde la familia a la política, pasando por la escuela y los sistemas de salud) recibe el nombre de «adultocentrismo» (Vásquez, 2013).

En las relaciones asociadas a los espacios seguros, es fundamental la construcción de vínculos, la cual «denota la pertenencia a un espacio común construido, significado y a fin de cuentas inventado» (Barrault, 2007), donde el vínculo constituye la interacción continúa con otros en los ámbitos afectivo, comunicacional y comportamental, con el propósito de organizarse en un contexto determinado (Bernal y Melendro, 2014). Los vínculos se desarrollan en las cuatro esferas propuestas y de acuerdo con sus características pueden contribuir a configurar espacios seguros o inseguros. En el primer caso se hablaría de vínculos de confianza y sanos;[30] en el segundo caso de vínculos de riesgo.[31]

En la esfera individual, se trata del vínculo consigo mismo y se reconoce el cuerpo como el primer lugar seguro[32] o que debería serlo. Esta es una reivindicación principalmente de las mujeres, para quienes esta condición implica estar libre de amenazas y agresiones, al igual que tener salud mental y física. En el caso de los jóvenes, la principal exigencia para construir espacios seguros es tener la posibilidad de «ser», de desarrollarse libremente, sin ser estigmatizados. De allí que los jóvenes consideren las organizaciones comunitarias como espacios seguros, a diferencia de la escuela y la casa, que son relativamente seguros, porque dependen del tipo de relaciones que se tenga con los profesores o con los padres, y, al contrario, de espacios inseguros como los parques, en donde autoridades legales o ilegales llegan a cuestionarles sus comportamientos y formas de socialización.

La esfera interpersonal se relaciona directamente con la creación y el fortalecimiento de vínculos de confianza y la certeza en que la relación con otras personas no afectará la integridad personal de una de las partes. Siguiendo a Kójeve «quiero que el otro 'reconozca' mi valor como su valor; quiero que él me 'reconozca' como un valor autónomo» (1982, p. 3). La esfera interpersonal parte de la idea de «reconocimiento», por ello, para los jóvenes, un espacio seguro es en donde sienten que tienen una red de confianza, de escucha o de personas que los reconozcan y que con mayor experiencia les puedan compartir conocimientos útiles para su propia vida.

---

30 Son «vínculos que nos conectan a los demás de manera positiva, que nos hacen felices y confiantes [sic], ya que refuerzan nuestra identidad personal y cultural, consolidan nuestra inclusión social y refuerzan el sentimiento de pertenecimiento [sic] al grupo. Tener un trabajo, tener documentos de identidad, pertenecer a un grupo o asociación, votar por dirigentes, son vínculos que consolidan y promueven la vida en sociedad. Son esos vínculos que se transforman en escudos protectores contra los choques típicos de quien viven en familia y en comunidad [sic]». (Barreto, 2013, pp. 294-295).

31 Se refiere a los vínculos que separan a unas personas de otras, pueden afectar la salud o la integridad de las personas involucradas en estos (Barreto, 2013). Por ejemplo, un joven que es amigo de un miembro de una organización criminal.

32 Aunque se reconoce que hay diferencias entre espacio y lugar, para efectos de este texto estos dos términos son utilizados de manera equivalentes.

En el caso de las mujeres, un espacio seguro en la esfera interpersonal se expresa en que además de la seguridad individual se tenga garantizada la seguridad para sus hijos, en tanto el rol de madre genera una carga subjetiva que acentúa su sensación de (in)seguridad.

La esfera colectiva (social y comunitaria) está relacionada con la posibilidad de organizarse, sentirse parte de, hacer uso de su creatividad y ejercer sus derechos colectivos. Por las posibilidades que ofrecen, los espacios que jóvenes y mujeres coinciden en identificar como seguros, sin tener variaciones por el tiempo ni horarios, son las organizaciones comunitarias.

Por su parte, la esfera estatal se refiere a la tranquilidad al ejercer los derechos, la ciudadanía y al disfrute de la ciudad, garantizada por el Estado. Para esto se requiere la construcción de espacios de encuentro que permitan, a su vez, establecer vínculos (Barrault, 2007). Además, implica la oportunidad de entablar una relación respetuosa, digna y eficiente entre los ciudadanos y los actores estatales.

Gráfico 1.4

Esferas de un espacio seguro[33]

Fuente: elaboración propia.

33 Las características de las esferas que tienen al final (M) corresponden principalmente a mujeres y las que finalizan con (J) son principalmente de jóvenes. Sin especificación corresponde a características de ambos grupos.

La existencia de condiciones materiales (infraestructura de calidad, accesibilidad, iluminación y habitabilidad) y culturales (respeto a la diversidad, las ofertas lúdicas y artísticas y las prácticas democráticas) en el territorio facilitan el encuentro, el reconocimiento del otro, la movilidad, el conocimiento y la apropiación de los territorios. Estas condiciones inciden a la vez en la calidad de las relaciones de las esferas anteriormente referidas.

Según los y las participantes, el espacio seguro está ligado con las relaciones y con los vínculos sociales que de estas se construyen. Sin embargo, al consultarles por los espacios inseguros y seguros para ellos, se encontraron notorias diferencias. Mientras que los primeros existen, son identificables y rechazados, los *espacios seguros* fueron más difíciles de identificar para los participantes, puesto que, en general, la *seguridad* se considera débil, efímera e intermitente y, por tanto, los espacios seguros están más en el orden de lo deseado y del deber ser.

Las características y las definiciones de lo que implica un espacio seguro se exponen esquemáticamente en el cuadro 1.4 y pueden ser de utilidad para el diseño y la evaluación del nivel de seguridad o inseguridad de lugares específicos.

Cuadro 1.4
Componentes y cualidades de la producción de un espacio seguro

Esfera	Componentes de las esferas	Cualidades de las esferas
Individual	Libertades	Cuerpo libre de amenazas
	Libertades y apropiación	Libertad respecto al uso del cuerpo
	Derechos	Salud mental
	Libertades	Es posible tomar decisiones autónomas respecto a la propia vida
	Vínculo	Conocimiento propio
Interpersonal	Vínculo	Vínculos de confianza
		Vínculos sanos
		Redes de apoyo
		Relaciones interpersonales
	Derechos	Respeto por la diferencia
	Libertades	Libre de presiones sociales

Cuadro 1.4 (Continuación)

Colectiva	Libertades	Posibilidad de organizarse
	Vínculo	Reconocimiento (y sentirse parte de)
	Apropiación y vínculo	Sentido de pertenencia
	Derechos	Garantía de derechos ciudadanos y colectivos
Estatal	Derechos	Garantía plena de derechos
	Vínculo	Espacios de discusión, participación y concertación con actores estatales
	Derechos y libertades	Ser ciudadano
	Apropiación	Vivir el barrio, la comuna y la ciudad
Condiciones materiales y culturales del territorio	Apropiación	Sentido de lo público
	Derechos	Accesibilidad
		Monopolio de la fuerza por parte del Estado y garantía de derechos
	Apropiación	Ofertas estéticas y lúdicas suficientes
	Libertades	Garantía de libre circulación

Fuente: elaboración propia.

Además de los componentes y cualidades identificadas en el cuadro 1.4, debe considerarse la variable tiempo, ya que «el espacio implica un tiempo y viceversa» (Lefebvre, 2013). En los relatos de las mujeres y los jóvenes participantes del proyecto, aflora una estrecha relación entre las percepciones de seguridad y las dinámicas asociadas al tiempo y al espacio. Por una parte, la inseguridad es vista como lo «normal», recurrente, lo habitual, por la presencia constante de actores ilegales en el territorio. Mientras tanto, la seguridad se ve como una época de excepción o momento corto, con la particularidad de que en los tiempos de seguridad siempre está latente el regreso a la inseguridad. Además, frente a un mismo espacio, según el horario, varía la percepción de (in)seguridad.

Acciones del Estado que buscan generar seguridad

Desde la Constitución Política de 1991 hasta la fecha, Medellín ha tenido en el gobierno municipal ocho alcaldes por elección popular.[34] Cada uno de estos mandatarios, con algunas variantes, ha aplicado como componente central de su política,

34 Luis Alfredo Ramos (1992-1994), Sergio Naranjo (1995-1997), Juan Gómez Martínez (1998-2000), Luis Pérez G. (2001-2003), Sergio Fajardo (2004-2007), Alonso Salazar (2008-2011), Aníbal Gaviria (2012-2015) y Federico Gutiérrez (2016-2019).

enfrentar los asuntos de violencia e inseguridad con medidas de fuerza, más que de prevención. Las políticas están dirigidas para el conjunto de la ciudad, variando la aplicación de una comuna a otra por la dinámica que sus organizaciones le demandan a la administración de turno.

A continuación, nos referiremos a tres estrategias gubernamentales que han marcado la forma de enfrentar la violencia y proveer espacios seguros, en particular para mujeres y jóvenes: i) la construcción de espacios principalmente en las comunas periféricas, ii) militarización y recursos tecnológicos para la seguridad y iii) acciones para mujeres y jóvenes**.**

Construcción y adecuación de espacios físicos

En los territorios en los que se desarrolló este proyecto, las comunidades reconocen y resaltan algunas acciones del Estado tendientes a construir espacios seguros en sus barrios. La construcción de algunos de ellos se ha dado desde las décadas de los años ochenta, noventa y principios de 2000. Se trata de colegios, espacios deportivos, casas de justicia y vías. Otros espacios son producto de la política de urbanismo social[35] que, implementada desde el año 2004, incluyó como una de sus estrategias la implementación de los Proyectos Urbanos Integrales (PUI),[36] cuyas obras más representativas son los parques biblioteca y los colegios de calidad.

Habitantes de las comunas 1 y 6 coinciden en señalar que estos espacios no son seguros por sí mismos, pues esa calidad depende de dos variables: los horarios y las personas que los habiten. Por ejemplo, los colegios se consideran seguros porque hay profesores que apoyan a los jóvenes y les generan confianza (funcionario público, Grupo focal N.° 1, 2 de octubre de 2018); sin embargo, las dinámicas de consumo y venta de drogas alrededor de los colegios –y en ocasiones en el interior de estos– generan inseguridad para los jóvenes.

Los espacios deportivos se consideran seguros mientras se realizan actividades deportivas, pero a la vez son inseguros cuando son usados por actores para la venta y consumo de drogas, pues estos intimidan a quienes buscan disfrutar el espacio, como ocurre especialmente con las mujeres en la Comuna 1. En la Comuna 6, por su parte, sin dejar de reconocer que la drogadicción es un problema, quienes realizan las actividades deportivas no consideran estos espacios como un peligro. «Es algo que

35 Para la institucionalidad el urbanismo social es: «un enfoque para intervenir el territorio, realizando simultáneamente la transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la participación comunitaria» (Quinchía-Roldán, 2013, p. 127).

36 El PUI es un instrumento de planeación e intervención física en zonas caracterizadas por altos índices de marginalidad, segregación, pobreza y violencia (Echeverri y Orsini, 2010, p. 140).

sabemos que está ahí, y que pasa porque hay una sociedad que es despreocupada y un Estado que es indiferente» (líder comunitario de la Comuna 6, entrevista N.° 3, 25 de febrero de 2018).

La construcción de algunos barrios de la Comuna 6 y de muchos de la Comuna 1, fue resultado de la autogestión de sus habitantes, sin obedecer a una planificación formal, de allí que la infraestructura en términos de vías y espacios públicos sea precaria. Esto se refleja en la falta de andenes para los peatones y en las calles estrechas, lo que sumado a la imprudencia de los conductores de vehículos hace que la movilidad sea de alto riesgo y sus vías lugares inseguros, en especial para las mujeres adultas pues «cuando estoy en la calle, tengo que dedicar toda mi energía, mi cerebro, solo al cuidado propio para que no me vaya a pasar nada» (adulta mayor, interacción de mujeres N.° 1, 12 de marzo de 2018). Las vías son lugares inseguros en todo momento, en la Comuna 1 el riesgo se incrementa los fines de semana en las zonas rosa[37] porque hay más conductores ebrios y menor respeto a las leyes de tránsito.

Las obras derivadas de la política de urbanismo social (2004-2012) o del urbanismo cívico pedagógico y unidades de vida articulada (UVA) (2012-2015) (Montoya, 2014) son asociados por las comunidades a un segundo grupo de espacios seguros o inseguros. Para algunos autores, como Quinchía-Roldán (2013) y Montoya (2014), la política de urbanismo social y la política de Seguridad Democrática[38] fueron dos formas complementarias para alcanzar el dominio estatal en la ciudad. De allí que la política de urbanismo social se consideró, ante todo, como un mecanismo para lograr mejores indicadores de seguridad en Medellín.

Los efectos del urbanismo social son materia de discusión (Abello-Colak y Pearce, 2015). Para sus defensores, esta política logró consolidar el llamado Modelo Medellín o lo que otros suelen denominar, *Milagro Medellín,* en términos de la mejoría en indicadores de seguridad e inclusión social. Para los críticos, estas transformaciones urbanísticas están dirigidas a los turistas –inscrita en vender una ciudad de servicios–, y llegan a ser superficiales, al no haber tenido en cuenta en su planeación y diseño las prioridades de las comunidades (Montoya, 2014).

La mirada de los jóvenes y mujeres con respecto al urbanismo social tiene ciertos matices. Por un lado, como se mencionó antes, se cuestiona el uso de estos espacios

37 Son lugares donde confluyen restaurantes, bares, discotecas, que se activan principalmente en la noche y asociados al consumo de alcohol.

38 La Seguridad Democrática (2002-2010) fue una política nacional con marcado componente militarista y represivo, que en Medellín fue aplicada en las comunas de mayor conflictividad social mediante operaciones militares.

por parte de actores ilegales para actividades asociadas a las drogas; por otro lado, destacan que los parques biblioteca, los parques lineales o los colegios de calidad, en la actualidad son espacios de encuentro que las comunidades se han apropiado para lograr, desde allí, fortalecer colectivos y organizaciones comunitarias. Para algunos jóvenes son espacios en los cuales pueden «ser», en tanto pueden desarrollar diferentes inclinaciones artísticas, sociales o deportivas, ya sea por iniciativa propia o porque el lugar tiene una oferta de servicios que los incluye. En este sentido, es posible afirmar que, con el urbanismo social

> […] se mejoró la cobertura en servicios de educación primaria y secundaria, se promocionaron proyectos encaminados a proteger a la población vulnerable, se fomentaron programas de recreación, cultura y deporte para los más jóvenes, así como otros específicos para la formación ciudadana, para el uso del espacio público, el respeto de los derechos humanos, etc. (Echeverri y Orsini, 2010, p. 144).

El Estado construye espacios físicos y sociales con la pretensión de que sean seguros; sin embargo, ello ha sido insuficiente, pues alrededor de los lugares cerrados –parques biblioteca y colegios– y en el interior de muchos de los lugares abiertos o con zonas abiertas –UVA, canchas, gimnasios al aire libre–, los actores ilegales ejercen un control mediante la extorsión, la venta y el consumo de drogas, que termina generando exclusión e inseguridad hacia quienes no participan de estas lógicas, además de estigmatización de los propios lugares: «Ese gimnasio que hay ahí, es una plaza.[39] Para eso hicieron eso. ¿Qué ciudadano de bien va ir a hacer gimnasia?» (mujer adulta, interacción de mujeres N.° 5, 13 de agosto de 2018).

Los lugares a los cuales se hace referencia no son espacios inseguros de manera permanente, pues en muchos de ellos las comunidades se adaptan de manera estratégica, ya sea visitándolos en horarios determinados o yendo en grupo. Por ejemplo, las mujeres relatan que van a los gimnasios al aire libre en la madrugada o en la mañana. En las tardes se abstienen de hacerlo porque saben que allí están los consumidores de droga y su presencia las intimida y las hace sentir inseguras.

A lo anterior se suman las fallas estructurales que presentan muchas de estas construcciones hechas bajo el enfoque de urbanismo social, como grietas, humedades o inestabilidad del suelo. El caso más grave se presentó en el Parque Biblioteca España, ubicado en la Comuna 1, cerrado por la amenaza que implicaba el deterioro del edificio (ver Bornacelly, 2014). Al cerrarlo, sus alrededores se volvieron peligrosos especialmente para las mujeres.

Una última situación crítica relacionada con el modelo de ciudad proyectado está asociada a la adecuación de espacios para el turismo en zonas con precariedades

39 «Plaza» se refiere a un lugar en el cual se venden estupefacientes.

socioeconómicas, lo cual ha favorecido el turismo sexual que incluye la explotación de menores, especialmente en la Comuna 1. Como resalta una participante: «las personas que vienen, vienen a estar con las niñas de las periferias. Y en Santo Domingo se están dando casos donde a las niñas vienen a recogerlas acá en la estación de Metrocable» (mujer adulta, interacción de mujeres N.° 3, 21 de mayo de 2018). Estas prácticas develan un modelo de ciudad en el que no hay una actuación decidida del Estado para garantizar los derechos humanos y controlar la inseguridad de estos espacios.

Sin desconocer la importancia del urbanismo social, resulta insuficiente si no va acompañado de prácticas incluyentes de planeación de la ciudad, en las que se tenga en cuenta «la dinámica socio-espacial [sic] y la riqueza cultural y sociopolítica existente» (Quinchía-Roldán, 2013, p. 129).

En síntesis, lo mínimo que se espera del Estado es garantizar que estos espacios sean seguros, pero, como proponen algunos participantes, lo que se requiere, más que espacios seguros, son ciudades seguras, pues no se trata de producir un archipiélago de espacios seguros, con imposibilidad de moverse de una «isla» a otra, sino del disfrute, apropiación y circulación del conjunto de la ciudad.

Militarización y uso de recursos tecnológicos para la seguridad

En Colombia, por mandato constitucional existen diferencias entre las funciones del Ejército y las de la Policía. El primero tiene la misión de velar por la soberanía nacional y enfrentar el conflicto armado interno. A la Policía, como «cuerpo armado permanente de naturaleza civil» (artículo 218, Constitución Política) le corresponde atender los asuntos de seguridad ciudadana y de convivencia. No obstante, ante la proliferación de grupos armados ilegales y el crecimiento de la violencia en Medellín, en el año 2002, bajo el período de Seguridad Democrática se adelantaron operaciones militares para retomar el control de la Comuna 13 San Javier, que estaba en manos de milicias. Estas acciones policivas y militares se llevaron a cabo con la colaboración de grupos armados ilegales, conocidos como paramilitares, que apoyaron a las fuerzas del Estado para derrotar a estos grupos de milicias. Estas acciones llevaron a una efímera disminución de la violencia, pero años más tarde se recrudeció, ya que no trataron sus causas estructurales (Angarita *et al.*, 2008). Siguiendo el mismo modelo, el gobierno local (2016-2019) optó por militarizar algunas de las comunas de mayor conflicto social,[40] lo que no ha disminuido la violencia, pero sí ha contribuido

40 Se realizaron patrullajes conjuntos entre la Policía Metropolitana y el Ejército en algunas comunas como San Javier y Castilla (aledaña a la Comuna 6). La Secretaría de Seguridad manifestó que estos patrullajes «se dan de forma diferente a lo ocurrido en décadas pasadas con el personal militar» (Noticias Telemedellín, 2018).

a la estigmatización de estas comunas, especialmente de sus jóvenes, quienes se ven limitados en el derecho a la movilidad y a la libertad de expresión.

Una constante en las últimas administraciones municipales de Medellín es el incremento sustancial de inversiones en tecnología para la seguridad: videovigilancia, número único de emergencia, apoyo logístico a la policía (Angarita, Londoño, Molina, 2007; Escobar y Ocampo, 2002) y adquisición de un costoso helicóptero. La expansión de la videovigilancia ha comprometido grandes recursos del presupuesto municipal, en contraste con sus resultados y su real eficacia. Se proyectan medidas para integrar en un solo circuito la vigilancia privada y la estatal, acciones que implican el riesgo de convertir a la ciudad en un panóptico, y de afectar el derecho a la intimidad, además de prestarse para otros posibles abusos. La vigilancia aérea realizada desde el helicóptero permite el control de la ciudad especialmente en sitios conflictivos, pero en algunos barrios los jóvenes han denunciado abusos por ser estigmatizados y tratados como delincuentes por el solo hecho de vivir en estos sectores. Estas estrategias además de inapropiadas, se realizan a costa de disminuir el presupuesto a la inversión social, como lo criticaron organismos de control.[41]

La principal estrategia operativa de la policía es el *Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes*[42] con el que se pretende mejorar la prestación de su servicio en los territorios. Sin embargo, su eficacia se ha cuestionado. El periódico más importante de la región realizó, por ejemplo, una investigación para verificar la capacidad de respuesta de los cuadrantes y encontró que «más de la mitad de las personas que llama al policía del cuadrante desde cualquier zona del Valle de Aburrá no logra comunicarse con el patrullero que está más cerca»[43] (*El Colombiano,* 2016). Una reciente estrategia complementaria promovida por

41 Miembros de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín y del Concejo municipal, explican que en el año 2018 hubo disminución del presupuesto para inversión social, lo cual: «afectará gravemente la cobertura en programas y proyectos fundamentales de salud, educación, vivienda; asimismo, evidenció la disminución de presupuesto en algunas secretarías fundamentales para el desarrollo de la ciudad» (*El Tiempo*, 2017).

42 «Es un sector geográfico fijo que, a partir de sus características delictivas, contravencionales, sociales, demográficas, geográficas y económicas […] recibe distintos tipos de atención de servicio policial para generar herramientas de corresponsabilidad que permitan mitigar estos fenómenos» (Policía Nacional, s. f.).

43 De modo que «solo en el 51 % de las llamadas se logró la comunicación inmediata con la patrulla de cada cuadrante. En el 27 % de los casos la línea se fue a buzón de mensajes, en el 12,54 % de los intentos la comunicación fue transferida al número de emergencia 123, mientras que el 9,5 % de los cuadrantes no tiene número telefónico asignado» (*El Colombiano,* 2016).

la Alcaldía de Medellín es la aplicación (App) Te Pillé. A través de ella, los ciudadanos pueden transmitir desde su celular, en vivo y en directo un acto delictivo. Según el secretario de seguridad: «La policía recibe este contenido y de inmediato despliega al sector una patrulla para verificar la situación» (Noticias Caracol, 2018). Algunos critican esta medida al considerarla de riesgo en tanto promueve la «justicia por mano propia» –que en diversos momentos el alcalde de la ciudad ha avalado– y por trasladarle al ciudadano la responsabilidad de recolectar la prueba de la infracción.

La policía es la principal responsable de implementar la política pública de seguridad, no obstante, su legitimidad ha sido históricamente cuestionada, pues esta institución ha cumplido órdenes de desalojar los asentamientos informales bajo los cuales se configuraron la mayoría de los barrios de las comunas 1 y 6. En la actualidad persiste, en estas y otras comunas, una percepción negativa debido a la connivencia en el territorio de miembros de la policía con grupos armados ilegales, lo cual no ofrece garantías de seguridad para quienes denuncian algún delito o problema de convivencia: «No es tanto el temor a denunciar, es que no se le garantiza, porque yo denuncio, pero no se me garantiza una forma de protección. Porque, las mismas instituciones —lo que es la policía—, saben primero los pelaos [miembros de grupos ilegales] que yo denuncié. Ellos son los primeros porque la misma policía: "vea, Fulana de tal…"» (mujer adulta, interacción de mujeres N.° 5, 13 de agosto de 2018).

También se señala que la policía actúa por fuera de la ley y viola los derechos humanos, al poner en situación de vulnerabilidad a los habitantes de estas comunas, incluso en riesgo, por ejemplo, a los jóvenes que capturan y luego los dejan en libertad en territorios de actores enemigos. En casos como estos, la policía se convierte en otro actor más al servicio de las dinámicas de control territorial de los grupos armados ilegales.

Frente a la capacidad de la policía de garantizar espacios seguros para la comunidad, las opiniones de las y los participantes están divididas. Se expresaron básicamente tres posturas: i) por omisión: la policía estando facultada para hacer respetar la norma, no lo hace; ii) presencia: pese a las críticas a la policía, se valora positivamente que sus recorridos en el territorio generan una sensación de seguridad, y iii) acción insuficiente: el solo hecho de que haya policía no es condición suficiente para que exista seguridad.

Estrategias para mujeres y jóvenes

Un importante logro del movimiento social de mujeres y los colectivos de jóvenes de la ciudad fue la presión para la creación de la Secretaría de Mujeres[44] y la Secretaría de Juventud –única agencia gubernamental destinada a este grupo poblacional en el país–.[45] Estas dos entidades del gobierno local generaron una transformación en la institucionalidad, que recoge un cambio progresivo que se venía implementando en administraciones anteriores, logrando contar con un equipo especializado en atender los problemas de las mujeres y los jóvenes. Su accionar ha sido fundamental para lograr transformaciones culturales en las relaciones de género, así como construcción de espacios para la seguridad de jóvenes, en ambos casos, en medio de tensiones con posturas tradicionales. A continuación, se exponen algunas estrategias implementadas por las secretarías mencionadas, y la percepción de estas por parte de los participantes en el proyecto.

En Colombia se expidió la Ley 1257 de 2008 sobre «sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres». Su implementación ha llevado, sin embargo, a múltiples polémicas, algunas de las críticas dicen «Las mujeres víctimas de cualquier violencia en Colombia no tienen garantías reales que les permitan sentirse protegidas por el Estado. Lo que tienen, tras cinco años de la Ley 1257, es un laberinto metafísico lleno de callejones sin salida». Entre las deficiencias que se atribuyen a esta Ley está la ausencia de jueces y fiscales especializados.

En Medellín, la política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales consta de las siguientes líneas de acción: autonomía económica, seguridad y vida libre de violencias, educación, salud, participación social y política y paz. Si bien el diagnóstico de esta política refleja una comprensión de la desigualdad como un problema estructural, sus acciones y presupuesto asignado resultan insuficientes para atender las soluciones de fondo derivadas de dicho diagnóstico.

En esta política sobresale el programa de Prevención y Atención a las Violencias Basadas en Género, ejecutado mediante acciones como la línea 123 mujer, los hogares de acogida, el acceso a duplas (atención conjunta entre abogada y psicóloga), así como la ruta de recepción de denuncias por parte de las entidades judiciales. Respecto a

44 Lidera la formulación, coordinación e implementación de política pública de las mujeres urbanas y rurales. Nace con el Acuerdo 01 de 2007. Sus acciones se desarrollan bajo los componentes de dicha política pública.

45 Su objetivo es articular, difundir y dinamizar la oferta pública, privada y comunitaria para el desarrollo del ser joven (Alcaldía de Medellín, 2012).

los hogares de acogida, las mujeres víctimas critican el poco tiempo disponible para estar en ellos; además, porque su protocolo de seguridad «no permite mujeres que sean víctimas de actores armados o que sean consumidoras, porque pondrían en riesgo a las familias que las están acogiendo» (funcionaria pública, grupo focal N.° 1, 2 de octubre de 2018), con lo cual estas víctimas quedan desprotegidas.

Por su parte, organismos judiciales, como la Fiscalía, fueron catalogados en las interacciones comunitarias como «actor de inseguridad». Las participantes aseguraron que, ante las denuncias por amenazas, acoso o abuso sexual contra las mujeres, en la Fiscalía ponen en duda sus denuncias y, de manera indelicada, cuestionan detalles acerca de la hora, el lugar, la compañía y hasta el vestuario de la víctima, lo que genera una revictimización que es valorada por las mujeres como una «tolerancia institucional» frente a los victimarios. Esta situación se ve agravada en las mujeres que, por sus precarias condiciones socioeconómicas, encuentran mayores obstáculos, como lo evidencia una de ellas: «¿Que denuncie en Fiscalía? Para qué si lo único que hace uno es llenar papeles y gastar pasajes» (mujer adulta, interacción de mujeres N.°1, 12 de marzo 2018). Sin querer, esta actitud termina contribuyendo a la impunidad.

En cuanto a los jóvenes en Medellín, se dispone de una política pública[46] que enfatiza en la importancia de incidir en los entornos donde transcurre su vida (familia, institución educativa, comunidad y ciudad) para «la garantía de sus derechos y brindar una atención pertinente e integral, favoreciendo su desarrollo físico, mental, emocional, social y cultural» (Alcaldía de Medellín, 2014). A esta política se le reconoce la apropiada comprensión de la problemática juvenil y sus escenarios, así como la necesaria integralidad de sus intervenciones. No obstante, la aplicación de la política no es consecuente con este enfoque, pues a la hora de garantizar espacios para la seguridad de los jóvenes, las acciones implementadas solo tienen en cuenta algunos de los múltiples entornos en los que actúan. Aun así, se reconoce como un avance el trabajo de gestores territoriales de la Secretaría de Juventud, que en casos como el de la Comuna 6 se muestran comprometidos con las dinámicas juveniles y con apertura para atender sus necesidades.

El sistema penal juvenil es valorado, incluso por funcionarios públicos entrevistados, como «agresivo y homogeneizante con los jóvenes». El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) pone en el mismo nivel a consumidores, abusadores de consumo y a criminales, con lo cual se afirma que para los jóvenes:

46 La Política Pública de Juventud se actualiza bajo el Acuerdo N.° 019 de 2014. Tiene como líneas de acción: la Convivencia y los Derechos Humanos, la Salud Pública Juvenil, la Educación, Cultura, Deporte y Recreación, el Trabajo y el Emprendimiento Juvenil, y la Ecología y la Sostenibilidad.

> No tenemos acciones afirmativas de seguridad. El estigma social, no solo el institucional […] Como les digo la política pública y la política criminal están yendo es contra del muchacho y las percepciones que la sociedad tiene de él. Y así es muy complicado, no vamos a construir entornos de prevención (funcionario público, grupo focal N.° 1, 2 de octubre de 2018).

Según una funcionaria de Secretaría de Juventud, en contraste con estas políticas nacionales se considera que en la ciudad existen cuatro tipos de jóvenes: i) los que se relacionan de manera horizontal con la institucionalidad y participan por ejemplo en la gestión de recursos; ii) los que sienten que esta ciudad no es para ellos, son apáticos a la oferta institucional; iii) los que se consideran una sombra, pues hacen parte de grupos ilegales, por ello expresan «eso es para los buenos, nosotros ya estamos curtidos» y, iv) los que están en instituciones educativas y tiene un empoderamiento distinto.

Si bien existen ofertas para esta variedad de grupos, en la ejecución de las políticas locales pesa más la visión homogeneizante de las mismas. De ahí que muchas políticas públicas partan tomando al joven como «problema» y «amenaza» y, estén más motivadas por el afán de contenerlo, de tenerlo «ocupado». En este sentido, a los jóvenes de sectores populares se les estigmatiza desconociendo su condición de sujetos responsables (con derechos y obligaciones) que demandan condiciones que les faciliten desarrollar su personalidad y el ejercicio de sus libertades.

En síntesis, siendo las mujeres y los jóvenes las poblacionales más afectadas por la violencia y la inseguridad, las políticas públicas que pretenden trasformar esa realidad son notoriamente deficientes, en algunos casos desde su concepción y especialmente inconsecuentes en su implementación.

Iniciativas comunitarias de mujeres y de jóvenes frente a la violencia y la inseguridad

A pesar de las diversas oleadas de violencia, comparado con el resto del país, Medellín ha consolidado un capital social que incluye procesos sociales y comunitarios. Sus habitantes han implementado estrategias individuales y colectivas para resistir los impactos de la violencia.

Tradicionalmente, la sociedad civil y las comunidades han estado excluidas de la provisión de seguridad en los territorios (OSHM, 2012; Peña Reyes, 2018; Eslava *et*

al., 2015). Solo en años recientes surgió un interés de académicos, organizaciones comunitarias y procesos colectivos por comprender e incidir sobre los asuntos de seguridad. Como ejemplo del tesón de mujeres y jóvenes que asumen un papel activo en la construcción de espacios seguros, en este apartado se exponen iniciativas comunitarias identificadas en las comunas 1 y 6, en el desarrollo de este proyecto. Estas experiencias están en la búsqueda de apropiación, reapropiación o construcción de espacios seguros.

Las comunas 1 y 6 son reconocidas en la ciudad por sus procesos organizativos. Al inicio sus pobladores construyeron sus barrios de manera informal, con apoyo vecinal, lo que en la actualidad se valora como un significativo proceso de planeación. Con el trascurso de los años surgieron otras metas en sus procesos organizativos: «las periferias urbanas de las grandes ciudades han ido formando un mundo propio, transitando un largo camino: de la apropiación de la tierra y el espacio a la creación de territorios» (Zibechi, 2008, p. 126). La reivindicación por la apropiación y uso de los mismos se desenvuelve en medio de disputas con actores legales e ilegales presentes en sus territorios.

En este proyecto se entiende por *iniciativas comunitarias* las propuestas y las acciones de colectivos sociales, desarrolladas en un territorio específico, frente a situaciones que los afectan (para este caso, violencia e inseguridad). De las iniciativas se esperan transformaciones materiales o simbólicas que impacten las formas de vida de las comunidades y sus territorios en el corto, mediano o largo plazo. Con base en este concepto, se ha organizado una tipología de iniciativas comunitarias (cuadro 1.5) y algunas iniciativas del plano individual,[47] a partir de la información recolectada durante la investigación.

Como se observa en el cuadro 1.5, con respecto al control territorial de actores armados ilegales, las mujeres y los jóvenes se han visto obligados a configurar acciones que les permitan salvaguardar sus vidas y garantizar su seguridad personal. Además de las acciones meramente defensivas, se realizan otras iniciativas para enfrentar el miedo y el silencio que imponen los grupos armados. Estas iniciativas son estrategias de construcción de espacios seguros que incluyen la seguridad en salud, comunitaria y política.

47 Se presentan algunas iniciativas individuales que emergieron en el proceso de indagar por las iniciativas colectivas.

Cuadro 1.5
Tipología de iniciativas comunitarias frente espacios (in)seguros comunas 1 y 6

Tipos/definición	Iniciativas: Formas de expresión[48]	Aportes a la construcción de espacios seguros
Refugio Es la acción de buscar protección en el interior de lugares que no sean dominados por los actores en conflicto.	- No salir de casa - Entrar a casa durante enfrentamientos armados - Desviarse por rutas no acostumbradas - Estar en las sedes de las organizaciones sociales - Momento de escucha (M)	Cuando en el espacio público ocurren confrontaciones armadas, la preservación de la vida convierte la casa en el espacio seguro por excelencia. Aunque es claro que la casa, por situaciones de violencia intrafamiliar, no es un espacio tan seguro
Adaptación y sobrevivencia Es la acción de aceptar y saber leer los códigos impuestos por el actor armado; además, no expresar públicamente su rechazo o inconformidad, lo cual no significa sometimiento, más bien se asemeja a «rechazo pasivo» (Uribe de H., 2006, p. 65). El objetivo principal de la adaptación es no ser visible ante los actores armados (González, 2006).	- Evitar relacionarse con otros y alejarse de conflictos (incluso vecinales) - No tomar fotos en determinados sectores - No hablar de ciertos temas en algunos lugares - Hacer lecturas del territorio con información suficiente sobre los lugares habitados y visitados - En las rutas de las movilizaciones, evitar la presencia de actores armados - Identificar aliados en el territorio, según la situación ocurrida - No mostrar miedo ante el actor armado ('no gaguear')[49] (J) - Evitar algunos sectores. - Evitar lugares oscuros y/o solitarios (M) - Ir en grupo o acompañado como protocolo de protección - Educar progresivamente frente a la violencia de género (M)	Al reconocer que en el barrio se debe convivir con la violencia ejercida por grupos armados y, ante la impotencia para transformar esta realidad, se acepta cierta apropiación 'compartida' del territorio, para lo cual se generan estrategias de adaptación que respondan a la comprensión y al reconocimiento de los códigos y las reglas de los actores ilegales, con lo que se evitan mayores riesgos.

Cuadro 1.5
(Continuación)

Resistencia Es la acción de oposición y manifestación de rechazo frente a las formas de violencias que se instauran en una sociedad. «Articula prácticas prioritariamente no violentas dirigidas a socavar el poder del que domina» (García, 2014, p. 11). Puede ser expresado mediante la lúdica, el arte y la estética.	- Plantones y movilizaciones con antorchas contra fronteras invisibles[50] - Carnavales y comparsas (J) - Actividades lúdicas en espacios de consumo de drogas (J) - Lunadas - Jornadas de toma barrial (Toma al picacho) (J) - Escuelas de música (J). - Escuelas deportivas (J) - Torneos de futbol para la convivencia (J) - Retoma de los espacios mediante campamentos (J) - Rumbas aeróbicas en sitios críticos (M) - «Toques de salida» como oposición a los «toques de queda» impuestos por actores armados (J) -Auto-reconocerse protagonistas de su territorio (M)	Estas acciones pretenden: retomar, reapropiar y resignificar el espacio público (canchas, calles, colegios, etc.) por ser lugares vedados por los consumidores de drogas o por fronteras invisibles. Además, visibilizar y denunciar las violencias contra las mujeres y jóvenes en esos territorios. «Es una forma de decirle a los actores [armados], la comuna no es suya, es nuestra» (Líder comunitario de la Comuna 6, entrevista N.° 2, 15 de febrero de 2018) Muchas de estas acciones no logran una apropiación permanente del territorio, pero sí constituyen un punto de ruptura ante el control de los actores armados
Convencionales Es la acción que se basa en rutinas que la gente conoce, son aceptadas y legitimadas (Tarrow, 2004) y se vuelven una práctica reiterada en los colectivos. Puede además hacer uso de las herramientas institucionales y legales.	- Sensibilización y dotación de herramientas frente a las rutas de atención legal. (M) - Acompañamiento a mujeres en la exigibilidad de sus derechos (interponer denuncias, derechos de petición y tutelas) (M) - Llamar a la policía, en lugar de acudir a los actores ilegales (M) - Sensibilización a favor del plebiscito por la paz (M) - Gestión de recursos en la Planeación Local y Presupuesto Participativo para construcción de espacios (gimnasios al aire libre). - Jornadas de salud y autocuidado (M)	Con esta acción se pretende acceder a las rutas de atención de las instituciones estatales en el territorio Contribuye a la construcción de espacios seguros, al formar al ciudadano en exigir al Estado la seguridad. Además, se usan recursos públicos en capacitaciones para la convivencia y para construir espacios dentro del territorio

Cuadro 1.5
(Continuación)

Mediación de conflictos Es «cuando un tercero, preferiblemente *imparcial y neutral,* posibilita la resolución de un pleito, entre dos o más personas. Los querellados por su propia voluntad deciden probarlo y aceptan al tercero en el papel de mediador» (Lederach, 1985)	- Tramitar conflictos complejos como los que ocurren alrededor de la conflictividad armada. - Contrarrestar el reclutamiento de jóvenes - Acompañar para dirimir conflictos de forma pacífica entre jóvenes inmersos en la violencia - Implementar estrategias para poner límites al accionar de los grupos armados. Espacios de diálogo directo; involucrarlos en actividades de la organización, por ejemplo pintar un mural para que ellos mismos empiecen a limitar sus actividades en estos espacios y permitir el uso del mismo por toda la comunidad	Con esta acción se busca proteger la vida e integridad de los participantes mediante acuerdos. Y, al mismo tiempo, facilitar a la comunidad la reapropiación del territorio

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las interacciones comunitarias y de soportes teóricos.[51]

48 Las iniciativas de esta columna corresponden a ideas expresadas por mujeres y jóvenes participantes de las comunas 1 y 6. Están editadas por razones de claridad y brevedad.

49 Titubear al hablar.

50 «Concepto que se ha utilizado para delimitar el espacio que puede transitarse o no, de acuerdo con las reglas de grupos armados ilegales que operan dentro de la ciudad. Este fenómeno afecta a la población en general, restringiendo por un lado la movilidad y la ocupación de espacio público, y por el otro, naturalizando el miedo y la desesperanza entre los habitantes» (Arteaga *et al.*, 2013, p. 3).

51 Autores que han estudiado la agencia y los tipos de acción colectiva, enmarcadas en contextos de violencia prolongada (García *et al.*, 2014; González, 2006; Uribe de H., 2006; Tarrow, 2004). Además, un apoyo fundamental para la construcción de esta clasificación es el informe sobre Medellín de la CNMH (2017).

Hay iniciativas individuales y otras colectivas. Las primeras buscan principalmente la adaptación y el refugio. En las segundas es fundamental el papel de las organizaciones sociales, que se convierten en «espacios de mediación entre lo privado de las casas –que por violencias y abusos pueden ser inseguras– y lo público» (investigadora, grupo focal N.° 2, 9 de octubre de 2018). En los barrios de las comunas 1 y 6, el proceso de construcción de organizaciones incluye acciones de la comunidad para enfrentar la violencia y la inseguridad. De ahí que los pobladores consideran a las organizaciones como espacios seguros por excelencia, donde el joven puede «ser» y la mujer puede «sentirse escuchada». Por ello, la acción inicial, en un proceso a largo plazo, es organizarse para enfrentar las causas generadoras de la violencia, y luego se adelantan multiplicidad de acciones para que los ciudadanos habiten y construyan sus comunas.

Hay un conjunto de colectivos sociales que por su proximidad con la ciudadanía han entrado en la vida de las mujeres y jóvenes, actuando a favor de la seguridad, sin que este sea su propósito deliberado, entre estas se destacan en la Comuna 6: Grupo de música de memoria, Casa Mía,[52] Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro,[53] Club Deportivo Senderos de Paz, Corporación de Barrios Unidos, Núcleo de pensamiento,[54] Mundo Nuevo,[55] Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, Corporación Simón Bolívar, Casa de Cultura de Santander, y otras organizaciones juveniles.[56] En la Comuna 1 están: Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental,[57]

---

52 Creada en 1989, dedicada a los temas de convivencia, reconciliación y mediación con jóvenes víctimas y victimarios del conflicto.

53 Surgió en 1994, conformada por ocho organizaciones comunitarias de la Comuna 6 de Medellín. Su objetivo era contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la parte alta, a través de la gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos de los ejes de intervención del plan de desarrollo local. También buscaba salidas no violentas y marcadamente democráticas, surgidas del interior de las comunidades, para la resolución de conflictos (Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro, 2016).

54 Integrado por Corporación Cívica Mundo Nuevo, Mesa de DDHH Comuna 6, Veeduría Ciudadana Comuna 6, Redepaz Antioquia, Mesa por la Vida de Medellín, Centro de Desarrollo Social Doce de Octubre, individuos y líderes de la Comuna 6.

55 Si bien su trabajo no se centra en los jóvenes, tiene un enfoque intergeneracional desde el que deliberadamente le apuesta al trabajo mediante la danza, las actividades en su biblioteca, etc.

56 Para 2006 se registraban 102 organizaciones juveniles con diversos énfasis: artístico (34), emprendimiento (2), deportivo (18), ecológico (5), religioso (10), comunitario (6), educativo (3) o varios énfasis (24) (Alcaldía de Medellín, 2006).

57 Está integrada por: Ruta M, Aso Comunal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Las Mías, Colectivo de Mujeres de Belén, Colectivo de Mujeres de la Comuna 1, Asociación Comunitaria para la Solidaridad, Junta de Acción Comunal Caicedo, Fundación para la Educación y la Pequeña Industria, Club de vida San Pablo, Secretaría de la Mujer. Esta actuación colectiva les permite la multiplicación de sus saberes, además un trabajo en red para la movilización. Además, en la Comuna 1 existen otras siete organizaciones sociales enfocadas en el trabajo con mujeres.

Nariz Obrera, Corporación Convivamos[58] y la Casa Cultural Mario Montoya. Estas organizaciones «se convierten en lugares de protección y sanación, porque al estar allí les permite vivir de otra manera, desde el arte, la literatura, el deporte e infinidad de formas de organizarse» (investigadora, grupo focal N.° 2, 9 de octubre de 2018).

En la mayoría de las iniciativas comunitarias se evidencia que los jóvenes y las mujeres optan por romper «la inercia social y se mueven, es decir, cambian de lugar, rechazan el lugar al que históricamente estaban asignados dentro de una determinada organización, y buscan ampliar los espacios de expresión» (Porto, 2001, citado en Zibechi, 2008, p. 201). En este sentido, la mujer rechaza la idea de ser la madre de «los hijos de la guerra», de ser la vulnerada y violentada e, igualmente, el joven rechaza que esté predeterminado para hacer parte de la violencia armada; por ello, optan por alternativas distintas de habitar el territorio, lo que permite un primer paso hacia la construcción de espacios seguros.

Las iniciativas comunitarias de jóvenes y mujeres se desarrollan en diversos lugares: el hogar, el barrio, la plaza pública o las entidades estatales, según los objetivos o necesidades que tenga el actor. Con respecto a la conflictividad desatada en un barrio o una comuna, mujeres y jóvenes pueden buscar refugio, este usualmente lo encuentran en el hogar y en encuentros propiciados por las organizaciones sociales. Por ejemplo, la CMZN en sus reuniones mensuales realiza, entre otras actividades, una actividad conocida como el *momento de la escucha,* espacio para dialogar y escucharse en el que se comunican afecciones, dolores y emociones e igualmente se comparten sus fortalezas y recomendaciones. Estos encuentros tienen diversas funciones: i) hacer un ejercicio de sanación del dolor; ii) hacer lecturas del territorio desde sus experiencias; iii) fortalecer el vínculo entre ellas y, iv) configurar espacios seguros.

También pueden desplegar acciones de resistencia al conflicto mediante plantones y marchas que buscan visibilizar hechos y situaciones de violencia en los barrios. Estas acciones usualmente se desarrollan dentro de espacios públicos de la comuna y del centro de la ciudad. Asimismo, pueden realizar acciones convencionales, por ejemplo, interponer denuncias o acceder a rutas de atención ante espacios estatales: casas de justicia, comisarías de familia, fiscalía, despachos de secretarías en la administración municipal. Las mujeres y jóvenes despliegan todas estas acciones de forma estratégica, según el espacio y los actores sobre los que quieren incidir y también, según una lectura de contexto que evite poner en riesgo la vida de los participantes.

58 Surge en el año 1990, con trabajo en la Zona Nororiental de Medellín, encabezando procesos para la promoción de espacios de convivencia e integración en la comunidad, así como la organización comunitaria para el empoderamiento de los habitantes.

En cuanto a la reapropiación de los espacios, la mujer tiene doble reto: uno, en relación con los grupos armados ilegales, pues las mujeres organizadas evitan acudir a los actores armados para dirimir los conflictos, para no legitimarlos; además constituye una forma de autonomía en la provisión de su seguridad: las mujeres que pertenecen a un proceso organizativo, saben que si acuden a «los muchachos» para tramitar sus problemas, luego, ellas y su trabajo comunitario quedan a merced de los ilegales (investigadora comunitaria, acta de reunión de trabajo, 6 de abril de 2019). El otro reto busca transformar la inequidad en el uso del territorio, dado que en este se reproducen imaginarios y prácticas culturales patriarcales (cómo actuar, a qué hora ir, a dónde ir).

Las mujeres víctimas, que no cuentan con apoyo familiar y desconfían de las entidades estatales, quedan a la deriva en el reclamo de sus derechos, ante lo cual las organizaciones de mujeres se convierten en un valioso medio de escucha y de apoyo a las rutas que decidan tomar. Además, las organizaciones contribuyen a la transformación de los roles asignados culturalmente, a identificar los tipos de violencia y a cuestionar la naturalización de la misma.

Para las mujeres y jóvenes, un factor de seguridad son los vínculos que construyen en el marco de los procesos organizativos a los que pertenecen, que incluye la relación con sus compañeros de grupo y con los espacios físicos de la organización. El hacer «parte de» fortalece valores como la libertad, la confianza y la solidaridad. Este enriquecimiento que se da en la esfera interpersonal, permite la motivación y empuje para emprender acciones en otras esferas sociales (ver gráfico 4).

Las iniciativas comunitarias son un blindaje contra el trato homogeneizante que los actores armados quieren imponer a los habitantes de la comunidad para estandarizar sus comportamientos al limitar el libre desarrollo de su personalidad. En este sentido, muchas organizaciones sociales proponen nuevas formas de habitar y de movilizarse, de forma que a la par que se intenta generar apropiación de los territorios, se dé la oportunidad a los jóvenes y a las mujeres de desarrollarse desde sus particularidades, sus múltiples identidades y formas de expresión artística y cultural, en el caso de los jóvenes, y simbólicas principalmente en las mujeres.

Así, las iniciativas comunitarias aportan a la construcción de espacios seguros, más allá de la inmediata disminución de los delitos en los territorios, dado que algunos de sus resultados se hacen visibles en el mediano y largo plazo, pues se trata de transformaciones profundas materializadas en construcción de sujetos políticos y democráticos.

Es importante mencionar que esta investigación tenía como objetivo fortalecer la capacidad de las comunidades para influir en políticas de seguridad y con este propósito se hacía una devolución sistemática de los hallazgos a los participantes a lo largo de todo el proyecto, así como un ejercicio de coformación. Igualmente, se establecieron puentes entre las organizaciones participantes y el gobierno local. Ejemplo de ello fue la realización del conversatorio *Mujeres construyendo espacios para la seguridad humana y la paz en sus comunidades,* donde se analizaron las problemáticas identificadas en el proyecto con algunas autoridades locales, quienes se comprometieron a prestar mayor atención en la recepción de llamadas en la línea 123. También ofrecieron capacitación y acompañamiento a las mujeres y se acordó realizar encuentros para tomar acciones en relación con la inseguridad de algunos lugares (oscuridad, vías en mal estado, entre otros). También, en la última fase, se realizaron encuentros con las organizaciones aliadas, generando un proceso de apropiación de los resultados. De estas surgió la iniciativa de llevar estos resultados a emisoras comunitarias y al programa Debates Comuna 6, trasmitido por redes sociales.

En síntesis, con acciones como estas se logra un proceso de empoderamiento de las organizaciones participantes que, entre otros elementos, fortalece su interacción con las autoridades locales, para lo cual los hallazgos de esta investigación constituyen un valioso insumo y, por parte del gobierno local, un reconocimiento del quehacer de estas organizaciones.

Conclusiones

Una idea difundida es que en Medellín conviven dos ciudades paralelas (la legal y la ilegal). Contrario a esto, la investigación constató otra interpretación develada en algunos estudios precedentes (Dávila, 2018; Abello-Colak y Van Der Borgh, 2018; OSHM, 2018; y OSHM, 2012), según la cual, existe un amalgamamiento de actores legales e ilegales; en cuanto a agresiones y amenazas, buena parte de la población, según la conveniencia, apela a la policía, en otros casos, a grupos ilegales.

Entre los aportes más significativos de este ejercicio investigativo están: i) una coproducción de conocimiento sobre el objeto de estudio: la comprensión de los espacios inseguros y el aporte a la construcción o fortalecimiento de espacios seguros; ii) exponer de manera organizada la relación de esta problemática (lugares inseguros y respuestas tanto de las comunidades como del Estado); iii) en lo conceptual se da una resignificación y apropiación tanto de las categorías preestablecidas como de las emergentes (las múltiples relaciones que confluyen en los espacios seguros y el

vínculo); iv) se destaca el fortalecimiento de las organizaciones participantes y del equipo responsable, y v) parte del fortalecimiento es contribuir al salto cualitativo de pasar de víctimas de la violencia y la inseguridad a avanzar en la reflexión sobre la construcción de espacios seguros y mediante este proceso lograr niveles de empoderamiento y construirse como sujetos políticos.

De la anterior enumeración, merece especial atención el *vínculo,* acerca del cual existe abundante literatura en las ciencias sociales y humanas, pero lo novedoso con respecto al tema en esta investigación consistió en ubicarlo como un factor determinante para definir un espacio seguro, teniendo en cuenta la alta carga de subjetividad que la construcción de la seguridad conlleva. En los contextos específicos en los que se desarrolló la investigación, se encontró que el *vínculo* se manifiesta en diversas formas de relacionamiento y que, adicionalmente, produce diversos rendimientos, entre los que se destacan: ser antídoto contra el miedo, facilitar el diseño de estrategias de sobrevivencia y resistencia frente a los actores violentos y los factores de inseguridad, y ser el mecanismo fundamental mediante el cual se construyen y fortalecen los colectivos sociales y se da la realización individual y colectiva. Esto sin desconocer que también pueden construirse vínculos que subjetivamente generen seguridad, pero en términos objetivos generen inseguridad, como por ejemplo cuando se establecen con los actores armados.

La característica relacional de los espacios permite evidenciar que más allá de esa mirada dicotómica seguro/inseguro, se devela un segmento o una franja intermedia, en la cual las personas, en medio de sus organizaciones sociales, ubicadas en espacios considerados inseguros, despliegan acciones (de confianza, cuidado, sanación, diálogo) que tienden hacia ese ideal de espacio seguro, sin lograrlo plenamente, pero que, al constituirse como acciones protectoras o de resistencia, logran subjetivamente un espacio seguro.

En síntesis, la definición de un espacio seguro depende de la percepción en torno al relacionamiento en la esfera individual, interpersonal, colectiva y estatal. Y con esto es el vínculo la categoría que genera la vivencia de espacios seguros. Además, están las condiciones materiales y físicas de los espacios, que atraviesan las condiciones relacionales y que se influyen mutuamente.

Junto con las dificultades propias del objeto de investigación (inseguridad y violencia), se encontraron algunas particularidades en el trabajo con población juvenil. El proyecto de investigación en Medellín propuso trabajar con jóvenes que no pertenecían a grupos ilegales y tampoco a organizaciones sociales. Esto permitió abrir espacios de diálogo y reflexión con jóvenes cuyas voces son a menudo invisibilizadas

y que tiene diversas opiniones frente al tema de investigación. El proyecto logró el fortalecimiento de las capacidades de los individuos participantes (en el reconocimiento de factores generadores de seguridad, de análisis crítico de su realidad y sus potencialidades como parte en la construcción de espacios seguros), aunque su capacidad de irradiar y multiplicar lo adquirido en el proceso es limitada y, por tanto, su impacto social es igualmente reducido. Para futuros proyectos reconocemos la importancia de trabajar con jóvenes consumidores o miembros de grupos armados. Esto para lograr mejor comprensión de algunos factores que causan su involucramiento en estas estructuras. En esta investigación hemos identificado parte de esos factores: hacinamiento en sus hogares acompañado de una falta de reconocimiento y exclusión de sus ideas, desescolarización y dificultades socioeconómicas.

Durante la implementación del proyecto se presentó un dilema entre intensificar el trabajo con las comunidades o incluir a un mayor número de funcionarios públicos, ante lo cual se optó por lo primero. Si bien se logró involucrar a un grupo de agentes estatales significativos respecto a las problemáticas tratadas, se requieren formas más creativas para producir mayor incidencia en las esferas estatales. Esto sin desconocer que con el desarrollo del proyecto se logró un fortalecimiento de la relación de las organizaciones comunitarias y las entidades estatales participantes, y que por esta vía se abrieron caminos para que en el mediano o largo plazo se amplíen procesos de incidencia.

Un dilema ético aún por resolver es cómo evitar que, al identificar espacios inseguros, no se contribuya a estigmatizar esos lugares de los que se desea su mejoramiento. Algunos lugares eran desconocidos para ciertos pobladores y con el desarrollo de la investigación pasaron a ser resignificados por ellos y entraron a la lista de sitios inseguros. Lejos de ser nuestra intención la estigmatización, aún queda la duda de hasta dónde terminamos aportando en ella.

En el desarrollo mismo de la investigación emergieron algunos problemas relevantes para futuras investigaciones. Algunos de ellos son la corrupción, el rol de la fuerza pública y la contribución de actores a la construcción de espacios seguros.

En primer lugar, la corrupción se evidencia en agentes del Estado que, incumpliendo su deber, son coparticipes de agrupaciones ilegales y, por tanto, constituyen un factor más de inseguridad. Una situación similar ocurre en la sociedad civil, lo cual revela graves problemas éticos en la base de la sociedad que son el caldo de cultivo de ofertas tentadoras (narcotráfico, extorsión y otros delitos). Este fenómeno requiere mejor comprensión que aporte a su adecuado tratamiento.

Una segunda problemática identificada tiene que ver con el rol de la fuerza pública, responsable operativa de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. ¿Cómo evitar el exceso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado? y, más allá de esto, ¿cómo lograr romper definitivamente las diversas modalidades de participación en la violencia y la inseguridad en la que se ven involucrados? Estas preguntas son claves en virtud de lo recurrentes que son estos fenómenos no solo en Medellín, sino en otros países de la región.

Finalmente, desde esta investigación hubo un acercamiento a la contribución que pueden tener en la construcción de espacios (in)seguros diversos agentes de la sociedad civil (Iglesias, academia, ONG, y empresa privada) y su interrelación. Dado que algunos de estos actores llenan a veces el vacío dejado por el Estado y que no en todos los casos es claro su rol con respecto a la violencia y la inseguridad, consideramos necesario indagar más sobre esta problemática, reconociendo la incidencia de estos actores en las iniciativas comunitarias.

Referencias

Abello-Colak, Alexandra y Pearce, Jenny. 2019. «Co-construyendo seguridad "desde abajo": una metodología para repensar y transformar la seguridad en contextos de violencia crónica» En: Kloppe-Santamaría, Gema y Abello-Colak, Alexandra (eds.). 2019. *Seguridad humana y violencia crónica en México: nuevas lecturas y propuestas desde abajo.* México: Instituto Tecnológico Autónomo de México: Miguel Ángel Porrúa. En: <http://www.lse.ac.uk/lacc/publications/PDFs/Seguridad-humana-y-violencia-cronica-en-Mexico.pdf>.

Abello-Colak, Alexandra y Pearce, Jenny. 2015. «Securing the global city?: Analysis of the ´Medellín in Model´ through participatory research» [«¿Asegurar la ciudad global?: Un análisis del 'Modelo Medellín' a través de la investigación participativa»]. *Conflict, Security & Development.* Vol. 15, N.° 3, 197-228. En: <http://dx.doi.org/10.1080/14678802.2015.1055136>.

Abello-Colak, Alexandra y Van der Borgh, Chris. 2018. *Research Briefing Everyday (In) Security in Contexts of Hybrid Governance: Lessons from Medellin and San Salvador*. [(In) Seguridad en contextos de gobernanza híbrida: Lecciones de Medellín y San Salvador]. London: London School of Economics and Political Science. En: <http://www.lse.ac.uk/lacc/publications/PDFs/ResearchBriefing-FINAL.pdf>.

ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados 26 de diciembre de 2018 «Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en Costa Rica». En: <https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html>.

Alcaldía de Medellín. 2016a. *Plan de Desarrollo 2016-2019 Comuna 6, Doce de octubre (PDLC6). Medellín cuenta con vos.* En: <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2016/Comuna%206%20-%20Doce%20de%20Octubre.pdf>

Alcaldía de Medellín. 2016b. *Plan de Desarrollo 2016-2019*. *Medellín cuenta con vos.* En: <https://www.medellincomovamos.org/dowload/presetacion-plan-de-desarrollo-medellin-2016-2019-medellin-cuenta-con-vos-2016/>

Alcaldía de Medellín. 2015a. *Plan de desarrollo local/Comuna 1*. En: <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA1_POPULAR.pdf>.

Alcaldía de Medellín. 2015b. *Perfil demográfico por barrio. Comuna 6 Doce de Octubre 2016-2020*. Medellín: Alcaldía. En: < https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%20Barrios%202016%20%E2%80%93%202020%20Comuna_06_Doce%20de%20Octubre.pdf>

Alcaldía de Medellín. 2014. «Acuerdo N.° 019 de 2014 por el cual se actualiza y adopta la Política Pública de Juventud de Medellín». Alcaldía de Medellín. 2012. Conoce *más de la Secretaría de la Juventud.* En: < https://www.medellinjoven.com/conoce-mas-de-la-secretaria-de-la-juventud>

Alcaldía de Medellín. 2006. *Plan estratégico Comuna 6, 2006-2015.* Medellín: Alcaldía. En: < https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2014/PDL/Plan%20Dllo%20C%206%20Doce%20de%20Octubre.pdf>

Angarita, P., Gallo, H. y Jiménez, B (eds.) 2008. *Dinámicas de guerra y construcción de paz. Estudio interdisciplinario del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín*. Medellín: L. Vieco e Hijas Ltda.

Angarita, P.; Londoño, H. y Molina, R. 2007. *Libertad y orden: Orden público, seguridad y libertades democráticas en una sociedad en conflicto: el caso de Medellín 1993-2002*. Informe de investigación inédito. Medellín: Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.

Angarita, Pablo E. 2019. «Medellín entre memoria y olvido: cuarenta años de violencia (1975-2015)», en *Memorias: conceptos, imágenes y experiencias compartidas*. Medellín: Hacemos Memoria, Universidad de Antioquia.

Arteaga, Jehnny *et al*. 2013. *Fronteras invisibles como espacios formativos para la construcción de interacciones sociales*. Medellín: Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos. GIDEP.

Barrault, O. A. 2007. «Los espacios de encuentro en la psicología comunitaria y sus implicaciones en la subjetividad» en *Revista de Ciencias Humanas* Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 37, 155-168. En: <http://revistas.utp.edu.co/index.php/chumanas/article/view/1131/617>.

Barreto, Adalberto de Paula. 2013. *Terapia Comunitaria Integrativa paso a paso*. Fortaleza, Brasil: Editora. En: http://www.mpfsde.gob.ar/wp-content/uploads/2018/09/Libro-TCI-parte1-ILOVEPDF.COM_.pdf

Bedoya, Jairo. 2017. «La coerción social extorsiva y el milagro de Medellín: la contra cara de un modelo» en *Revista Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes. Toronto, CA: University of Toronto Libraries. 42(3), 400-416*.* En: <doi/full/10.1080/08263663.2017.1378407>.

Bedoya, Jairo. 2010. *La protección violenta en Colombia. El caso de Medellín desde los años noventa.* Medellín: Instituto Popular de Capacitación*.*

Bernal Romero, Teresita y Melendro Estefanía, Miguel. 2014. «Vínculos de adolescentes en medida de restablecimiento de derechos» en *Diversitas: Perspectivas en Psicología* Bogotá: Universidad Santo Tomás. 10(2). En: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67940023001>.

Bornacelly, Jaime. 2014. *Biblioteca España sí… pero no así.* (Documental). En: <https://narracciones.org/contenidos/biblioteca-espana-no-asi/>.

CNMH -Centro Nacional de Memoria Histórica-. 2017. «Memorias de resistencia y sobrevivencia» en *Medellín: Memorias de una guerra urbana*. Bogotá: CNMH, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia.

Congreso de la República. 1991. *Constitución Política de Colombia 1991.* Bogotá: Congreso de la República.

Corporación Mujeres que Crean, *et al*. 2018. *XVI informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en territorios de Medellín y Antioquia, con énfasis en violencias sexuales en contra niñas y adolescentes.* Medellín: Corporación Vamos mujer, Corporación para la vida mujeres que crean, Corporación educativa Combos. En: < http://www.mujeresquecrean.org/images/pdf/XVI%20Informe%20DHM%202017.pdf>

Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro. 2016. *Quiénes somos.* En: <http://cpfcorporacion.webnode.es/quienes-somos/>.

Dávila, Luis Felipe. 2018. *Reglas, crimen y orden. Un estudio sobre la seguridad en Medellín.* Medellín: La Carreta Editores.

DANE -Departamento Administrativo Nacional de Estadística-. 2017. «Colombia. Proyecciones de población municipales por área». En: <https://www.dane.gov.co/files/.../poblacion/...20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls>.

EAFIT; Secretaría de Mujeres del municipio de Medellín. 2018. «Acuerdo 102 de 2018 por el cual se crea la Política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín». En: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/A_CONMED_0102_2018.htm>.

Echeverri, A. y Orsini, F. N. 2010. «Informalidad y urbanismo social en Medellín», en Hermelin Arbaux, M., Echeverri Restrepo, A. & Giraldo Ramírez, J. (comps.). *Medellín: Medio ambiente, urbanismo y sociedad.* Medellín: Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Universidad EAFIT.

El Colombiano. 2016. «49 % de los cuadrantes en el Valle de Aburrá no funciona». En: <https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/cuadrantes-de-la-policia-casi-la-mitad-no-funciona-en-el-valle-de-aburra-FE4677766>

El Mundo.com. 28 de mayo 2018. «Desarticulada banda que delinquía en la Comuna 6 de Medellín». Medellín. En: <https://www.elmundo.com/noticia/Desarticulada-banda-que-delinquia-en-la-comuna-6-de-Medellin/371602>

El Tiempo. 29 de noviembre. 2017. «En esto invertirá Medellín los $5,43 billones de presupuesto en 2018». Bogotá. En: <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-esto-invertira-medellin-los-5-43-billones-de-presupuesto-en-2018-156792>

El Tiempo. 23 de diciembre de 2018. *Los 'Pelaítos siguen durando nada' en Medellín: Víctor Gaviria*. En <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/la-conflictiva-situacion-de-los-jovenes-en-medellin-308042>

Escobar, Julio y Ocampo, Nelson. 2002. *El uso de la videovigilancia como nueva forma de control social en Medellín.* Tesis de pregrado. Medellín: Universidad de Antioquia.

Eslava, Adolfo *et al*. 2015. «Las comunidades conjugan los verbos contener y resistir» en Duncan, Gustavo (Ed.) *Territorio, crimen, comunidad. Heterogeneidad del homicidio en Medellín.* Medellín: Centro de Análisis Político – Universidad EAFIT.

Fajardo Rivera, Diana y Medellín Becerra, Jorge Alejandro. 2006. *Diccionario de Colombia* Bogotá: Editorial Norma.

García, Clara Inés *et al*. 2014. «Órdenes locales y conflicto armado. Una metodología comparada» en *Análisis Político.* Bogotá: Universidad Nacional. N.º 81, mayo-agosto.

González Gil, A. 2006. «Acción colectiva en contextos de violencia prolongada» en *Estudios Políticos.* Medellín: Universidad de Antioquia. N.º 29.

INMLCF –Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2017. en *Forensis.* En: < http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

INMLCF –Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2016. «Comportamiento del fenómeno de la desaparición. Colombia, 2015» en *Forensis 2015 Datos para la vida.* En: <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/3418907/10.+DESAPARECIDOS.pdf/e9a8d4f4-35e1-4227-bed7-fd46f8cf5b99>.

Insuasty, Alfonso *et al*. 2016. *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia.* Medellín: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando.

Iturralde, Manuel. 2010. *Castigo, liberalismo autoritario y justicia penal de excepción.* Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho.

Kojéve, Alexandre. 1982. *La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel.* Buenos Aires: La Pléyade.

Lederach, John Paul. 1985. *Enredos, pleitos y problemas.* Akron: Comité Central Menonita.

Lefebvre, Henry. 2013. *La producción del espacio social.* Madrid: Editorial Capitán Swing.

Massolo, Alejandra. 2007. «Análisis y propuestas para la acción de los gobiernos locales en la seguridad de las mujeres en las ciudades» en *Ciudades para convivir: sin violencias hacia las mujeres. Debates para la construcción de propuestas.* Chile: Ediciones Sur.

MCV -Medellín Cómo Vamos-. 2017. *Informe de Calidad de Vida de Medellín.* En: <https://www.medellincomovamos.org/download/documento-informe-de-calidad-de-vida-de-medellin-2017/>.

MCV -Medellín Cómo Vamos-. 2018. *Informe de Calidad de Vida de Medellín.* En: <https://www.medellincomovamos.org/category/ciudadania/>.

MCV -Medellín Cómo Vamos-. 2018ª. *Encuesta de percepción ciudadana de Medellín, 2018.* En: <https://www.medellincomovamos.org/informe-de-analisis-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-de-medellin-2018/>

Medellintespera (s.f.) *Mapa de Medellín-Colombia-Barrios y comunas*. En: <https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-YMTjbJjOKz8%2FUAxmiBjl-xI%2FAAAAAAAAA_Y%2FFjC0zwHXD8s%2Fs1600%2F-comunas_de_medellin-svg.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmedellintespera.blogspot.com%2Fp%2Fmapa-de-medellin-con-barrios-y-comunas.html&docid=nc_k5mhESg1aYM&tbnid=QcycuMvMJ48wNM%3A&vet=10ahUKEwjT-7n4u7rlAhWBVt8KHb9cBC8QMwhFKAAwAA..i&w=800&h=560&bih=655&biw=706&q=mapa%20del%20sitio%20Medellintespera&ved=0ahUKEwjT-7n4u7rlAhWBVt8KHb9cBC8QMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8 >

Montoya Restrepo, Nataly. 2014. «Urbanismo social en Medellín: una aproximación a partir de la utilización estratégica de los derechos». Medellín: *Estudios Políticos*. N.º 45.

Noticias Caracol. 12 de septiembre de 2018. «La app 'Te pillé', para denunciar ladrones en Medellín, es todo un éxito». Bogotá. En: <http://cort.as/-HdEH>

Noticias Telemedellín. 2018. «Proponen militarizar las comunas 7 y 13 de Medellín». En: <https://telemedellin.tv/jesus-anibal-echeverry-militarizar-comunas/265233/>.

NUPEN -Núcleo de Pensamiento-. 2018. *Archivo* (inédito). Medellín, Comuna 6.

OSHM -Observatorio de Seguridad Humana de Medellín-. 2018. *Extorsión en Medellín, ¿qué es y cuáles son sus principales manifestaciones?* Medellín: Universidad de Antioquia.

OSHM -Observatorio de Seguridad Humana de Medellín-. 2014. *Nuestras voces sobre seguridad humana en Medellín. Diálogos sobre seguridad*. Medellín: Universidad de Antioquia.

OSHM -Observatorio de Seguridad Humana de Medellín-. 2012. *Control territorial y resistencias: una lectura desde la seguridad humana.* Medellín: La Carreta Editores.

Pareja, Deicy. 2016. «La verdadera cara de la extorsión en Medellín» en *El Tiempo.* Bogotá. En: <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/extorsion-en-medellin/16715189>

Peña Reyes, Luis Berneth. 2018. «De la seguridad a la securización. La seguridad en Movimiento» en *La seguridad urbana en Movimiento.* Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Personería de Medellín. 2019. *Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín*. En: <http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/informacion-al-ciudadano/documentos/informes-derechos-humanos-ddhh/category/190-informe-ddhh-2018>

Personería de Medellín. 2017. *Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín*. En: <http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/informacion-al-ciudadano/documentos/informes-derechos-humanos-ddhh/category/39-informes-ddhh-2016>

Personería de Medellín. 2016. *Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín*. En: <http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/documentos/informes-ddhh/category/71-informes-ddhh-2016>

Policía Nacional. 2018. *Estadística delictiva.* En: < https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva>

Policía Nacional. s. f. *Modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.* En*:* <www.policia.gov.co/cuadrantes>.

Quinchía-Roldán, S. 2013. «Discurso y producción de ciudad: un acercamiento al modelo de urbanismo social en Medellín, Colombia» en *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 6*, N.º 11. En: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/5512>.

Ravelo, Patricia y Querales, May-ek. 2016. «Acciones de las mujeres contra la violencia feminicida en Ciudad Juárez, México» en *Regions & Cohesion.* Oxford. 6, N.º 2.

Schmitt, Carl. 1997. *El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes.* Azcapotzalco: Universidad Autónoma Metropolitana.

SISC -Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia-. 2019. *Dateo de homicidios*.

SISC -Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia-. 2018 *Informe homicidios.* En: <https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://09783b122f8808149603e90adef9bb30>

SISC -Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia-. 2017. *Informe homicidios.* En: <https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://09783b122f8808149603e90adef9bb30>

SISC -Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia-, Alcaldía de Medellín y Observatorio de Seguridad Humana. 2018. *La extorsión en Medellín como fenómeno del orden social, poder político y control territorial.* Medellín: Alcaldía de Medellín.

Tarrow, Sidney. 2004. *La acción colectiva. El poder en movimiento.* Madrid: Alianza Editorial.

Uribe de Hincapié, María Teresa. 2006. «Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones», en *Estudios Políticos.* N.º 29, julio-diciembre.

Vásquez, Jorge. 2013 «Adultocentrismo y juventud: Aproximaciones foucaulteanas» en *Revista Sophia: Colección de Filosofía de la Educación.* N.º 15. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala.

Zibechi, Raúl. 2008. *América Latina: periferias urbanas, territorios en resistencia*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

2

Construcción de paz y prevención de la violencia: perspectivas y aprendizajes desde abajo

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Equipo de Construcción de Paz Desde Abajo (CPDA)[1]

To live outside the law you must be honest
Bob Dylan

Introducción

En estas breves páginas nos proponemos presentar las acciones realizadas desde una visión estratégica particular de hacer las cosas, así como las consecuencias específicas en cuanto al tema genérico de prevención de la violencia.

En contraste con otras experiencias específicas desarrolladas,[2] en el caso de El Salvador no nos centramos en una localización específica, sino en dos, que luego se ampliaron en unas más. Algunas de ellas resultaron fallidas, otras fueron exigidas, otras en curso y continuidad. Lo fallido no debería causar asombro, aunque no suele ser recogido porque se supone que se da cuenta de lo exitoso o de lo encaminado a ser exitoso. Aquí, sin embargo, extraemos lecciones de lo fallido y señalamos otros desvaríos metodológicos que explican las experiencias de El Salvador. Buena parte de la acción emprendida se explica y comprende a sí misma como experimental contracorriente.

1 El documento es resultado de un trabajo colectivo. El equipo CPDA se conformó por investigadores de la UCA y de las comunidades en las que se tuvo presencia en la ejecución del proyecto. En la presentación de cada experiencia se mencionará a las personas coautoras. La sistematización estuvo a cargo de Luis Monterrosa D. y Javier Martínez R.

2 Las actividades del proyecto iniciaron en abril de 2017 en El Salvador, primero que el resto de experiencias.

Siendo El Salvador un territorio sobremanera violento al decir de las estadísticas,[3] en realidad asistimos a un momento definitivamente crónico, no solo como asunto de la posguerra de los últimos treinta años, sino como un asunto grave que va más allá de la preguerra. Este punto da para pensar, por supuesto, en una causalidad subyacente, y nos interesa remarcar que, frente a lo crónico del problema, aparecen también respuestas ordinarias que no muestran resultados y que están crónicamente desgastadas. De ahí parte la necesidad de insistir en la importancia metodológica «desde abajo» frente a la construcción de respuestas a problemas estructurales que básicamente tiene una mentalidad y hechura «desde arriba».

Como equipo de CPDA confesamos que no nos hemos atenido a términos y marcos comúnmente aceptados, si bien compartimos lo esencial. Partimos de una visión de desarrollo territorial que privilegia la participación de los actores locales y en ese horizonte preferimos hablar de «construcción de paz» en vez de hablar de «seguridad humana», y de robustecimiento o «construcción de relaciones» en vez de «construcción de espacios seguros».

En realidad, más allá de los términos y los aparatos conceptuales, si una cosa debe quedar patente en el aprendizaje debe ser la respectiva resonancia de la *voz del sujeto histórico* (*Revista ECA,* 1992). En el momento álgido de la guerra civil, Ignacio Ellacuría insistía en que el pueblo debía hacer sentir su voz y, por tanto, determinaba unas funciones específicas para la misión de la universidad comprometida con el análisis de la realidad y la liberación. Esto en primera instancia plantea el reto de la construcción del sujeto histórico, en el sentido de que quien concede orientación fundamenta los procesos de transformación social requeridos. Más allá de las determinaciones sociales que esto implica, también es posible establecer implicaciones metodológicas en cuanto al rol de la universidad, sus académicos y la manera como se procesa la información y se toman decisiones.

En este sentido, se ha procurado atender la posibilidad de construir desde abajo con las dificultades teóricas y prácticas que eso conlleva. Esto supone compartir una visión de futuro, instalar capacidades analíticas y procedimentales, ajustarse a los tiempos y modos de la gente y esperar la construcción de opciones concretas, desde unas perspectivas concretas, que solo pueden hacerse viables en el tiempo. Y esto plantea una dificultad. Estos procesos que se atienden son en realidad procesos de largo plazo en su metodología, en su procedimiento y en su manera de conseguir

3 El Salvador está señalado como uno de los países más violentos de América Latina, según el indicador de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. En 2015 el indicador era de 101.3; 60.8 en 2017 y 50.3 en 2018. Aunque la tendencia a la disminución es clara, se le sigue considerando un país violento. La idea que se quiere enfatizar es que la violencia en El Salvador es una realidad desde antes del conflicto interno, y que por eso es relativo auxiliarse solo del indicador de homicidios pues la violencia se expresa de muchas otras maneras.

resultados. Con ello, se presentan limitados resultados, estimadas lecciones de aprendizaje y compromisos ineludibles para el largo plazo.

El documento expone un marco de referencia común discutido con cada grupo en las experiencias, para pasar a presentar las propuestas elaboradas en cada caso, sus procesos y proyecciones. Después se presentan las reflexiones del procesamiento de esas experiencias, para finalizar con la presentación de algunas conclusiones discutidas en el equipo.

Una manera de ver las cosas

Aunque los términos generales que enmarcan las diversas experiencias, en el proyecto «Voces e iniciativas Comunitarias para la construcción de espacios seguros en América Latina y el Caribe» hablan de *seguridad humana,* según los términos del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM). A este respecto, nosotros hemos preferido hablar de *construcción de paz.* En última instancia, hablamos de lo mismo y si bien es cierto que el concepto de *seguridad humana* es apropiado, al no utilizarlo sobrepasamos las limitaciones que conlleva el término *seguridad* con todo el peso que tiene en la realidad salvadoreña en donde prácticamente implica represión al ser el más usado por las estrategias de prevención de la violencia y del delito en los últimos treinta años y que suele implicar directamente a la Policía Nacional Civil. Esta última, nacida de los Acuerdos de Paz de 1992, ha desempeñado un papel represivo en los últimos años a propósito de la seguridad (Monterrosa y Martínez, 2019).

Es común que se aborde la problemática de la violencia desde la perspectiva del conflicto en la medida en que en la cotidianidad la violencia aparece como el instrumento idóneo para resolver los conflictos. Con ello evitamos caer en una perspectiva que suele ser reductiva y que está más vinculada a lo delictivo (Schweinsteiger, 2016). Considerando que el conflicto es expresión de la interacción humana en tanto *relaciones de poder,* la construcción de paz se basa en la dinámica del conflicto que propicia mayor empoderamiento (Gilligan, 1997), para hacer efectivo un balance en el poder y mayor conciencia en las partes (Curle, 1978). Se plantea así la necesidad de construir paz por medios pacíficos, no de cualquier forma, sea cuales fueron los sujetos específicos en acción.

Partimos de la comprensión de tres niveles de prevención desde la perspectiva de la salud pública, en donde una perspectiva temporal (antes, durante y después) define tares específicas en términos de prevención y, al mismo tiempo, incluye al ofensor y la víctima. Asumimos que, en el abordaje de la violencia, el conflicto y la seguridad, debemos incluir tareas con el ofensor y con la víctima, toda vez que el

ofensor del presente es una víctima del pasado y la víctima del presente es un potencial ofensor del futuro.[4]

Se asume una perspectiva *desde abajo,* en donde el conocimiento de la realidad se produce desde la investigación acción participativa (IAP) lo que supone también que está orientado a la acción. El sustrato clave de esta visión corresponde a la perspectiva de Ellacuría, quien apuntaba a la necesidad de construir un sujeto histórico que involucrara a) la perspectiva de las mayorías populares; b) un espíritu socrático o mordiente crítico, y c) una inspiración cristiana. Con ello pretendía determinar la formación de un tercero que *«haga escuchar su voz»* y, por tanto, una voz cualificada. Vale la pena agregar que la instalación de capacidades que exige la construcción de este sujeto histórico asume así mismo que existe un «poder cognoscitivo de la praxis» (Ellacuría, 2002). Este es el sentido preciso del *desde abajo.*

La inspiración cristiana se mantiene conscientemente en el horizonte. Esto conllevaba no solo una perspectiva específica de compromiso con las mayorías, con lo cual queremos decir que no se trata de un asunto dogmático u ortodoxia, sino de la *ortopraxis* de la fe que lucha por la justicia desde la perspectiva de las víctimas con implicaciones sobre el perdón y la reconciliación (Ellacuría, 1999a, p. 105; Ellacuría, 1999b, p. 203).

En cuanto a las experiencias fallidas y a las encaminadas, como Equipo de CPDA, en el período de trabajo desarrollamos cinco experiencias con cuatro comunidades o grupos distintos: dos fallidas y tres encaminadas hacia un proceso de paz al finalizar el proyecto. Todas ellas están marcadas por su contexto específico, pero también con dos pretensiones. Primero, comenzar un proceso de instalación de capacidades, conceptuales, analíticas y operativas, y segundo, enmarcar el resultado esperado en tres vertientes: el fortalecimiento organizativo, la formación de una visión crítica y la proyección operativa en forma de una agenda de trabajo.

El supuesto es que, luego de la instalación de capacidades y el fortalecimiento organizativo, fase que culminaba con la construcción de una propuesta de trabajo, normalmente sigue una fase de operaciones específica de un plan lanzado por la comunidad. En dos de las experiencias el proceso fue truncado y, en otras tres, el trabajo continúa a la fecha.

---

4 La perspectiva del conflicto (Lederach) y la paz (Curle) nos obliga a abordar la perspectiva del daño y de la víctima cuando nos referimos a la violencia en la teoría y en la práctica, asunto que hemos tenido presente de modo determinante. Véase Zehr, H. 1990 Changing Lenses. A new focus on crime and justice (Scottdale: Herald Press); Sullivan, Dennis y Tifft, Larry (Eds.) 2006 Handbook of restorative justice (New York: Routledge). En términos prácticos, Monterrosa, Luis Antonio. Invitación a las prácticas restaurativas 2015 (El Salvador: Cáritas).

Entre agosto y diciembre de 2017 comenzamos un proceso de formación y fortalecimiento en un sector conocido como Popotlán[5] (municipio de Apopa) específicamente vinculado a uno de los grupos de pandillas del lugar. Había un interés común por propiciar términos de pacificación y, en sentido estricto, seguridad en un contexto donde no solo había «contrarios» (oficiales y no oficiales), sino también necesidad de construir un entorno encaminado al bienestar.

Trabajo con el grupo de Familias del Sur

Trabajamos con el grupo de Familias del Sur[6] el desarrollo de marcos conceptuales sobre violencia, conflicto y paz orientando el análisis de la situación concreta (tres facciones de pandillas, la represión institucional y un conjunto de vecinos afectados). Este trabajo se truncó básicamente por tres razones.

En principio, hubo cierta ansiedad por resultados inmediatos en un contexto de persecución de jóvenes (acción inapropiada) y represión bajo sospecha. Chocó la expectativa de lo que «UCA podía hacer» versus nuestra perspectiva de empoderar al grupo para luego apoyar su acción. En otras palabras, la población tenía la expectativa de que la UCA les resolvería el conflicto, mientras que desde el acercamiento del equipo CPDA se trataba de instalar las capacidades para que la comunidad atendiera su situación.

Además de esto, se percibió el peso profundo del miedo a la acción, que tiende a ser una constante muy importante. En la comunidad se visualizan acciones, se analizan opciones y realizan operaciones, pero de una manera muy limitada y algunas veces con acciones no necesariamente efectivas pues se encuentra cercada por el miedo. Giramos en el trabajo a fin de poder enfrentar el miedo personal y colectivo, pero probablemente fue insuficiente el tiempo. La vida en inseguridad está empapada en miedos.

Finalmente, diversos operativos policiales diezmaron al grupo y su voluntad para el seguimiento, de tal modo que en diciembre de 2017 se cerró el proceso, aunque

5 En el país en general y en este territorio en particular, la presencia de pandillas que fraccionan el territorio, es una constante de tres grupos fundamentales: la MS, la 18R (o "revolucionarios") y la 18S (o "sureños"). De la misma manera que es un error común reducir la violencia al delito, es también común identificar a las pandillas como grupos criminales per se y, por tanto, dejarlos fuera de procesos territoriales de desarrollo, prevención de la violencia o construcción de paz. Por supuesto, hay tipologías de pandillas desde las asociadas al crimen organizado hasta los grupos juveniles como expresión anómala de organización social para enfrentar la exclusión. Véase Monterrosa, Luis Antonio 2015.

6 Participaron Sonia Mejía, Alejandro Perla y Eva Ramos.

intentamos entre enero y febrero de 2018 reactivar el grupo. Debe hacerse notar que, en el período de trabajo, la Policía Nacional Civil en sus estrategias giró hacia procedimientos represivos, llegando incluso a ser cuestionada por estar vinculada a presuntos grupos paramilitares de exterminio.

El proceso, sin embargo, permitió construir relaciones que permanecen hasta la actualidad, y a partir de las cuales se ha conocido el interés de retomar el proceso grupal. También se valora el esfuerzo de formación en derechos humanos, una actividad que estaba en ejecución al truncarse el proceso iniciado, en esa visión de instalación de capacidades en las comunidades.

El conocimiento actual de la dinámica de la comunidad y las lecciones que ha dejado la experiencia, enraizadas en esa complejidad señalada, permiten replantear la posibilidad del trabajo comunitario, vinculando con algunos esfuerzos en otros sectores y teniendo la construcción de paz en el horizonte.

Trabajo con trabajadores independientes

De otro lado, se realizaron actividades en el municipio de Soyapango,[7] que tuvieron como referente la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños (ANTRAIVEAS). Se trata de una asociación con una membresía de cuatrocientos cincuenta vendedoras y vendedores informales en el municipio. La actividad comercial que se hace por cuenta propia es significativa y se estima que tres mil quinientas personas resuelven su vida a través de la venta en la calle.

La relación desarrollada con vendedoras y vendedores agremiados en ANTRAIVEAS permitió el esbozo de una plataforma de acción como expresión de su participación en la vida política del municipio, de cara a las elecciones de marzo de 2018. Las actividades se realizaron durante el período comprendido del 1.° de junio al 17 de agosto de 2017.

Las vendedoras y los vendedores de ANTRAIVEAS se ubican en la 4.ª avenida sur (línea roja), cohabitan con centros comerciales de la zona y con la terminal del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).

7 Participaron Mirna Rivera, Sandra Ruth Pérez, Walter Omar Linares y José Daniel Ramírez. Se agradece a Pedro Julio Hernández y Javier Cortez su aporte para el conocimiento del ámbito del trabajo por cuenta propia.

Funcionan a partir de un acuerdo con el gobierno municipal que les habilita a vender en esa plaza, cumpliendo con el orden y la limpieza del área.

Como preparación de las actividades se presentó a la junta directiva de la asociación la orientación del proyecto, a saber: la metodología *desde abajo,* definiendo la participación fundamental de la membresía de la organización, y una ruta de inicio con fechas y temas. Como resultado de ese encuentro se iniciaron las jornadas semanales, días jueves, de una a cuatro de la tarde. Se inició el 1.° de junio y se concluyó el 17 de agosto de 2017.

El proceso finalizó formalmente con la graduación de las vendedoras y los vendedores participantes en el proceso, el 8 de septiembre de 2017. Fueron veinte personas (quince mujeres y cinco hombres) y se planteaba que se desempeñaran como facilitadores(as) para la atención a un número mayor de vendedoras y vendedores de la asociación, y así replicar la experiencia de formación del gremio.

Metodología

Las jornadas llevadas a cabo con las vendedoras y los vendedores de ANTRAIVEAS partieron de la propuesta de seguridad humana para identificar las áreas sensibles para el grupo. En otras palabras, a partir de la discusión sobre esa propuesta conceptual se logró un esbozo de diagnóstico. El primero de los hallazgos fue la ambigüedad del concepto de seguridad humana, según se explicó en el inicio del texto, asociado a las estrategias de represión que distintos gobiernos han llevado a cabo. Esto permitió la elaboración de una propuesta de formación que respondía a la realidad de este grupo específico que participaría en cada jornada.

Esta propuesta asumía la realidad de las personas en formación, buscando fortalecer sus capacidades para su trabajo en las ventas. Este fue el punto de partida para construir una propuesta de incidencia como sector, en tanto actores locales en ese territorio, como expresión de su contribución a la construcción de paz en su municipio desde su participación específica. En otras palabras, la convivencia pacífica que se construye para vender mejor es una contribución a la paz del municipio en el que se ubican.

Las vendedoras y los vendedores caracterizaron su situación mediante un diagnóstico que permitió la construcción de una plataforma de acción. Los resultados de la jornada en la que se identificaron los aspectos externos se presentan en el cuadro 2.1 (trabajaron en grupos por el número de participantes):

Cuadro 2.1
Aspectos externos identificados por las vendedoras y los vendedores

	Oportunidades	Amenazas
Grupo 1	— Desarrollo económico — Estabilidad laboral — Oportunidad de créditos — Si hay crecimiento, se generan oportunidad de empleos	— Desalojos — Pandillas — La vulnerabilidad climática — Competencia desleales
Grupo 2	— A veces se nos presentan buenos productos a un mejor precio y permiten obtener mejores ganancias [compras por volumen y cachada] — Nuestra organización nos apoya en lo financiero para poder desarrollarnos en lo laboral [préstamos] — Oportunidad de obtener los alimentos de nuestra familia y estudio para nuestros hijos [mercado favorable] — Las temporadas — [Mi prójimo es mi oportunidad]	— Son aquellas situaciones que se dan con la delincuencia y por eso hay ausencia de clientes: robos, homicidios, pandillas, extorsiones — Otra amenaza que nos afecta es la competencia desleal [precios abajo del costo] — Amenazas de desalojo de alcaldía y despojarnos del sostén diario — Compañeros conflictivos
Grupo 3	— Derecho a comercializar nuestros productos libremente — Tener oportunidad de brindar educación y alimentación a nuestra familia: [Calle: Mejoramiento zonas) — Tener mejor relación con la organización y las autoridades municipales	— Expuestos a los vehículos conductores temerarios — Amenazas a las pandillas [sic]: extorsiones, robos y homicidios — Amenazas a las políticas municipales [sic] — Amenazas de sectores ambulantes: competencia desleal, botar la venta

Fuente: elaboración propia.

Desarrollo de la experiencia

El desarrollo de la experiencia se caracterizó por la constancia y compromiso del grupo convocado. La programación aprobada inicialmente apenas sufrió modificación en alguna fecha, por causa mayor y con suficiente anticipación.

Entre otros, se identifican algunos aciertos como la programación que fue una referencia de inicio, la manera en la que se fue adaptando cada jornada bajo el criterio de las prioridades que surgían, el hecho de que las vendedoras y los vendedores conocieron y aplicaron a sus negocios elementos de costeo y mercadeo,

y se obtuvieron mejoras concretas. También se esbozó una plataforma de acción de ANTRAIVEAS que responde a los desafíos actuales, se enmarca en el momento de la realidad nacional y fue discutida con el grupo. «Hemos sido espejo y caja de resonancia», es su propuesta. En general se logró una muy buena relación con este grupo que es la ventana de ANTRAIVEAS.

El proceso inicial finalizó según lo programado y los vendedores y las vendedoras se graduaron como facilitadores y facilitadoras en septiembre de 2017. Sin embargo, la réplica del proceso se frustró y no fue posible un esfuerzo mayor (más facilitadoras y facilitadores, un apoyo de la UCA con estudiantes de gestión empresarial y economía) con más vendedoras y vendedores de la organización capacitadas y capacitados. La dificultad encontrada responde a la dinámica misma de formación crítica, las y los participantes interpretaron su organización y también se hicieron propuestas e incomodaron a la dirigencia.

Lecciones aprendidas

Los hallazgos se pueden caracterizar tanto metodológicamente como desde el contenido socioeconómico. La metodología desde abajo nos enseña, entre otras cosas, que el interés permanece a lo largo del proceso y los contenidos tienen significados para el grupo, los énfasis se construyen en el proceso y se atienden necesidades emergentes que se plantean en el desarrollo del programa.

La realidad socioeconómica nos enseña que las vendedoras y los vendedores informales realizan mercancías de empresas formales, en cantidades económicamente significativas, sin comisión por ventas. También revelan que la organización puede crecer en favor de las vendedoras y los vendedores asumiendo prácticas cooperativas, y que, con costeo y técnicas de comercialización, se puede mejorar la calidad de vida de las vendedoras y los vendedores.

En el aprendizaje de la construcción de paz surge esta relación en el interior de la organización entre la membresía (vendedoras y vendedores) y la dirigencia. Las partes se presentan como límite para la mejoría de la contraparte: el despertar de las agremiadas y los agremiados cuestiona el modo de proceder de la dirigencia, y esa permanencia sin cambios en la dirigencia impide el mejor desempeño de las vendedoras y los vendedores.

No fue posible comenzar la segunda fase por el bloqueo del dirigente. Y, sin embargo, creemos que logramos el propósito inicial de fortalecer la organización, la conciencia crítica, así como, al menos, determinar caminos de acción en términos de la agenda. Encontramos un imprevisto (que bien podría haber sido previsible) en cuanto a los esquemas organizativos patriarcal-monárquicos. Aun así, determinamos plausiblemente que partir de los intereses específicos de la organización permite

determinar el fortalecimiento de la organización y su visión. También observamos que la reflexión sobre la acción debe acompañar la instalación de capacidades, y que el espíritu crítico es crucial, incluso muy a pesar de sus desventajas inmediatas, especialmente ahí donde no se ha crecido en la conciencia del conflicto como oportunidad de cambio.

El equipo CPDA tenía a lo largo de 2018 la posibilidad de trabajar directa o indirectamente con esta organización, precisamente para poder mostrar la necesidad de conciliar sobre las diferencias en un contexto de un movimiento social fragmentado, pero tomamos la decisión de movernos hacia otros grupos.

Trabajo con el grupo parroquial de Popotlán

A partir de la gestión de las relaciones grupales en el sector de Popotlán[8] se concilió con el párroco del lugar la formación de un grupo de agentes de pastoral bajo la perspectiva de «compromiso cristiano y construcción de paz», de hecho, fue el título que se concedió al diplomado propuesto, desarrollado *in situ* y en modalidad sabatina. Las sesiones de trabajo combinaban teología bíblica orientada a mostrar los términos del compromiso cristiano y conceptos y herramientas en construcción de paz. Si bien debido al activismo pastoral algunas personas no terminaron la formación, fue posible construir un conjunto de iniciativas vinculadas al quehacer parroquial desde la perspectiva de construcción de paz.

La sombrilla articuladora giró alrededor de «pastoral social» pero sin la fuerza específica del compromiso. Si bien se veía el carácter prominente del problema de la violencia, las opciones por las tareas concretas pasaban a postergarse sobre todo por los peligros que suponía la acción. Básicamente, nos encontrábamos de nuevo con la problemática del miedo como obstáculo fundamental para el compromiso y la acción. En general, las iglesias tienden a permanecer como un gigante dormido ante la problemática de la violencia, normalmente como producto del manejo que los medios hacen al equiparar con el delito buena parte de los intentos alternativos con respecto al problema de la violencia.

En todo caso, aparecía como innegable la necesidad de hacer algo. Dos premisas aparecían como esenciales y viables para trabajar. Por un lado, la necesidad de atender a las víctimas en general y no solo las remitidas por el problema de la violencia. En este caso, se veían como grupos vulnerables urgentes a menores de edad y adultos mayores (identificados por el grupo, constituido básicamente por mujeres). Por otro lado, se reconocía la propia condición de vulnerabilidad y el hecho de que todas y todos conlle-

8 Ana María López, Lissette María Villalobos, Rosa Deysi López.

vamos algún grado de daño y por tanto de victimización, una condición que nos mantiene proclives a la violencia y al mismo tiempo nos impide abordarla efectivamente.

El objetivo de este esfuerzo fue fortalecer las capacidades iniciales en Biblia y teología y el análisis social para animar al compromiso cristiano responsable en el trabajo parroquial. De manera específica, se proponía fortalecer el núcleo fundamental de la fe desde la enseñanza bíblica teológica como un primer paso de formación en la especialización en el trabajo pastoral. Pero también se consideró necesario atender los desafíos de la realidad, sobre todo, en el tema de la construcción de la paz y la coherencia de la fe y la vida.

A grandes rasgos, se abordaron dos ejes en cada una de las sesiones: 1) fundamentación bíblica de la fe y 2) contraste con la realidad a fin de animar el compromiso activo de los cristianos en la iglesia. En total, se plantearon y se llevaron a cabo dieciséis sesiones que abordaban temas del área *bíblica-teológica* y del área *realidad.*

Por tanto, este ejercicio tomó el carácter de escuela de formación para el compromiso cristiano y la construcción de paz, desarrollándose en un salón de las instalaciones de la Parroquia San Gabriel Arcángel los días sábados con sesiones de dos horas y media que dieron inicio el 3 de marzo y finalizaron con la entrega de los diplomas que atestiguan su participación, el 4 de agosto.

Metodología

El grupo estuvo compuesto inicialmente por un aproximado de treinta personas, cuyas edades oscilaban entre los 25 y los 70 años. En las últimas sesiones se contaba con un grupo de trece personas: cuatro hombres y nueve mujeres. La metodología utilizada fue de tipo participativa, bajo los ideales de un trabajo de construcción de paz desde abajo y de la investigación acción participativa (IAP).

Por un lado, la educación es una de las tareas del planteamiento de construcción de paz de Adam Curle (1978), educación que implica que los oprimidos aprendan a leer la realidad que les rodea, es decir, tanto el aspecto individual de saber quiénes son, como la situación en la sociedad y en las relaciones en las que se encuentran inmersos.

En este caso, no es solo una educación en los temas de conflictividad, relaciones, poder, justicia restaurativa, por nombrar algunos; temas que el equipo facilitador consideró pertinentes para que el grupo de participantes conociera y tuviera las herramientas necesarias para ser agentes de cambio, sino que, al unir la visión de Curle con la de Paulo Freire se propicia una educación que busca resonar con la cotidianeidad y con los núcleos centrales de la vida de las personas. En este caso, ese

núcleo fue la religión, interés compartido por cada una de las personas presentes dentro del grupo.

Esa unión entre lo bíblico-teológico y la realidad social en la educación, cumpliendo con una de las tareas iniciales de la construcción de paz, que toma el carácter *desde abajo,* reconociendo que, desde la perspectiva comunitaria es posible entender de un modo diferente la problemática, un modo que puede arrojar la información necesaria para un cambio; pero, sobre todo, significa que desde la comunidad pueden salir los esfuerzos que generen soluciones sostenibles.

Esto encaja con la IAP que, en esta experiencia, en particular, implica ese reconocimiento durante la formación donde las personas presentes tienen un rol activo y participativo, y la dinámica del proceso formativo tiene un constante espacio para el compartir y la construcción del conocimiento en conjunto. Entonces, en lugar de que las personas facilitadoras tomen el control de impartir información y el resto simplemente absorbe, se promueve la aplicación de la teoría a su propia experiencia particular y el poder compartirla al resto para ir expandiendo el conocimiento hacia todas las aristas de la vida de la comunidad.

Esta metodología cooperativa tiene su expresión máxima en la creación de un plan de acción en las últimas dos sesiones, el cual dependía de las personas participantes, tomando en cuenta todo lo abordado en el proceso de formación y el conocimiento que tienen de su realidad cotidiana.

Desarrollo de la experiencia

Al iniciar el proceso se consideró que cada sesión tendría una duración de tres horas y media. La primera sesión que se llevó a cabo tuvo esa duración, sin embargo, los y las participantes solicitaron la modificación de la hora de terminación, ya que muchos vivían lejos de la parroquia. Se llegó al consenso de acortar las jornadas y desde la segunda sesión hasta la última se realizaron con una duración de dos horas y media.[9]

En el imaginario del grupo facilitador siempre se tomó como un hecho que todas las personas que asistirían serían de Popotlán. Esta visión fue cambiada luego de la primera sesión cuando expresaron que vivían lejos del lugar de reunión. Luego de un sondeo se supo que la parroquia tenía una cobertura amplia y por lo mismo las personas participantes eran tanto quienes vivían allí cerca como quienes vivían en otras comunidades. Este hecho terminó siendo una ventaja más que una desventaja, ya que permitió tener una perspectiva de diferentes lugares.

9 La dinámica «desde abajo» abarca hasta esos aspectos operativos.

El proceso tenía una duración de dieciséis sesiones, que, sin pausas, hubiera terminado en un lapso de cuatro meses, contrario a los seis meses que fue el período para su finalización. Esta prolongación fue causada por impedimentos del equipo facilitador, pero, sobre todo, por compromisos que el grupo o parte del grupo tenía con alguna actividad parroquial. No existía alto nivel de interés y compromiso primordial en el proceso de formación como el que se hubiera deseado.

El grupo en general tenía alto manejo del material bíblico-teológico y siempre compartían sus propias reflexiones. Pero esta situación también generaba que las reflexiones sobre la realidad se vieran empapadas de una visión religiosa que se alejaba del elemento social y tomaba un carácter un poco más individual.

Un ejemplo de esto se dio en la primera sesión donde hubo una actividad en la que se les solicitó que escribieran problemas, dificultades y fortalezas de la comunidad en la que vivían. Entre las respuestas hubo un par de tarjetas que describían características negativas de una persona en relación con la iglesia (por ejemplo: apatía/miedo al compromiso). Así mismo, en las fortalezas se describían características propias de un enfoque más religioso y espiritual que social; entre ellas se encontraban la eucarística, la oración, fe y esperanza, aferrándose a la misericordia de Dios.

Esta situación ocurrió en sesiones posteriores, incluso en las últimas, como en la que se abordó el tema del perdón. En este caso la individualidad se manifestó de una manera diferente, ya que a pesar de que se intentaba trabajar sobre dar el perdón a quien les había ocasionado daño, siempre volvían a reflexionar sobre ellos como agresores y a una constante expresión de culpa.

Sin embargo, cabe resaltar que la facilidad para expresar sus reflexiones y opiniones no se daba solamente cuando eran temas bíblicos, sino que también comentaban sobre los temas de la realidad. Si bien había personas que participaban más que otras, no hubo persona que no compartiera algo en plenaria de forma voluntaria. También contradecían abiertamente (con respeto) a los demás participantes e incluso en algunas ocasiones a las personas facilitadoras.

Un ejemplo de esta facilidad para expresar desacuerdo sucedió en la segunda sesión, cuando tenían que asignar frases al lado de paz positiva o paz negativa. Cuando había una frase asignada en ambos lados se abría el espacio de discusión para llegar a un acuerdo, ejercicio que se dio con fluidez.

También existía en el grupo alto nivel de disposición a las actividades que se realizaban. Colaboraban entre ellos y se tomaban en serio la tarea indicada, como en las ocasiones que tuvieron que hacer un poco de juego de roles. Esto daba la oportunidad de utilizar diferentes técnicas para el abordaje de los temas que permitiera su mejor explicación. Además, es de agregar que el grupo era ligeramente heterogéneo en términos de edad, aunque no había jóvenes.

Desde la primera jornada se realizaron varias actividades grupales, mayormente de reflexión o preparación de exposición. Normalmente se asignaban los grupos, y nunca hubo algún problema o queja ante esa mecánica. Sin embargo, se solían demorar en cumplir con la tarea, posiblemente porque reflexionaban y compartían bastante entre ellos. Las y los participantes finalizaron el proceso elaborando su propuesta de trabajo.

Lecciones aprendidas

El proceso deja una serie de lecciones en relación con cada una de las particularidades que tuvo el proceso, tanto en sus éxitos como en los obstáculos. Al principio, antes de tener una primera sesión con el grupo con el que se iba a trabajar, se considera que podría ser sumamente beneficioso realizar una reunión previa con ellos para decidir aspectos logísticos que les afectan, especialmente la duración de las sesiones y el horario para su desarrollo. Las diferencias de conveniencia siempre existirán, pero no necesariamente impedirán llegar a un acuerdo en conjunto. Sin embargo, como grupo facilitador es recomendable llevar algunas opciones desde las cuales se puede partir haciendo las modificaciones necesarias.

En el momento de abordar los temas, es importante tener el objetivo claro y el enfoque que se va a abordar, plantear las actividades en consonancia con esto y estar preparados con la forma de tratar cualquier desviación que afecte el apropiado desarrollo de los objetivos. Sin embargo, también es necesario reconocer la visión que las personas tienen e incorporarlas, de modo que no haya una contradicción que genere daño posterior por un mal manejo o reproducción de ideas dañinas para las poblaciones con quienes se trabaja.

Los espacios de opinión deben estar presentes continuamente y ser verdaderos momentos en los que no solo se comenten las experiencias personales, sino las ideas y las opiniones propias. Incluso los ejercicios que permitan el surgimiento de desacuerdo son apropiados, especialmente si dicho desacuerdo puede ser con las ideas u opiniones compartidas por otro participante o por una de las personas facilitadoras. En ese clima de confianza y seguridad, las personas pueden expresarse y la construcción colectiva de conocimiento es posible.

También es importante para el trabajo en conjunto, el poner atención a la forma en que las personas reaccionan a las actividades. Es decir, si son de su agrado o no, y a qué tipo de actividades responden mejor. De esta forma se pueden hacer las modificaciones necesarias para lograr aprovechar este interés y respuesta para el cumplimiento de los objetivos.

La etapa siguiente que se convino con la Pastoral Social fue trabajar la perspectiva de reconciliación personal y social. Esta es una perspectiva importante, sobre todo, como procesos de sanación básica para víctimas y ofensores.

Mesa de Prevención Unidos por la Paz, La Chacra, San Salvador

En 2018 se estableció relación con la organización intercomunal de La Chacra, municipio de San Salvador,[10] a través de la Mesa de Prevención donde están representados los sectores comunitarios y desde donde se coordinan las diversas iniciativas de prevención para la zona desde el ámbito gubernamental y no gubernamental. Cuenta con una muy buena relación con la parroquia María Madre de los Pobres, aunque no depende de ella. Esto es importante porque desde los años ochenta la parroquia es un referente de trabajo social para las comunidades. De hecho, mucha de la experiencia organizativa de la población es producto del esfuerzo de los equipos parroquiales.

Metodología

Con la Mesa de Prevención se acordó desarrollar un proceso de formación, el Diplomado en Construcción de Paz (desarrollado *in situ* y en modalidad nocturna) como el modo concreto e inicial para el fortalecimiento de la Mesa. Este trabajo se desarrolló entre marzo y agosto de 2018, discutiendo las herramientas analíticas básicas de transformación de conflictos y construcción de paz, intentando hacer una reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo en prevención de la violencia y pensando en que todo es perfectible.

Desde esta perspectiva, se trataba de construir una agenda de trabajo a partir de la revisión de lo existente, más las nuevas posibilidades que se abrían por la reflexión crítica. Así se concedía un énfasis importante al cómo reforzar las relaciones comunitarias, abordar la sectorización producto de las pandillas y la necesidad de ofrecer alternativas de crecimiento frente a la victimización y espacios de reconciliación.

El intercambio dentro del espacio se hizo en un círculo en donde los y las participantes pudieran verse, como un encuentro e intercambio de experiencias en el que se tomaran en cuenta sus creencias y respetando su ritmo y proceso.

Los facilitadores y las facilitadoras del equipo del Departamento de Sociología y de la Maestría en Desarrollo Territorial (MDT) fueron profesionales de carreras hu-

10 Yanira Monjarás, Stephanie Campos, Juana Guzmán, Javier Cortez, Isaías Salazar, Roberto Carlos Guerra y Jonathan López.

manísticas, económicas y con formación en desarrollo territorial, así como también en justica restaurativa, cuya responsabilidad fundamental fue facilitar un proceso de reflexión de la realidad cotidiana en la comunidad, los tipos de dinámicas que surgen entre los vecinos, en las familias y cómo esto está relacionado con la transformación de los conflictos.

También se contó con la participación de líderes y lideresas representantes del Equipo de Prevención Unidos por la Paz de la Zona Sur Oriente de San Salvador de diferentes sectores de la comunidad, de la Asociación Fe y Alegría, personas que trabajan en la Alcaldía de San Salvador, representantes jóvenes, entrenadores de fútbol y trabajadoras domésticas comprometidas con mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

El número de participantes osciló entre quince y veinte personas, entre las edades 16 a 60 años. Al final del diplomado se tuvo como resultado un total de quince graduados, en su mayoría mujeres. Alguna de las características sobresalientes de los y las participantes fue su rol protagónico en sus comunidades, quienes mostraron mucha apertura y disposición a las sesiones.

Desarrollo de la experiencia

Durante las sesiones se realizaron cuatro módulos, en cada uno se abordaron cinco temáticas. El primer módulo se orientó en la construcción de trabajo desde los lentes o visión de la comunidad. El propósito era conocer el significado para los líderes y las lideresas de las relaciones hostiles, relaciones pacíficas, el conflicto, herramientas para analizar un conflicto, construcción de paz, las raíces de la violencia, las problemáticas que se pueden evidenciar en la comunidad.

El segundo módulo tenía que ver con la transformación de los conflictos, desde herramientas relacionadas con la escucha activa, con el manejo de emociones, las diferentes formas de percepción, el diálogo y la negociación.

El tercer módulo se enfocó en temas relacionados con la prevención de la violencia, su abordaje dentro de la comunidad, el trabajar los conflictos como una oportunidad, las diferentes acciones para prevenir la violencia, y los resultados obtenidos al realizar la planificación de sus acciones entendiéndolos como aciertos y desaciertos.

El cuarto módulo trató de la relación entre el ofensor y la víctima. Se abordó el círculo de la venganza, el castigo y sus diferentes formas dinámicas, enfocadas a la comunicación, el trabajo grupal y evaluación de las jornadas del diplomado. Al final se elaboró la propuesta de construcción de paz de la Mesa de Prevención.

Durante el proceso se pudo evidenciar que las lideresas y los líderes consideran importante adquirir herramientas para la prevención de la violencia, por esta razón se realizó un mapeo inicial del trabajo realizado como equipo de prevención de la localidad.

La mayoría de las acciones son actividades relacionadas con el arte, la música, las jornadas lúdicas con juventud y niñez, deporte, mejorar las condiciones de infraestructura, emprendimientos (pequeños negocios y venta de artículos hechos por los vecinos). Esta información fue elemental para conocer la dinámica de las acciones y cómo funciona la comunidad en cuanto a las relaciones interpersonales, así como también el tema de la movilidad debido a las fronteras o líneas imaginarias marcadas por las pandillas.

También se retomó el tema de la prevención de la violencia desde la visión temporal, donde se trabajó la visión de la víctima y el ofensor interrelacionado con los tipos de prevención (primaria, secundaria y terciaria). Los participantes abordaron diferentes acciones enfocadas a separar víctima y ofensor para hacer conciencia de la responsabilidad, y el perdón como estrategia de intervención, pues consideran que existen diferentes tipos de daño (psicológico y físico). Además, plantearon acciones a nivel primario como procesos formativos en convivencia ciudadana, inteligencia emocional, propiciar la empatía, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos.

Otra respuesta del Equipo de Prevención frente a la posibilidad de recuperar a la víctima y al ofensor son: brindar atención psicológica a la víctima como al ofensor, así como concientizar a la comunidad de las consecuencias y las causas que genera la violencia.

Lecciones aprendidas

Los y las participantes consideraron que adquirieron conocimientos y herramientas para la transformación de conflictos. Se experimentó mejoría en las relaciones interpersonales en el grupo y mayor sensibilización y empatía, lo que generó un ambiente agradable de confianza.

Se consideró importante continuar un proceso encaminado a trabajar con la atención a las víctimas, desde una visión de acompañamiento del sufrimiento, así como también reforzar temas de justicia restaurativa, mediación, diálogo y negociación para el manejo de los conflictos.

Para los y las participantes, los temas con más relevancia fueron el trabajo emocional, los tipos de violencia y la herramienta de análisis *el triángulo de las tres pes,* que muestra que la causa de la violencia es, siempre en último caso, la humillación infligida (Gilligan, 1997).

Así, para una nueva etapa se tomó el compromiso de trabajar un espacio de reflexión y práctica como crecimiento comunitario en términos de mediación, sanación y reconciliación bajo el supuesto de los niveles diversos de victimización y así avanzar en la atención de la prevención terciaria de la violencia.

Centro Escolar José Martín Vilaseca

La relación con el Complejo Educativo Católico P. José Martín Vilaseca (CE Vilaseca) se estableció en 2017.[11] Entre agosto y octubre de ese año se realizó un diplomado con estudiantes de bachillerato y de noveno grado (último de tercer ciclo), un espacio en el que se mantuvo la dinámica de aprender jugando y aprender haciendo para deliberar y dialogar sobre convivencia, seguridad, entre otros temas.

Con el inicio del año escolar 2018 se propuso a la dirección continuar con las y los estudiantes de los mismos grados y abrir un espacio de voluntarios y voluntarias para trabajar una agenda de construcción de paz desde la perspectiva de la juventud de Popotlán.

La relación con el centro escolar se consolidó en ese segundo año, el grupo de voluntarios y voluntarias ha llevado una formación como investigador comunitario, la dirección del centro escolar asignó al equipo de CPDA la asignatura de Orientación para la Vida con estudiantes, siempre de noveno grado, primero y segundo de bachillerato, así como las jornadas de escuela de padres y madres, y las jornadas de formación continua con docentes. Además, se ofreció atención Psicológica inicial a estudiantes, un servicio solicitado por la dirección y que permitió proyectar una ampliación en tanto que el CE Vilaseca se consolide como un referente comunitario para un número significativo de familias.

Jóvenes voluntarios participaron en el Taller de Artes Creativas a finales de 2018; ahí se organizó una actividad de proyección a la comunidad que consistió en atender a niños, niñas y jóvenes de la comunidad en las vacaciones escolares, modalidad de curso de verano, con danza, manualidades y deportes. La otra proyección que resultó del taller fue hacer del CE Vilaseca un referente para el desarrollo de la comunidad;

11 Sara Hernández, Karla Murcia, Hazel González, Wendy Romero, Alexander Romero, Javier Alfaro, Herberth Mejía y Arnoldo Sánchez.

esto es, un espacio donde las familias de Popotlán también realicen actividades recreativas y de formación.

Metodología

El grupo de voluntarios y voluntarias fue entrenado en IAP como una preparación para su participación en el esfuerzo de construcción de paz de toda la colonia Popotlán. Los contenidos se abordaron en jornadas de hora y media, con dos grupos, uno con estudiantes de noveno grado, y otro con estudiantes de bachillerato.

En cada jornada se hizo una actividad que requería la participación activa de las y los estudiantes. Se hicieron dos jornadas al mes con cada grupo, y con el grupo de voluntarios y voluntarias se llevaron a cabo dos jornadas más enfocadas en el entrenamiento IAP.

Los contenidos desarrollados fueron: 1) conflicto y conflictividad (dinámica grupal comunicación interpersonal); 2) la cultura del castigo; 3) prácticas restaurativas; la no violencia (relaciones de género y acoso escolar); 5) realidad nacional (elecciones y participación política).

Las y los estudiantes en IAP orientaron su desarrollo para la formulación de una agenda juvenil de atención comunal, a partir de la aplicación de herramientas como mapa de actores, diagnóstico participativo, árbol de problemas, entre otros. Su planteamiento original fue la base para la formulación de la agenda denominada Popotlán de las y los jóvenes.

Desarrollo de la experiencia

Jóvenes de la colonia Popotlán elaboraron una propuesta para mejorar su calidad de vida. A lo largo del año escolar 2018 discutieron su realidad en jornadas quincenales contando con el apoyo de la UCA, del equipo de CPDA.

El documento presenta las piezas principales de la propuesta en elaboración, a modo de memoria de lo avanzado para tener la visión de conjunto para su finalización, que permita la claridad fundamental para su puesta en ejecución.

Caracterización de Popotlán: pasado, presente y futuro[12]

A continuación, se recoge la discusión grupal en torno al tema.

¿Cómo era Popotlán?

12 La caracterización fue realizada por los y las jóvenes, se transcriben sus papelógrafos.

1. Se podía andar caminando en todo lugar.
2. Había muchos estudiantes en el Vilaseca.
3. No existían muchas pandillas.
4. Antes había más empleos.
5. Antes del conflicto de las pandillas del año 2011 los habitantes se llevaban muy bien en todas las zonas.
6. En el tiempo pasado las gentes cristianas visitaban las iglesias de otras zonas. Pero ahora por las divisiones ya no pueden. Por las pandillas.
7. Los productos de la canasta básica han ido aumentando año con año de precio. Antes era más barato.

¿Cómo es Popotlán actualmente? El presente de mi colonia

Estudio

- Hay menos estudiantes debido a la delincuencia.
- Falta de docentes.
- Desabastecimientos en las instituciones.

Salud

- Escasez de medicinas.
- Escasez de insumos.
- Falta personal.

Empleo

- Escasez de empleo.
- Salarios insuficientes.
- Explotación de personal.

Infraestructura

- Sobrepoblación.
- Pocos espacios recreativos.

Política

- No existe la democracia.

Tranquilidad

- Limitación territorial.
- Inmovilidad.
- Insalubridad.

¿Cómo se quiere Popotlán a futuro?

- Queremos paz en Popotlán.
- Que se acabe la violencia, pero no se puede por Sánchez Cerén.
- Queremos espacios creativos y queremos a Nayib como presidente para poder tener un poco de paz en El Salvador.

A partir de la información discutida se profundizó en la construcción de una propuesta en donde se identifican las actividades y se señalan las que se consideran como realizables en el corto plazo (CP, doce meses o menos) y en el largo plazo (LP, más de un año) (cuadros 2.2 y 2.3).

La discusión final en plenaria permitió identificar dos vacíos: 1) que no estaban identificados todos los sectores involucrados para atender los aspectos priorizados y 2) que existe un aspecto no discutido: las limitaciones para transitar que experimentan los jóvenes en Popotlán.

Para finalizar, se discutió la definición de los primeros pasos alrededor de la pregunta: ¿Qué estrategia seguir para comenzar a trabajar en los aspectos señalados? Las y los jóvenes coincidieron en definir que el CE Vilaseca se constituya en un referente comunitario para realizar las actividades, de manera que ahí se encuentre la comunidad y las instituciones que brinden los servicios de apoyos gestionados.

Cuadro 2.2

Actividades propuestas por las y los jóvenes

La seguridad	Plazo	El ámbito psicológico	Plazo
Hacer campañas de seguridad en la comunidad	CP	Censo poblacional	CP
Tener una mañana recreativa con la comunidad	CP	Culturizar	CP
Reunirse para que todos digan cómo se sienten	LP	Alimentaria: una campaña (talleres) que ayuden a la población e informen de un estilo de vida saludable.	CP
Enviar cartas para tener apoyo en la comunidad para no sentir miedo	LP	Salud: campaña de prevención de la violencia intrafamiliar, enseñar técnicas de higiene y ornato	CP
Poder comunicarnos con la comunidad libres para expresarnos	LP	Comunicación: una mañana recreativa en la cual es convocada la comunidad	CP

Cuadro 2.3
¿Con quién se pueden hacer estas actividades?

La seguridad	Actor	El ámbito psicológico	Actor
Hacer campañas de seguridad en la comunidad	La comunidad Policía Nacional Civil, Alcaldía municipal, Ministerio de justicia y seguridad	Censo poblacional	Ministerio de educación, UCA, Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Ministerio de salud, Glaswing, techo, vínculos de amor
Tener una mañana recreativa con la comunidad		Culturizar	
Reunirse para que todos digan cómo se sienten		Alimentaria: una campaña (talleres) que ayuden a la población e informen de un estilo de vida saludable	
Enviar cartas para tener apoyo en la comunidad para no sentir miedo		Salud: campaña de prevención de la violencia intrafamiliar, enseñar técnicas de higiene y ornato	
Poder comunicarnos con la comunidad libres de expresarnos		Comunicación: una mañana recreativa en la cual es convocada la comunidad	

Lecciones aprendidas

Las y los jóvenes de Popotlán participaron con ánimo en la construcción de una agenda para su comunidad, desde su entender y querer. Con las herramientas propuestas produjeron un conocimiento. La evidencia al final del proceso muestra que este grupo de jóvenes ha logrado mucho, no solo elaborar su agenda, «su plan de viaje comunitario». A modo de balance a la fecha, se cuenta con algunos logros como los siguientes:

- Niños, niñas y jóvenes que participaron en las actividades en vacaciones escolares entre el ciclo 2018 y 2019. Como resultado las y los jóvenes son líderes comunitarios.
- La dirección del CE Vilaseca ha dispuesto ampliar su horario de atención al público a los sábados por la mañana, y se ha establecido contacto con la coordinación

del Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV) de Apopa para la realización de actividades teniendo como referente el centro escolar.

- Actualmente el grupo de estudiantes se ha organizado para realizar sus horas sociales atendiendo a los y las estudiantes del CE Vilaseca en un club de tareas de lunes a viernes. Se ha quedado en consideración ampliar la atención a estudiantes de la comunidad en general, aunque sean de otros centros escolares.
- La coordinación del CMPV está gestionando la certificación del CE Vilaseca como referente comunitario ante esa instancia, en la que concurren instituciones del gobierno municipal y del gobierno nacional.

Elementos procesuales: aprendizajes

En algún momento del trabajo se planteó una cuestión que se volvió crítica: ¿cómo podemos determinar si los términos de trabajo que se desarrollan realmente inciden en los niveles de violencia o inseguridad real o percibida? Siendo una pregunta totalmente válida, esta no podía ser contestada presentando datos de posibles descensos en alguna variable estadística en razón del plazo de trabajo (doce a dieciocho meses, dependiendo del territorio). Aunque fuese plausible obtener datos, incluso significativos, no hay que olvidar que *intentamos* propiciar transformaciones sobre problemas crónicos sostenidos estructuralmente y que, por tanto, en principio los cambios son a largo plazo. Con este punto en mente, repasamos algunos elementos críticos de la acción que nos permiten determinar elementos procesuales válidos para tener en cuenta en cualquier proyección futura.

Enfoque, metodología y teoría del cambio

El elemento *participación* es absolutamente exigente. No solo se trata de una moda política posible. Los términos del enfoque de desarrollo territorial, transformación de conflictos y construcción de paz, suponen la participación como un elemento crítico para la eficacia de la acción, así como para su sostenibilidad.

Desde el punto de vista de la manera como entendemos el enfoque de desarrollo territorial, el sistema endógeno de actores asociado a un territorio se apoya en el sujeto fundamental de la acción transformadora. De igual manera, en la transformación de conflictos, son los conflictuados los que toman inexorablemente parte en la búsqueda de soluciones a su problemática. Siendo la violencia una problemática local urgente de abordar, la clave de la eficacia (¿qué soluciones?) y su sostenibilidad dependen de que los actores endógenos tomen en sus manos el problema, analicen y tomen decisiones al respecto. Esto no solo es congruente con

la posición ellacuriana, apreciada por esta universidad, en la perspectiva del sujeto histórico, sino también hace comprensible la función de facilitador del experto y del académico, de la importancia de la investigación-acción participativa y, en definitiva, la perspectiva *desde abajo.*

Desde este punto de vista, nuestra teoría del cambio ha supuesto un proceso de empoderamiento (instalación de capacidades) conceptuales y analíticas en los sujetos de la acción (dimensión personal y organizativa) que ponen en marcha procesos personales, comunitarios y sociales, de cambio, un proceso en el que nosotros somos en principio *facilitadores orgánicos,* en el mejor sentido gramsciano.

Diálogos y mediación

En los territorios de trabajo, como en tantas otras comunidades de El Salvador, se padece de la *sectorización* provocada por las pandillas, que suele impedir la *transitabilidad,* especialmente de los jóvenes en los territorios. Experiencias anteriores, y bajo el supuesto que puede y debe terminarse una guerra entre los pobres, una apuesta importante es la de fortalecer las capacidades de diálogo y mediación de la comunidad organizada para que, según principios de cultura de paz que privilegian el diálogo como mecanismo de solución de la conflictividad y para hacer frente a la violencia, pueda la comunidad misma hacer los esfuerzos para lograr acuerdos locales en términos de construcción de paz.

Aunque suele considerarse problemático, normalmente porque las maras y pandillas están asociadas a la criminalidad, en realidad, partimos de presupuestos más inmediatos: 1) que se debe terminar la guerra entre los pobres, 2) que en última instancia todos somos víctimas de la violencia, especialmente la estructural y 3) que es necesario rescatar la convivencia comunitaria.

La tarea no es sencilla, pero la clave está en el fortalecimiento de la comunidad como *tercera parte* (Monterrosa, 2017)[13] con capacidad de, críticamente, poner a las demás partes en su lugar por el bien mismo de la comunidad. Este elemento es esencial para las comunidades y para la viabilidad para los territorios, aunque no siempre comprensible institucional y académicamente, sobre todo, por la asociación ligera, ya antes mencionada, de las pandillas como organizaciones terroristas o delincuencias.

13 La Tercera Fuerza no hace referencia a la función clásica de mediación, como si se tratase de una fuerza neutral; al contrario, partiendo de los intereses y necesidades de las mayorías populares, sabe sobreponerse y colocar en su lugar a las dos fuerzas beligerantes que juegan a una polarización que les beneficia solo a ellos.

Trabajar en la comunidad permite entender esta urgencia y necesidad puesto que irremediablemente las pandillas son un actor local, cuyas madres, hermanos(as), hijos(as) o esposas(os) viven en la comunidad y, estén o no de acuerdo con su proceder, perciben en primer lugar un lazo familiar y comunitario antes que legal o penal.

Atender las víctimas y el sufrimiento

La otra vertiente en el aprendizaje nos indica que necesitamos centrarnos en la reparación de las víctimas. El problema del miedo, la respuesta cuasi universal de la violencia en los diversos órdenes, las resistencias al cambio, etc., no son más que expresión de un mayor o menor grado de victimización que todas y todos hemos vivido y que necesitamos enfrentar.

Por lo tanto, se reconoce la necesidad de atender el dolor de las pérdidas y duelos múltiples que, en la medida en que no se elaboren, desde una visión de acompañar a las y los miembros de la comunidad, quebranta más las relaciones sociales. El reto es crear las condiciones mínimas para instalar capacidades comunitarias y una intervención basada en los primeros auxilios psicológicos, acompañamiento espiritual e información jurídica en los casos que lo requieran, todo este dispositivo de acción comunitaria bajo un eje central desde la construcción de paz.

La apuesta es generar procesos de formación-acción centrados en a) mediar, b) sanar y c) consolar. En cuanto al primero, se espera que la mediación comunitaria permita a la comunidad, por medio de un equipo local fortalecido, intervenir de modo temprano en diversas conflictividades vecinales que interrumpen la convivencia yendo desde los desacuerdos modestos hasta los términos de polarización comunitaria.

En lo referente a sanar, en tanto todas y todos compartimos un grado de victimización y, por tanto, de dolor, duelo y cierto sentido del desquite, podemos determinar procesos comunitarios que encaminen a las personas al crecimiento personal de modo que pueda robustecerse no solo su vida personal y familiar, sino también la comunitaria.

En cuanto a consolar, el dolor es una constante, ya sea como reminiscencia del pasado o como irrupción en el presente. Es posible iniciar procesos de recuperación de las víctimas acercándonos con medidas inmediatas como primeros auxilios para la crisis, así como con procesos de acompañamiento del dolor y el sufrimiento, por medios pastorales o civiles.

El desafío de la sobrevivencia

La realidad socioeconómica nos enseña algunos elementos clave a partir de la experiencia de trabajo con ANTRAIVEAS. Las vendedoras y los vendedores informales realizan mercancías de empresas formales, en cantidades económicamente significativas, sin comisión por ventas. La organización puede crecer en favor de las vendedoras y los vendedores asumiendo prácticas cooperativas. Complementando lo anterior, con costeo y técnicas de comercialización se puede mejorar la calidad de vida de las vendedoras y los vendedores.

Estos elementos básicos a nivel de perogrullada, obvios en los trabajadores por cuenta propia, puesto en un marco más amplio, implica siempre el reto de la sobrevivencia de la gente. Esto es importante puesto que la mayoría de estrategias, programas y proyectos en el ámbito de la prevención y la seguridad, en la medida que lo ven como un asunto penal, moral o delictivo, se escapa su asociación con elementos de desarrollo económico, cuando en realidad, respecto del problema de la violencia, el elemento económico estructural está en la base de muchas determinaciones específicas. Por tanto, toda iniciativa de prevención de la violencia o construcción de seguridad habrá de enfrentar en su momento la necesidad de plantear correctamente las necesidades del desarrollo económico y buscar las alianzas y las estrategias pertinentes.

Instancias organizativas

En el aprendizaje de la construcción de paz, a propósito del proceso con ANTRAIVEAS, surge esta relación en la organización entre la membresía (vendedoras y vendedores) y la dirigencia. Las partes se presentan como límite para la mejoría de la contraparte: el despertar de las y los agremiados cuestiona el modo de proceder de la dirigencia; la permanencia de la dirigencia tal cual impide el mejor desempeño de las vendedoras y de los vendedores. Se debe decir que, un efecto inicial, casi inmediato, del proceso de instalación de capacidades lleva a la necesidad de cuestionar los elementos inmediatos del entorno, incluyendo la autoridad y la organización.

Eso es clave en términos de la participación necesaria. En el caso de ANTRAIVEAS, el modelo de trabajo, que exige niveles óptimos de participación activa, chocó con los modelos autoritarios, verticales y patriarcales existentes, pero que no habían sido evidenciados puesto que se asume que el modelo organizativo, en tanto de lucha reivindicativa, *per se* es democrático.

Esto plantea procesualmente algunas cuestiones de fondo. Se ha de preferir desarrollar procesos donde haya un mínimo de expresión organizativa. La inexistencia

de organización comunitaria no impide el proceso de construcción de paz, pero entonces agrega la tarea misma de la organización, no siempre prevista en los procesos educativos o de incidencia, más en los de investigación participativa. Y, por otro lado, las expresiones organizativas, habiéndolas, pueden estar perfiladas bien de espíritu reivindicativo, pero verticales y patriarcales, con dirigentes que buscan perpetuarse en el poder por las ventajas que supone el poder. Con ello, el primer esfuerzo crítico, el primer paso en términos de abordaje de conflictividad y de espacios seguros por construir es la misma organización.

Un caso distinto (¿el otro extremo?) es el caso de La Chacra. De fondo es la expresión de una federación de directivas comunales (la «intercomunal») dentro de un Distrito específico, pero que nace de las entrañas mismas de la comunidad y específicamente de la inquietud asociada a la parroquia católica, interesada en dar respuesta al problema de la violencia. En la Mesa de Prevención de la Chacra *no hay dirigentes,* sino que es un espacio horizontal, abierto y participativo. Se entiende que hay liderazgos, algunas veces asociados a directivas comunales, que se hacen valer en la Mesa de Prevención, pero no hay jerarquía precisa en este espacio, aunque sí hay roles funcionales (organización, jóvenes o custodia de fondos, por ejemplo).

A fin de cuentas, los procesos deben tomar en cuenta el tipo de organización con la que trabajamos y la que perfilamos. Mientras más horizontal, más participación. Y para eso deben prepararse condiciones.

El lugar de la juventud

Tomando como referencia la problemática de las pandillas, uno de los más serios problemas de violencia en El Salvador, la juventud es un actor crucial en tanto perfil ofensor, real o percibido, y en tanto víctima real de la violencia real y estructural. Desde este punto de vista, la juventud se postula como un sujeto específico estratégico para la solución de la problemática, pero que está cargado de desconfianza de la institucionalidad en la medida en que lo ve asociado a la delincuencia y la violencia.

De ahí que sea crucial promover el protagonismo informado y capaz de la juventud. El proceso en el Complejo Escolar Vilaseca y en La Chacra promovió este empoderamiento juvenil. En el primer caso, la demanda efectiva del Centro Escolar logró promover el análisis de la realidad y permitió la creación y el fortalecimiento de un núcleo de jóvenes que ha ido construyendo desde la infraestructura del centro educativo, aprovechando sus aulas y espacios deportivos, hasta encaminarse a actividades abiertas en la calle en territorios tradicionalmente «peligrosos».

En el caso de La Chacra, se contaba previamente con una base de organización juvenil que ha continuado expandiéndose y realizando actividades de recuperación

de espacios y de autorrespeto por el sentido del logro mismo de las actividades, constituyéndose, en ambos casos, en procesos de refuerzo de la dignidad de las personas. Es importante mencionar que, en el caso de La Chacra, a propósito de la visita que los Equipos Nacionales del Proyecto Regional hicieron al territorio (septiembre de 2018) el recorrido por algunas zonas de la localidad les permitió recobrar un sentido de orgullo y seguridad que en algún momento habían perdido, al verse acuerpados por la visita.

Conclusiones

La experiencia de El Salvador puede ser focalizada en una serie de elementos básicos que en realidad solo tienen respuesta final en la acción misma.

El apellido *desde abajo* no es metodológicamente ni gratuito ni populista. Viene exigido por el carácter mismo de las cosas, de la problemática social que se pretende abordar que en su complejidad y carácter exige niveles de participación de los involucrados, afectados o beneficiados por la solución, en la medida en que son los que conocen mejor su situación y, por tanto, pueden proponer caminos efectivos y sostenibles. Esto implica conceder un cierto valor epistemológico al *desde abajo.* Este puede fundarse teóricamente sin lugar a dudas, pero suele chocar con el *statu quo* institucional, que cree tener las soluciones, que normalmente son las tradicionales, y con el *statu quo* académico, que tiende a anidar perspectiva acríticamente y no termina por entender el rol epistemológico concedido a «los de abajo» en razón de un purismo teórico, metodológico y científico.

Asimismo, la consigna común pretendida era la de trabajar la perspectiva de seguridad humana, tal como es desarrollada por el OSHM. Sin embargo, nos decantamos por trabajar bajo el formato y nombre de construcción de paz. En el fondo de las cosas, hablamos de lo mismo, puestos a escudriñar los asuntos en sus detalles. Sin embargo, vale la pena determinar un par de puntos en consideración más allá de la experticia propia de cada uno de los equipos. Efectivamente, desde hace algún tiempo en la Universidad Centroamericana venimos trabajando desde la perspectiva de construcción de paz. En ese contexto, el término y perspectiva de «seguridad humana» no hace ruido en sí. Sin embargo, en los territorios el término «seguridad» (más allá de los apellidos) sigue siendo vinculado a modelos policíacos un tanto represivos.

Claro, habría sido posible educar la conciencia para expandir el horizonte de la seguridad y haber insistido en el esquema de seguridad humana, como de hecho presentamos y trabajamos con los diversos grupos. Sin embargo, comprendimos que

se trataba asimismo de una demanda de la realidad que, de no hacerla efectiva, corríamos el riesgo de incoherencia con la perspectiva *desde abajo.* La demanda urgida fundamental desde abajo no es por la seguridad, sino por la paz. Ambos términos, huelga decirlo, merecen clarificación, formal e informal. Si bien no hablamos de seguridad del Estado, tampoco hablamos de cualquier paz, sino de aquella indicada en los medios especializados y que se identifica con el bienestar integral de las personas y, por tanto, con seguridad humana integralmente hablando. Sin embargo, preferimos hablar de construcción de paz, aunque parezca que nos desviamos del asunto normativo institucional, porque es perfectamente comprensible para la gente con la que trabajamos.

Una buena muestra de ello fue la manera de abordar cierto tipo de asuntos específicos como es el de las pandillas. En otras latitudes y contextos, a veces por inmediatismo conceptual acrítico, se identifican organizaciones y personas fuera de la ley o ilegales que atentan contra la seguridad. En realidad, no hay personas ilegales. Visto desde la perspectiva de construcción de paz, es un actor específico que merece ser incluido, sin que eso signifique aceptar sus acciones que pueden estar al margen de la ley.

Los espacios seguros versus las relaciones pacíficas-justas son precisamente una consecuencia de la argumentación anterior. Se corre el riesgo de ver objetos y espacios por conseguir, espacios seguros, cuando la visión fundamental, en la realidad, exige centrarse en las personas y las relaciones diversas que se establecen en un entorno específico. Solo cuando nos encaminamos al robustecimiento de esas relaciones comunitarias, interpersonales, sociales o familiares, tendrán sentido los espacios que sin duda son una plataforma para la dignificación y la superación del miedo. Relaciones fuertes posibilitan espacios seguros, pero la inversa no es necesariamente cierta.

También es necesario considerar la construcción del sujeto histórico. El fondo de los procesos nos exige plantearnos en diversos momentos no solo cómo entendemos el sujeto histórico que posibilita las transformaciones, sino también el cómo se construye ese sujeto, si no necesariamente está articulado y capacitado para la misión histórica específica. Intuimos bastante en la consigna del *desde abajo,* aunque algunas veces nos guste más que facilitar procesos, dirigirlos. Pero es parte exigible de la praxis que se desarrolla el plantearse justamente quiénes conforman ese sujeto histórico y cómo colaborar con la formación de ese sujeto histórico. Recordando las imágenes del mismo Karl Marx (2008) a propósito del sepulturero del capitalismo, vale la pena, rigurosamente, plantearse el perfil del sujeto histórico que tiene la misión de redimir y enterrar la violencia y con ella la injusticia.

Solo así tiene sentido el hecho de visualizar que, frente a la dimensión crónica de nuestros problemas, la injusticia o la violencia, la constitución del sujeto histórico obedece a la necesidad de contar con soluciones de largo plazo sostenibles y eficaces en la medida en que vienen de un sujeto críticamente constituido, directamente afectado y profundamente interesado en las soluciones estructurales.

Referencias

Costamagna, Pablo y Larrea, Miren. 2017. *Actores facilitadores del desarrollo territorial. Una aproximación desde la construcción social.* Donostia, San Sebastián: Fundación Deusto.

Curle, Adam. 1978. *Conflictividad y pacificación* (Barcelona: Herder).

Ellacuría, Ignacio. 1991. «Función liberadora de la filosofía» en *Escritos políticos I.* San Salvador: UCA Editores.

Ellacuría, Ignacio 1999a. Funciones fundamentales de la universidad y su operativización. En Ellacuría, I. Escritos universitarios. San Salvador: UCA Editores, pp. 105-167.

Ellacuría, Ignacio 1999b. Universidad, derechos humanos y mayorías populares. En Ellacuría, I. Escritos universitarios. San Salvador: UCA Editores, pp. 203-219.

Ellacuría, Ignacio. 2002. «Fe y Justicia» en *Escritos Teológicos III.* San Salvador: UCA Editores.

Ellacuría, Ignacio. 2005. «La cuestión de las masas» en *Escritos Políticos II.* San Salvador: UCA Editores.

Gilligan, James. 1997. *Violence: reflections on a nacional epidemics.* Nueva York: Vintage.

Karlsen, James y Larrea, Miren. 2015. *Desarrollo territorial e investigación acción. Innovación a través del diálogo.* Bilbao: Publicaciones Deusto.

Lederach, John Paul. 2005. *Construyendo la paz: reconciliación sostenible en sociedades divididas.* Bilbao: Centro Gernika.

Long, Norman. 2001. *Development sociology: actor perspectives.* London: Routledge.

Marx, Karl. 2008. *El manifiesto comunista.* Buenos Aires: Herramienta Ediciones.

Monterrosa, Luis Antonio. 2019. «Tercera fuerza y sujeto principal: un pueblo con espíritu socrático e inspiración cristiana» en *Revista Teoría y Praxis.* San Salvador: Universidad Don Bosco. N.º 35, pp. 139-152.

Monterrosa, Luis Antonio y Martínez, Francisco Javier. 2019. *El futuro de la policía comunitaria.* San Salvador: UCA Editores.

Rivera, Joseph de. 2009. *Handbook on Building cultures of peace.* Nueva York: Springer.

Revista ECA (1992). Pronunciamiento Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". San Salvador: ECA.

Schweinsteiger, Patricio. 2016. *Entender la violencia para prevenirla (manuscrito).* San Salvador.

ecap
equipo
de estudios
comunitarios y
acción psicosocial

3

K¨ujb´ab´k´u´l: la confianza como pilar de la historia, la memoria, la defensa de la vida y el territorio en Nebaj, Quiché, Guatemala

Jacinta Leticia Corio López, Susana Abigail Cedillo Díaz, Marta Yolanda Gallego Ramírez, Juana Yocelyn Raymundo Cedillo, Cecilia de León Matom, Jeimy Clariza López Carrillo, María Loida Ceto Brito, Hilaria Guzmán, Maya Varinia Alvarado Chávez y Judith Erazo.[1]

Introducción

El presente capítulo presenta los hallazgos realizados por seis jóvenes mujeres del municipio de Santa María Nebaj, Quiché (en adelante Nebaj), quienes, junto a las facilitadoras en la región, la responsable académica del proceso y la coordinación del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), indagaron sobre los generadores de violencia en el municipio. Desde los contenidos y la propuesta del buen vivir, se analizaron los impactos diferenciados por género, por identidad étnica y por edad. Asimismo, se identificaron las respuestas, tanto del Estado como de la comunidad, con respecto a las condiciones sociales que implican violencia.

ECAP trabaja desde hace varios años en el municipio de Nebaj. En un inicio este equipo se dedicó al acompañamiento de exhumaciones en comunidades afectadas por la violencia política durante la guerra. En años más recientes, ha acompañado a personas en contextos de migración. Asimismo, ha impulsado procesos con jóvenes de establecimientos públicos y por cooperativa, en los cuales, además de acompañar problemáticas psicosociales, ha impulsado el liderazgo, sobre todo de mujeres

1 Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP).

jóvenes. Precisamente, las investigadoras comunitarias que participaron en esta iniciativa hicieron parte, en el pasado, de procesos de fortalecimiento de liderazgo.

Este capítulo está dividido en cuatro partes. En el primer apartado se incluyen datos del municipio de Nebaj, a la vez que se abordan algunos hechos de su historia reciente vinculados a la generación de violencias. Aquí mismo se explora la cosmovisión ixil y su concepción originaria de seguridad, la cual, cómo veremos, abarca temas como el cuidado del ambiente, de la vida en su integralidad y las relaciones interpersonales, con todos los seres vivos y los elementos de la naturaleza.

En la segunda parte se reflexiona sobre los elementos históricos y sociales que han generado violencias en el municipio. También sobre las formas diferenciadas como ha impactado la violencia y la inseguridad en las jóvenes, sus comunidades y otros actores. Además, se identifica a algunos de los agresores. En este contexto, las respuestas del Estado son analizadas por las investigadoras y las personas participantes en los grupos focales organizados, integrados, en su mayoría, por personas cercanas a las jóvenes.

En tercer lugar, se presentan algunas perspectivas diferentes sobre la seguridad y se relatan algunas de las acciones emprendidas por las comunidades y sus organizaciones para enfrentar la inseguridad y recuperar vínculos de confianza y saberes ancestrales. También se analiza cómo han impactado las iniciativas comunitarias con respecto a la inseguridad en la institucionalidad del Estado del municipio.

Por último, se sintetizan los hallazgos en referencia a lo que implica la construcción de espacios seguros para las mujeres jóvenes, en una comunidad atravesada por una historia de violencias, pero también de resistencias. Se retoma el planteamiento de confianza y la mirada holística de la seguridad desde el Ti´ichajil, buen vivir de los pueblos.

En el texto, las citas aparecen sin los nombres de las personas para proteger su identidad en contextos de violencia donde se ejecutó el trabajo de campo. Se les cita según el papel que han tenido en la investigación, ya sea como investigadoras o como participantes. En el proceso de construcción de estos contenidos destaca el acompañamiento permanente, la mediación y la iniciativa de Loida Ceto Brito e Hilaria Guzmán, mujeres profesionales ixiles, que tuvieron la responsabilidad de convocar, generar ambientes de confianza, aportar experiencias propias y facilitar los grupos en ausencia de la responsable académica.

Antes de desarrollar estos puntos, se explica el enfoque metodológico como forma de reflexión de la experiencia del proceso de formación/investigación/acción participativa, sus alcances y limitaciones.

En principio, el grupo de investigadoras comunitarias llegó a estar integrado por diez jóvenes, de las cuales seis participaron con más regularidad. Sus edades oscilan entre los 16 y los 18 años. En el momento de adelantar la investigación, algunas cursaban el último año de educación media, otras aún permanecen en la escuela. Además de estudiar, algunas trabajan, lo cual dificultó la constancia en el proceso y el tiempo dedicado al mismo.

Esta investigación requirió momentos previos de formación, necesarios para el autorreconocimiento de las capacidades de intuición, curiosidad, búsqueda de datos y compromiso con la historia personal y social de cada una de las jóvenes participantes y de su comunidad.

En el proceso de formación, en equipo con las jóvenes, se diseñaron instrumentos que orientaron ejercicios de observación, entrevistas a personas y guías para la realización de tres grupos focales con otros jóvenes y adultos de sus comunidades y entornos. Posteriormente a la realización de estas actividades, se reflexionó en colectivo sobre los resultados y se concretó un diálogo que incluyó las voces de las personas a las que se entrevistó, las de las jóvenes sobre los resultados, las reflexiones de las facilitadoras comunitarias, de la investigadora académica y de la coordinación del proyecto.

Con todos estos pensamientos en diálogo, además del entablado con el entorno natural y social, de la historia de Nebaj y la memoria de lo sobrevivido, se obtuvieron las conclusiones conjuntas que se sintetizan en el presente capítulo.

Las opiniones no siempre coincidieron y fue necesario propiciar la reflexión alrededor de cómo operan los sistemas opresivos (patriarcado, colonialismo, neoliberalismo) en cada una de nosotras, tanto para afectarnos mediante el control social, como para configurar mandatos, imaginarios, estereotipos y prejuicios que reproducen la legitimación de discriminaciones y violencias.

En ese sentido, para la metodología, entendida como definición del proceso, tanto de formación de las investigadoras, como de la misma investigación, se propuso ampliar el horizonte conceptual de todas las que participamos[2] y no agotar la iniciativa en los conceptos propuestos desde el proyecto.

2 Desde la metodología feminista, en la redacción es posible combinar los modos personales, y se hace necesario en este tipo de investigaciones, puesto que en la misma se producen conocimientos de manera colectiva, así fue aplicada para esta experiencia de coproducción. El modo impersonal puede silenciar la primera persona del singular, en este caso las investigadoras comunitarias, y reflejar solo las reflexiones o acciones impulsadas por la persona que investiga, redacta o facilita el proceso.

En Nebaj el idioma que habla la población indígena es el ixil. Como los otros idiomas mayas, este es un idioma conceptual, es decir que no existen las traducciones literales, sino que cada palabra adquiere un significado distinto, vinculado a un contexto, a un momento, a determinadas experiencias vividas. Esto implicó un diálogo no solo de idiomas, sino entre culturas que en la historia han estado confrontadas y jerarquizadas por el colonialismo.

A la par del impulso de la investigación, se fueron explorando los significados de las palabras, para profundizar sentidos culturales. Desde este punto se definió que el concepto de seguridad, como lo entendemos en español, no tiene el mismo significado en la cultura ixil. K¨ujb´ab´k´u´l es el concepto que se aproxima y significa confianza. Esto habla de una noción presente en la cosmovisión indígena, en la cual, en algún momento de su historia, no hizo falta hablar de seguridad, porque la base de la relación social fue la confianza.

Sin ánimo de elaborar un relato romántico que pueda falsear las difíciles realidades que hoy enfrenta, no solo el pueblo ixil, sino la mayoría de los pueblos originarios en Guatemala y el continente, nos parece importante destacar que el colonialismo, como mecanismo presente en las dinámicas sociales del país, ha marcado con su impronta las experiencias de los pueblos, y ha obligado a generar conceptos que describan realidades opresivas y de subordinación de las poblaciones.

Así, la palabra utilizada para nombrar la violencia, y especialmente la violencia sexual, presente en las experiencias de las investigadoras comunitarias y en el municipio, es Okeb'e'm, que significa «invadir el cuerpo», expresión que alude al sentimiento, al impacto, más que al hecho literal. Los idiomas mayas, a pesar de más de 500 años de colonialidad, expresan una noción del mundo basada en lógicas diferentes a la modernidad impuesta desde la invasión hasta hoy.

Además de la coproducción del conocimiento, planteada como propuesta metodológica en el marco general del proyecto, se planteó la reflexividad, mecanismo que permite comprender la realidad desde la propia experiencia para analizar el contexto. A propósito de esta técnica, Rosana Guber argumenta que «el relato es el soporte y vehículo de esta intimidad» (2011, p. 17).

Durante la formación, las jóvenes reflexionaron y respondieron interrogantes sobre su historia personal. A manera de ejemplo, con respecto a la pregunta ¿Qué conozco de mí? hubo respuestas como la siguiente: «Que soy una joven que ha tenido tropiezos, pero ha logrado levantarse, aunque se encuentran distintos problemas.

Pero de ser fuerte, lo tendré, y me encanta estudiar, apoyar a los demás y sobre todo compartir con las demás personas».

Las «experiencias» personales y colectivas de las jóvenes hacen referencia a sus comportamientos, acciones, resistencias y sentimientos. Como dice Rosana Rodríguez (2009), la experiencia de la diferencia corporal y la reflexión sobre ella es lo que ha constituido la base de la emancipación de las mujeres. Es así como la noción de experiencia contribuye a explicar cómo se viven las opresiones, pero también las resistencias, las deconstrucciones, las respuestas y las acciones que tienen la potencia de transformar realidades.

La coproducción de conocimiento como planteamiento metodológico supuso retos vinculados a la necesidad de desmontar estereotipos etarios, académicos, de identidad étnica y ruralidad. La forma de lograr que las reflexiones colectivas fluyeran como conocimiento colectivo, partió de un proceso que consistió en dialogar las problemáticas, aplicar las técnicas (observación, entrevistas directas, grupos focales), analizar colectivamente la información obtenida, complejizarla, formular una propuesta reflexionada en colectivo y ubicarla en el análisis.

Lograr esto no fue sencillo. El hecho de que la investigadora académica sea una mujer adulta, de la ciudad, con estudios universitarios, mestiza –lo cual en Guatemala implica una relación de poder–, en un inicio puso el silencio como barrera y estableció una lógica maestra/estudiantes, de la que fue necesario hablar y luego romper para constituirnos en equipo y dialogar. Para ello, en las historias se usó la primera persona del singular para ir cultivando confianza y evitar el romanticismo en la relación. Debimos admitir toda esa historia de jerarquización y discriminación que nos atraviesa y valorar el proceso como una oportunidad de mirar la realidad con nuevas herramientas. Esto implicó, además, una reflexión del equipo sobre la necesidad de coproducir conocimiento a partir del diálogo de saberes, con el ánimo de situar también las voces de la investigadora y la coordinación.

La observación participante y activa de las jóvenes, en un ejercicio de introspección, llevó a reflexionar sobre lo que comunica el entorno a través del mural del parque, el árbol de la comunidad, el aire que respiramos, el perro asustado que busca comida en todos lados.

En términos conceptuales, y siendo Nebaj un municipio mayoritariamente indígena, retomamos en la metodología el buen vivir, propuesta política de reconstitución y transformación de los pueblos originarios, basada en acuerdos entre personas y con la naturaleza, sin jerarquizar ninguna expresión de vida.

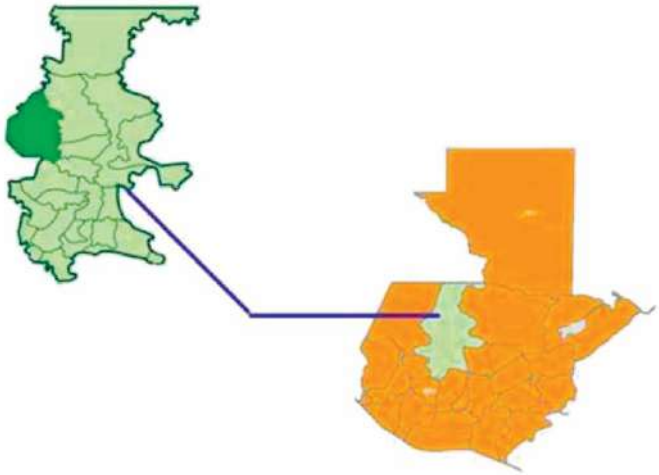
Nebaj: características territoriales y poblacionales

El nombre Nebaj tiene su origen en la palabra Na'Baj, que significa lugar de nacimientos de agua. Efectivamente, hablamos de un lugar abundante en su naturaleza, lo cual ha provocado que la lógica depredadora del capitalismo mantenga su mirada en este territorio. En ese sentido, las expresiones de violencia en Nebaj tienen características específicas vinculadas al potencial de la naturaleza del territorio.

La población de Nebaj es mayoritariamente maya/ixil, más del 76 % de los habitantes son niños, adolescentes y jóvenes. Un 80 % es población rural, campesina y comerciante (INE, 2014).

Estas características del lugar y la población provocan que en Nebaj la gente se exprese, de manera diferenciada, de los efectos de la violencia social, según las condiciones de sexo, género, étnico/raciales, edad, capacidades diferentes y potencialidades del territorio para la acumulación. Ubicado al norte del departamento de Quiché, Nebaj fue uno de los escenarios más devastados en los que se cometió genocidio contra la población mayoritariamente indígena, durante la guerra interna.

Mapa 3.1
Quiché-Nebaj



Fuente: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA, 2015).

Algunos de los problemas señalados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014), además de la pobreza que golpea principalmente a la población indígena, son los bajos niveles de escolaridad, condición relacionada con la limitada infraestructura educativa y el poco acceso de la población rural a estos servicios. Esta falta de acceso a la educación y posteriormente al trabajo, son factores de riesgo que pueden estar asociados al consumo temprano de alcohol y drogas, problemas señalados por las investigadoras comunitarias como una constante. El número de establecimientos educativos no satisface la demanda. Al mismo tiempo, el porcentaje de empleo es bajo, alrededor de 35 % de la población es económicamente activa, probablemente esta es una de las causas de los altos índices de migración en el municipio (INE, 2014).

La baja escolaridad, el 43 % en el área rural (PNUD, 2015-2016) también plantea el desafío de trabajar con la niñez escolarizada para institucionalizar programas de prevención de violencias, pero, al mismo tiempo, llegar a una población infantil y adolescente excluida del ámbito escolar. Las problemáticas sociales en Nebaj condensan las complejidades propias de la interseccionalidad de opresiones, concepto planteado por Kimberlé Crenshaw (1989) y replanteado con aportes de los feminismos latinoamericanos y decoloniales, por teóricas como Mara Viveros Vigoya (2016). Estos conceptos hacen referencia a la forma como convergen consustancialmente las opresiones, en personas sexualizadas y racializadas para la explotación, por sus características físicas y sus posibilidades de acceso a oportunidades económicas.

Diálogo entre espacio seguro y la red de la vida: Nociones desde la cosmovisión maya/ixil

Como vemos en el gráfico 3.1, la red integra tres perspectivas. En el centro están los elementos del cosmos como fuente originaria de vida. En el segundo círculo está todo lo que surge de esa fuente originaria: los seres humanos están en igualdad de estatus que otras expresiones de vida del entorno. En el tercer círculo están los elementos de las relaciones concretamente humanas, interconectadas desde lo sentipensante.

Las autoridades mayas, cuando explican esta red, señalan que su ruptura en cualquiera de las conexiones supone un daño, un quiebre de vínculos que requieren ser sanados personal, colectiva y socialmente.

Gráfico 3.1
La red de la vida. Buen vivir, Ti´chajil

Fuente: adaptación de imagen creada por la Asociación Femenina para el Desarrollo de Mujeres de Sacatepéquez (AFEDES), 2015.

Desde los primeros encuentros con las jóvenes investigadoras, se habló de los objetivos de la investigación en cuanto a la construcción de espacios seguros en el municipio. Siendo la mayoría de ellas indígenas, se propuso la búsqueda de perspectivas propias del pueblo ixil. Ese diálogo nos llevó a recuperar el planteamiento del buen vivir, Ti´ichajil en ixil, para los pueblos.

En el prólogo del texto *El Utziläj K'aslemal – El Raxnaquil K'aslemal, el buen vivir,* que contiene reflexiones colectivas de organizaciones mayas, mestizas y feministas que participaron en la Confluencia Nevo B'aqtun (2014), la doctora kaqchiquel, Aura Cumes, señala: «El Buen Vivir es un proyecto político de vida; es el proceso de satisfacción y bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio de la madre naturaleza y el cosmos para lograr la armonía» (p. 7).

En este texto se explican las características del buen vivir: integral, colectivo, cosmoconvivencia, complementariedad, libertad y derechos de la madre naturaleza, libre determinación de las personas y los pueblos, identidades, cuerpos, sexualidades y territorios libres, autonomía de las personas y los pueblos, cuidado de la red de la vida, promoción del placer, de la alegría y de las distintas maneras de expresarlo: artes, danza, ocio, recreación, salud, cosmocimiento sentipensante,

vida en plenitud. Todas estas características hacen parte de los elementos que integran la red de la vida.

En diálogo con sus familias, compañeras y compañeros de estudio y otras actividades, las jóvenes fueron profundizando la comprensión de la perspectiva del buen vivir, recuperando historias personales, familiares y sociales vinculadas a cada uno de los círculos de la red.

Durante estas conversaciones familiares y comunitarias surgió una reflexión: más que espacios seguros o prevención de violencias, el pueblo ixil requiere recuperar confianzas entre sí, las cuales han sido rotas como parte de las lógicas del sistema de acumulación capitalista, racista y patriarcal, de no reconocimiento de los pueblos y las personas indígenas como sujetos sociales de derecho. A través de la estrategia contrainsurgente, que fue implantada durante el conflicto armado interno, ocurrieron los despojos territoriales continuados, a la vez que se establecían las lógicas de consumo con el avance del neoliberalismo, y la penetración de los fundamentalismos de todo tipo que no reconocen el derecho a las diferencias de pensamiento o creencias.

Desde el Ti´ichajil, cuando se habla de seguridad, la palabra que se utiliza es K´uleb´al k´ul, que significa *confianza*. En ese sentido, la seguridad como vivencia se traduce en confianza en las personas de las familias, comunidades, escuelas y autoridades. Se habló del impacto en la confianza que tienen las agresiones contra la tierra, el territorio, el agua, el aire, los bosques y la relación con todos los seres del cosmos.

> Si esto no se cuida, la naturaleza también se defiende. No hay confianza de vivir en lugares donde se ha dañado la naturaleza cortando árboles, desviando ríos o sembrado con semillas que no son las de nuestros pueblos. También se necesita tener paz en la familia y no tener miedo a que me pase algo. Ser libres. Tener buena convivencia en la comunidad. Tener información (investigadora comunitaria, taller 2, 13 de febrero de 2018).

Al indagar por el sentido que contiene «que me pueda pasar algo», vimos que también refiere a la violencia sexual, un temor real de las mujeres en Nebaj. Al abordar esta problemática, la respuesta es el silencio y la negativa, tanto de familias como del Estado, y no se brinda información sobre salud sexual y reproductiva de manera laica, científica, con calidad y calidez. No solo en Nebaj, sino en la sociedad guatemalteca se considera que la información sobre sexualidad acelera el inicio de la vivencia compartida, lo cual se considera como «no bueno». Esto hace que las mujeres sean ajenas a los procesos de sus cuerpos, a su autodeterminación como personas y las vulnera frente a posibles agresiones sexuales. Esto rompe la red de la vida.

> Es importante cuidar nuestro cuerpo, una persona educada, responsable, segura de sí misma, con buena autoestima. Contar con el apoyo de los padres. Tener buena comunicación entre la familia, vivir en armonía, contar con los recursos económicos necesarios para cubrir necesidades básicas (investigadora comunitaria, taller 2, 13 de febrero de 2018).

El cuidado del cuerpo, para su apropiación en términos de autoconocimiento y construcción de autonomía, fueron temas abordados como una forma de vivir con confianza las diferentes etapas de la vida. Existe necesidad de reflexión sobre imaginarios que legitiman algunos hechos de violencia, tales como el acoso callejero o el acoso en centros de estudio y trabajo. Para las jóvenes, reconocer el peligro es una forma de sentirse seguras y con confianza.

Las personas participantes en los grupos focales, facilitados por las investigadoras, también hablaron del buen vivir como la posibilidad de «satisfacer necesidades, estar bien, no violencia». Pero la satisfacción de necesidades implica no solo los requerimientos físicos y materiales sino también emocionales. Todos ellos hacen parte de la confianza que el pueblo ixil interpreta como seguridad:

> Satisfacer necesidades sin recurrir a la violencia, tener el derecho de ser libre sin libertinaje, de amar y respetar, de ser amados y respetados. Que los padres tengan una comunicación con sus hijas y sus hijos, sin que falten los valores para mantener una biosfera de amistad y un ambiente social (entrevista a persona adulta).

La recuperación del concepto del buen vivir, de la cosmovisión originaria y especialmente desde el pueblo ixil para este proceso, han dado luces sobre el tema de espacios seguros desde una perspectiva más amplia e integral, que implica una complejidad que interpela las formas institucionales de abordar las problemáticas de violencia de manera simplista y demagógica.

Problemáticas generadoras de violencias

A pesar de la sencillez de algunas respuestas de las investigadoras y las personas participantes, las reflexiones advierten un mirar profundo[3] de las realidades desde la experiencia. En ese diálogo se llegó a la conclusión de que la pobreza y extrema

3 Categoría de análisis propuesta por la teórica lesbiana feminista y negra Audre Lorde (1984) que señala que las personas oprimidas son las únicas que tienen la capacidad de dar cuenta de la opresión que las atraviesa, desde el mirar profundo de su experiencia.

pobreza son los principales factores que generan la mayoría de las problemáticas vinculadas a la violencia que se vive en Nebaj. Pero, ¿por qué hay pobreza? El silencio fue la respuesta inicial, hasta que una persona dijo: «porque hay riqueza».

Parece una ecuación sencilla, pero no es la que aflora en los análisis de expertos, empresarios o el propio Estado. Esta visión se puede evidenciar de varias maneras como se describe a continuación.

Despojo territorial

Según las autoridades ancestrales (Ceto y Ceto, 2017), la pobreza es resultado del continuado despojo de territorios para la construcción de megaproyectos extractivos de capital transnacional y nacional que se han expandido en diversas regiones del territorio de Guatemala, incluida la región ixil. Esto ha generado confrontación en las comunidades, algunos empleos precarizados, aunque valga decir que la mayoría de esos empleos son para hombres.

El departamento de Quiché, en especial la región norte, se ha caracterizado por la presencia de megaproyectos, en su mayoría hidroeléctricos, como el caso del proyecto Xacbal (Chajul), Palo Viejo (Cotzal), La Vega I y II (Nebaj) y Xalala (Ixcán y Uspantán) (Environmental Justice Atlas, 2018). A pesar de su intención de inversión para el desarrollo, estos proyectos han provocado efectos socioambientales graves a nivel local: conflictividad, despojo agrario, violencia, criminalización de líderes sociales, trauma psicosocial, deforestación, estrés hídrico, pérdida de biodiversidad, fragmentación de ecosistemas, transformación de paisajes, entre otros. La acumulación capitalista basada en el despojo ha construido un Estado que lo legitima, sobre las bases de lógicas colonialistas, heteropatriarcales, racistas y misóginas.

Genocidio

El genocidio que vivió el pueblo ixil, particularmente las y los habitantes de los cantones y comunidades que conforman Santa María Nebaj, es una realidad histórica negada por sectores militares, empresariales y por los diferentes gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz. El juicio por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt y su responsable de inteligencia militar Mauricio Rodríguez Sánchez develó en su momento las estructuras de impunidad vigentes en las instituciones del Estado, tanto durante la guerra interna, como en la actualidad.

Este caso, como otros de la justicia de transición, puso al descubierto el contubernio entre Estado, oligarquía y poderes hegemónicos. La población maya fue la principal víctima de la estrategia de tierra arrasada que implementó el ejército como parte del Estado.

Según los informes, *Guatemala: nunca más* (ODHAG, 1998) y *Guatemala: memoria del silencio* (CEH, 1999), en esa etapa se registraron más de 250 000 personas asesinadas, 45 000 desaparecidas, 600 aldeas arrasadas y más de un millón de personas desplazadas.

Estas son cifras de los 36 años que duró la guerra, no obstante, una de las etapas más intensas fue la del gobierno de facto de Ríos Montt. El caso tuvo una sentencia condenatoria el 10 de mayo de 2013 (CALDH-AJR, 2013a). Aun así, diez días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) retrotrajo el proceso a una etapa inicial, obligando a que el mismo se repitiera. Esto, en términos simbólicos significaba negar a la población ixil, en su condición de sujeta, el derecho a la justicia. Esa decisión de la CC ratificó la naturaleza racista del Estado de Guatemala (CALDH-AJR, 2013b).

A pesar de ello, las personas sobrevivientes, testigos y organizaciones que los han acompañado, han asumido como definitiva la sentencia condenatoria del 10 de mayo 2013.[4]

El silencio generalizado sobre el genocidio ocurrido por parte del Estado y por la sociedad en su conjunto, sobre esta etapa de la historia, sobre la impunidad y la falta de justicia, ha generado en el pueblo ixil efectos psicosociales como la postergación de duelos, depresiones, enfermedades de las víctimas, testigos y hasta de familiares que no vivieron los hechos; pero han sido alcanzados por los efectos que tiene la violencia en varias generaciones. Guardar silencio implica la negación de los sufrimientos en las familias, en las comunidades y en el país.

En el *Informe sobre el abordaje psicosocial con personas que testificaron el caso genocidio* (ECAP, 2015), se concluye que la impunidad es vivida por los testigos como un nuevo impacto violento a su dignidad. Esta situación genera nuevos daños en unos casos y agudiza otros, deteriorando aún más la situación de salud mental de las sobrevivientes, sus familiares y la sociedad en general.

---

4 El hecho de que la sentencia fuera retrotraída por tres de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, fue un hecho que generó rechazo social y condena internacional al Estado de Guatemala. Debido a que la resolución de la CC no anulaba la sentencia, sino hacía retroceder el proceso, los diversos movimientos sociales reivindican y conmemoran la sentencia cada año desde 2013.

Vinculación de la historia a otros factores sociales, económicos y políticos que generan violencia

En el proceso de investigación se realizó el ejercicio de vincular el despojo y el genocidio con las violencias cotidianas: como la violencia en las familias, la violencia sexual, el despojo de recursos, el narcotráfico, las cuales afloran en el municipio y fue relativamente sencillo enlistar, no así vincularlas a la historia y a otros factores sociales, culturales y económicos.

En conjunto se reflexionó sobre cómo las adicciones constituyen una herramienta[5] del sistema[6] que se caracteriza por lógicas de acumulación patriarcal y racista, para la enajenación de las personas, principalmente jóvenes, de sus realidades y de la toma de conciencia que haga posible actuar sobre ella. La presencia de estructuras de narcoactividad, crimen organizado y trata de personas, la mayoría de veces coludidas con autoridades estatales, es un generador de violencia y terror que rompe la confianza y limita la vida de las personas desde la lógica armónica del Ti´ichajil.

Las jóvenes nombraron como *machismo,* aquello que desde el movimiento de mujeres y feminista se ha nombrado como misoginia, y que implica los diferentes hechos de violencia contra las mujeres, principalmente la violencia sexual y los impactos emocionales, físicos y sociales que tiene en niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. La misoginia, normalizada mediante imaginarios sociales que la legitiman, es un generador del temor que viven las jóvenes en Nebaj al realizar sus actividades cotidianas: ir al instituto, a la iglesia, practicar deporte o sencillamente salir con sus amistades.

Los continuos hechos de violencia también tienen su origen en la corrupción, como elemento dinamizador para la compra de voluntades de autoridades estatales.

---

5 Las elites de poder requieren las adicciones como herramienta de control social para mantener a la población, en este caso a la juventud, en total alienación con respecto a su realidad. En ese sentido, no es una consecuencia, es una herramienta de control social.

6 Desde la sociología con 'sistema' nos referimos a 'sistema social', para dar a entender el conjunto de estructuras de relación e interacción de un grupo social. Mario Bunge (1995, 2012) habla de la sociedad como sistema social, definiéndolo como la estructura conjunta de diferentes subsistemas concretos (económico, político, cultural, ecológico, etc.), en donde la interacción y el intercambio entre los mismos, así como con su entorno, son los que determinan la forma y el contenido de los elementos y las redes de relacionamiento. En su totalidad, un sistema social presenta capacidades adaptativas, dinámicas e integrativas, a diferentes escalas tanto espaciales (territoriales) como temporales (históricas).

Afecciones e impactos de las violencias en las jóvenes y sus comunidades

De las violencias que vive la población del municipio, las jóvenes identificaron a las personas más afectadas y también a algunos responsables. La niñez y la juventud, y en especial las mujeres jóvenes han sido vulneradas por la pobreza, que las ha hecho aceptar empleos precarizados en lugares peligrosos y que las exponen a vivir diferentes formas de violencia. Los jóvenes hombres son amenazados por las estructuras criminales para que se conviertan en expendedores de droga o sicarios, bajo la amenaza de eliminar a sus familiares. También, las familias de migrantes, en especial las personas adultas mayores, han sido víctimas de extorsión.

En el análisis con las jóvenes fue muy importante no hacer una división simplista entre «buenos» y «malos». En varios casos, integrantes de las familias, principalmente hombres (padres, tíos, hermanos mayores) ejercen violencia contra mujeres y contra niñas y niños, cuando se les limita el derecho a la educación a las niñas.

Se mencionó a las madres violentas con sus hijas e hijos y se hizo la reflexión de cómo las mujeres tienen el mandato patriarcal del control social, principalmente sobre sus hijas. Esa es también la razón por la que muchas veces no haya diálogo entre madres, hijos e hijas, sobre casi ningún aspecto, menos sobre sexualidad u otros procesos corporales como la menstruación. La mayoría de las jóvenes en Nebaj ha vivido la menarquia con susto y desconocimiento de un hecho biológico que marca una etapa de sus vidas.

Aquí se habló de cómo en la antigüedad, desde el Ti´ichajil, las abuelas y las madres entraban al temazcal[7] con las jóvenes para hablarles del cuerpo y sus procesos. La menstruación se había entendido como una potencia de las mujeres y no como hoy en día que se asume como suciedad, ocultamiento y amenaza por la posibilidad de un embarazo. La ruptura de este vínculo con el conocimiento ancestral es un generador de violencia, principalmente contra las adolescentes.

Los generadores de violencias continuadas en el tiempo y el espacio han impactado en la configuración social de Nebaj. Las investigadoras comunitarias y las personas participantes reflexionaron sobre algunos de los hallazgos.

---

7 El temazcal es un espacio que evoca el útero materno. Es una especie de baño ritual de purificación. Kaqchiquel Emma Chirix (2009) señala que también es un espacio para compartir y de diálogo familiar y social.

Migración

La pobreza, la falta de acceso a los derechos, la violencia, los bajos niveles de escolaridad, el desempleo, las extorsiones por parte de maras, el narcotráfico y las redes de trata, han provocado que Nebaj se convierta en uno de los municipios de mayor expulsión de personas migrantes, mujeres, hombres y niñez.[8]

Casi en todas las familias de las investigadoras está presente la migración, no siempre como una historia de éxito, sino que, en algunos casos, como un hecho de profundización de los impactos de la violencia. Los procesos migratorios en las familias y comunidades de origen se viven con angustia e incertidumbre por las violencias que se asumen como certeras en tránsito y destino. Ausencias, incertidumbres, desapariciones en ruta, repatriaciones todos son hechos psicosociales que están en proceso de reconfiguración, casi sin apoyo del gobierno central o los gobiernos locales.

En Nebaj, ECAP atiende a niños, niñas y jóvenes retornados, cuyos casos develan las condiciones a las que se enfrenta la población migrante. También reflejan la indiferencia y responsabilidad del Estado y de las propias comunidades en la profundización de estigmas. Por ejemplo, cuando hay algún retorno, por las causas que sea, y como efecto de las construcciones sociales de género, sobre las mujeres se cierne la sospecha de que «algo» le pasó y, por tanto, ya no es una mujer «confiable». Con base en el conocimiento de la realidad, las comunidades asumen que ha sufrido violencia sexual; por lo tanto, no se le considera una mujer decente, lo que implica rechazo, estigmatización, y es conocido que seis de cada diez mujeres migrantes sufren violencia sexual.[9] Mientras tanto, el retorno de los hombres casi siempre conlleva un aura de «heroicidad», puesto que la construcción social de género masculino implica ser valiente, emprender travesías y si estas implican peligro es mayor el reconocimiento de la masculinidad, contrario a lo que sucede con el género femenino (ECAP, 2018).

Violencia como relación social

La violencia permanente de actores estatales y paraestatales ha provocado cierta descomposición social que ha calado en la población. Las juventudes se han con-

8 En los últimos seis años se calcula que han salido del país un promedio anual de 110 676 guatemaltecos (303/día). El 94,3 % de estas personas tienen entre 18 y 40 años de edad (OIM 2017). Según la OIM, en el departamento de Quiché existen 257 103 personas con vínculos familiares con migrantes en el extranjero. Estos reciben remesas de aproximadamente 62 150 personas en el exterior, equivalentes a $351 396 961 para el año 2017.

9 Seis de cada diez mujeres son violadas en su trayecto migratorio (Belausteguigoitia y Melgar, 2008).

vertido en blanco de ataque, pero también en factor que reproduce las violencias. Las y los jóvenes que participaron en el proceso de investigación, como parte de las comunidades señalaron que:

> Los jóvenes nos hemos convertido en violentos. Si en la escuela nos tratan mal, respondemos mal. En la casa los padres corrigen severamente por malas acciones. Hasta en el deporte también se dan las reacciones violentas. También los estudiantes, cuando salen de recibir clases, en vez de ir a su casa, salen hacia el parque a pelearse, discutir solo porque dejan a sus novias o le quitan a su novia y generalmente hay presencia de los policías, pero no hacen nada (joven de comunidad).

La desconfianza tanto entre jóvenes, como hacia las instituciones del Estado y las propias autoridades ancestrales es el principal impacto. Según estas últimas, esto daña al cuerpo social comunitario. Las investigadoras reflexionan que «la violencia es como la forma de relacionarse que ahora tiene la gente».

Las violencias y acosos en la escuela, por parte de maestros y maestras, impactan en el ánimo con el cual se asume cotidianamente este espacio que debería ser para fortalecer a las jóvenes en sus búsquedas de aprendizaje. Estos hechos casi siempre quedan en silencio porque se dan en el marco de una relación de poder.

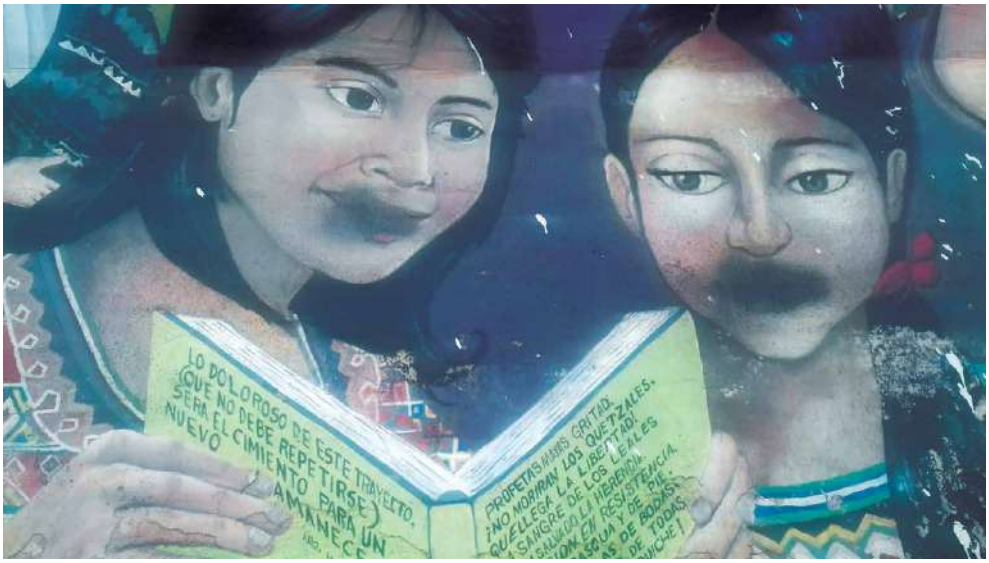
También hay silencio social con respecto a la historia de violencia y guerra. Muchas personas adultas, responsables de estos jóvenes, mujeres y hombres, han considerado que esto les evita sentir dolor.

Así, entre la violencia y el silencio, crece la normalización de algunas condiciones de vida. En una de las entrevistas a personas que interactúan en el parque de Nebaj, una de las jóvenes le preguntó a un niño de doce años que limpiaba zapatos, qué pensaba de la «seguridad». Como respuesta, el niño se refirió a su trabajo como limpiabotas, a la voluntariedad con que lo ha realizado y a la satisfacción que le da no depender de nadie para apoyar a su familia. Hay voluntad de sobrevivir, pero se normalizan las condiciones precarias de vida. En colectivo reflexionamos que sobrevivir no es lo mismo que vivir. La pobreza rompe la red de la vida en cuanto a la dignidad de las personas, pues las jerarquiza en términos de acceso a recursos y oportunidades.

Violencia contra las mujeres

En el mural que permanece en el parque de Nebaj y que fue realizado posteriormente a la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se aprecia como las figuras femeninas han sido simbólicamente silenciadas con manchas oscuras en sus bocas, las cuales fueron pintadas desde el anonimato.

Fotografía 3.1



Fuente: fotografía de Maya Alvarado. Fragmento del *Mural de la memoria.* Nebaj, Guatemala. 2018.

Las jóvenes investigadoras se preguntaron: «¿Por qué están borradas esas imágenes?» y, más que una respuesta, las preguntas fueron creciendo, tomando conciencia de las exclusiones y de la discriminación de las mujeres. «¿Por qué eso es normal para la comunidad?». Esa interpelación fue dirigida más hacia la comunidad, en donde evidentemente existe el machismo y el rechazo a que las mujeres formen parte del relato histórico de la comunidad. La toma de conciencia sobre este silencio impuesto supuso un nuevo lugar de enunciación en este proceso, puesto que es un conocimiento que no puede obviarse a la hora de continuar la búsqueda de información y el análisis.

El silenciamiento no queda allí. En 2018, mientras se realizaba la presente investigación, fueron asesinadas dos lideresas de Nebaj: Juana Ramírez Santiago, comadrona de la Red de Mujeres Ixiles y luchadora social y Juana Raymundo, enfermera del Centro de Salud, activista de Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), organización que, entre otras demandas, promueve la nacionalización de los servicios de energía eléctrica. Ambas reivindicaban la salud, el bienestar de las personas y el buen vivir de los pueblos. Los dos femicidios constituyen un hecho de violencia extrema y un mensaje de terror a los liderazgos de mujeres en el municipio y en el país. Otras violencias que viven las mujeres fueron descritas por personas participantes en el proceso.

> En nuestro municipio las mujeres son maltratadas por sus esposos cuando llegan borrachos a sus hogares. No cuentan con los recursos necesarios para atender las necesidades. En ocasiones ya no cuentan con comida para los niños y esta es una violencia. Los padres no velan por sus hijos y así sucesivamente son violentados sus derechos de tener una vida digna (entrevista mujer participante).

Una de las violencias que viven las mujeres tiene relación con las herencias.

> Otra discriminación que vivimos es que nuestros padres creen que porque somos mujeres no tenemos derecho a gozar de una herencia patrimonial, porque en algún momento nos casaremos y nuestro esposo deberá darnos. Por esta idea solo a los hombres les dan herencia de tierras o de otra clase (entrevista mujer participante).

La vestimenta indígena, un símbolo cultural de identidad, pertenencia y resistencia, principalmente la de las mujeres, puede convertirse en herramienta de agresión, debido al racismo. Por esta razón, algunas mujeres y jóvenes de Nebaj han optado por no utilizarla, lo cual se vincula a la inseguridad, o más bien a la desconfianza de ser quien se es.

> [Hay] discriminación hacia las mujeres por el uso del traje. En lugares como la capital, por ejemplo, ya nos conocen por nuestra vestimenta y algunos consideran que es bonito, pero la mayoría nos consideran como personas inferiores. Como es de nuestro conocimiento, nuestro municipio ha pasado por procesos históricos difíciles como el conflicto armado interno. Nos discriminan porque creen que valemos menos y por esta razón varias señoritas ya no usan su traje (entrevista mujer joven participante).

La decisión de no utilizar la vestimenta indígena supone un fuerte impacto emocional. El traje de las mujeres indígenas de las diferentes regiones no es solo una prenda de vestir. Los llamados huipiles suponen la mayoría de las veces un relato, un mensaje de resistencia vinculado al cuidado colectivo de todos los seres que integran la red de la vida y es una evocación de la cosmovisión originaria. El oficio de tejedoras de las mujeres indígenas, y también de muchos hombres, constituye una reivindicación cultural.

Violencia sexual

La violencia sexual contra mujeres, y en especial mujeres indígenas, constituye un acto de control y dominación, que forma parte de la invasión colonial, el despojo territorial y la contrainsurgencia en la historia reciente. En los informes de

recuperación de la memoria histórica (Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 1999, e Informe Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, 1998), en un inicio este crimen no fue contemplado como crimen de guerra, constitutivo de genocidio, de ahí que las redacciones finales de los mismos no contengan recomendaciones específicas para la reparación digna e integral. No obstante, frente a la abrumadora cantidad de relatos y los efectos devastadores de este crimen, las personas responsables de ambos informes redactaron capítulos de análisis de los hechos, y admitieron no haber previsto una metodología desde el inicio y, por tanto, la existencia de un subregistro.

Las organizaciones de derechos humanos, de mujeres y feministas señalan que existe un *continuum* de la violencia sexual. A nivel nacional, los delitos sexuales se han incrementado en los últimos ocho años, según las evaluaciones médicas de reconocimiento sexual que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) a víctimas de dichos delitos, a requerimiento del Ministerio Público y el Organismo Judicial (INE, 2017).

En esa misma línea, los datos de 2016 indican que el 8 % de las víctimas tenían entre 0 y 6 años de edad, 15 % entre 7 y 12,36 % entre 13 y 17, y 13 % entre 18 y 29 (INE, 2017). La violencia sexual es un delito del que mayoritariamente son víctimas las mujeres, las jóvenes y las niñas. También hay casos de hombres violentados sexualmente, principalmente por parte de otros hombres.

Las personas participantes en el proceso de investigación señalaron que, en la actualidad, esta sucede, entre otros factores, por falta de comunicación de padres a hijas e hijos.

La ausencia de comunicación implica la ausencia de confianza. El silencio en las familias con respecto a los alcances sociales de este delito rompe vínculos emocionales y con la comunidad. Aquí se pone el estigma por encima de la emoción de la persona que lo haya vivido y relega su capacidad de sobrevivencia, la vivencia plena de su sexualidad y la apropiación de su cuerpo y de su vida.

Embarazos en niñas y adolescentes

Según Prensa Libre, entre enero y febrero de 2019, a nivel nacional se reportaron 456 nacimientos de madres entre los 10 y los 14 años. Según esos números, cada día, siete niñas se enfrentan a la maternidad producto de una violación, una niña cada tres horas. De estas cifras, Quiché es uno de los que tiene las cifras más elevadas: 43.

No se tiene registro de cuántos de esos casos sucedieron en Nebaj y las instituciones admiten un subregistro. La ausencia de datos es una de las problemáticas para evidenciar.

En 2017, en Quiché nacieron 2 596 bebés de madres entre los 10 y los 19 años, según el Registro Nacional de Personas (RENAP, 2017). Ese mismo año, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizó 7 335 exámenes a mujeres jóvenes que denunciaron ser víctimas de abuso sexual. En esta última cifra no existe un desagregado por departamento y menos por municipio. La cifra también da cuenta de un subregistro, puesto que, en el área rural, esto no se denuncia.

La situación de las niñas y adolescentes embarazadas ha suscitado, por el lado de las organizaciones de mujeres, la necesidad de impulsar leyes, programas e instituciones que hagan posible que haya resarcimiento para las niñas y las jóvenes, víctimas de violencia sexual, embarazadas.

Por otro lado, los fundamentalismos religiosos y sus operadores en el Congreso de la República están haciendo avanzar leyes regresivas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Algunos de los hechos que suceden en Nebaj, en el marco de las familias son:

> Hay padrastros que se aprovechan de sus hijastras. También hay padres de familia que se aprovechan de sus hijas y las mamás no les ponen atención diciéndoles que son mentirosas. También la violencia sexual se vive entre hermanos donde los hermanos violan a sus hermanas (joven participante).

En este punto, las investigadoras han interpelado a las comunidades y a sus círculos cercanos, lanzando interrogantes que les saquen de la calma del relato: ¿Qué podemos hacer por las y los jóvenes? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Por causa de estas situaciones hay suicidio? Preguntar y volver a preguntar, conlleva una rabia, una desesperación que intenta buscar «una solución» en el colectivo que reconfigure la red de la vida.

Juventud y suicidio

El suicidio en jóvenes es una problemática más común de lo que la sociedad y el Estado reconocen. Las causas son variadas, pero cuando sucede en mujeres jóvenes, se presume que el abuso sexual continuado y el embarazo temprano pueden estar asociados al suicidio.

El propio INACIF, encargado de proporcionar datos sobre las causas de muerte, no tiene el suicidio en su nomenclatura oficial. No obstante, cada vez que aparece

muerte por suspensión, esta es la forma de registrar los ahorcamientos asociados al suicidio. Así, a nivel nacional, en 2017 se reportaron 423 muertes por suspensión, de las cuales 103 eran de mujeres.

En el proceso de investigación, este tema fue resaltado, tanto por personas adultas, como por jóvenes de ambos sexos.

> En Nebaj, hay varios jóvenes e incluso niños de 9 años que están muriendo. Yo he podido ayudar a una joven a salvarle la vida, porque se envenenó y la llevamos rápido al hospital. Ella estaba en el último año de su carrera, la mamá estaba en una situación económica difícil; su papá en los Estados Unidos. No solo tenía problemas en su casa. En el colegio la trataban muy mal, ella era una chica muy inteligente, pero allí el asesor de práctica la trató mal. Resulta que, al poco tiempo de eso, otra amiguita de ella también intentó suicidarse, ella como consecuencia de la prostitución forzada, que viene por la falta de oportunidades de trabajo y oportunidades de estudio (adulta participante).

En el grupo de investigadoras también hay jóvenes que han compartido experiencias dolorosas que les está costando superar. El contexto no ayuda, pero las posibilidades de estudiar y hacer algo más con sus vidas, diferente a casarse y tener hijos, abren expectativas. La reconstitución del T´ichaj´il para interconectar con la vida, desde la propia cultura, supone una herramienta infaltable.

Adicciones y trata de personas

Alcoholismo

En Nebaj hay proliferación de cantinas, debido al exceso de consumo de alcohol por parte de la población, especialmente masculina, aunque cada vez más mujeres. Estos lugares muchas veces están manejados por redes de trata. Las jóvenes atrapadas allí sufren violencias.

En el equipo de investigación se reflexionó sobre este tema. Se mencionó que las mujeres viven violencia en las cantinas y que ninguna mujer debería ser obligada a tener este tipo de trabajo, pero «lamentablemente ante la necesidad, por no tener una profesión, por no tener una oportunidad, deben buscar este tipo de trabajo», señaló una de las investigadoras. «Ninguna cantina garantiza un trabajo honrado y las mujeres son abusadas sexualmente, explotadas, discriminadas y maltratadas al no cumplir con el trabajo que se les obliga a hacer» (entrevista hombre participante).

El tema de la trata de personas es complejo y las miradas de las investigadoras comunitarias también. No toda la población visibiliza los alcances que puede tener

y los peligros que implica para las jóvenes, tanto permanecer en las cantinas como abandonarlas. A veces prevalece el prejuicio social.

> Yo conozco a una niña que se prostituye en una cantina, yo le ofrecí una oportunidad de trabajo, pero ella no aceptó porque considera que el mismo es muy difícil de realizar, pero también es posible que ya no quiere darse la oportunidad de tener una vida mejor o porque ya se acostumbró a vivir así, ella no aceptó el trabajo (hombre adulto).

Ante estas situaciones, unas veces prevalece el prejuicio y otras la indiferencia. El imaginario de que «se acostumbró», resulta a veces un adormecedor de la conciencia.

> En las cantinas se ven varios tipos de abusos y nos damos cuenta, pero ¿qué pasa? Nos hacemos los locos, los ciegos y decimos «que miren qué hacen», pero no debe ser así. En todo esto de la violación en las cantinas no solo se brinda servicio sexual, sino que también las obligas a hacer otros trabajos. Los dueños se mantienen buscando la manera de buscar a más niñas (entrevista hombre participante).

En su informe 2015, el Procurador de Derechos Humanos señaló que la persecución del delito de trata de personas es uno de los retos del Estado guatemalteco, cuyos esfuerzos también deben hacerse en el ámbito de la prevención. En 2015, el Ministerio Público registró 536 casos, el 70 % de las víctimas eran mujeres. Del total, el 22 % tenían entre 13 y 17 años, y el 11 % entre 18 y 29 años. El 6 % de las víctimas de este delito son de Quiché, con respecto al departamento de Guatemala con 37 % del total (INE, 2017).

Las investigadoras comunitarias, identifican vínculos entre autoridades y empresas. Ellas tienen conciencia de la responsabilidad de las primeras en la acción devastadora de las segundas. Se refieren principalmente a empresas que comercializan licor y drogas, pero en el diálogo para el análisis también se señaló a las empresas que despojan territorios.

Las jóvenes elaboraron preguntas para las autoridades, en una práctica de interpelación que permitió conocer las molestias que las mueven: ¿Por qué el alcalde permite que haya cantinas? ¿Qué se siente ser alcohólico? ¿Por qué hay mujeres alcohólicas? ¿Qué vínculos hay entre autoridades y empresas? Aunque son pocas preguntas, todas apuntan al cuestionamiento de una realidad que se confronta cotidianamente, pero que no es asumida por ellas como «natural». Las preguntas de las jóvenes explicitan curiosidad por emociones o experiencias, crítica a la autoridad electa, deseos de profundizar conceptos.

> Ni las autoridades pueden controlar la violencia porque se venden a quienes tienen el poder e incluso podríamos decir que ellos alimentan la violencia. Para los jóvenes vivir en esta sociedad es difícil, porque, aunque un joven quiera hacer un cambio, las mismas personas poderosas ven la forma de destruirlo. Se dice que la educación es un elemento importante para el cambio, pero sucede que la mayoría no puede estudiar por falta de oportunidades (entrevista joven participante).

Drogas

La ubicación de Nebaj hace que sea un municipio ideal para el narcomenudeo. El consumo de drogas por parte de la población, principalmente jóvenes, es una de las problemáticas señaladas por las investigadoras, el cual indagaron en el proceso de investigación.

> En cuanto a la venta de drogas aquí en Nebaj, hay varios motociclistas que reparten drogas y me doy cuenta y me pregunto: ¿Por qué las personas no hacen o dicen nada? O se hacen los locos, porque hay motociclistas que van bien tapados, con guantes negros, pasamontañas, cubiertos con ropa negra y con motocicletas. Todos los días a las siete en punto de la mañana, por mi cantón empiezan a distribuir la droga. En algunas ocasiones yo lo manifesté en reuniones que tenemos, y digo «¿Qué hacemos nosotros para evitar que esto siga sucediendo?» (investigadora comunitaria).

La mayoría de estas problemáticas, según las jóvenes investigadoras y las personas participantes en la investigación, tienen su origen en la *pérdida de valores.* Al profundizar sobre por qué sucede esto, varias de las personas señalan que:

> Las condiciones de pobreza y extrema pobreza obligan a las mamás y a los papás a salir a trabajar y dejar a los hijos solos, y eso los expone a que otros jóvenes que están en «malos pasos» se les acerquen. Por eso hay alcoholismo y drogadicción y las patojas quedan embarazadas (entrevista adulta participante).

En los diferentes testimonios hay insistencia en adjudicar la responsabilidad de las violencias y otras problemáticas sociales, a la ausencia de valores. La reflexión realizada es que no es tan simple de resolver y hace falta profundizar. El alcoholismo y la drogadicción son problemas más complejos que solo la ausencia de valores. La frustración que provocan las condiciones sociales, la ausencia de horizontes para la realización de una vida digna, los duelos silenciados, las violencias continuadas, en la historia personal y social, tienen impactos en la autoestima y el autorreconocimiento de nuestro valor como seres humanos. Como expresó una de las investigadoras comunitarias, *«Es importante pensar sin ser simplistas».*

Intervenciones del Estado y otros actores

La seguridad para la población urbana, mestiza/ladina está más vinculada a salvaguardarse de actos delincuenciales, sin que haya una mirada integral que vincule lo histórico, únicamente mira efectos sin analizar las causas.

En ese sentido, los indicadores de seguridad del país, especialmente los de la última década, así como los riesgos, vulnerabilidades y amenazas latentes, ponen de manifiesto que los esfuerzos del Estado han sido insuficientes para transformar las condiciones estructurales, que directa o indirectamente generan diversos tipos de violencia y vulneración de derechos relacionados con la seguridad.

En el municipio de Nebaj funciona una red de derivación en la cual participan instituciones del Estado vinculadas a la atención y prevención de violencia contra las mujeres (Ministerio Público, juzgados, Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil), en diagnóstico realizado funcionarias y funcionarios de ECAP (2018), daban cuenta de las dificultades internas para hacer frente a la problemática de inseguridad.

A pesar del compromiso de varias de las personas que trabajan en el Estado, las lógicas que prevalecen están permeadas por la burocracia y la corrupción. En algunos casos, hay dificultad para la coordinación interinstitucional, en otros, la amenaza de actores del crimen organizado impide el cumplimiento de funciones. Las condiciones de trabajo de quienes están vinculados a esta problemática no son las mejores, existe insuficiencia de personal, la mayoría de ocasiones reciben casos muy duros y no tienen algún mecanismo de atención psicosocial que les ayude a sobrellevar los impactos de los eventos que deben atender.

En términos de infraestructura y equipo también tienen problemas. Las instalaciones no son las más adecuadas, los vehículos son insuficientes para garantizarle a la población, en este caso las mujeres, el resguardo de su seguridad personal y familiar.

Pero en realidad, la dificultad mayor está en los imaginarios que legitiman las violencias. El peso de la colonialidad patriarcal y neoliberal, como sistema de dominación, está vigente no solo en Nebaj sino en todo el país. En la actualidad, Guatemala experimenta un proceso regresivo en cuanto a garantías constitucionales de seguridad, en términos del derecho a la organización y también a las expresiones diversas de género. Todo esto operado por funcionarios del Estado.

La inequidad y exclusión, la conflictividad social, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, las acciones delictivas de pandillas y grupos armados ilegales; la trata de personas, el sicariato, el secuestro, la extorsión, el contrabando y

el fraude fiscal; las debilidades del sistema de seguridad y justicia y los altos niveles de impunidad y corrupción, entre otras, son situaciones que no permiten una vida digna y segura, por tanto, requieren un abordaje estratégico del Estado a corto, mediano y largo plazo, en el marco de la implementación de sus políticas sociales y de seguridad.

Además de las instituciones del Estado, existen otros actores que intervienen en este contexto. La Alcaldía Indígena de Nebaj es una instancia creada mediante el artículo 55 del Código Municipal que obliga al gobierno del municipio a reconocer, respetar y promover dichas instituciones de los pueblos indígenas. No es parte de la institucionalidad del Estado, pero es un actor importante en el municipio. Logró construir una estrategia de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes, la cual contempla un plan discutido con instituciones del Estado que, de implementarse, podría ser un ejemplo para reducir el consumo de alcohol en la juventud. No obstante, la estrategia no visibiliza las posibles causas que llevan a tantas personas jóvenes, mujeres y hombres, al consumo de alcohol. Tampoco se visibilizan los vínculos de algunas cantinas con redes criminales relacionadas con la trata de personas o el menudeo en la venta de droga.

Las investigadoras comunitarias identificaron algunas acciones de la institucionalidad local que han beneficiado o afectado a la comunidad. Por ejemplo, reconocen positivamente el accionar de la Alcaldía Indígena en el tema de cantinas; no obstante, señalan que el alcalde municipal, que sí es institución estatal, toma alcohol, por lo cual consideran que «a las autoridades les interesa el dinero, pero no les preocupan las y los jóvenes, por eso hay secuestros y desapariciones de personas» (investigadoras comunitarias, taller de análisis, junio de 2018).

Otros temas que mencionaron las jóvenes es la ausencia de justicia, lo cual se relaciona no solo con la actualidad y las altas tasas de impunidad en hechos de violencia, sino con la historia reciente que se vincula a la guerra interna. La mirada de las jóvenes resulta un emplazamiento a la demagogia local, el cual sigue sin respuesta.

Visiones de seguridad e iniciativas de la comunidad

Las experiencias dan cuenta de la confrontación de visiones que prevalece en las acciones de diálogo por la defensa del territorio. Comunidades, Estado y empresas tienen perspectivas diferentes sobre la instalación de megaproyectos, por lo que ha habido esfuerzos por entablar diálogos, con ánimo de evitar la violencia de las empresas y el Estado.

En 2012, por ejemplo, la empresa de capital italiano ENEL y las autoridades ancestrales no lograron ponerse de acuerdo con respecto a la construcción de una hidroeléctrica en territorio ixil. El diálogo tuvo lugar en un salón de la escuela San Felipe Chenlá. Allí se congregaron nueve voceros de las comunidades indígenas y varios representantes de cada una de estas, sumando más de cien personas. Por parte de ENEL había dos funcionarios y una asesora. Había una mesa para los testigos de honor y otra mesa destinada a los observadores, entre los cuales había periodistas afines a las comunidades. Unas bocinas permitieron que los pobladores se congregaran en la cancha de básquetbol de la escuela, pero no podían entrar y escuchar lo que se decía en el salón.

Para ENEL, la presencia de las comunidades resultó amenazante por lo que pidió que las negociaciones se realizaran a puerta cerrada en un terreno neutral, con un limitado número de representantes de las comunidades. Miguel de León Ceto explicó su rechazo absoluto a estas propuestas: «A nosotros, como indígenas, no nos gusta hacer las cosas en secreto. Una de las principales razones por las cuales queríamos un diálogo público y abierto, era para que la gente no sintiera que estábamos pactando a espaldas de ella, sin el conocimiento de ella» (Escalón, 2012).

Cuando ENEL quiso dar una prueba de buena fe, en la forma de un significativo lote de láminas, la discusión se complicó porque la empresa solo contemplaba repartirlas entre las comunidades dentro del área de influencia que ellos definieron, y las comunidades rechazaron esto tajantemente: «No conocemos área de influencia, sólo conocemos Cotzal. El beneficiario tiene que ser Cotzal porque ninguna comunidad tiene potestad sobre los ríos», dijeron (Escalón, 2012). La confrontación de dos significados para el concepto «área de influencia», habla del choque de dos formas de interpretar el significado de «comunidad». La empresa solo puede ver el área de influencia de «su» proyecto. La comunidad se ve a sí misma integrada en una red que responde al T´ijachi´l. Esa red no puede ser dividida por paliativos que profundizan las divisiones y las jerarquizaciones sociales.

Acciones comunitarias para la construcción de confianza

Con respecto a todo esto se han presentado iniciativas y acciones comunitarias para la construcción de confianza. Aunque la tradición cultural ha sido evidentemente impactada por lógicas coloniales, el resguardo parcial de la tradición oral ha hecho posible que la población ixil mantenga formas internas de resolver conflictos, tales como el ejercicio del consenso, aunque deba trabajarse por largos períodos de tiempo, el respeto a la palabra, el acuerdo entre personas y con la naturaleza. Las

autoridades ancestrales intentan preservar varias de ellas, pero la modernidad, el ejercicio de poder dominante de empresas e instituciones estatales les confrontan y amenazan. Diego Ceto, una de estas autoridades, ha hecho referencia a la historia del pueblo ixil de esta manera.

> Los ixiles venimos de Petén y nos asentamos en Ilom hace 2.500. Los ixiles hemos sido los últimos que invadieron. La primera invasión realizada por Pedro de Alvarado hace más de 500 años; la segunda invasión en 1870 por la producción del café; en 1980 la invasión del conflicto armado interno; la cuarta invasión finalizando el conflicto armado, mal llamada invasión del «desarrollo» con el pretexto de que «Hay que sacar a los indígenas de la pobreza». La región fue invadida por 70 ONG y 170 iglesias evangélicas, «hay que rescatar almas». La quinta invasión desde el año 2010 para acá por mega-proyectos [sic], que «por la guerra no habían podido entrar antes». Ya se estableció la tercera hidroeléctrica en el ixil. La lucha que hacemos ahora es en contra de los megaproyectos, La Vega 1, la Vega 2 y Las Brisas, es por ello que estamos preparando la primera consulta vinculante (Ceto y Ceto, 2017).

La presencia de estas empresas para la construcción de hidroeléctricas en el territorio no solo ha provocado despojo, sino también división comunitaria, puesto que algunas personas están de acuerdo con los llamados megaproyectos, debido a que estos generan empleos, aunque la mayoría de ellos son precarizados y son plazas temporales que no garantizan estabilidad laboral ni prestaciones.

Una de las formas de construcción de espacios de confianza dialogados entre las investigadoras comunitarias y con los actores clave, es la recuperación de esas cosmovisiones que comprenden que un conflicto es parte de las diferentes maneras de interpretar la realidad de las personas, pero para llegar a un acuerdo existe el diálogo, tal como se relata en el Popol Vuh, libro sagrado de los Quichés.

Alcaldía Indígena de Nebaj

No todas las investigadoras comunitarias están de acuerdo con todas las actuaciones de la Alcaldía Indígena, y eso es normal porque hay temas como el machismo y el adultocentrismo que están presentes. Aun así, es necesario reconocer que es la única instancia que ha intentado accionar seriamente para el cierre de cantinas.

El Comité Municipal de Desarrollo de la Alcaldía de Nebaj, a instancias de la Alcaldía Indígena, ha consolidado la Comisión de Prevención de la Violencia. Ambos han trabajado en el proceso de construcción de dos instrumentos importantes: La Política Municipal de Prevención de la Violencia, en proceso de revisión,

y un Reglamento sobre Bebidas Alcohólicas para el territorio municipal, que ha sido publicado en el Diario Oficial. Ambos instrumentos establecen la necesidad de prevenir y sensibilizar a la población sobre el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, lo cual, no solamente se encuentra prohibido por regulaciones nacionales, sino que constituye una fuente de diversos problemas en la vida de los adolescentes, sus familias y sus comunidades. En efecto, la Política Municipal de Prevención planteó como una prioridad abordar el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, como un factor de riesgo directamente asociado al problema de la violencia en el municipio (UPCV, 2019).

Todo esto en un municipio con problemáticas sociales complejas, derivadas no solo de la historia de violencia y resistencia, sino de las lógicas de acumulación de capital que se han instalado principalmente en la juventud y que provocan aspiraciones relacionadas con la obtención de recursos para el consumo.

La Universidad Ixil

Esta universidad tiene como objetivo cuestionar la lógica occidental y la recuperación de saberes ancestrales, de la cosmogonía maya/ixil y otras áreas del conocimiento vinculadas a la salud, conocimiento del cosmos, cultura maya/ixil, historia, memoria. Este esfuerzo también busca abordar la violencia desde otras perspectivas no necesariamente vinculadas a lo estatal. Busca retomar las buenas prácticas del pasado para avanzar al futuro y se basa en la concepción del buen vivir.

Esta no es una instancia académica en el sentido que se comprende en Occidente, es más bien un espacio de recuperación de una tradición cultural soterrada por el colonialismo y el genocidio, un espacio que procura la reconstitución del pueblo maya/ixil en el restablecimiento de sus vínculos entre personas, con la madre Tierra y el cosmos.

A esta instancia acuden jóvenes con interés en la recuperación de su cultura. Las «clases» son impartidas por mujeres y hombres reconocidos como autoridades ancestrales.

Creatividad y desafíos de las mujeres ixiles

La expresión artística es una herramienta que el pueblo ixil ha puesto en práctica, sobre todo las mujeres. La batucada y los grupos de teatro interpelan con creatividad cómo circulan los imaginarios que legitiman la violencia.

La Red de Mujeres ixiles está integrada por mujeres de distintas edades y articulada con otras organizaciones a nivel nacional. Esta red tiene entre su agenda la lucha contra la violencia y el empoderamiento de las mujeres a través de diferentes procesos. Ha acompañado casos ante las instituciones de justicia, pero también realiza procesos de reconfiguración de las experiencias de violencia. Asimismo, los derechos sexuales y reproductivos son parte del trabajo de esta organización que tiene nueve años de existencia.

Ellas han conformado una batucada de jóvenes que ha acompañado distintos procesos de denuncia y demanda de justicia. La batucada no es en sí un espacio seguro, pero su existencia constituye un desafío al clima de violencia e inseguridad, una forma de decir «no tenemos miedo».

Otra experiencia creativa es el mural del parque central de Nebaj, que cuenta la historia del municipio desde antes de la invasión española hasta hoy, pasando por las diferentes etapas históricas. En los ejercicios de observación del equipo, integrado por las jóvenes investigadoras, la facilitadora comunitaria y la responsable académica del proceso, se recuperó esa historia narrada y surgieron preguntas e inquietudes.

El parque no es un espacio seguro; de hecho, varias jóvenes mencionaron su miedo al pasar por allí. No obstante, el diálogo con el mural, con lo que cuenta y con lo que se ha intentado callar en él son acciones que han empoderado a las jóvenes en su subjetividad, la cual es el primer espacio que requiere recuperarse para el restablecimiento de vínculos y de K¨ujb´ab´k´u´l, confianza para que exista el Ti´ichajil, buen vivir para los pueblos.

Recuperación de vínculos y prácticas comunitarias frente a la inseguridad

Las posibilidades de conexión y recuperación de vínculos y diálogos con sus madres, abuelas y tías, ha hecho posible que las jóvenes ratifiquen su autoconocimiento y autoestima. Esa acción personal, realizada en colectivo, implica un reto superado, puesto que en los grupos focales participaron varias mujeres de sus familias y también dentro del proceso de recuperación de la historia personal, entrevistaron a sus familiares.

Asimismo, las jóvenes tuvieron ocasión de interactuar con autoridades ancestrales que tienen propuestas desde la intención de rescatar la cosmovisión originaria, aunque si esta acción no se realiza en diálogo con las y los jóvenes, puede más bien ser contraproducente. Diego Ceto, autoridad indígena, señala:

> No todos los ixiles entendemos lo que significa autoridad ixil. Esto tiene que ver con la forma de comportarnos en la sociedad. Nos toca recuperar normas, valores y sabiduría de nuestros principales, que sin ningún apoyo se reconstruye la estructura de los principales, por el propio esfuerzo y voluntad en 1997. No estamos hablando de regresar al pasado, sino avanzar con nuestros propios pensamientos y convicciones hacia el futuro. Hay que hacerlo con la tierra porque dependemos de ella. Tenemos que reconocer que somos parte de las autoridades ancestrales. Tenemos claro dónde queremos ir. Las estructuras de principales no son iguales en cada pueblo Nebaj, Chajul, Cotzal. Hay pequeños cambios en la cultura, en el idioma. Cotzal casi se ha convertido en una finca. Estamos también en recuperación de dos estructuras de principales: en Salquil Grande y Acul (Ceto y Ceto, 2017).

El entrevistado valora la existencia de acciones organizadas en las comunidades, pero critica que las mismas no sean permanentes.

Iglesias y espiritualidad

La presencia de iglesias evangélicas, principalmente pentecostales (más de 170), pero también de la Iglesia católica, ha impactado en las interpretaciones de la población con respecto a su contexto y sus circunstancias.

Según la Encuesta de condiciones de vida (INE, 2014), en Guatemala, de cada diez mujeres, seis asisten a iglesias de diferente denominación, siendo la población con mayor presencia. No nos detendremos para analizar este fenómeno; está documentada, por investigaciones de diferentes autores,[10] la influencia de las iglesias, sobre todo las fundamentalistas, en las formas de pensar y actuar en nuestras sociedades, al promover una visión de mundo cerrada y conservadora. En Guatemala, las denominaciones pentecostales fueron parte de la estrategia militar contrainsurgente.

Pero la realidad actual y del presente trabajo, da cuenta de que las investigadoras comunitarias y la mayoría de personas entrevistadas, manifestó sentirse segura en «la iglesia» a la que acude. El espacio de la iglesia, y el discurso de animación, en medio de un contexto atravesado por la violencia, adquieren un sentido de reconocimiento y pertenencia que tiene fuerza en la subjetividad de las personas. Asimismo, para las mujeres, la iglesia resulta ser el espacio en donde les es «permitido» socializar sin generarles estigma por estar «fuera de su casa».

En este sentido, cobra mayor relevancia la existencia de espacios como la Universidad Ixil, la cual reivindica la espiritualidad y la cosmovisión maya, como forma de resistencia cultural y espiritual.

10 Garrard-Burnett, Virginia (1998) y (2005); Kourliandsky, Jean-Jaques (2019); Steigenga, Timothy (2005).

Impacto de acciones comunitarias en la institucionalidad

La información por parte de los medios tradicionales de comunicación invisibiliza el impacto social de las acciones comunitarias de resistencia y creatividad. Aunque han sido importantes algunas acciones de articulación para la atención de determinados casos, no se nombran acciones simbólicas e irruptoras como la batucada de jóvenes mujeres en Nebaj y la realización de obras de teatro construidas a través de la metodología del teatro del oprimido que retoman la historia y develan formas de funcionamiento del patriarcado y el colonialismo. Estas acciones interpelan nos solo a las instituciones del Estado, sino a la propia sociedad, convidándola a actuar, más que esperar soluciones.

En varias de las entrevistas realizadas por las jóvenes, la mayoría de entrevistados delegaban única y exclusivamente en las autoridades del municipio la responsabilidad de dar «seguridad» a la población. Solo algunas personas, principalmente mujeres, señalaron la necesidad de la organización social y la articulación comunitaria para hacer frente a las problemáticas de violencia.

En la reflexión conjunta sobre esas respuestas de las personas que transitan el parque de Santa María Nebaj, las jóvenes investigadoras valoraron la mirada horizontal de estas pocas personas y la posibilidad que esa mirada provee para realizar otro tipo de acciones, que no frustren las expectativas de cambio social, pues se entiende que este se genera en la comunidad y no solo en la institucionalidad estatal, local o nacional.

Propuestas para mejorar incidencia de iniciativas comunitarias

En el caso de Santa María Nebaj es importante la continuidad de iniciativas como la Universidad Ixil, o la Red de Mujeres ixiles y la Alcaldía Indígena. Aunque es importante incidir en las autoridades ancestrales, para desmontar algunas lógicas patriarcales que continúan prevaleciendo.

Las jóvenes investigadoras realizaron una serie de propuestas para mejorar la incidencia de las iniciativas que se impulsan, no para salvar a Nebaj, sino para recuperarlo. Entre estas propuestas están la realización de programas radiales donde se escuchen las voces de las personas de las comunidades para que cuenten sus realidades y se plantee la necesidad de vincularnos a través de la Red de la Vida.

También se propuso la televisión, pero se dialogó que nada sustituye la relación personal, la cercanía y la palabra confrontada en torno a la necesidad de las nuevas generaciones de recuperar saberes.

Las investigadoras comunitarias plantean la necesidad de profundizar la historia desde su raíz y replicar la experiencia del mural. Ellas quisieran que se diera un diálogo social sobre los alcances de recuperar la confianza entre las personas y con la naturaleza, frente a la visión de la seguridad como si fuera un problema único, que no tiene relación con otros.

Consideran urgente organizarse de comunidad en comunidad para retomar los conceptos del buen vivir y no depender únicamente de la institucionalidad del Estado para vivir confiadas en sus casas, escuelas, caminos y comunidades. Para ellas, ser mujer ixil significa motivar a la gente para recuperar y vivir su cultura. Como ellas mismas lo han señalado: «No estamos de acuerdo en ser mujeres objeto: porque el cuerpo de una mujer no se tiene que utilizar como un objeto. Ser mujer ixil es recuperarnos a nosotras y nuestro pueblo» (investigadoras comunitarias).

Reflexiones finales

Al final de este proceso, quienes participamos en él, coincidimos en que ningún proyecto de cambio real puede obviar la historia o dejar de recuperar saberes que han sido la base de la resistencia del pueblo ixil.

Las iniciativas existentes constituyen esfuerzos importantes por hacer visible la creatividad y los saberes del pueblo ixil. No obstante, no tienen la difusión necesaria y no logran convocar a la mayoría de la población, sumida en condiciones económicas, sociales y políticas complejas, que muchas veces no permiten más que la sobrevivencia.

Es necesario mencionar que aún con todo lo potente que puedan parecer algunas de las iniciativas planteadas, el peso de la dominación a veces se reproduce. Es pertinente no ver de manera definitiva ni absoluta, lo positivo y lo negativo de los hallazgos. Las posibilidades de superar el análisis plano e iniciar una reflexión crítica, tuvieron un punto de arranque con la presente experiencia, la cual tuvo dificultades para armonizar los tiempos de todas las que nos constituimos como equipo de investigación.

Las violencias continuas que atraviesan la historia del municipio de Nebaj afectan a la población y tienen impactos diferenciados, según la edad, la identidad étnica y sexual. Aun así, las investigadoras comunitarias sienten y piensan en las posibilidades de reconstituir a su comunidad trabajando desde la recuperación de la confianza.

Ese concepto de la confianza implica una mirada holística de la realidad que tiene que ver con la recuperación de los vínculos primarios en lo familiar, comunitario, social y con la naturaleza. Crear comunidades seguras en Nebaj implica la recuperación de esos vínculos y lograr el Ti´ichajil, buen vivir de los pueblos. Es importante señalar que colocar este concepto no implica el rechazo al concepto de seguridad. La experiencia se ha basado en analizar desde la cultura ixil y en ese sentido se acordó que el significado de la palabra K¨ujb´ab´k´u´l, profundiza el sentido y vincula conocimientos, sentimientos y ámbitos de la confianza para el buen vivir.

El conocimiento no es una prerrogativa de la academia, las experiencias de vida, la recuperación de las memorias y el reconocimiento de la historia producen saberes que constituyen una fortaleza para las propuestas de reconstitución del ser y de los pueblos.

La reflexividad vinculó la experiencia personal a la comunitaria y la coproducción de conocimiento constituyó un reto, hubo dificultades, pero logró equiparar voces, miradas y saberes. Consideramos que este proceso puede ser el inicio de una dinámica que debe profundizarse. Constituyó una primera experiencia que aporta a situar voces comunitarias, usualmente silenciadas, en diálogo con otros saberes, con un potencial de ahondar en el conocimiento profundo de los pueblos, contrastado y reflejado en el espejo de la academia. El conocimiento generado en la reflexión colectiva tiene la capacidad de integrar varias miradas sobre un mismo problema y también enriquece las posibilidades de abordarlo y plantear lógicas distintas, alejadas del inmediatismo de «soluciones» muchas veces planteadas desde los Estados, alejadas de la realidad, sin considerar el conocimiento ancestral y, por lo tanto, sin integralidad.

Este es el aporte potente de esta investigación, donde el diálogo, la creatividad, la comunicación, la poesía han sido posibilidades para generar confianza como un acuerdo mutuo de la responsabilidad colectiva del cuidado de la vida para retomar la propuesta originaria del buen vivir.

Que no haya espantos que molesten los sueños,
alientos que asusten entre las sombras;
que el corazón descanse confiado como el perfume en su flor,
el agua en su claridad en la oscuridad de la noche.
Humberto Ak'abal (poeta quiché)

Referencias

Arias, Arturo. 2019. «Memorias rebeldes contra el olvido» en <https://diariodelgallo.wordpress.com/2009/10/23/memorias-reveldes-contra-el-olvido-de-rosalinda-hernandez-alarcon/> acceso 6 de junio de 2019.

Belausteguigoitia, Marisa y Melgar, Lucía (eds.). 2008. *Fronteras, violencia, justicia: nuevos discursos.* México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Botton, Santiago. 2014. «Pueblo ixil dispuesto a recuperar su agricultura». En: https://www.youtube.com/watch?v=x5L_XETEQvM.

Bunge, Mario A. 1995. *Sistemas sociales y filosofía.* Buenos Aires: Sudamericana.

Bunge, Mario A. 2012. *Ontología II: Un mundo de sistemas.* Barcelona: Gedisa.

CAFCA –Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas–. 2015. *Historia del conflicto armado interno en Guatemala (CAI).* En: https://www.cafca.gt/quicheacute-nebaj.html.

CALDH-AJR, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. 2013a. *Sentencia por Genocidio.* Organismo Judicial de Guatemala, Sentencia C-01076-00015.

CALDH-AJR, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. 2013b. *Sentencia por Genocidio.* Votos razonados de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

CEH -Comisión para el Esclarecimiento Histórico-. 1999. *Guatemala: memoria del silencio.* Guatemala: Servigráficos S.A. En: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf.

Ceto, Diego y Ceto, Miguel. 2017. «Sentando bases para avanzar: Autoridades región ixil». En: <http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/presscenter/articles/2017/10/06/sentando-bases-para-avanzar-autoridades-ancestrales-regi-n-ixil.html>.

Chirix, Emma Delfina. 2009. «Los cuerpos y las mujeres kaqchikeles» en *Desacatos* (México) N.º 30, mayo-agosto.

Confluencia Nuevo B'aqtun. 2014. El Utziläj K'aslemal - El Raxnaquil K'aslemal «El Buen Vivir». Elaborado con el apoyo de la Cooperación Vasca y el Instituto Hegoa. En: https://www.alainet.org/images/Buen%20Vivir%20Guatemala-pdf.pdf.

Crenshaw, Kimberle. 1989. «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics» en University of Chicago Legal Forum. Chicago. En: <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>.

ECAP, Voces Mesoamericanas, Centro Fray Matías de Córdova. 2018. Mujeres y Migración: vivencias desde Mesoamérica. En: http://ecapguatemala.org.gt/publicaciones/mujeres-y-migraci%C3%B3n-vivencias-desde-mesoam%C3%A9rica.

ECAP. 2015. «Informe sobre el abordaje psicosocial con personas que testificaron el caso genocidio ECAP». Documento inédito, elaborado para presentar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

ECAP. 2018. *Diagnóstico sobre cumplimiento de políticas públicas en favor de las mujeres a nivel local.* En imprenta.

Environmental Justice Atlas. 2018. «Environmental Conflicts in Guatemala». En: <https://ejatlas.org/country/guatemala>.

Escalón, Sebastián. 2012. «La hidroeléctrica de ENEL sus aliados poco ortodoxos y el diálogo». En: <http://www.plazapublica.com.gt/content/la-hidroelectrica-de-enel-sus-aliados-poco-ortodoxos-y-el-dialogo>.

Garrard-Burnett, Virginia. 1998. *Living in the New Jerusalem: Protestantism in Guatemala.* Austin: University of Texas Press.

Garrard-Burnett, Virginia. 2005. «Inculturación de la teología protestante en Guatemala» en *Protestantismo en el mundo maya contemporáneo.* México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

González, Francisco Galeotti (Coord.). 2013. *Cosecha de memorias: La memoria cultural de la sociedad ixil.* En: <https://www.academia.edu/7532561/Cosecha_de_Memorias_La_memoria_cultural_de_la_sociedad_ ixil>.

Guber, Rosana. 2011. *La etnografía: método, campo y reflexividad.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Hernández A., Rosalinda; Carrillo S., Andrea; Torres U., Jaqueline; López M., Ana; Peláez A., Ligia. 2008. *Memorias rebeldes contra el olvido. Paasantzila Txumb´al´Ti´ Sotzeb´ al k´u´l* /. Nicaragua: IHNCA - UCA.

INE -Instituto Nacional de Estadística. 2014. *Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).* En: <https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-y-personas/condiciones-de-vida>.

INE -Instituto Nacional de Estadística. 2017. *VI Encuensta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI)* 2014-2015. En: <https://www.ine.gob.gt/images/2017/encuestas/ensmi2014_2015.pdf>

Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. 1999. Guatemala: Memoria del silencio.

Kourliandsky, Jean-Jacques. 2019. «Democracia, evangelismo y reacción conservadora». en *Nueva Sociedad*, N.° 280. Buenos Aires: Nueva Sociedad.

La Barbera, María Caterina. 2016. «Interseccionalidad, un 'concepto viajero': orígenes, desarrollo e implementación en la Unión Europea» en *Interdisciplina*. Vol. 4, N.° 8.

López M., Ana. 2015. «Mujeres rebeldes: guerrilleras indígenas en Guatemala» en *Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Clepsidra,* N.º 3, marzo. En: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/download/MOLINA/pdf>.

Lorde, Audre. 1984. *La hermana, la extranjera.* Madrid: JC Producción Gráfica. En: https://glefas.org/download/biblioteca/feminismo-antirracismo/Audre-Lorde.-La-hermana-la-extranjera.pdf.

ODHAG - Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. 1998. *Guatemala: nunca más*. En: http://www.odhag.org.gt/pdf/Guatemala%20Nunca%20Mas%20(resumen).pdf.

OIM –Organización Internacional para las Migraciones. 2017. *Encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 2016.* En: https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf.

Ola, Ana Lucía. 2019. «Este es el delito sexual con mayor crecimiento en Guatemala» en *Prensa Libre,* 1.º de marzo.

Palacios Tello, Noé. 2008. *El pueblo ixil en la vida de Guatemala.* En: <https://books.google.com.gt/books/about/El_pueblo_ ixil_en_la_vida_de_Guatemala.html?id=jANyAAAAMAAJ&redir_esc=y>.

PNUD –Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2017. *Informe nacional de desarrollo humano 2015-2016.* Guatemala. En: <http://desarrollohumano.org.gt/#>.

RENAP, Registro Nacional de las Personas. 2017. En: <https://www.renap.gob.gt/servicios/inscripcion-de-nacimiento-en-la-republica-de-guatemala>.

Rodríguez, Rosana. 2009. **«**Experiencia y corporalidad: Categorías útiles para el análisis feminista y la praxis política». Ponencia *I Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. Teorías y Políticas: Desde* El Segundo Sexo *hasta los debates actuales.* La Plata: Universidad Nacional de La Plata. En: <http://jornadascinig.fahce.unlp.edu.ar/i2009>.

Steigenga, Timothy. 2005. «Democracia y el crecimiento del protestantismo evangélico en Guatemala: entendiendo la complejidad política de la religión 'pentecostalizada'» en América Latina Hoy, Vol. 41.

UPCV –Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia-. 2019. *Entrega de las Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia en la «Región Ixil»*. En: <https://upcv.gob.gt/entrega-de-las-politicas-publicas-municipales-de-prevencion-de-la-violencia-en-la-region-ixil/1916/>.

Viveros V., Mara. 2016. «La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación» en *Debate Feminista* 52. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. En: <http://debatefeminista.cieg.unam.mx/>.

4

Construcción de seguridad humana: la experiencia del municipio de Sanarate, Guatemala

Anabella Amado Alemán,[1] Iván Rocael Monzón, Miguel Saquimux,[2] Gabriela Paredes y Anabella Aldana[3]

Introducción

El presente capítulo presenta los resultados del proyecto de investigación «Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios más seguros en América Latina y el Caribe» implementado en el municipio de Sanarate, departamento de El Progreso, Guatemala, por el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado de la Universidad Rafael Landívar. Este proyecto hizo parte de una iniciativa regional coordinada por el Observatorio de Seguridad Humana en Medellín, Colombia.

Esta investigación se formuló a partir de una hipótesis de trabajo que planteaba que en Sanarate, a pesar del incremento en la violencia, existían pocas propuestas desde la comunidad para su solución, producto de la débil organización social.

Los objetivos de la investigación se enfocaron en el análisis de los factores asociados a la violencia, las respuestas de la sociedad civil y su eco en el Estado, así como en las necesidades de fortalecimiento de estas capacidades locales.

La investigación presenta evidencias sobre algunos grandes obstáculos que enfrenta el municipio de Sanarate a la hora de construir espacios seguros. El primero es la aceptación social de ciertas formas de violencia y la preponderancia de nociones restrictivas de la seguridad ligadas al libre movimiento y circulación de personas y

1 Compiladora y editora Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (URL).

2 Iván Rocael Monzón y Miguel Saquimux son investigadores del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (URL).

3 Investigadoras comunitarias de la comunidad de Sanarate.

bienes por el territorio. A esto se suma una débil capacidad organizativa que limita la posibilidad de generar visiones y propuestas alternativas a las respuestas tradicionales que surgen de visiones militaristas y autoritarias de seguridad. Frente a estos retos, el capítulo resalta el potencial que tiene la implementación de metodologías de investigación-acción participativas que incluyen componentes de formación y concientización en temas de seguridad humana y construcción de paz.

Este capítulo presenta, primero, un panorama general de la violencia y del contexto del municipio de Sanarate. En una segunda sección se presentan algunos aspectos metodológicos relevantes que permitirán luego, en la tercera sección, analizar los conceptos de «espacio más seguro», violencia, y otras ideas surgidas en la interacción con los grupos participantes.

Finalmente, se realiza una síntesis de los principales elementos explorados sobre la dinámica de la violencia y la construcción de espacios seguros, sus limitaciones y desafíos y los efectos que tuvo un proceso de experimentación con los participantes en la promoción de cambios a través de experiencias prácticas, dando luces sobre el tipo de trabajo que la comunidad necesita fortalecer en el futuro.

Panorama general de la violencia en Guatemala y Sanarate

La violencia en Guatemala se ha convertido en una preocupación central. A pesar de haberse cumplido veinte años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, todavía existen altos niveles de violencia y represión, los cuales se manifiestan de diversas formas y afectan de manera diferenciada a los distintos grupos de la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Guatemala ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en tasa de muerte de jóvenes, estando los homicidios y suicidios entre las primeras tres causas de muerte (OPS, 2018).

En cuanto a los grupos más afectados por la violencia en Guatemala, se puede identificar a las mujeres y a los y las jóvenes, lo que se evidencia particularmente en dos hechos. En primer lugar, a pesar de que el índice de homicidios del país ha tendido a disminuir, la tasa de homicidios de mujeres ha ido incrementando. De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, las muertes de mujeres han incrementado desde los últimos tres años hasta 2018, presentándose entre 3 y 5 víctimas mensuales, lo cual representa el 1,6 % de incremento en la tasa de homicidios. En segundo lugar, el rango de edad con mayor número de homicidios de hombres y mujeres corresponde a las edades entre 13 y 29 años.

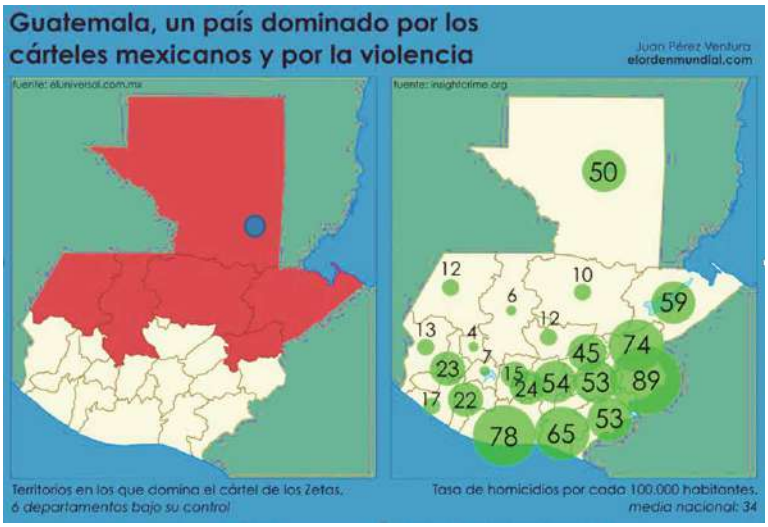
El Ministerio de Gobernación ha indicado que «la violencia en Guatemala es un problema estructural, no pasajero. Tiene un carácter endémico. Por tanto, su tratamiento corresponde a un esfuerzo profundo, integral y de largo plazo, en el cual debe

participar y comprometerse la sociedad entera» (2012). Sin embargo, el abordaje que se ha dado a la violencia desde el Estado se ha caracterizado fundamentalmente por respuestas de represión del delito por parte de las instituciones de justicia.

De acuerdo con Insight Crime (2017), el departamento de El Progreso (ubicado en el lado oriente de la ciudad capital) se encuentra en una zona de disputa entre diferentes carteles de drogas en Guatemala. Estas «áreas en disputa» tienen mayor índice de homicidios, con un promedio general de 50 % de homicidios atribuidos o vinculados al narcotráfico. En particular, El Progreso ha presentado un incremento en su tasa de homicidios de 38/100 000 habitantes en 2015 a 58/100 000 en 2016.

Durante los últimos quince años, este territorio se ha convertido para muchas personas en una «ciudad dormitorio»,[4] en especial los municipios de San Antonio la Paz y Sanarate, que están más cerca de la ciudad capital. En este sentido, por su ubicación geográfica y por el rol que cumple para sus habitantes, además de tener altos índices de homicidios, este departamento, presenta bajos niveles de articulación y cohesión social. Sin embargo, pese a su cercanía con la ciudad capital, aún no presenta el clima de violencia armada que tienen otros departamentos, como Zacapa, Chiquimula o Escuintla; de ahí que este sea un departamento cercano a la ciudad capital con oportunidades de fortalecimiento.

Mapa 4.1



Fuente: Vaventura (2012).

4 Muchas personas tienen casas en Sanarate para pasar la noche o el fin de semana, pero trabajan en la Ciudad de Guatemala.

El contexto de la violencia en Sanarate

Sanarate es un municipio en proceso de urbanización, pero con bajo número de años escolares aprobados por habitante: cinco años de educación primaria en promedio. Se estima que el 42 % de la población vive en situación de pobreza y pobreza extrema (Cuadro 4.1).

Cuadro 4.1
Datos sobre Sanarate en el departamento de El Progreso

Índice de urbanidad	Índice étnico	Promedio de años escolares aprobados	% de personas en pobreza extrema	% de personas en pobreza no extrema	% de personas en no pobreza
65,79	1,84	5,45	4,07	36,98	58,95

Fuente: elaboración propia con datos del INE (2012).

La cabecera municipal de Sanarate está ubicada a 55 kilómetros de distancia de la Ciudad de Guatemala. Es el segundo municipio que no pertenece al departamento de Guatemala pero que tiene acceso directo a una de las principales carreteras del país: la carretera Jacobo Árbenz que va hacia el Atlántico y el norte del país. En el pasado, su ubicación geográfica estratégica hizo posible que Sanarate fuera importante en el paso del ferrocarril, del telégrafo y del correo, permitiendo que este poblado se convirtiera en un centro neurálgico a través del cual se podían comercializar y almacenar productos de todo tipo. Desde Sanarate también se puede llegar al departamento de Jalapa y al departamento de Baja Verapaz. Existe además una red de carreteras departamentales y caminos rurales que conecta a este municipio con Salamá, Baja Verapaz, San José el Golfo y Chuarrancho, Guatemala y el resto de los municipios del suroccidente del departamento (mapa 4.2).

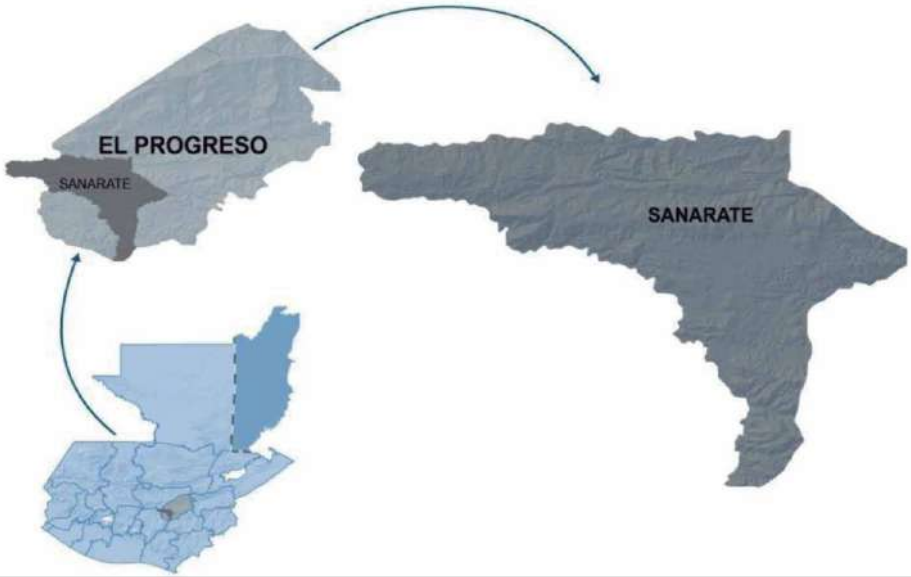
Según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), durante el año 2017 vivieron en Sanarate 41 995 personas y, según el Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA, 2014), para el año 2013, el índice de analfabetismo fue del 10,66 %.

La tasa de criminalidad en 2012 fue de 237 –la cuarta más alta–, la tasa de homicidios fue de 67,7 –la segunda más alta– y una tasa de denuncias de violencia intrafamiliar de 2 –la más baja del departamento–. Para el año 2015 la tasa de homicidios fue de 71,6, en 2016 fue de 97 y hasta el 31 de julio de 2017 fue de 31.

Como referencia sobre los grupos más victimizados, para 2013 la edad promedio en El Progreso era de 20 años y el 18,8 % de las muertes que ocurrieron ese año fue en personas menores de 30 años, además, las agresiones por arma de fuego representaron la segunda causa de atención en los servicios externos de los hospitales privados y la cuarta causa de muerte a nivel departamental. Otro dato importante para considerar es el elevado porcentaje de casos de atención médica interna en los hospitales privados relacionados con violencia doméstica.

A nivel municipal, con más de 33 000 habitantes, Sanarate es el séptimo municipio en tasa de homicidios (Prensa Libre-STCNS, 2016), una cifra que está por encima de 50/100 000. Lo que llama la atención es que, a pesar de estos niveles de violencia, la municipalidad no cuente con programas para su prevención.

Mapa 4.2
Ubicación geográfica del municipio Sanarate, El Progreso



Fuente: SEGEPLAN, 2016.

Existe presencia de autoridades estatales en el municipio, como el Organismo Judicial, la Policía, centros de salud, bomberos, seguro social y escuelas públicas, pero la presencia institucional del Estado aún es insuficiente y tampoco hay organizaciones no gubernamentales trabajando en el tema de violencia.

Según el Plan Municipal de Desarrollo de Sanarate 2013-2025:

> Sanarate es uno de los municipios con mayor importancia en el departamento, a nivel político, social y económico; pero, a nivel interno, en lo que respecta a la organización comunitaria, esta se encuentra débil; por un lado, si bien existen Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODES) en la mayoría de las comunidades, estos no cuentan con procesos de formación e información acerca de sus funciones, y por el otro, a nivel municipal no se cuenta con un Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) funcionando como lo demanda la ley, donde converjan las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, que discutan y definan los principales intereses que afectan al territorio.

Aunque se ha producido un gran número de investigaciones sobre la violencia en los países de la región centroamericana (principalmente aquellos del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras), la mayoría son informes diagnósticos. En consecuencia, temas como la prevención, la perspectiva desde las comunidades (en particular las expectativas de los jóvenes y las mujeres) y las dinámicas que se generan, han sido poco abordados y se cuenta con escasos elementos para profundizar sobre los impactos y secuelas en estos segmentos poblacionales, en sus vidas y en la vida de las comunidades de las cuales forman parte.

El camino recorrido: riquezas y desafíos de la metodología

Generalidades metodológicas

Las investigaciones sociales a menudo se ven afectadas por los tiempos administrativos de los proyectos. Este fue el caso de la ejecución del presente proyecto en Sanarate. Lo que originalmente se perfiló como un estudio más pausado y con una inducción más gradual en la comunidad, tuvo que hacerse de manera acelerada, aunque en últimas se logró llevar a cabo sin perder el espíritu participativo y dialógico del diseño original.

El proceso de investigación comenzó con una etapa de formación y análisis del equipo, que se fue tejiendo con el proceso de diseño de la iniciativa a nivel regional. A esta formación la siguió una serie de entrevistas, visitas de campo y discusiones colectivas (grupos focales y talleres) con actores sociales. Finalmente, desde un modelo de formación con metodologías también participativas, se desarrolló un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a un grupo de actores sociales que, posteriormente, entraron a una etapa de acción comunitaria y de análisis de sus propias acciones.

El estudio se realizó inspirado en principios de la modalidad de investigación acción-participativa, incluyendo aspectos como la coproducción de conocimiento con los sujetos de sus experiencias y formas propias de conocimiento, en donde el conocimiento producido puede ayudar a empoderar a los participantes; la co-construcción y la validación de las premisas (supuestos) iniciales con los actores involucrados, el involucramiento de cofacilitadores de las comunidades estudiadas y el desarrollo de un plan basado en diálogos y técnicas participativas. También fueron determinantes la revalidación de los resultados del análisis e involucramiento de los actores sociales en el análisis, y el fortalecimiento de las capacidades de los participantes para el abordaje de las violencias en su entorno local por medio de un proceso de formación (cuadro 4.2).

Cuadro 4.2
Etapas del proceso metodológico

Paso 1	• Se recopila la información por medio de una investigación documental sobre situación municipal, seguridad y justicia y de los instrumentos de entrevistas construidos para el desarrollo de la investigación.
Paso 2	• Generación de conclusiones por cada uno de los instrumentos utilizados.
Paso 3	• Cruce de información de las conclusiones generadas en cada instrumento con la finalidad de detectar las problemáticas más recurrentes identificadas y cotejo con las estadísticas oficiales sobre situación municipal, seguridad y justicia.
Paso 4	• Elaboración de conclusiones integradas derivadas de todos los instrumentos utilizados.
Paso 5	• Determinación de los problemas principales en los aspectos de participación comunitaria, planes institucionales (SISCODE, PNC, OJ), violencia y sus distintos tipos, prácticas y respuestas comunitarias ante esta.
Paso 6	• Desarrollo de las problemáticas detectadas y las prácticas que los generan de acuerdo con las categorías especificadas en la metodología utilizada en el proyecto.
Paso 7	• Toda la información es generada y confirmada mediante discusiones grupales.

Fuente: elaboración propia.

Para esta investigación se tomó como base la metodología que implementa el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín desde el año 2008, adaptándola al contexto guatemalteco y trabajando con tres grupos de personas: a) representantes de programas y organizaciones de gobierno con presencia local (enlistados en el contexto), b) organizaciones con base en la comunidad y en la sociedad civil (principalmente consejos comunitarios y municipales) y c) jóvenes y mujeres del territorio, pues se considera que estos poseen experiencias, necesidades y expectativas diferenciadas en lo que respecta a la construcción de comunidades más seguras.

En la implementación de investigación se incluyeron una serie de preguntas relacionadas con las respuestas comunitarias frente a la violencia, a fin de extraer elementos que puedan orientar futuras experiencias de abordaje y prevención. Cada una de las preguntas está a su vez relacionada con los objetivos específicos del estudio: ¿Qué es un espacio seguro desde la perspectiva local y qué nos dicen esas nociones acerca de las acciones actuales sobre seguridad? ¿Cuáles son las respuestas que se dan frente a las violencias desde las comunidades participantes, en especial las violencias que involucran jóvenes y violencia basada en género? ¿Cómo se han formulado? ¿Qué características tienen esas respuestas en el tiempo? ¿Cuáles son las respuestas que se dan frente a la violencia desde las instituciones públicas? ¿Cómo se han formulado/gestado? ¿Qué características tienen esas respuestas en el tiempo? ¿Qué aspectos necesitan fortalecer los actores locales para abordar el problema de las violencias?

Entre las subcategorías de este estudio, se trataron las dinámicas de la violencia en el municipio estudiado: manifestaciones de violencia; factores clave que la afectan y que la reducen; las respuestas de la sociedad civil frente a la violencia a niveles personal, de relaciones comunitarias y de subsistemas (incluyendo la justificación de la violencia y los cambios estructurales); las respuestas desde la gestión pública a niveles personal, de relaciones comunitarias y de subsistemas (incluyendo la justificación de la violencia y los cambios estructurales) y, finalmente, las necesidades de fortalecimiento.

En esta investigación se utilizó como estrategia la triangulación metodológica y de datos, es decir, por un lado, se combinaron metodologías cualitativas y cuantitativas en el estudio del fenómeno de la violencia y, por el otro, se contrastaron los datos recogidos de diversas fuentes. El equipo de investigación adecuó estas herramientas metodológicas en torno a los objetivos, las preguntas y los supuestos de investigación, estableciendo con antelación la forma en que se realizaría el análisis de la información (fotografía 4.1).

Fotografía 4.1
Grupo focal con instituciones

Foto ISE: Anabella Amado.

El proceso de investigación-acción

En los dos primeros meses de 2017 se desarrollaron las fases de exploración y profundización, en las cuales se llevaron a cabo una serie de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, libres e informales, aplicadas a actores clave, previamente identificados.

Posteriormente se realizaron seis grupos focales con los siguientes sectores de la población: mujeres, hombres, mixto (hombres-mujeres), adolescentes (mujeres), adolescentes (hombres-mujeres) y representantes de instituciones/organizaciones.

Al terminar esta fase se hizo un proceso de formación que consistió en una reunión cada dos semanas en donde se formulaba un análisis de la experiencia, un contraste con algunas ideas teóricas útiles y luego ejercicios para repensar la experiencia y transformarla, a partir de principios de educación para la paz.

El grupo realizó estudios de casos, lecturas sobre participación política y ciudadana, diálogo, comunicación, incidencia política, violencia y otros aspectos de la participación ciudadana y la seguridad humana.

El diseño del proceso se realizó en conjunto con el equipo del ISE y de investigadoras comunitarias y se enfocó en fortalecer habilidades que permitieran analizar el contexto y la conflictividad local, planificar acciones y estrategias para generar espacios más seguros de convivencia, desarrollar proceso de gestión local de espacios seguros, conducir procesos de multiplicación en otros grupos y fortalecer la sensibilidad y la voluntad de acción estratégica ante diferentes tipos de violencia.

Este proceso se realizó por medio de los siguientes ocho módulos: 1) Introducción; 2) concepto de violencia, paz, convivencia y espacio seguro; 3) análisis del contexto y la conflictividad local; 4) planificación de acciones locales; 5) construcción de planes locales; 6) resolución de conflictos comunitarios; 7) incidencia, y 8) formación y facilitación.

El proceso de formación diseñado e implementado por el equipo de investigación como parte fundamental del proceso de investigación-acción participativa incluyó la capacitación de varios grupos, entre estos, a los llamados "formadores en convivencia ciudadana y construcción de espacios más seguros". El grupo participante en esta etapa contó con las personas más constantes y que mostraron interés en hacer parte de una experiencia práctica al final del proceso en sus comunidades para replicar algunas acciones de formación y sensibilización en los entornos sociales.

Además, concluida la fase de formación, se desarrollaron actividades en dos áreas. La primera, en el sector de educación, en el que participaron jóvenes estudiantes y cuya finalidad fue informar a esta población sobre la importancia que tienen las relaciones interpersonales para una convivencia pacífica. Esta actividad contó con una asistencia de 76 adolescentes, 36 de ellos mujeres y el resto hombres, entre los 14 y los 16 años de edad. La segunda actividad involucró al equipo de padres de familia y adolescentes del programa municipal Escuela para Padres. El objetivo fue crear un espacio de diálogo en el cual los padres y los adolescentes pudieran expresar sus puntos de vista sobre la situación actual que viven los jóvenes y los espacios en donde se mueven. Esta actividad contó con un número de dieciséis participantes, entre ellos, trece mujeres. De las personas asistentes la mayoría eran padres o madres de familia, algunas madres adolescentes, muchas de ellas de escasos recursos. Más del 50 % pertenecen al área rural del municipio de Sanarate, aunque trabajan y pasan la mayor parte del tiempo en el casco urbano. Los equipos de trabajo tuvieron la oportunidad finalmente de evaluar sus experiencias desde varios aspectos, como los aprendizajes sobre el trabajo en equipo, la convocatoria y las metodologías utilizadas.

El proceso incluyó el uso de técnicas de facilitación para sensibilizar y formar actores sociales que promuevan espacios comunitarios seguros, tomando en consideración los principios de educación para la paz y la educación popular.

El desafío de la investigación académica y comunitaria

Como el resto de experiencias de esta iniciativa regional, contamos con un equipo de investigadores académicos y un equipo de investigadores comunitarios integrado por mujeres de la comunidad de Sanarate que fueron específicamente formadas para poder facilitar, promover reflexiones, recolectar datos y participar en el análisis de los interrogantes de la investigación como conocedoras a fondo de la vida cotidiana en la comunidad.

Esto supuso una serie de desafíos y también una serie de lecciones aprendidas sobre cómo solventarlos (cuadro 4.3):

Este análisis nos permite confirmar que la integración entre investigación «académica» y la inclusión de equipos locales comunitarios no solo es posible, sino que aporta mayor riqueza al proceso de construcción del conocimiento.

Hallazgos del trabajo con la comunidad

La dinámica de la violencia en Sanarate

Durante el primer año de la investigación se construyó un análisis participativo inicial sobre la dinámica de la violencia y la noción de espacio seguro entre las personas participantes. Estas ideas fueron renovándose a lo largo del proyecto y en algunos casos también se fueron deconstruyendo en la medida en que se dialogaba, se trabajaba o se aplicaban conceptos nuevos surgidos de la reflexión-acción.

En este sentido, vale la pena resaltar que no hay una diferenciación clara entre los «hechos objetivos» y las «representaciones sociales» de la violencia. Por ejemplo, cuando los habitantes de la comunidad refieren sentirse inseguros o amenazados, y lo mencionan al grupo, el grupo asume inmediatamente este sentimiento de miedo como algo que puede sumarse a los hechos de la violencia y a las pruebas que existen frente al enunciado «es que hay más violencia que antes». Los investigadores no asumieron una actitud inquisitiva para distinguir «hechos» de interpretaciones, pues ambos constituyen factores determinantes de la dinámica de las relaciones comunitarias y de la vida cotidiana: sentir miedo a ser asaltado en cierto lugar de la

Cuadro 4.3
Desafíos y lecciones aprendidas

Desafíos	Descripción	Medidas que funcionaron	Aprendizajes
Homogeneizar el nivel académico en un lenguaje comprensible	Mantener un rigor técnico al mismo tiempo que manejar un lenguaje comprensible	Simplicidad en el lenguaje evitando usar tecnicismos Mantener una comunicación semanal con el equipo de investigación	Las investigadoras comunitarias también tenían un buen nivel de formación técnica, posibilitando la comunicación con los académicos y con el resto de los participantes
Integrar el análisis de la comunidad al análisis técnico	Traducción constante de un nivel a otro.	El diálogo constante permitió a los investigadores «leer» mejor las claves de esa opinión Los participantes conocieron aspectos que antes no habían visto. Por ejemplo, el papel de la prevención o la violencia estructural	Aun personas sin alta formación académica tienen la habilidad de comprender aspectos técnicos sobre la violencia
Hacer del ejercicio algo más integral y no solo «intelectual»	Integrar la corporalidad, la afectividad y las interacciones sociales y emotivas al análisis	Es posible descubrir que una investigación es más «objetiva» cuando incorpora todos los aspectos implicados El trabajo con las investigadoras comunitarias ayudó a no perder de vista esta riqueza creando una buena sinergia emocional de grupo	Al inicio se pensó que los adultos serían más reacios a trabajar desde el cuerpo, por ejemplo, con técnicas del teatro, pero en la realidad ellos estaban deseosos y complacidos de expresarse de forma más creativa

Fuente: elaboración propia.

comunidad es algo que genera cambios en el comportamiento y en las actitudes, del mismo modo que lo hace el hecho de que efectivamente ocurra un asalto.

Así, por ejemplo, la idea de que los forasteros (o «fuereños») traen nuevas prácticas que dañan las buenas costumbres en la comunidad, como el respeto a los mayores, es tan poderosa como los datos concretos que pudieran sustentar esta creencia. Esto lleva a pensar que el concepto de 'seguridad ciudadana' tiene una dimensión concreta medible o verificable, pero las construcciones subjetivas también son determinantes para entender el fenómeno.

Representaciones del concepto de violencia en la comunidad

Tanto durante los grupos focales y las entrevistas, como en las interacciones a lo largo del proceso de formación de actores locales, se evidenció que existen distintas representaciones sociales del concepto 'violencia'. Entre ellas, fue posible reconocer que las más comunes fueron percepciones frente a 1) la violencia como imposición que conlleva un daño físico; 2) la violencia como acto moral negativo con base en las normas aceptadas en la comunidad; 3) las afecciones por la violencia que proviene «de afuera», y 4) la violencia directa que es peor vista si se comete contra una persona indefensa.

Frente al primer punto, la violencia como imposición que conlleva un daño físico, la violencia es entendida desde su dimensión directa: violencia física en primer lugar, y violencia verbal en segundo lugar. También aparecen constantemente afirmaciones como que si un acto ocurre en «defensa propia» entonces la violencia es atribuida en todo caso al agresor, no tanto a quien se defiende. «Aquí la gente tiene armas en la casa y si se entra un ladrón es muy común disparar, aunque sea al aire para espantar al ladrón» (mujer, taller de inducción)

En segundo lugar, está la violencia entendida como un acto moral negativo con base en las normas aceptadas en la comunidad. La violencia tiene una connotación negativa en general, sin embargo, la clave está en que, entre los participantes, no todos los actos que causan daño o imposición son considerados igualmente «violentos», sino solo aquellos que rompen normas aceptadas como, por ejemplo: la descortesía, el daño a la propiedad o el daño a la integridad física.

Tercero, «la violencia de afuera nos afecta». Hay una frontera muy clara entre las personas que son originarias o "naturalizadas" como sanaratecas y las personas que provienen de otras regiones del país. En este sentido, hay ciertas normas implícitas con relación a «cómo se hacen aquí las cosas». Esta reacción genera conductas de

xenofobia en la medida en que la gente atribuye varios problemas a la gente que viene de «afuera» y se supone que «ha traído malas costumbres al pueblo».

Finalmente, en gran medida, la violencia directa es peor vista si se comete contra una persona indefensa. Aquí existe la creencia de que un acto es más violento y más "malo" cuando es cometido contra alguien que no se puede defender. De manera que agredir a una persona con discapacidad, a un niño, a una «mujer» (prevalece la idea de que las mujeres son más indefensas físicamente) es juzgado con más severidad, al menos en el discurso. Por otro lado, cuando no se trata de una violencia directa sino estructural o cultural, como cuando hay actos de violencia que restringen el desarrollo de estos mismos grupos, esta no es una preocupación central de la población.

Factores que generan o agravan la violencia en el municipio, en opinión de los actores sociales

Desde el uso de la metodología de análisis de sensibilidad al conflicto se realizó con los participantes en la investigación un proceso de identificación de factores que ellos asocian directamente con el incremento de la violencia y la inseguridad en su municipio.

Estos factores fueron clarificados, discutidos y finalmente consensuados por los participantes (cuadro 4.4).

Cuadro 4.4
Factores que generan violencia

Contextuales	Interpersonales
• Normalización de la violencia	• roblemas de comunicación familiar
• Inefectiva aplicación de justicia	• Erosión del tejido social y la organización comunitaria
• Desempleo	• Carencia afectiva
• Salarios bajos	• Desintegración familiar
• Patrones de crianza violentos, patriarcales y autoritarios	
• Falta de espacios de ocio y recreación	
• Inoperancia municipal	

Fuente: elaboración propia con base en grupos focales y entrevistas.

Grupos en situación de vulnerabilidad

Los participantes mostraron ser reflexivos sobre el impacto de la violencia en ciertos sectores sociales (mujeres agredidas o intimidadas sexualmente, hombres afectados por homicidios, jóvenes) y el nivel de resiliencia que se cree pueden tener o llegar a desarrollar. Sin embargo, se notó que muchos otros tipos de violencia pasan desapercibidos (violencia estructural, violencia contra ancianos, ciertas prácticas de violencia contra la niñez, personas con discapacidad, personas lesbiana, *gay,* bisexual y transgénero –LGBT–, etc.).

En los grupos focales fue posible identificar a los «grupos más vulnerables», pero esto no implicaba necesariamente la identificación de actores, de las condiciones materiales de vida ni de los horizontes de vida que influyen y determinan los factores que generan violencia. El análisis surgió solo cuando estas preguntas se hicieron deliberadamente en los grupos focales y durante los talleres.

Lo anterior abre la posibilidad de ahondar en este tema a nivel comunitario para definir los parámetros objetivos y subjetivos de la intensidad del peligro al cual están expuestos estos grupos y la relación existente entre condiciones de vida y horizontes de vida de la sociedad sanarateca. Es necesario resaltar cómo la violencia contra estos sectores es socialmente aceptada y vista en cambio como una herramienta legítima de crianza y como forma de interacción en relaciones amistosas y sexo/afectivas. Esta aceptación social de la violencia constituye el mayor reto para superar en la construcción de una noción de «espacio seguro».

Por otro lado, la violencia, es sancionada por la comunidad solo si lacera y deja marcas visibles, temporales o definitivas, en el cuerpo o en la vida de las personas; y en algunos casos aun así se legitima.

Las personas participantes tampoco hicieron hincapié en la violencia estructural, como si las relaciones de producción o de poder en la comunidad no fueran una forma de violencia, de ahí que la vulnerabilidad se entiende a partir de lo que se puede sufrir y no tanto desde lo que se puede perder (vida, salud, derechos fundamentales, recursos; etc. Por ejemplo, los actores no valoraron nunca de forma espontánea los «años de vida perdidos» en la población debido a la violencia, las oportunidades económicas de inversión externa perdidas debido a la influencia del narcotráfico, o los costos familiares de la migración debido a las extorsiones). La misma postura se ha de tomar a la hora de analizar la situación de vulnerabilidad de las mujeres, de la juventud, de la tercera edad, de la población LGBTQI+[5], y de las personas con discapacidades.

5 Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, queer, intersexual y todos los demás tipos de identidad de género que existen.

En el discurso de las personas participantes, la población LGTBQI+, la población de la tercera edad y las personas con alguna discapacidad son grupos que no se visibilizan. Se reconocen como titulares de derechos por su condición humana en sí, pero no son base en su condición vulnerable al formar parte de una minoría social.

Hacia las representaciones del espacio seguro

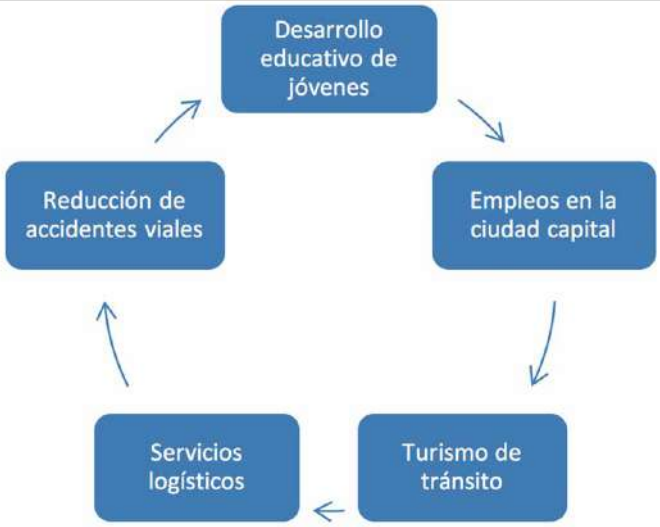
El concepto de «espacio seguro» se asocia automáticamente con la idea de un espacio físico público en la comunidad, donde no ocurran hechos delictivos contra la vida o contra la propiedad. Siempre y cuando esta condición se cumpla, en ocasiones otras formas de violencia pueden incluso llegar a justificarse con tal de lograr este fin, como, por ejemplo, acciones represivas de las autoridades, mayor protección perimetral, uso de armas en defensa propia en espacios domésticos, el porte de armas y el castigo severo a los delincuentes.

Al indagar un poco más en los discursos, hay necesidades y derechos «irrenunciables» que la población busca resguardar dentro de este concepto de seguridad, siendo el más importante entre ellos la utopía de libertad para movilizarse con confianza, a cualquier hora y en cualquier parte de la comunidad. Este elemento se establece como el «estándar mínimo» de la seguridad.

En un centro educativo, los participantes del proyecto construyeron un teatro foro para discutir sobre la violencia en Sanarate. El tema central de la obra escogida fue la libertad de locomoción. Considerando que Sanarate es un municipio clave para el tránsito hacia el norte y el oriente del país, implícitamente en esta libertad de locomoción está la clave de su propia subsistencia. De ello depende en parte el desarrollo comercial, el aumento de demanda de los servicios logísticos, el turismo «de tránsito», la movilización, parada y abasto de los camiones mercantiles y la posibilidad de que sus habitantes se movilicen a trabajar a la ciudad capital y puedan retornar a cualquier hora.

A continuación, en el gráfico 4.1 se presentan algunos de los principales elementos que, a lo largo del proyecto, los participantes asociaron con la libertad de locomoción. Estos elementos ayudan a entender por qué es tan importante para los sanaratecos el poder “moverse” libremente en su comunidad y entre su comunidad y otras comunidades, en especial en la ciudad.

Gráfico 4.1
El papel de la libertad de locomoción como eje de seguridad en Sanarate



Fuente: elaboración propia.

Esta idea sobre la centralidad de la locomoción también fue cambiando con el tiempo, en la medida en que el análisis se hacía más profundo, hasta el punto en el que los participantes reconocían la seguridad como un aspecto más "integral" en sus vidas o les daban mayor importancia a aspectos estructurales, sistemas de participación y cultura política. También, esta idea se fue asociando a otros factores como el respeto a la propiedad de cada familia, la integridad física, moral y sexual, y la individualidad. Sin embargo, durante los meses de investigación, el aspecto de la seguridad para moverse en espacios comunitarios fue una preocupación constante.

Para la mayoría de los participantes, la idea de espacios seguros se reducía a espacios cerrados en los cuales solo concurre el círculo familiar más cercano y en los cuales, por la falta de confianza y de certezas sobre las relaciones sociales que se están dando actualmente en Sanarate, no hay cabida a la idea de comunidad.

Mecanismos comunitarios de respuesta a la violencia

Para entender mejor las respuestas de la sociedad civil y de la ciudadanía a la violencia, es importante ahondar en algunas cuestiones. Para la ciudadanía, ¿quién tiene el poder de detener la violencia o de promoverla? Y, ¿a quién le atribuyen los ciudadanos la responsabilidad de la violencia percibida en la comunidad? Esto equivale a

lo que la psicología social cognitiva define como el «locus de control» y el «locus de responsabilidad»[6] (Visdómine-Lozano y Luciano, 2005).

Con respecto al poder de detener o promover la violencia, o «locus de control» de la violencia, los grupos focales y los participantes en los talleres de formación y reflexión sobre la violencia en Sanarate confirmaron que la ciudadanía le atribuye el poder de control de la violencia a un grupo externo, en ocasiones nombrado como «los criminales y delincuentes». Estos actores son a menudo vistos como agentes anónimos: extorsionistas, distribuidores de drogas, secuestradores o ladrones.

Solo al analizar a fondo estas nociones con los habitantes, ellos descubrieron que más allá de una dicotomía clara entre buenos y malos, la mayor parte de los actos de violencia son cometidos por vecinos comunes que optaron por una estrategia violenta para satisfacer sus intereses, expresiones que van desde el ejercicio de un acto de violencia doméstica o sexual, hasta acciones contra la propiedad o contra la integridad física de otra persona.

Por otro lado, los participantes les atribuyen la responsabilidad del problema de violencia a las «autoridades» y en especial al alcalde. Si bien los actores sociales son conscientes de que la mayor parte de instituciones estatales que funcionan en la comunidad no son directamente gobernadas por la alcaldía (Policía, Ministerio de Educación, Ministerio Público, Juzgados Paz y otros), la figura de la municipalidad es la figura institucional más próxima y más directa y sobre la que recaen las expectativas de los ciudadanos.

En un ejercicio de sensibilización sobre la violencia se le preguntó a un grupo de más de cien estudiantes: «¿Podrían mencionar cuáles son algunos de los problemas que hay hoy en día en Sanarate?». Sin pensarlo dos veces los estudiantes respondieron en coro: «el alcalde».

Hay algunos jóvenes con liderazgo y sensibilización frente a la violencia que promueven la idea de que esta es «responsabilidad de todos» y empieza con el cambio individual o familiar, lo que orienta el discurso hacia una responsabilidad más individual que institucional. Esta idea promueve una cultura de participación y una actitud ciudadana más activa, pero siempre a partir del cambio individual.

Ambos discursos sobre el «locus de responsabilidad»: Por un lado, la responsabilidad de «las autoridades» y la responsabilidad individual de los ciudadanos, impiden

6 Rotter entiende por *locus* de control a un fenómeno cognitivo en el que se le atribuye a una persona o condición el poder de controlar una variable o un problema. Por ejemplo: llego impuntual debido al tráfico y no debido a que no salí a tiempo. Esto implica asignar un *locus* de control externo. El *locus* de responsabilidad es asociado a quien tiene el «deber» de hacer algo, independientemente de si puede o no hacerlo (Visdómine-Lozano, 2005).

reconocer que existe otro nivel de acción crucial: la transformación del carácter y la estructura de organizaciones de sociedad civil que garantizan que las propuestas de la ciudadanía redunden en cambios políticos mediante la incidencia, la cooperación y el apoyo técnico, por ejemplo, con el trabajo de entidades que pueden desempeñar un papel intermediador entre la ciudadanía y las autoridades públicas (organizaciones basadas en la comunidad, ONG, escuelas, empresas, organizaciones basadas en la fe, entre otras).

Y justamente ese vacío tiene un papel central en la práctica de la construcción de seguridad ciudadana: la debilidad institucional de la sociedad civil y su interlocución con las instituciones del Estado.

Principales respuestas identificadas

Desde la sociedad civil organizada se identificaron tres entidades que realizan acciones que pueden estar asociadas indirectamente con la prevención de la violencia.

La primera es una organización enfocada en los derechos de personas con una discapacidad específica, la Asociación de Ciegos por el Desarrollo de El Progreso (ACUDE), sede Sanarate. La segunda y la tercera son organizaciones que promueven el deporte como medio alternativo de recreación: Asociación de Béisbol de Sanarate (ASOBEIS) y Runners. Sin embargo, no se encontró una agenda específica asociada a la reducción de la inseguridad en estos programas.

Por otro lado, varias iglesias responden con un discurso promotor del amor al prójimo, acciones de fortalecimiento del sentido de identidad con la iglesia, acciones proselitistas, eventos especiales y servicios de adoración. Otras promueven servicios educativos privados por medio de colegios y otras acciones de enseñanza, que podrían en alguna medida ser consideradas como acciones de prevención «primaria».

Los Concejos Comunitarios de Desarrollo también son considerados como espacios de participación, pero en opinión de varios participantes, están muy sujetos a la manipulación política y el liderazgo es débil y hegemónico.

El resto de las respuestas referidas no corresponderían al concepto de «sociedad civil» como sociedad organizada, así que se reportan como respuestas individuales y algunas colectivas sin llegar a ser acciones institucionales.

Como se mencionó anteriormente, los incidentes de violencia relacionados con la libertad de locomoción tienen un papel central en las preocupaciones de los participantes de la investigación. Con respecto a estos incidentes, en el momento inicial de la investigación no existía una concepción muy amplia alrededor de cómo se pueden

prevenir incidentes en esta u otras categorías de violencia, así que la mayor parte de acciones registradas son más reactivas que preventivas, y muchas de las preventivas no son intencionales o no tienen el propósito explícito de «prevenir».

Las respuestas «individuales» de la ciudadanía se orientan más a la prevención general de acciones en la interacción cotidiana que no están vinculadas a delitos graves o al crimen organizado, pero son pocas o nulas las acciones para prevenir en alianza con las instituciones públicas o para trabajar en un nivel de intervención en los casos justamente que más preocupan, como los que se muestran en el cuadro 4.5:

Cuadro 4.5
Clasificación de respuestas comunes a problemas de seguridad identificados en Sanarate

Problemas de seguridad	Violencia no criminal	Delitos no organizados	Crimen organizado
Ejemplo	Chismes menores Conflictos con vecinos Diferencias religiosas Consumo de alcohol Conflictos de pareja Coacción o chantaje laboral	Ladrones Asaltos Sobornos Violencia contra la mujer Homicidios motivados por causas individuales	Venta de drogas Extorsiones Pandillas Secuestros
Nivel de respuesta individual	Negociaciones fallidas Ostracismo Perdón Revanchas Amenazas	Intimidación Amenazas Compensación económica	Venganza Migración Pago de extorsiones Cierre de negocios Indiferencia ante la situación de otros
Respuestas colectivas	Difamación	Linchamiento	Cierre de condominios (poco común)
Respuesta de organizaciones de sociedad civil	Disciplina en la iglesia o amonestación desde líderes o comités comunitarios Disciplina en ambiente escolar Concientización religiosa	Denuncia Mediación religiosa	No hay

Fuente: elaboración propia

Propuestas de acción planteadas por participantes (antes del proceso de formación)

Durante los primeros meses del proceso, mediante grupos focales se identificaron las principales «propuestas de acción» que, en opinión de las personas participantes de Sanarate, ayudarían a resolver la situación de inseguridad y violencia en las comunidades.

Las respuestas se concentraban principalmente en confirmar la fuerte necesidad de entes externos a la comunidad que pudieran ejercer mayor control. Esto incluía lo planteado en el cuadro 4.6:

Cuadro 4.6
Propuestas comunitarias para prevenir o disminuir la violencia

Autoritaria	Construcción de paz
• Incrementar la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil en el municipio	• Que se pueda elegir representantes en los COCODES y participar libremente en estos
• Militarizar las calles	• Que la municipalidad no condicione los programas de mejoramiento vial, red pluvial y de aguas servidas, iluminación de espacios públicos al apoyo electoral
• Imitar el modelo de seguridad residencial de las colonias de la Ciudad de Guatemala	• Construir o recuperar lugares para realizar actividades culturales y deportivas
• Imponer toques de queda	• Construir bibliotecas y lugares donde se pueda aprender a tocar instrumentos
• Prohibir que personas no nacidas en Sanarate vivan ahí	• Imitar la organización de los pueblos originarios

Fuente: elaboración propia con base en grupos focales.

Al final del proceso de formación, las personas participantes expresaron mayor complejidad e integralidad en sus propuestas, así como mayor conciencia de su rol y sus aportes en el proceso incluyendo elementos en sus acciones que antes no estaban contemplados. Estos elementos fueron: mayor formación en distintas estrategias de prevención, mejor articulación con las autoridades estatales, la construcción de

políticas públicas de prevención y protección, el fortalecimiento del análisis de la violencia en la escuela y la iglesia, la creación y el mejoramiento de organizaciones que contemplen distintos aspectos de la violencia como parte de su agenda, y el compromiso de sensibilizar líderes comunitarios, autoridades y líderes religiosos.

Al inicio, a pesar de que existen propuestas de prevención en los espacios públicos, se tiene la idea de que estas políticas tienen que ser formuladas por la municipalidad, principalmente, y por la Policía Nacional Civil. Además, se cree que solo las acciones que son consideradas como «delito» son las que tienen que ser erradicadas.

Respuestas desde el Estado con respecto a la sociedad civil

En los grupos participantes hubo una percepción generalizada de estancamiento del papel del Estado con respecto a la seguridad y el desarrollo en el municipio. Las respuestas tienen que ver típicamente con acciones reactivas del Estado. Al inicio de este proyecto, incluso aparecía en las discusiones la idea de que el Estado respondía mejor en la medida que sus reacciones fueran más rápidas y eficientes o tuvieran mayor despliegue de fuerza: capturas más efectivas, más presencia policial, mayor vigilancia, mayor orden vial o restricciones en el acceso a viviendas o colonias por parte de personas extrañas.

En la medida en que el proceso de formación avanzó, el grupo identificó los grandes ausentes del Estado (tanto Gobierno nacional como municipal), más allá de la parte reactiva. Aquí se incluyó la ausencia de un sistema de protección de niñez, aunque hay una oficina de la mujer, se mencionó que el trabajo con prevención en violencia contra las mujeres no es transversal. Se hizo claro que, más allá de lo que promueve la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, tampoco hay políticas o planes de prevención de la violencia, ni un sistema local para análisis de la violencia o el delito. Entre otras cosas, no hay un control estricto de la distribución de bebidas alcohólicas, hay una débil articulación del liderazgo en los Consejos Comunitarios de Desarrollo, así como una débil participación de la sociedad civil en el Concejo Municipal, además de darse casos de violencia en contextos preelectorales.

El principal aspecto de preocupación notado por el equipo de investigación es la débil participación de la sociedad civil organizada en la gestión pública y la debilidad de las organizaciones sociales en su función de auditoría y rendimiento de cuentas. Esto traza un largo camino por recorrer para los próximos años.

Fortalecimiento de capacidades locales para construir espacios más seguros

En Sanarate las posibilidades de organización ciudadana son reducidas, así como la capacidad de incidencia y de auditoria social sobre la municipalidad. Dados los bajos niveles de organización comunitaria y confianza y el hecho de que la articulación con las instituciones tiene el riesgo de ser considerada como proselitismo pro alcaldía, mejorar las capacidades locales para la construcción de espacios seguros es un reto a largo plazo.

En vista de las dificultades a nivel organizativo, el equipo del proyecto de investigación identificó las principales necesidades y propuso la construcción de capacidades en actores clave de la comunidad para promover un efecto multiplicador y para elevar el nivel organizativo de la comunidad.

Se identificaron principalmente tres necesidades. Primero, el fortalecimiento de capacidades de liderazgo democrático, incidencia y gestión comunitaria; segundo, el fortalecimiento de principios y estrategias de seguridad desde una perspectiva de paz, y tercero, el desarrollo de habilidades para facilitar procesos de multiplicación en otros actores de la comunidad.

Al final de la experiencia práctica, las personas participantes mejoraron su percepción frente a la capacidad personal para contribuir con cambios en su comunidad, en especial los jóvenes y los educadores o maestros. En general, el grupo constató no solo la importancia de promover ideas asociadas a la cultura de paz, sino la necesidad de hacerlo con metodologías participativas, como una herramienta para transformar las relaciones de poder que dan lugar a la violencia.

Hallazgos durante los módulos de formación de actores locales

Para fortalecer capacidades locales en el desarrollo de procesos de prevención de la violencia se desarrolló un proceso de formación que incluyó siete módulos, empezando por conceptos básicos y herramientas de análisis y acción hasta llegar a la construcción de planes de incidencia. De las 28 personas que participaron, concluyeron 17, de ellos, el 60 % fueron mujeres.

Durante el desarrollo de cada módulo surgieron aprendizajes que despertaron el interés del grupo. Mediante el uso de la técnica de teatro foro y simulación de casos se logró analizar el contexto desde diferentes perspectivas. Con el teatro foro como

método de participación y reflexión, los participantes pudieron jugar varios roles para mejorar su aprendizaje. Las personas involucradas en este tipo de actividad valoraron este método como una vía de comunicación que genera una discusión constructiva. En este sentido, el grupo constató que no basta con aprender contenidos relacionados con la construcción de espacios más seguros, sino que también hay que hacerlo con métodos que sean coherentes con los principios de seguridad humana y democracia. Esto supuso una dificultad mayor para el equipo de investigación, pues también el equipo debía cuidarse de tener actitudes autoritarias, paternalistas o proteccionistas hacia las personas participantes, generando un clima de horizontalidad y respeto (fotografía 4.2).

Fotografía 4.2
Equipo de campo de investigadores académicos y comunitarios

Fotografía: ISE.

Conclusiones

El concepto de «espacio seguro» está íntimamente ligado a la movilización y la libertad de locomoción en espacios públicos, incluyendo factores como la seguridad vial, la seguridad y la libertad para comerciar, la confianza de movilización en horas y calles desoladas, y la posibilidad de estar libres de miedo en la calle y de riesgos de acoso sexual. Esto se explica por el papel histórico y económico que tiene el tránsito para la economía y la subsistencia de los habitantes.

Ante una comunidad con una débil participación ciudadana y sin políticas o sistemas incluyentes en seguridad humana, las medidas de seguridad normalmente se asumen como medidas más reactivas que proactivas o preventivas y la responsabilidad de ellas tiende a recaer sobre las «autoridades». La juventud, los niños, las mujeres y los adultos de la tercera edad están entre los grupos más expuestos a sufrir y cometer violencia, pero al mismo tiempo estos son grupos poco visibilizados en la comunidad.

A pesar de ello, las comunidades urbanas son muy receptivas a metodologías que partan desde la cotidianidad en donde la experiencia de cada individuo aporte datos enriquecedores al proyecto. Durante estos ejercicios se evidenció que las actitudes hacia la violencia y hacia la participación ciudadana son modificables cuando se utilizan herramientas participativas y de diálogo. En particular, la comunidad de Sanarate es receptiva a procesos intergeneracionales donde jóvenes y personas mayores puedan integrarse.

Los participantes e investigadoras comunitarias recomiendan que se busque el espacio para tener un proceso de más largo plazo (tres a cinco años más) en donde puedan fortalecerse las habilidades y las prácticas de participación democrática en Sanarate. Esto requiere mayor presencia institucional, un soporte financiero y la creación de alianzas. Esta visión incluye acciones como la formación de adolescentes de últimos grados de carrera secundaria, la formación de maestros, la implementación de metodologías participativas como la mediación escolar en centros educativos, la sensibilización de autoridades locales y de funcionarios frente a estos temas. También es importante la creación de redes para formación de integrantes de COCODES, la identificación y la formación de líderes comunitarios informales y el fortalecimiento organizativo de la sociedad civil.

Esto sugiere que se profundice la investigación de las siguientes líneas temáticas, a través de la utilización de diseños con métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos) para el abordaje más amplio y profundo: la generalización y normalización de la violencia, desde el análisis de dinámicas locales, las percepciones de la violencia y sus consecuencias (diferencias de género en cuanto a la percepción de los actos de violencia delictiva), y la seguridad y vulnerabilidad.

Por ello, resulta especialmente importante profundizar y aportar nuevos conocimientos en relación con estos procesos, pero, sobre todo, aportar conocimientos sobre las dinámicas de resiliencia generadas desde las comunidades.

Referencias

Ander-Egg, Ezequiel 1990 *Repensando la investigación-acción participativa* (Bilbao: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco).

Anuario estadístico de la educación en Guatemala, C. A. 2016 <http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2016/data/Resultado.htm?Nivel=43&Depto=00&Pob=3&Inf=2&Sector=0&Desgloce=3&Submit=Mostrar+cuadro> acceso 23 de noviembre de 2017, y <http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2016/data/Resultado.htm?Nivel=45&Depto=00&Pob=3&Inf=2&Sector=0&Desgloce=3&Submit=Mostrar+cuadro> acceso 23 de noviembre de 2017.

CACIF 2012 *Nuevo Principio: Visión transformadora de la realidad nacional* (Guatemala: CACIF).

Coffey, Amanda y Atkinson, Paul 2003 *Encontrar el sentido a los datos cualitativos* (Colombia: Universidad Nacional).

CONALFA -Comité Nacional de Alfabetización-. 2014. *Informe sobre resultados de la implementación del programa de alfabetización "yo, sí puedo" en Guatemala.* En: < http://www.conalfa.edu.gt/investigaciones/internos/InformeYSPgt.pdf>.

INE –Instituto Nacional de Estadística Guatemala-. 2012. *Estadísticas*. En: <https://www.ine.gob.gt/ine/>

INE –Instituto Nacional de Estadística Guatemala-. 2017. *Estadísticas*. En: <https://www.ine.gob.gt/ine/>

Insight Crime. 2017. *Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2016.* En: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-insight-crime-sobre-homicidios-2016/>

Ministerio de Gobernación. 2012. *Pacto por la Seguridad, la justicia y la paz.* En: <https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/pacto_por_la_paz_la_seguridad_y_la_justicia.pdf>

OPS –Organización Panamericana de la Salud-. 2018. *Nuevo informe de la OMS destaca que los progresos han sido insuficientes en abordar la falta de seguridad en las vías de tránsito del mundo*. En: <https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_content&view=article&id=1179:nuevo-informe-de-la-oms-destaca-que-los-progresos-han-sido-insuficientes-en-abordar-la-falta-de-seguridad-en-las-vias-de-transito-del-mundo&Itemid=441>

Orantes, Carmen 2013 "¿De qué juventud hablamos? Las imágenes y discursos sobre la juventud" en AVANCSO y el Instituto de Estudios Humanísticos (orgs.) *Jóvenes en Guatemala. Imágenes, discursos y contextos* (Guatemala: Serviprensa).

PrensaLibre. 2016. En: <https://www.prensalibre.com/tema/mexico/>

Saquimux, Miguel. 2014. «Sí, si hay motivos para ejercer violencia contra la mujer», tesis de licenciatura. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Schütz, Alfred 1974 *El problema de la realidad social* (Buenos Aires: Amorrortu).

SEGEPLAN. 2016. *Localización del municipio.* <https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/municipio-de-sanarate-el-progreso/>

Taylor, Steve y Bodgan, Robert 1986 Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós.

Vaventura. 2012. *Guatemala, un país dominado por los c*árteles m*exicanos y por la violencia.* https://vaventura.com/divulgacion/geografia/camino-la-droga/

Visdómine-Lozano, Carmelo y Luciano, Carmen. 2005. *Locus de control y autorregulación conductual: revisiones conceptual y experimental.* España: Universidad de Almería.

5

Voces e iniciativas comunitarias de las mujeres. Construir espacios seguros en un contexto patriarcal en Tegucigalpa, Honduras

María Virginia Díaz, Jenny Espinoza,
Mercedes Elena Flores[1] y Denia Matamoros[2]

Introducción

La presente investigación comprende las reflexiones teóricas y políticas desde la perspectiva feminista, alrededor de lo que se vive en trece barrios y colonias del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, Honduras. Este estudio privilegia las voces, las vivencias y los saberes de las mujeres que enfrentan un contexto de alta conflictividad, violencia e inseguridad en sus entornos cotidianos.

Con el propósito de aportar conocimiento desde la metodología de la investigación-acción-participación, como punto de partida se conformó un equipo con dos investigadoras académicas y dos investigadoras comunitarias. Ellas hicieron un diagnóstico previo en las comunidades para conocer los factores de violencia en estos barrios y colonias. Este equipo procuró asegurar en todos los procesos la participación de las mujeres, quienes aportaron sus saberes y experiencias previas.

---

1 María Virginia Díaz, investigadora académica del Centro de Estudios de la Mujer, Honduras (CEM-H). Mercedes Elena Flores, investigadora académica del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), Tegucigalpa, Honduras.

2 Jenny Espinoza, investigadora comunitaria. Lideresa juvenil de la Colonia Ramón Amaya Amador, Tegucigalpa, Honduras. Denia Matamoros, investigadora comunitaria. Lideresa de la Colonia Villanueva, Tegucigalpa, Honduras.

Por cada fase de la metodología se hizo una actividad de capacitación dirigida tanto a las mujeres del equipo como a las lideresas comunitarias. Para la interacción entre las participantes se usaron varias técnicas como la cartografía social, mediante la cual se construyeron de manera colectiva mapas comunitarios, y los grupos focales, que, entre otros asuntos, permitieron identificar los factores socioculturales que inciden para que las mujeres vivan situaciones de violencia en el ámbito público y privado, y analizar las alternativas y estrategias para influir en las políticas. También se hicieron entrevistas en profundidad con funcionarios y funcionarias del Estado, y entrevistas semiestructuradas a mujeres expertas en la temática. Además, los talleres de consulta y de validación con las fuerzas vivas, funcionarios y funcionarias institucionales locales de los trece barrios y colonias de la capital y con las investigadoras comunitarias, permitieron analizar y socializar los factores, identificar los actores y hacer propuestas colectivas para construir lugares seguros para las mujeres en sus territorios.

El capítulo está estructurado en tres apartados: el primero aborda un panorama general sobre la pobreza, desigualdad, violencia y femicidio, que se observa en el Distrito Central, territorio geográfico en donde se localizan las comunidades objetivo del presente estudio. Aquí también se presentan los detractores de la paz y la seguridad de las mujeres que son los factores sociales, culturales y económicos que conducen a la violencia en vez de la seguridad humana.

El segundo apartado se ocupa de las intervenciones del Estado y sus efectos, así como las intervenciones de otros actores para construir espacios seguros. En la tercera parte se ubican las respuestas de las mujeres a las violencias, las actividades y las acciones que emprenden para reconstruir el tejido social y para eliminar la violencia. Al final se presentan las conclusiones más relevantes que emergieron del proceso del análisis del tema de investigación en el que participaron los actores y las actoras para lograr la construcción de propuestas de espacios seguros para las mujeres.

El panorama general de pobreza, desigualdad, violencia y femicidio en el Distrito Central

El informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México (CCSPJP) ubica a las ciudades del Distrito Central del departamento de Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela) como las más violentas de América Latina y más peligrosas para las mujeres.

Las cifras divulgadas en los medios de comunicación establecen que en Tegucigalpa y Comayagüela existen dieciséis barrios y colonias de alta peligrosidad, consideradas las más violentas: Kennedy, Los Pinos, El Hato, Buenos Aires, La Canaán, El Reparto, Colonia Sagastume, El Bosque, El Pedregal, Colonia Estados Unidos, Tres de Mayo, La Laguna, El Sipile, El Infiernito, Divino Paraíso y La Ulloa. En el año 2017 se reportaron 388 muertes violentas de mujeres con una tasa de 8,6/100 000 habitantes mujeres. De estas mujeres, 159 presentaron señales de ensañamiento en sus cuerpos (41 % del total), 47 fueron víctimas de su pareja o expareja y 106 de la delincuencia. De estos femicidios, 34 eran de Francisco Morazán (UNAH-IUDPAS, 2017). Entre enero de 2018 y febrero de 2019 se registraron 205 femicidios a nivel nacional, el 33,17 % ocurrió en nueve de los trece barrios del Distrito Central en donde se realizó este trabajo de investigación (CEM-H, 2019).

En relación con la tasa de desempleo abierto (mujeres que quieren trabajar y que no encuentran trabajo), los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reportaron que en junio de 2016 el Distrito Central experimentó la tasa más alta con el 12,15 % en relación con la de San Pedro Sula, que es del 9,5 %. El porcentaje de mujeres desocupadas en el Distrito Central fue de 19,4 % en comparación con San Pedro Sula, que fue del 8 % (INE-EPHPM, 2016).

Según información del Banco Central de Honduras (Rodríguez, 2018, párr. 1) sobre el índice de precios al consumidor, a septiembre de 2018, el costo de la canasta básica era de 8356 lempiras. Como las mujeres no tienen acceso a esos ingresos, no pueden obtener los productos de la canasta básica, debido también a los altos costos producidos por la devaluación de la moneda nacional, el aumento de los precios del petróleo y del transporte urbano. La diferencia entre los ingresos que reciben los hondureños con educación superior al trabajar en el Estado es de 11 000 lempiras para las mujeres, y 15 000 lempiras para los hombres. En la empresa privada la relación es de 7200 los hombres, y de 5900 lempiras las mujeres; para personas con nivel de educación primaria, es de 3000 lempiras para la mujer, y de 4500 para el hombre. Sin nivel educativo el ingreso disminuye a un promedio de 2224 lempiras, recibiendo el 70 % menos de ingreso para poder comprar la canasta básica.

De otro lado, las condiciones ambientales de los trece barrios y colonias del Distrito Central son deficientes. Esta situación se materializa en el deterioro de la infraestructura vial y los servicios públicos: deterioro de las calles, aceras y avenidas, ausencia del sistema de alcantarillado, iluminación de las calles, teléfonos públicos, servicios de ambulancia y transporte.

La carencia de estos servicios pone a las mujeres en mayor situación de riesgo y de peligro a su integridad física y emocional. Algunas casas y terrenos se convierten en refugios de los grupos criminales que operan en la zona, sirviendo como espacios de torturas, desmembramiento de los cuerpos de las mujeres, actos satánicos, violaciones sexuales y asesinatos. Los terrenos abandonados son utilizados como cementerios clandestinos donde se tiran y se entierran los cadáveres de las mujeres, demostrando sus cuerpos una serie de actos de barbarie y signos de ensañamiento como quemaduras, mutilación de sus órganos reproductivos, introducción de objetos en la vagina y violación sexual, entre otros.

Este hallazgo remite al planteamiento teórico de Rita Segato (2013) sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez. Ella plantea que

> [...] en estos asesinatos hay dos tipos de mensajes enviados por los hombres que los cometen. Uno es vertical, de ellos sobre las mujeres. Es el mensaje de la dominación que todo femicidio tiene, cuyo propósito es aterrorizarlas y demostrar que como hombres tienen el control sobre ellas. El otro es horizontal, es el mensaje de los femicidios a otros hombres, demostrando el poder en disputa con los otros; el control de ciertos territorios (también negocios), en posibilidad de actuar impunemente la capacidad de repetir estos asesinatos. Este segundo mensaje es el que domina en el escenario de las mujeres asesinadas por venganza entre hombres (Segato, 2013).

Además, las mujeres tienen acceso limitado a servicios de salud de manera gratuita y universal. En este contexto, en la mayoría de los trece barrios y colonias, las mujeres no cuentan con un centro de salud accesible, teniendo que movilizarse a otros barrios y colonias. Los centros de salud presentan deterioro de la infraestructura, desabastecimiento de medicamentos y equipo médico y falta de personal especializado para atender la salud reproductiva y salud sexual de las mujeres. Además, están expuestas a situaciones de violencia emocional por parte del personal médico y guardias de seguridad, quienes emiten expresiones verbales discriminatorias hacia las mujeres que solicitan información sobre su salud.

Las mujeres jóvenes enfrentan situaciones de discriminación al negárseles el acceso a las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE), implicando una violación a los derechos sexuales y derechos reproductivos por parte del Estado y las instituciones públicas.

Cabe destacar que son las mujeres las involucradas en la gestión de los recursos para el bienestar individual y colectivo de la población en los barrios y las colonias; sin embargo, están ausentes de los espacios públicos políticos, de tomas de deci-

siones a nivel comunitario y nacional, convirtiéndose esta en otra de las múltiples discriminaciones que viven las mujeres de los trece barrios y colonias del Distrito Central, como consecuencia de un modelo económico de acumulación, que se basa en el patriarcado para su concreción.

Transformaciones de los barrios en espacios violentos

La mayoría de los barrios y las colonias de la periferia se crean sobre la precariedad total, a raíz de situaciones extremas como fenómenos naturales, entre ellos el huracán Mitch (1998) y el huracán Fifí (1974). Otros porque son los receptores de masas de poblaciones que emigran del campo a la ciudad, sin ninguna opción más que asirse en zonas sin condiciones mínimas básicas. Algunos de los barrios comienzan llamándose de acuerdo con sus características físicas originales (El Chiringuero, el Pantanal, la Nueva Capital), la mayoría surgieron producto de las invasiones mantenidas por las luchas de las mujeres.

Las mujeres de estos barrios y colonias eran las que sostenían la lucha en los territorios y sufrían todo tipo de violencias, desde violencia física y amenazas de muerte hasta tortura y violencia sexual. En respuesta, ellas desarrollaron estrategias de sobrevivencia, agrupándose y organizándose para defenderse de la violencia física y sexual propiciada por la policía, la alcaldía, los terratenientes y sus empleados.

Muchos de los testimonios dan cuenta de cómo los miembros de los patronatos, en complicidad con los terratenientes, establecieron pactos de corrupción para extorsionar y amenazar por muchos años a las mujeres y sus familias que se encontraban asentados en los terrenos; por medio del robo de sus aportaciones, el hostigamiento de la policía, la violencia física, el encarcelamiento y el desalojo recurrente para que abandonaran la parcela que habían invadido, a consecuencia de la pérdida de sus casas por los fenómenos naturales en las zonas con vulnerabilidad ambiental que habitaban.

Es así que, desde un inicio, la mayoría de los barrios carecen de todas las dimensiones de la seguridad humana; se instalan sobre la escasez de las pobladoras y los pobladores que estaban en los albergues de familias que perdieron sus casas y pertenencias, producto de los fenómenos naturales, principalmente después del huracán Mitch en 1998. Algunas de estas inseguridades persisten en la actualidad.

Las mujeres de los barrios y las colonias reconocen que los femicidios han aparecido en sus entornos comunitarios a raíz de la agudización de la violencia y de la

instalación de las organizaciones criminales como las maras, pandillas, narcotráfico y otras expresiones delictivas que, a través de la visibilización de los femicidios y muertes violentas en los espacios comunitarios, han instalado el terror en las mujeres. Los espacios comunitarios se han convertido en un tiradero de cadáveres de jóvenes y mujeres. Los cuerpos de las mujeres son encontrados con claras manifestaciones de odio, saña y tortura, con evidencias de descuartizamiento y violencia sexual (La Tribuna, 2018).

Ante este contexto de violencia generalizada, las mujeres han generado medidas de adaptación a estas violencias, naturalizando la inseguridad y legitimando el control del territorio por las maras y las pandillas. Ellas expresan que sienten mayor seguridad por parte de estos grupos en comparación a las que podría brindarles el aparato policial del Estado. Valoran como una acción positiva la de tomarse la justicia por la propia mano, acciones que realizan frecuentemente las maras y las pandillas, como medida correctiva para alcanzar su seguridad y mantener alejada a la policía y a las pandillas adversarias de los territorios.

Hay una visión urbanística patriarcal en la forma en que se organizan los barrios y las colonias, por lo que las mujeres no pueden disfrutar de los espacios públicos comunitarios. No hay lugares específicos para que ellas puedan hablar de su problemática, ya que los presidentes de patronatos son los dueños de las instalaciones comunitarias, a quienes las mujeres tienen que pedir su autorización para poderlos utilizar.

Ese contexto las ha obligado a abandonar las actividades económicas que les generaban recursos para evitar ser asesinadas o amenazadas de muerte, por no poder pagar la cuota de la extorsión o el «impuesto de guerra» que imponen las maras y las pandillas que controlan los territorios. Se sienten amenazadas ante la posibilidad de que sus hijos sean obligados a la realización de trabajos ilícitos y que sus hijas sean secuestradas por los jefes de las pandillas, para ser abusadas sexualmente.

El sentido de colectividad, es decir, del tejido social que históricamente las había agrupado y articulado para alcanzar las transformaciones a nivel comunitario, fue roto por la violencia, impidiendo que se organicen para crear y fortalecer una articulación comunitaria que interpele, demande y promueva el respeto y el cumplimiento de sus derechos. Vivir encerradas es otro de los mecanismos que utilizan para evitar ser vistas, amenazadas, perseguidas, acosadas o abusadas en sus comunidades, limitándolas a no utilizar el espacio público para reunirse o recrearse e interactuar con sus pares en la comunidad.

Los principales generadores de violencia que afectan a las comunidades

Los hombres

Según las mujeres participantes en ese estudio, el principal actor que les genera violencia son los hombres que mantienen arraigados patrones patriarcales y que han construido una masculinidad violenta que continuamente debe ser demostrada y validada a través de manifestaciones de odio, menosprecio y, en casos extremos, femicidios con saña y tortura. Esta legitimación del poder masculino hace que los hombres ejerzan violencia y generen inseguridad tanto en el espacio doméstico como en el espacio comunitario. «Los hombres son los que nos generan todo tipo de violencia a las mujeres por el machismo, tanto física como psicológicamente. Año tras año nos han violentado por el machismo y el patriarcado» (Testimonio mujer lideresa participante en Grupo focal, realizado en la Colonia Ramón Amaya Amador, Comayagüela MDC, 13 de junio de 2018).

Por mandato patriarcal las mujeres deben reproducir el control social sobre sus hijos e hijas, principalmente sobre estas últimas. Ellas se encuentran en un escenario con pocas posibilidades de conocer sus derechos y de acceder a una formación que les permita hacer una lectura crítica de sus prácticas violentas contra las mujeres de su entorno, las que se proyectan en contra de sus hijos e hijas. Esa transferencia de violencias de madres a hijas y a otras mujeres, limita la posibilidad de formar un poderío de mujeres que logre conquistar sus derechos para transformar la cultura y establecer una comunidad feminista que exija una vida libre de violencias.

> El primer obstáculo es la propia mujer, porque a ella le da mucho miedo salir del espacio en el que está o el que le ha sido dado a conocer, porque creen que su espacio se limita al hogar y al trabajo y, hablando del ámbito rural y urbano, creemos que somos las cuidadoras, las que estamos destinadas a las actividades del ejercicio privado dentro del hogar. Desde ahí, una vez se desmonten esas estructuras mentales, creo que ya el siguiente momento es el Estado en sí mismo (Entrevista a profundidad a experta en seguridad Leila Díaz, COSUDE, Tegucigalpa, 12 de julio de 2018).

El Estado

Para las mujeres, otro de los actores que produce y reproduce violencia es el Estado mismo, con la implementación de medidas económicas capitalistas que asignan mayor cantidad de recursos para la compra de armas, equipo militar y contratación de

policías y militares, en lugar de abastecer de medicamentos y equipo a los centros de salud y hospitales, mejorar las escuelas y colegios y crear centros de cuidado y comedores infantiles, que les permita acceder a empleo. Esto es un problema serio en sus zonas.

A lo anterior, se le denomina *violencia institucional*[3] y es aquella que, aparte de los ejemplos anteriores, acontece cuando las comunidades no cuentan con servicios de agua potable para que, en este caso, las mujeres desarrollen labores de cuidado sin tener que comprarla a altos precios a los camiones cisterna. No existen suficientes recursos etiquetados para las comunidades más pobres y marginalizadas, afectando desproporcionalmente a las mujeres por los altos costos de la canasta básica, servicios de transporte públicos ineficientes y la poca infraestructura local que responda a las necesidades específicas de las mujeres.

> Las instituciones del gobierno, cuando las mujeres andan en el centro de salud, en los hospitales y no hay medicina. Los centros de salud que hay que pagar tanto pisto (dinero) porque dicen que ahora va a ser privado. Económicamente estamos mal. ¿Quiénes son los culpables? El Estado generan todos esos tipos de violencias (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en colonia Nueva Capital, Tegucigalpa, 21 de junio de 2018).

Funcionarios locales

Obstaculizando el acceso y participación de las mujeres en la toma de decisiones, los funcionarios locales (patronatos, juntas de agua, comités) forman parte de los actores que generan violencia e inseguridad contra ellas en los barrios y las colonias. Un ejemplo que ellas citaron es la violencia que se ejerce contra las lideresas cuando cuestionan, ridiculizan y menosprecian sus capacidades y decisiones.

> En las comunidades todo se rige por el hombre, nada por la mujer. En los patronatos, en la junta de agua: varón; en la iglesia: el hombre; en la calle: el hombre… las vulgaridades, policías corruptos, porque aquí en la Ramón Amaya ha habido y hay policías corruptos (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la Colonia Ramón Amaya Amador, Comayagüela MDC, 13 de junio de 2018).

Estos modelos permiten que los funcionarios mantengan secuestradas las organizaciones comunitarias y son fuertemente abalados por el gobierno local.

---

3 Sobre Violencia institucional véase Bodelón, Encama. 2015. «Violencia institucional y violencia de género» en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez.* Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Vol. 48.

Transporte público

Otro espacio donde las mujeres sufren violencia e inseguridad es en el transporte público. Como resultado de las agresiones generadas por parte de los conductores y cobradores de buses que ejercen violencias que van desde el acoso verbal, sexual, insultos y asaltos hasta las agresiones físicas. «Desde que salimos de nuestra casa, en el bus nos van diciendo cosas obscenas. Vamos en el taxi, nos asaltan o llegamos al mercado a comprar la comidita de nosotras y nos asaltan. Vamos exponiéndonos a muchas dificultades como mujeres» (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la Colonia Ramón Amaya Amador, Comayagüela MDC, 13 de junio de 2018).

En este escenario, existen pactos invisibles y complicidad entre los agresores y los policías. Los servidores públicos han perdido la credibilidad ante las mujeres en las comunidades; los identifican como corruptos, protectores, informantes de los agresores y generadores de mayor inseguridad de las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar.

Maras y pandillas

Mediante el control territorial y las consecuencias de su presencia, los hombres que integran las maras y las pandillas son también actores que generan violencia e inseguridad. Se les describe como «hombres que están en las armas», que ejercen violencia cuando hay pleitos por el control de territorios, realizando acciones delincuenciales o ilícitas, que aseguren su poderío, a través de la demostración de su fuerza y su poder, reafirmada por la crueldad y la utilización de armas letales.

> Con las maras ponen muchachas jóvenes. A falta de trabajo les ofrecen mejores oportunidades y ofrecen dinero fácil, pero por mal camino, no tal vez solo los varones, sino que las jóvenes también. En la colonia Villanueva eso es lo que está pasando; aquí el punto de drogas está matando a las jóvenes y a la gente inocente, porque tal vez si un joven se mete a eso no es el que paga, sino la familia, la abuela, la hermana que secuestran (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la Colonia Villanueva. Distrito Central, 6 de junio de 2018).

Los enfrentamientos entre pandillas con armas de fuego ponen a toda la comunidad en inseguridad letal. La presencia de estos actores tiene un impacto diferenciado en los hombres y las mujeres, pues las mujeres jóvenes y las niñas son utilizadas para la explotación sexual o violencia sexual por parte de los miembros de las redes delincuenciales comunitarias.

Los impactos de las violencias en la vida de las mujeres y en los escenarios

La alta peligrosidad de los barrios ha tenido transformaciones en sus expresiones de violencia (saña, brutalidad) y en los símbolos y mensajes dirigidos hacia las mujeres. Los cuerpos de las víctimas de femicidio retratan la misoginia y evidencian la violencia sexual extrema, al igual que la tortura que se utilizó en el crimen.

Esas transformaciones en los espacios donde se manifiestan las violencias han borrado la línea dicotómica de lo privado y lo público. El espacio privado era el escenario por excelencia, donde las mujeres sufrían todo tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas afectivas. En la actualidad, el espacio privado se ha vuelto sumamente peligroso porque es allí donde permanecen las mujeres, pero a la vez es el escenario donde los agresores tienen la certeza de encontrarlas para materializar una amenaza, una venganza, el cobro de extorsión o de ajuste de cuentas. El espacio público es también controlado por las redes delincuenciales comunitarias, recrudeciendo la peligrosidad para las mujeres en ambos espacios. «Antes la violencia era ejercida por las personas cercanas a una, ahora se puede ver que la violencia es ejercida en general, donde lo conozcan a uno o no» (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia Campo Cielo, Tegucigalpa, 8 de junio de 2018).

Ante el vacío de la presencia estatal, con los cambios en las dinámicas de las comunidades, debido al control que ejercen las maras y las pandillas, se ha instalado un Estado paralelo, donde las reglas, los códigos de convivencia y la aplicación de la justicia son dictadas por los miembros de estos grupos.

El impacto económico, ocasionado por los costos que generan los enfrentamientos violentos entre los grupos delictivos por el control de los territorios, se visibiliza con la recuperación de algún familiar que fue gravemente herido a través del uso de armas de fuego. Son las mujeres las que, también aquí, ejercen los roles de cuidado, las que permanecen en los hospitales con los enfermos y las que van a la morgue y realizan los trámites de defunción y entierro de los asesinados de su entorno afectivo. También hay un estado de luto y de dolor por los asesinatos cometidos hacia los miembros de sus familias, una situación que les genera un costo emocional permanente y que tienen que enfrentar para poder continuar resistiendo y sobreviviendo.

> Es un costo económico porque cuando hay masacres, primero es un costo emocional, ver que asesinen a sus hijos. Luego un costo económico [porque] se quedan con los enfermos, con toda la tarea del cuidado. No solo eso, por decir algo, maten al padre de

> familia, es la mujer quien tiene que asumir la carga económica de mantener a los hijos y eso son efectos de la violencia (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia Nueva Capital, Tegucigalpa, 21 de junio de 2018).

Este contexto impide que denuncien a los agresores y que consecuentemente no tengan acceso a la justicia. Si bien es cierto, que las mujeres resisten ante un contexto tan adverso, esta situación significa un retroceso y la transgresión de sus derechos para disfrutar de una vida libre de violencias.

Los detractores de la paz y la seguridad de las mujeres

Existe una serie de factores sociales, culturales y económicos que conducen a la violencia en vez de la seguridad humana, como las formas del lenguaje, el entorno familiar como escenario de violencia, las violencias estructurales y la falta de oportunidades para la mujer.

Por una parte, la legitimidad social que existe dentro de las formas de lenguaje que inducen a la «cosificación de los seres humanos», en este caso de las mujeres como propiedad del otro, se refleja en expresiones como la siguiente: «mi mujer» o «mi marido». Las personas como propiedad y, en este caso, las mujeres como propiedad, constituye una herramienta de acumulación de capital. Aunque el trabajo que se hace en la familia tiene una repercusión en la economía global, este no se reconoce porque se ha considerado que esto se hace por control, como si el otro fuera marcado como parte de algún inventario ante los demás miembros de la comunidad, o como parte de los roles de cuidado asignados a las mujeres.

La primera institución donde se aprenden los roles y se interioriza la masculinidad violenta y abusiva es la familia, de ahí que existe corresponsabilidad entre todos sus miembros en la reproducción de patrones de violencia. Los hombres de la familia transfirieren a los niños y jóvenes patrones socioculturales con los que ejercen su poder en contra de las niñas y las mujeres de la familia. Esta violencia machista y patriarcal desde los hogares penetra todos los ámbitos de la vida social, cultural y política de los barrios y las colonias que integran el ámbito geográfico donde se realizó este estudio. La violencia también adquiere patrones cíclicos que permanecen como un *continuum* en la vida de las mujeres, habiendo recibido violencia desde niñas, de jóvenes y luego de adultas por sus compañeros de hogar o parejas afectivas.

> A veces el hombre viene de trabajar y si uno no lo atiende rápido se ponen agresivos. Mi primer hogar era de violencia y yo venía de un hogar en el que mi padrastro le pegaba a mi mamá; llegaba borracho. Yo tenía como 13, 14 años y me le enfrentaba; él le cortó los dedos a mi mamá. Yo miraba la violencia con mi mamá, por eso no me dejaba de mi

> marido; mis dos cipotes miraban eso y por ellos no me dejaba. Él era bien agresivo conmigo (Testimonio de mujer lideresa participante en Grupo focal, realizado en realizado en la colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, 22 de junio de 2018).

Se identifican patrones de consumo que pueden derivar en adicciones por parte de los hombres de la comunidad, y las mujeres atribuyen que el abuso del alcohol y de las drogas por parte de los hombres contribuyen al aumento de las violencias que ejercen en el hogar contra ellas o contra sus hijos e hijas. También lo ven como una causa que genera violencia en la comunidad, cuando la droga y el alcohol son utilizados por los jóvenes que transitan por los espacios públicos comunitarios.

> Otro factor es el alcoholismo. A veces llega el padre ebrio y lo que hace es golpear a la mamá, a los hijos, eso genera violencia, no directamente a la mamá, sino que, a los hijos, psicológicamente y verbal. Si mira el hijo que el padre viene de afuera ebrio y golpea a la mamá, se va armando otra violencia con los hijos (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la Colonia Campo Cielo, Tegucigalpa, 8 de junio de 2018).

El espacio doméstico ha sido violento y sigue siendo peligroso para las mujeres (especialmente para las niñas y las jóvenes) porque es allí donde se ejercen todo tipo de violencias, que va en escalada desde la violencia verbal a la violencia sexual. El primer territorio al que van dirigidas las violencias es el cuerpo de las mujeres.

> Yo nací en un hogar violento en el que mi madre y mi padrastro eran violentos. Como era la mayor, mi padrastro me quiso violar. Mi mamá administraba una cantina de mi tía en Belén. A los 15 años me casé con un nicaragüense (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia Campo Cielo, Tegucigalpa, 8 de junio de 2018).

Hay factores estructurales que profundizan la violencia en el espacio privado de las mujeres y que han permanecido inamovibles en las manifestaciones culturales de la sociedad hondureña, llegándosele a denominar violencia crónica. Sumada a esta, existen otras violencias crónicas como la que genera el factor económico, producto, a su vez, de los altos índices de pobreza en barrios y colonias objeto de estudio. En estos espacios se encuentran todo tipo de carencias materiales, servicios de salud e infraestructura sumamente precarios y ofertas de educación de baja calidad para los hijos e hijas.

> Lo principal que hay en nuestro país es el desempleo; cuando hablamos de parejas, el hombre es responsable del hogar. Si el hombre no tiene trabajo, la mujer le dice busque trabajo, no hay qué comer. Empiezan los problemas. El no tener un empleo equivale a falta de dinero y sin dinero no hay alimentos para la familia (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la aldea La Cuesta, Comayagüela, 29 de julio de 2018).

La falta de oportunidades para las mujeres y los jóvenes de estas colonias y comunidades es otro de los factores que inciden en la violencia e inseguridad, de acuerdo con una experta en seguridad:

> […] la inseguridad viene del Estado con la negación de todos esos derechos y servicios que debe de garantizar, con todas las desigualdades que están ahí inmersas, con toda la inequidad que hay en las riquezas, con la falta de oportunidades para la juventud, sean hombres o mujeres, con toda esa negación que hay para la población y donde cada día se van profundizando más las brechas. Eso da pie y cabida para que en ciertas regiones o territorios haya oportunidad para que ciertas agrupaciones tomen dominio y suplan todo lo que anteriormente mencioné, y [para que] sean ese órgano porque realmente se vuelven un órgano social protector impartidor de justicia a nivel comunitario (Entrevista a profundidad con experta en seguridad, Leila Díaz, COSUDE, Tegucigalpa, 12 de julio de 2018).

Otro de los factores generadores de violencia es la debilidad en la respuesta institucional para garantizar los derechos de las mujeres. Las instituciones responden de manera tardía y con pocos recursos, lo que ha dejado como resultado la falta de confianza hacia ellas por parte de la población, pero específicamente por parte de las mujeres. Con esta situación, los funcionarios reproducen patrones patriarcales y machistas mientras brindan servicios para atender sus derechos.

> Nos genera violencia directa e indirectamente a veces hasta la policía. Nosotras queremos la ayuda de la policía y ellos nos la niegan a nosotras las mujeres, nos ponen serios obstáculos. No se puede confiar en la policía. Tantas cosas se han visto que uno no les tiene confianza. El servicio de la policía para la mujer debe ser inmediato. Lo prestan cuando ya ha pasado algo grave; cuando llegan a la casa a tal lado ya las cosas son irremediables. Nos generan violencia [también cuando] a veces hay policías en las postas enamorando a las jóvenes. No pueden ver una muchacha que pasa porque ya le están diciendo cosas, y ellos están es para guardar seguridad en las colonias (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en colonia Nueva Capital, Tegucigalpa, 21 de junio de 2018).

Un espacio seguro desde la perspectiva de las mujeres

Las mujeres participantes consideran que durante toda su vida han sufrido violencia de todo tipo (física, emocional, verbal, sexual), particularmente la generada en su entorno doméstico, por eso consideran ese espacio como uno de los más inseguros, que las entrena para sentir miedo, reflejando una antítesis sobre los espacios domésticos (familiares) como la primera red de protección y apoyo de todo ser humano. Sin

embargo, y como consecuencia, el espacio público también se ha tornado peligroso en estos territorios. Juntos, son dos escenarios que han construido comunidades violentas, que no les provee espacios seguros.

Las mujeres saben muy bien qué es vivir en un espacio inseguro. Por eso no se les hace difícil construir su propio concepto: «un espacio seguro es donde no se siente miedo». Así lo recalcan las participantes, quienes saben «en carne propia» que en estos barrios y colonias el temor y la incertidumbre las han paralizado, las han obligado a permanecer encerradas en sus casas en una especie de «estado de secuestro y de tortura», a no organizarse con otras mujeres y a adaptarse a la realidad que viven cotidianamente en sus comunidades.

> Tener la seguridad de que voy a salir afuera de mi casa y no va a haber ningún problema, tener la confianza que puedo dar la libertad a mi hija de salir donde una compañera o una amiga, o de ir a una fiesta y saber que va a salir bien de la casa y llegar bien a su casa, yo no le doy esa libertad porque tengo miedo que salga y no vaya a regresar. No porque tenga su novio sino porque le pueda pasar algo (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la aldea La Cuesta, Comayagüela, Honduras, 29 de julio de 2018).

En sus comunidades, las mujeres han sido testigos del hallazgo de cadáveres descuartizados, conocen la vida de sus vecinas que fueron víctimas de los más brutales femicidios, escuchan los sonidos de las balas (enfrentamientos entre maras y pandillas por el control de los territorios) y saben cuáles son los códigos de brutalidad que utilizan los miembros de las redes delincuenciales.

Algo que ellas anhelan con suma urgencia es la libertad, entendida como el derecho a la libre movilización, sin la intimidación de que acaben con sus vidas y las de sus hijos e hijas.

> Sentirme en libertad, segura de que pueda hacer y decir y saber que no va a venir alguien y me va decir ¿y por qué estás haciendo eso?, o sentirme cohibida porque no puedo hablar nada, con miedo que me escuche porque no puede decir nada. Sentirse con libertad donde esté, en cualquier lugar de mi comunidad donde pueda estar, en aquel parque o sentada en esa acera y sentirme con libertad, segura. Que pueda sentarme, reír, llorar. Si tengo ganas de llorar porque estoy triste, por otra cosa y que nadie va a estar criticando, ni vigilando, porque, hasta en eso nos sentimos vigiladas (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia Ramón Amaya Amador, Comayagüela, Honduras, 13 de junio de 2018).

Un espacio seguro para las mujeres implica transformar el espacio público en un espacio en donde haya seguridad; lugares que puedan transitar libremente y en los

que puedan recibir servicios de calidad, dejando de ser espacios de desvalorización, insultos, acoso o discriminación.

Miopía y misoginia del Estado versus espacios seguros

No hay una respuesta oportuna y eficiente por parte de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad y la justicia, responsables de atender, recibir y darles el seguimiento a las denuncias de las víctimas y sobrevivientes de la violencia en los barrios y las colonias de alta vulnerabilidad, aunque existen leyes y políticas que, de implementarse adecuadamente, podrían contribuir a mejorar la situación de violencia que predomina en estas comunidades.

Las posibilidades de acceso a empleo para las mujeres de los barrios y las colonias tienen muchos obstáculos, debido a que son discriminadas por su género y por la edad, fuertemente estigmatizadas por ser pobres y habitar en los barrios y las colonias considerados de alta peligrosidad. El rol doméstico las limita porque no tienen quién les ayude a cuidar a sus hijos e hijas mientras trabajan y los empleadores argumentan que cuando tienen hijos tienen muchas ausencias en el trabajo.

> Usted va a buscar una oportunidad de empleo, pero si usted vive en un barrio o estas colonias, lo primero que le dicen es: tiene pandilleros, son gente de barriada, gente chusma, no son confiables. Porque son mujeres que van o venimos de esos espacios. También los medios de comunicación muchas veces nos están haciendo mucho daño. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que en esa colonia matan, secuestran, que solo hay gente peligrosa y nos ponen a todas las mujeres, a todas las personas en esa misma condición (Miembro de patronato de la Flor N.° 1. Taller de Validación con Fuerzas Vivas realizado el 6 de marzo, 2019, colonia Rubén Darío).

La pobreza, el desempleo y la falta de ingresos para el sustento de la familia, pone a los jóvenes de los barrios y las colonias en condiciones de precariedad, haciéndolos vulnerables para que participen en acciones delictivas, como narcomenudeo, extorsión, secuestro y sicariato. Lo ven como una alternativa para obtener dinero. Aumenta la violencia y disminuyen las posibilidades de crear un espacio seguro. La falta de empleo ha llevado a la población a la migración interna y externa y al desplazamiento forzoso cuando son obligadas a salir de sus hogares porque su vivienda le gustó a alguien de un grupo ilícito.

La situación se complica cuando el compañero de hogar es un policía o un militar, porque el machismo está más arraigado y no respetan los cuerpos de las mujeres, al considerarse que goza de mayor impunidad por el hecho de ser una autoridad.

Para solucionar esta problemática de inseguridad, los funcionarios del Estado tienen una visión militarista de la seguridad para la solución de la problemática de inseguridad. Existe el tazón de seguridad, pero es un fondo del cual se transfieren partidas para la policía militar y a los batallones, disminuyendo el presupuesto para la seguridad comunitaria.

Las instituciones que brindan servicios en los centros de salud y educativos, no cuentan con la seguridad, para proteger a niños, niñas y jóvenes de la violencia y el acoso, porque sus vidas también corren peligro; están siendo amenazadas de muerte para que no denuncien lo que está sucediendo.

> Los antisociales, ellos ya tienen un liderazgo con la policía y nosotros como miembros de la comunidad no podemos depender de, digamos, de la policía o de un padre [de familia]. Uno para hacer una fiesta de jóvenes antes decía: Le voy a pedir permiso a mi mamá o a mi papá. Nosotros ahora les tenemos que pedir permiso a los antisociales para poder hacer una fiesta, para poder celebrar un cumpleaños o para que pueda entrar la familia de nosotras a ciertas colonias. Tampoco en las escuelas ellos permiten que los hijos vayan; no nos vamos tan largo, hay uno de ellos que dijo: quiero el título de mi hijo, del colegio (Enfermera de un centro de salud expresó en el Taller de Validación con Fuerzas Vivas realizado el 6 de marzo, 2019, colonia Rubén Darío).

Las intervenciones formales y los abordajes reales

A pesar de que existen políticas para la seguridad ciudadana, de la mujer, de jóvenes, niños y niñas, sus contenidos no se implementan en los barrios y las colonias que han sido objeto de este estudio. En cambio, sus pobladores viven en un entorno de maras y pandillas, conviviendo con la extorsión, el narcotráfico y la militarización de los territorios, volviéndose insostenible la situación para las mujeres en sus comunidades.

Las organizaciones de mujeres y feministas de Honduras han estado gestionando ante las autoridades, desde hace más de tres décadas, para que las mujeres no sigan siendo víctimas de la violencia. En esta búsqueda, participaron activamente en la elaboración de la Política Nacional de la Mujer y II Plan de Igualdad y Equidad de Género (2010-2022) del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), y el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer (2014-2022), del Instituto Nacional de la Mujer (INAM). Asimismo, han incidido en la formulación de leyes que protegen a la mujer, como la Ley Contra la Violencia Doméstica (Decreto N.° 132-1997) y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (Decreto N.° 34-2000). Sin

embargo, de parte del Estado no hay un enfoque teórico específico, orientado a la seguridad y a prevenir la violencia contra las mujeres. Contradictoriamente la represión, el uso de la fuerza y la militarización en los barrios, ha provocado más violencia y más víctimas.

Los líderes comunitarios consideran que la presencia policial genera mayor inseguridad a las/los pobladoras/es, porque actúan con violencia contra las/los jóvenes en la calle o cuando interceptan los buses de ruta urbana. Se ensañan y los bajan a empujones, sin tomar en cuenta que muchos de ellas/ellos se trasladan a sus centros educativos y no necesariamente son miembros de grupos ilícitos que controlan los territorios.

Cuando las mujeres denuncian la violencia doméstica y la policía detiene a sus agresores, por lo general, a las 24 horas quedan en libertad. La Ley contra la Violencia Doméstica (Ley contra la violencia doméstica (Decreto N.° 132-1997) Promulgada en 1997 y aprobadas sus reformas el 1.° de septiembre de 2006) prohíbe al agresor realizar actos de intimidación o perturbación contra las mujeres, pero cuando regresa al hogar la agrede nuevamente y la amenaza para que no vuelva a acusarlo. En el peor de los casos, la asesina.

La mayoría de las mujeres víctimas de femicidio son encontradas en callejones oscuros o con poca iluminación, en predios con monte o en casas de habitación; algunas en la vía pública, en sus vehículos o en el transporte público (UNAH-IUDPAS, 2018)[4]. En muchos casos, los cuerpos son enterrados o semienterrados en solares baldíos, aparecen en vías públicas o encostalados; otros son lanzados desde vehículos. Algunos casos van a la Corte, pero la mayoría quedan en la impunidad.[5]

---

4 Menciona que en ese período se reportan un total de 389 casos de muertes violentas de mujeres. Al desagregar los datos según la edad de las víctimas el 30,1 % (117) se encontraba entre los 15 y 24 años, mujeres que están en proceso construcción de su identidad, formación educativa y edad reproductiva. Los registros muestran que la mayor vulnerabilidad se presentó en el rango de 20 a 24 años al acumular 17,2 % (67) del total, mientras que los grupos etarios que evidenciaron menor número de víctimas fueron las niñas menores de 15 años con 32 casos y las mujeres de 60 años y más, con 21 víctimas.

5 En el Informe de la Dirección de Medicina Legal del año 2018 se menciona que en el año 2017 se intensificó la violencia contra la mujer al presentarse 781 muertes de mujeres de forma violenta incluyendo las accidentales. De estas, 738 fueron reportadas a las líneas de emergencia, que ingresaron para autopsia; 43 fueron entregados a sus familiares sin autopsia, las que murieron de forma violenta. El más alto porcentaje de muertes violentas le corresponde a Tegucigalpa (116), San Pedro Sula (133) y La Ceiba (26), atendidas por las morgues móviles (25). En el primer semestre de 2018, el registro de muertes violentas de mujeres a nivel nacional fue de 141 víctimas, corresponde al 62 % del total (225) (Dirección de Medicina Legal, 2018).

Percepciones de funcionarias y funcionarios

A través de entrevistas fueron abordados algunos funcionarios del Estado; la Subsecretaría de Seguridad en Prevención mencionó que están trabajando en la recuperación de espacios públicos y brindando capacitaciones gratuitas en los parques, a las mujeres, sobre maquillaje, elaboración de piñatas y zumba, una actividad orientada a los estilos de vida saludable.

La subdirectora de la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios de la Secretaría de Seguridad expresó que la inseguridad en el país ha estado generando muchas muertes de mujeres y que no necesariamente están ligadas al crimen organizado, sino también a situaciones de exposición, asaltos, robos, trata de personas, violencia doméstica y otras.

> Ayudarían aquellas prácticas de seguridad ciudadana que orientara a soluciones más integrales que incluyeran mejorar la calidad de vida de toda la población, la acción comunitaria en la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz para todos y todas (Entrevista a la subcomisionada Persis Zaldívar, subdirectora de la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios. Secretaría de Seguridad. 1.° de agosto de 2018, El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras).

La funcionaria entrevistada de la División de Equidad de Género, de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, explicó que trabajan en los casos de violencia contra las mujeres, los adultos mayores y los menores de edad, facilitándoles el acceso a la justicia.

> Una de las estrategias que hoy tenemos es que trabajamos de la mano con las diferentes organizaciones de mujeres, con el propósito de conocer la problemática y dar respuesta de manera inmediata. Asimismo, desarrollamos capacitaciones en conjunto con nuestros policías, de tal manera que ellas tengan un acercamiento, para así generar confianza. De esa manera, la policía comunitaria está desarrollando programas de prevención al igual que la División de Equidad de Género. Estamos desarrollando programas de capacitación en las escuelas con temas para la prevención de la violencia de género (Indira Ever Cantillano, División de Equidad De Género, Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria. Entrevistada el 23 de julio de 2018, Casamata, Tegucigalpa, Honduras).

También existe una Comisión Técnica Interinstitucional contra la Violencia de Género que aborda la problemática de violencia contra la mujer de manera conjunta con los juzgados, con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Ministerio Público, la Unidad de Género del Poder Judicial, la Secretaría de Salud, Calidad de Vida, el

Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Visitación Padilla, la División de Equidad de Género de la policía, Ciudad Mujer y el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La División de Género de la policía ha capacitado policías en la temática de seguridad y en el abordaje de la violencia contra las mujeres, pero este personal es mínimo y no logra dar cobertura a las necesidades de seguridad en los barrios y las colonias. Se considera importante que en las postas policiales exista una oficina de atención especializada para las mujeres, capacitar al personal de la línea 911 para que atienda con sutileza, calidez y profesionalismo las llamadas de emergencia de las mujeres, y para que la víctima sienta que al otro lado de la línea hay una persona que está tratando de protegerla en su denuncia.

La directora de Medicina Forense explicó que, en los cuerpos ingresados a la autopsia, se pueden establecer las circunstancias del crimen, pruebas relacionadas con sus victimarios que «hablan o expresan» y que abonan elementos que apuntan a definir si se trata de femicidios o de homicidios mediante muerte violenta.

> Los cuerpos de las mujeres muestran señales de sometimiento (atadas de las manos), tortura, asfixia, violaciones y, algunas de ellas, asesinadas con lesiones producidas por arma blanca, con marcas en los brazos, abdomen y otras partes de su cuerpo. Los anteriores son conceptos cuyas pruebas apuntan a femicidios. En la mayoría de los casos, la mujer es victimizada y torturada. Hay casos en los que arreglan la escena del crimen (Entrevista a Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense, 30 de julio de 2018, Boulevard Suyapa, Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras).

Las pruebas científicas son fundamentales para el esclarecimiento de las muertes violentas y femicidios. Medicina forense es un equipo multidisciplinario, conformado por médicos, laboratoristas, patólogos, psicólogos y otros especialistas. Enfrenta dificultades para la cobertura en el nivel nacional porque no cuenta con suficiente personal y equipamiento.

> Luego del hallazgo policial, muchas veces incidental, viene una investigación criminal con muchas deficiencias, poco conocimiento de los patrones criminológicos y de la caracterización de las muertes violentas de las mujeres, distinguiéndolo del femicidio. También hay debilidades estructurales en la manipulación de los objetos de prueba y el direccionamiento técnico del trabajo pericial, el que no posee un esquema especializado para un abordaje forense integral (Entrevista a Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense. 30 de julio de 2018, Boulevard Suyapa, Hospital Escuela Universitario (HEU), Tegucigalpa, Honduras).

En algunos casos, la impunidad puede ser generada por las dificultades en la investigación. El Ministerio Público encuentra tropiezos en el desarrollo del proceso cuando la víctima o testigo no quiere concluirlo por amenazas contra su integridad (en el proceso ordinario).

Para los casos de femicidios y muertes violentas contra las mujeres, medicina forense propone integrar equipos que trabajen desde la notificación de la muerte violenta, investigación, resultados de las pruebas forenses y dictamen de la autopsia, conformados por los agentes de investigación, fiscales, personal de medicina forense y representantes de la sociedad civil interesados en que estos crímenes no queden en la impunidad (organizaciones feministas, investigadoras académicas y otras).

Frente a la violencia en los centros educativos

Debido a las múltiples violencias que manifiestan los niños y las niñas en los centros educativos, las maestras y los maestros se ven en la necesidad de brindar orientación sobre el acoso sexual, la tortura, el maltrato psicológico y sobre las causas por las cuales a las y los jóvenes se les discrimina y se les criminaliza. El personal docente indaga sobre los orígenes de la violencia, abordando los hallazgos en la escuela para padres y madres. Ellos señalan que el problema es que solamente las madres asisten a las reuniones. Aun así, orientan a los niños y las niñas que agreden y ejercen el *bullying* contra otros escolares, procuran fortalecer la autoestima de niños, niñas y jóvenes víctimas de la violencia. El objetivo es que no abandonen el sistema educativo y no tomen decisiones contra su vida.

Para proteger y asegurar la asistencia escolar de sus hijos e hijas a los centros educativos, las madres han implementado algunas estrategias. Se agrupan para acompañarlos a la hora de entrada y salida de clase. En las escuelas cierran los portones durante toda la jornada y los vuelven a abrir a la hora de salida.

Expresiones religiosas

La constitución del país garantiza la libertad de credo. Las mujeres de estas comunidades, en un intento de experimentar esa libertad, identifican que existe gran influencia religiosa que, en algunos casos, puede también ser generadora de violencia. Las mujeres de las comunidades son creyentes de las religiones y ven que hay una penetración de la religión desde el interior del Estado de Honduras, el que perpetúa los roles de desigualdad entre hombres y mujeres, con una fuerte dominación de la iglesia fundamentalista. Esta presenta, entre otras imposiciones, la prohibición de las pastillas anticonceptivas de emergencia, o del aborto cuando se da en circunstancias

especiales no deseadas por la mujer o la adolescente, también limita las denuncias por agresiones y la violencia que ejerce sobre ella su pareja, precisamente porque la religión dice que la mujer debe estar sometida a la tutela del marido y tiene la obligación unilateral de obediencia pues él es quien protege a su familia, él es la cabeza de hogar, lo que genera, además, dependencia económica. La religión recrudece la sumisión de las mujeres ante el poder del hombre sobre ellas por lo que en muchos casos influye para que asuman la violencia doméstica como algo privado y no lo denuncien.

> […] las religiones... lo digo por experiencia propia, que a una vecina le dice el esposo que no tiene que planificar porque ella tiene que dar los hijos que Dios le mande. Entonces viene siendo una violencia desde que está en la casa (Participante institucional en el Taller de Validación con Fuerzas Vivas realizado el 6 de marzo, 2019. Colonia Rubén Darío).

Sin embargo, en algunas comunidades, las iglesias están realizando actividades religiosas, deportivas y de grupos musicales con las y los jóvenes para encauzarlos hacia otras acciones, buscando prevenir que se integren a las maras y las pandillas.

Las mujeres de los barrios y las colonias se mueven en diversos espacios: la casa, la comunidad, la calle, el lugar de trabajo, el transporte, el mercado y los parques públicos. Sin embargo, para ellas ninguno de estos espacios es seguro.

Frente a todas estas realidades, el Estado debe apostar a cambios estructurales que eliminen la desigualdad y la pobreza extrema a la que está sometida la población, generando oportunidades, mayor inversión en salud y educación, acciones que ayuden a transformar los patrones patriarcales que generan las múltiples formas de violencias contra las mujeres. Además, debe garantizar la seguridad de los pobladores y las pobladoras, implementando políticas ya existentes, con acciones en programas y proyectos que cuenten con la participación activa de las mujeres y la interacción de la diversidad de actores comunitarios para la construcción de espacios seguros.

Es necesario que las mujeres se empoderen del conocimiento de las políticas públicas, especialmente de la prevención de la violencia, que tengan voz y voto en la elaboración de las mismas y que participen hombres y mujeres en los procesos de capacitación con perspectiva de género.

Organizaciones no gubernamentales

Hay coincidencia entre los planteamientos de las mujeres participantes en la investigación y las que forman parte de las organizaciones comunitarias: patronatos y juntas de agua –compuestos en general por hombres que no están suficientemente

sensibilizados para emprender acciones concretas que permitan frenar la violencia–. No hay acciones concretas y son casi nulas las gestiones que se realizan en el nivel comunitario para eliminar la violencia contra las mujeres y jóvenes.

Las organizaciones comunitarias y principalmente de las mujeres, en algunos barrios y colonias no denuncian los hechos de violencia (abuso sexual y maltrato) porque se sienten intimidadas por las maras y las pandillas, que no quieren que la policía y otros actores del Estado entren a las comunidades; además, para evitar enfrentamientos en los que podrían resultar heridos o muertos los habitantes de las comunidades, especialmente, sus hijos e hijas jóvenes.

Se ha dado el caso que cuando un hombre está agrediendo a la mujer, los «muchachos» (mareros) lo amenazan para que no lo vuelva a hacer. Ellos intervienen para evitar que la policía entre al barrio a cubrir las denuncias de violencia doméstica o intrafamiliar.

Las respuestas de las organizaciones comunitarias y de las instituciones de salud y educación ante estas situaciones están fundamentadas en la defensa de la vida, que es lo más importante para quienes enfrentan diariamente el miedo, la intimidación y el maltrato físico y psicológico, sin ninguna protección policial. Es consecuencia de la falta de implementación de las políticas estatales de seguridad, la impunidad, lo que se resume en la falta de interés del Estado para buscar solución a esta problemática.

En estos contextos, la única presencia institucional que ha abordado la problemática de la violencia en los barrios por décadas han sido las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y feministas, entre ellas Madre Tierra, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H), Alternativas y Oportunidades, Compartir, Calidad de Vida, entre otras. Estas organizaciones le han apostado a la divulgación, promoción y apropiación de los derechos humanos, con diversidad de enfoques y pericia en temas específicos.

Estas organizaciones también han brindado acompañamiento legal y psicológico, y han realizado procesos de formación para que las personas conozcan sus derechos. En su trabajo, además, le apuestan a la construcción de ciudadanía desde las mujeres, por eso fomentan la autoestima y el liderazgo para que participen en los espacios de toma de decisiones e incidan a nivel familiar, comunitario y local. De esta manera, se espera que estas acciones contribuyan en la construcción de la ciudadanía de las mujeres, rompiendo con los estereotipos y roles tradicionales de género, que históricamente las ha ubicado como actoras pasivas, consumidoras de ciudadanía y no como actoras protagónicas capaces de cuestionar, de tomar decisiones y demandar

e interpelar las condiciones de violencia actuales o las históricamente vividas por el solo hecho de ser mujeres.

Aunque las lideresas comunitarias históricamente han resistido los embates del patriarcado, desarrollando sus propios liderazgos, valoran que esas organizaciones las han potenciado como mujeres conocedoras de sus derechos. Así lo expresaron durante el desarrollo de grupos focales realizados para este estudio.

> [Gracias a] la capacitación de Compartir y del CPTRT[6] y otras organizaciones que han venido a capacitar, ahora soy una lideresa que coordina una mesa que está siendo mencionada a nivel nacional, soy educadora de esta institución y dirijo este centro. Gracias a las capacitaciones puedo decir el conocer los derechos, de autoestima. Uno no conoce que está sufriendo de violencia psicológica (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia Villanueva. Distrito Central, 6 de junio de 2018).

Creación de alternativas económicas

Por la violencia patrimonial ejercida por el padre al no cumplir con sus obligaciones económicas, más el modelo económico que genera pobreza, las mujeres se ven visiblemente afectadas con las escasas oportunidades de estudio y empleos con salarios dignos. Las alternativas económicas de esta población empobrecida y marginada, han sido las intervenciones generadas por las organizaciones no gubernamentales que han desarrollado su trabajo en las comunidades. A modo de compensación, estas organizaciones promueven habilidades y capacidades orientadas al emprendimiento y la microempresa para la supervivencia de estas mujeres.

> El CPTRT nos ha capacitado en derechos de la mujer. Yo he recibido capacitaciones de belleza, bisutería, tajaditas. Cuando nos dieron las capacitaciones trajeron la estufa y el chimbo de gas. La idea es que aprendamos y pongamos una microempresa, para generar empleo (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en Ciudad España, del Distrito Central, 20 de junio de 2018).

Desnaturalización de las violencias

Las instituciones y las organizaciones que han tenido presencia en los barrios objeto de estudio han realizado un acompañamiento sostenido, con procesos de formación que han ayudado a desnaturalizar las violencias de las mujeres. Se han implementado estrategias y metodologías, sobre todo cuando se han desarrollado dinámicas de relacionamiento sumamente violentas.

---

6 Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias.

Estas intervenciones han estado dirigidas a mujeres, niños, niñas, jóvenes y hombres, para deconstruir patrones de comportamientos violentos y abusivos que, de acuerdo con los testimonios de las propias mujeres, se han «normalizado».

> Crecí en un hogar violento; cuando llegué a Alternativas y Oportunidades analicé mi vida, la violencia de mi padre sobre mi madre, yo lo miraba normal. Cuando se crece en un lugar violento, no se identifica la violencia, pero en Alternativas y Oportunidades empecé a identificar todos los problemas de la violencia. Una de pequeña piensa que es normal esa violencia, crece y piensa que es normal; cuando le brindan un conocimiento adecuado de la violencia, se da cuenta de todo lo que ha vivido (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la aldea La Cuesta, del Distrito Central, 27 de junio de 2019).

La finalidad de estos acompañamientos ha sido que las mujeres se reconozcan víctimas de violencia. Este ya ha sido un salto cualitativo y político importante. Las organizaciones han potenciado el arte y la creatividad, acompañando, apoyando e impulsando a la organización de las redes de mujeres en los barrios y colonias de Tegucigalpa, para fortalecerlas como sujetas políticas que luchan en contra de todas las formas de violencia.

> Estoy muy agradecida con el CEMH[7] por haber formado a la mujer que hoy soy, por concientizarme. Si no hubiera sido de esa manera no estuviera criando un hombre consciente, pero me encanta recalcar que aprendí a expresarme no solo con mis palabras, cuando formábamos los grupos de teatro, de danza, actuando, era la mejor forma de desenvolverme. Solo lo pude aprender con los talleres, con la formación de los proyectos que se daban para la red de mujeres (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia Cruz Roja, Comayagüela, 26 de junio de 2018).

Promoción de la salud y el conocimiento en sexualidad

Promover el ejercicio de una sexualidad libre, sana y responsable, ha sido una iniciativa impulsada por las redes de mujeres organizadas en los barrios y las colonias. Lo han logrado a través de la realización de ferias informativas, movilizaciones en los días emblemáticos del calendario feminista (por el derecho a la salud de las mujeres) y con la organización en los barrios y las colonias de ferias de salud para el examen de citología y otros tipos de atenciones médicas.

---

7 Centro de Estudios de la Mujer de Honduras.

Resistencias y luchas de las mujeres en contextos de muerte y despojo

Uno de los avances notorios del trabajo de las organizaciones de mujeres en los barrios y las colonias en la lucha para prevenir y erradicar la violencia ha sido la instalación de la cultura de la denuncia y la generación de la indignación y la «no tolerancia» ante las violencias contra las mujeres. Para lograr lo anterior, han realizado una serie de iniciativas como jornadas culturales al aire libre, iluminación de calles y callejones, y espacios de reflexión y análisis.

La recuperación de los espacios públicos para la convivencia pacífica con niños, niñas y jóvenes no ha sido tarea fácil. Es una iniciativa que ha ayudado a transformar patrones culturales violentos y crear códigos de respeto en el marco de los derechos humanos que garanticen la seguridad comunitaria.

> Nosotras, como red, íbamos a las escuelas de las zonas aledañas, trabajamos con la Reynel Fúnez, la Germania, Altos de Santa Rosa. Impartíamos talleres, conversatorios sobre violencia de género, abusos sexuales. Se dieron muchos casos de jovencitas que estaban siendo abusadas y que nadie lo sabía y que a raíz de los talleres logramos identificar. Llegamos a los juzgados con esos casos. Enfrentábamos las realidades de una forma creativa, hacíamos las jornadas culturales al aire libre, juegos tradicionales, era una manera de incentivar más a la juventud a enfocarse a [sic] otra dirección (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia Cruz Roja, de Comayagüela, 26 de junio de 2019).

Para lograr apertura desde las mujeres y jóvenes, las organizaciones han realizado diversos tipos de actividades que han permitido generar confianza. «En prevención, casi siempre las compañeras hacen una metodología de calles felices; se hacen los fines de semana para jugar los juegos tradicionales, fútbol calle, reventar piñatas, el trompo, el maule[8], el julajú[9], la cuerda» (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia La Flor N.° 1, Comayagüela, 15 de junio de 2018).

La iluminación de las calles y callejones en la comunidad permite disfrutar de los espacios públicos, reduciendo el miedo a poder transitar sin temor a ser víctima de algún tipo de violencia, como asaltos, robos o acoso callejero o sexual.

---

8 Canica, es una bolita de vidrio con la que los niños juegan haciéndola rodar para golpear otra canica e insertarla en agujeros.

9 Hula-hoop, juego de las niñas con aros de hule que los mueven rítmicamente con los brazos, la cintura y el cuello.

> Algo que ha sido impactante es un proyecto de infraestructura de iluminación. Las mujeres son las protagonistas, las que más han trabajo duro, hasta han movido postes. Vinieron un montón de medios de comunicación y aquel montón de entrevistas y me salió el alma porque, es la verdad, estoy tan orgullosa de estas mujeres. Son ellas las que están trabajando (Testimonio mujer lideresa participante en grupo focal, realizado en la colonia La Flor N.° 1, Comayagüela, 15 de junio de 2018).

También han establecido espacios de reflexión y análisis para el apoyo mutuo y para hacer colectivas las experiencias. Allí se genera confianza para hablar (desde sus vivencias y experiencias) sobre las violencias que viven y las opresiones que enfrentan. Esos espacios han ayudado, además, a intercambiar conocimientos, estrategias y saberes, a través de los grupos de autoayuda. Estos grupos pretenden ser espacios seguros para las mujeres.

> Así como nosotras, las mujeres que asistimos a instituciones y hemos abierto este espacio, hemos tenido los grupos de autoayuda, reuniones similares para ver como enfrentamos las violencias en las comunidades. Las compañeras que nos reunimos, ya ellas han tenido un poco de conocimiento; no es lo máximo porque quisiéramos que todas las mujeres conocieran ese derecho y se defiendan de las violencias que hay en las comunidades[10].

Sin duda, estos procesos también se orientan al fortalecimiento del autoconocimiento de las mujeres y a su comprensión de los contextos de violencia y las diferentes alternativas que pueden surgir desde sus propuestas, logrando que estas se vean a sí mismas también como actoras generadoras de cambio.

Algunas propuestas para la construcción de espacios seguros desde las mujeres

Las alternativas presentadas por y desde las mujeres son contrarias a los planteamientos del Estado con sus políticas de seguridad represiva y militarista, aquellas que son construidas sin tomar las propuestas de las mujeres para lograr seguridad en sus comunidades, y que reconocen las desigualdades de poder existentes entre hombres y mujeres.

Los planteamientos de las mujeres participantes en el estudio priorizan la necesidad de generar un pensamiento crítico sobre la violencia, de crear conciencia en los servidores del transporte público para el respeto a los derechos humanos de las mujeres y de fortalecer el trabajo de las maestras y maestros para que eduquen para

10 Testimonio mujer lideresa participante en Grupo focal, realizado en la colonia Nueva Capital, Comayagüela.21/06/2018.

una convivencia libre de todas las formas de violencias. También buscan transformar los imaginarios colectivos a través de campañas de comunicación comunitarias, y fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel comunitario, local y nacional.

La garantía de derechos

Ante el abandono del Estado en las comunidades y la ausencia de políticas de seguridad, carentes del reconocimiento de las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres, las mujeres reclaman el reconocimiento como ciudadanas plenas y sujetos de derechos. Para lograrlo, plantean la elaboración e implementación de políticas públicas de seguridad construidas «desde abajo», que no se elaboren desde un escritorio, sino que surjan con la participación de las mujeres desde su territorio. Proponen que las políticas existentes se cumplan, que beneficien a las comunidades, se socialicen y divulguen para que ellas conozcan y exijan su cumplimiento.

Así mismo, para las mujeres de los trece barrios y colonias, se hace necesaria la depuración de los servidores públicos, especialmente la policía. Ellas identifican vínculos de complicidad entre los servidores públicos y los agresores que terminan revictimizándolas. Lo anterior ha incidido en la pérdida de confianza y en el hecho de ser señalados como corruptos, por estar coludidos con las maras, las pandillas y las redes delincuenciales comunitarias.

Este aspecto enfatiza la importancia de la existencia de las unidades de género dentro de las instituciones que conforman el sector de derechos humanos, seguridad y justicia, quienes se convierten en depositarias de denuncia de estos hechos.

Junto con esto, para las lideresas de las comunidades que participaron en las interacciones comunitarias, es importante la divulgación masiva de los derechos humanos de las mujeres y demandar espacios seguros en los que puedan conocerse, formarse y fortalecerse, para posteriormente defenderse.

Ellas proponen la creación de instancias o espacios comunitarios específicos en donde puedan conocer sus derechos y se fomente la unidad de las mujeres a través de procesos de formación, atención y acompañamiento en torno a la defensa de las víctimas de la violencia y la defensa de sus derechos, lo que al final contribuye a la construcción de los espacios seguros.

Entre estas propuestas para la construcción de espacios seguros desde las mujeres, también hay otro punto relevante para considerar y es que las problemáticas de violencia contra las mujeres y la inseguridad han sido vistas y asumidas desde la

comunidad y por las autoridades locales como un problema exclusivo de las mujeres. Los funcionarios de las organizaciones comunitarias (patronatos, juntas de agua, junta de padres de familia) no asumen esta problemática como una causa y detonante de la inseguridad. En respuesta a ello, las mujeres de los barrios y las colonias proponen que los gobiernos locales, aborden las violencias que se ejercen en su contra, como una problemática social y comunitaria que debe ser abordada por toda la población.

En principio, las mujeres consultadas en este estudio proponen la formación de promotoras legales que acompañen a las víctimas de violencia ante los juzgados e instancias judiciales pertinentes, para protegerlas de la revictimización que realizan los operadores de justicia, y para asegurar el debido proceso que les permitirá alcanzar la justicia; para ello, es necesario establecer mecanismos de formación de las promotoras legales que estarán en las redes de mujeres en las comunidades.

Oportunidades laborales

El tema espacio seguro se relaciona con variables que se podrían percibir lejanas, como el acceso a un trabajo. Las mujeres plantean la urgente necesidad de fuentes de empleo para acceder a la compra de comestibles, para alimentar a sus familias; empleo sin discriminación de género, edad, lugar, procedencia o filiación política.

Muchas de estas mujeres han sufrido discriminación por parte de algunas empresas que les niegan el empleo por el lugar de procedencia. El lugar donde habitan junto a su familia resulta una limitante porque está ubicado en una zona considerada «caliente», generándose la criminalización de sectores poblacionales completos a raíz de las tasas de incidencias de violencia suscitadas allí.

Sumado a esto, las mujeres también proponen la construcción y el funcionamiento de centros de cuidado infantil. Esta es una necesidad urgente, porque sobre sus espaldas recae esta responsabilidad. Un espacio seguro debería poder cuestionar cómo está construido el cuidado, incluso interpelar esa lógica de que sean ellas las que tienen que hacerlo. Proponen la democratización de estos cuidados, para que sus hijos e hijas puedan ser atendidos/as en las comunidades. De esta forma, ellas podrán desarrollar sus actividades económicas y de empleo, sin tener que dejar a sus hijos e hijas encerrados/as en sus casas, en condición de riesgo.

La creación de oportunidades para las y los jóvenes, a través de la mejora de la calidad de la educación formal, que incluya la creación de infraestructura para la recreación y la realización de actividades extracurriculares de arte y deporte, es otra necesidad que las mujeres identifican en la construcción de espacios seguros en sus barrios y colonias. Esta propuesta es muy importante para ellas, pues persigue como

objetivo que se desvíe a la juventud de la vulnerabilidad en que se encuentra ante la probabilidad de ser cooptado/as por las maras y las pandillas que integran las redes y las estructuras delincuenciales existentes en sus comunidades.

La presencia estatal

La abolición de la impunidad,[11] mediante la aplicación correcta de las leyes, es otra de las propuestas que plantean. Las mujeres consideran que es urgente que se implementen las sanciones legales correspondientes para los agresores. Es decir, que ellas puedan tener un real acceso a la justicia y un trato digno que no las revictimice cuando acuden a las instancias pertinentes y que los procesos no sean tediosos, tardíos o sin ningún tipo de resolución y sentencia.

Esto también implica la aplicación y seguimiento de medidas judiciales que son de carácter patrimonial y alimenticio en favor de la sobreviviente de la violencia doméstica y sus hijos e hijas menores de 21 años, como está establecido en los artículos 5.° y 6.° de la Ley contra la violencia doméstica.[12]

Es necesario que los funcionarios y las funcionarias de gobierno reconozcan a las mujeres como sujetos de derechos y no como beneficiarias de políticas públicas elaboradas desde los escritorios. Sin la participación directa de las mujeres que están inmersas en los territorios de alta peligrosidad es muy difícil tratar de implementar procesos de formación y crear espacios seguros.

Empoderamiento comunitario

Otra novedosa propuesta para la construcción de espacios seguros es la creación de instancias comunitarias para atender con un equipo multidisciplinario a mujeres, niños y niñas sobrevivientes o que conviven con la violencia, mediante abordajes integrales que respondan a las necesidades de atención requeridas.

---

11 El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reporta que 11 mujeres son asesinadas diariamente y que el 90 % de los casos durante los últimos 15 años están en la impunidad. Al menos 127 mujeres han sido asesinadas hasta el mes de junio de 2018 por causa de violencia doméstica, a pesar de que en los últimos años se ha registrado una baja en las cifras de femicidios en comparación con el año 2017. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Honduras (ACNUDH) y la Organización de las Naciones Unidas para Mujeres (ONU Mujeres) indicaron que los esfuerzos para mitigar los asesinatos y la violencia femenina en el país han sido insuficientes (Telesur, 2018).

12 Decreto 132-97. La Gaceta N.° 28, 414 del 15 de noviembre de 1997 y las Reformas aprobadas en el Congreso Nacional el 1.° de diciembre de 2005, las que entraron en vigencia con la publicación del *Diario La Gaceta*, el 11 de marzo del 2006 (Gobierno República de Honduras, 2008).

Las mujeres lideresas de los barrios y las colonias participantes en el estudio consideran necesario recuperar los espacios que anteriormente fueron creados y utilizados para sus reuniones. Se reunían en las escuelas por ser consideradas espacios seguros. Sin embargo, ahora, por disposiciones del Ministerio de Educación, es prohibido utilizarlas. En algunas comunidades hay ejemplos de recuperación de estos lugares.

Los líderes comunitarios y representantes de las ONG locales hicieron propuestas para la creación de espacios seguros en los centros educativos, para que niños, niñas y jóvenes cuenten con una infraestructura digna, desde donde maestros y maestras fomenten una cultura de paz y de solidaridad. Asimismo, se hace necesario que las mujeres inicien un proceso de deconstrucción de los patrones violentos que se producen y reproducen en lo interno de las familias (violencia doméstica y la violencia sexual contra las niñas).

Algunos líderes comunitarios y algunas lideresas comunitarias buscan recuperar espacios seguros, estableciendo diálogos con todos los actores que tienen presencia en las comunidades, incluyendo las maras y las pandillas. No buscan legitimar su poder y prácticas de muerte, sino involucrarlos como parte de la dinámica comunitaria, que podría aportar a la prevención para que otros niños y otras niñas no formen parte de estos grupos delictivos.

Conclusiones

Aun en procesos democráticos, los sistemas políticos, sociales y económicos en Honduras han instalado una cultura de despojo y muerte, excluyendo y oprimiendo a las mujeres y a los y las jóvenes, al concentrar el poder en elites empresariales y en la clase política, por lo general masculina, marginándolos de espacios en las estructuras de poder. Eso ha impedido influir en la construcción de proyectos económicos y políticos que eliminen las desigualdades de género, etnia, clase social, identidad y orientación sexual.

Las mujeres han sido excluidas de la consideración de ser sujetos políticos de derechos. Desde las lógicas patriarcales, su subordinación es el reflejo de un país que discrimina a las mujeres de los espacios políticos donde se toman las decisiones de las políticas públicas y de los presupuestos públicos nacionales y municipales.

Mientras no se hagan abordajes integrales que le apunten al desmonte de la cultura patriarcal, la familia continuará siendo la institución donde se aprenden y se socializan los patrones y los estereotipos de género que adoctrinan a los niños

y jóvenes para una masculinidad violenta y abusiva, en donde las niñas y mujeres jóvenes desconocen sus derechos y son más proclives a servir a otros, incluyendo la explotación sexual.

Los jóvenes también son víctimas de la compleja interacción entre el sistema neoliberal y patriarcal que produce muerte, despojo, desigualdad y pobreza, obligándoles a pertenecer a las maras y las pandillas como único medio de subsistencia y de asociación. Contribuyendo a la criminalización por el solo hecho de ser joven, es necesario que los y las jóvenes tengan oportunidades que les permitan alcanzar condiciones dignas en lugar de tener la muerte como único destino.

Los femicidios en Honduras se han convertido en «crímenes de Estado» porque las evidencias muestran que en los asesinatos están involucrados diferentes actores vinculados a las estructuras de poder económico, político y de organizaciones ilícitas que actúan como un Estado paralelo, con privilegios y protección de los poderes del Estado.

Los cambios que se han producido en las políticas urbanísticas en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, son un modelo neoliberal globalizado que ha generado fragmentación en los espacios, estructurándose barrios ricos y barrios pobres con tensiones y conflictos sociales producto de la falta de oportunidades de los sectores que, en condiciones de vulnerabilidad, se concentran en la periferia donde prevalecen situaciones como la pobreza, el desempleo, la carencia de los servicios básicos, violencias e inseguridad, particularmente contra las mujeres.

El abandono del Estado en los barrios y las colonias de alta peligrosidad, ha generado la producción y el afianzamiento de la pobreza, dejando como consecuencia que las maras y las pandillas secuestren los territorios, estableciendo también un Estado paralelo que cuenta con sus propias reglas y códigos y que tiene vasos comunicantes con el Estado formal. Ese control de territorio les genera ingresos económicos y aplicación de la justicia por sus propias manos. Asimismo, tienen el control de las dinámicas cotidianas, de la cultura comunitaria y del cuerpo de las mujeres, que toman como campo de batalla, un locus de la opresión con el que demuestran quién es el más fuerte.

La cooptación de los espacios públicos por los diversos actores ha generado situaciones de violencia e inseguridad en los barrios y las colonias y ha profundizado la vulnerabilidad de las mujeres, evitando que no experimenten el disfrute de espacios seguros.

Las políticas públicas de seguridad del Estado se formulan sin la participación de las mujeres que enfrentan el conflicto y la inseguridad en sus territorios, lo que

evita que la capacidad instalada para la prevención, la atención de la violencia y la seguridad no sea funcional porque no se adecúa a las realidades que viven ellas en sus barrios y colonias.

Para las mujeres de los barrios y las colonias es muy difícil definir un lugar seguro, ya que la comunidad –la calle, los parques, el trabajo, el transporte y el propio hogar– se ha convertido en espacio de violencia y donde se cometen abusos. Se requiere que esa construcción de políticas públicas se haga con su participación y el conocimiento de la dinámica de funcionamiento de las violencias de sus territorios.

Aunque el contexto de los barrios y las colonias es de violencia, inseguridad y muerte, las mujeres históricamente han resistido desde sus cuerpos, cuidados y luchas, realizando iniciativas comunitarias encaminadas a sostener la vida y la construcción de espacios seguros.

Referencias

CEMH –Centro de Estudios de la Mujer-Honduras-. 2019. *Violencia contra las mujeres y las niñas*. En: < http://www.cemh.org.hn/violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas/>.

Dirección de Medicina Legal. 2018. Informe de la Dirección de Medicina Legal. En: <https://www.mp.hn/Forense/>.

Gobierno República de Honduras. 2008. *Ley Contra la violencia doméstica con sus reformas*. En: <http://www.redmicroh.org/cedoc/detalle.php?c=111>.

INE-EPHPM. 2016. *Indicadores por departamento & municipio.* En: <https://www.ine.gob.hn/V3/>.

La Tribuna, Hunduras. 2018. «Honduras: hallan cadáver de quinceañera descuartizado» en: <https://www.google.com/amp/s/www.tn8.tv/america-latina/464139-honduras-hallan-cadaver-de-quinceanera-descuartizado/amp/>, acceso 13 de diciembre de 2018.

República de Honduras. 1997. «Ley contra la violencia doméstica (Decreto N.° 132-1997)" en *Diario la Gaceta,* 11 de marzo.

Rodríguez, Luis. 2018. «La canasta de alimentos cuesta 8,356 lempiras mensuales» en *elheraldo.hn*. En: <https://www.elheraldo.hn/economia/1226282-466/la-canasta-de-alimentos-cuesta-8356-lempiras-mensuales>.

Segato, Rita. 2013. *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado.* México D.F.: Universidad del Claustro de Sor Juana.

Telesur. 2018. *Un 90 % de los feminicidios en Honduras quedan impunes*. En: <https://www.telesurtv.net/news/honduras-impunidad-femenicidios-violencia-mujeres-20180710-0031.html>.

UNAH-IUDPAS. 2017. *Observatorio de muertes violentas de mujeres y femicidios. Resultados del análisis enero-diciembre.* En: <https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/6970-muerte-violenta-de-mujeres-y-femicidios-nacional-enero-diciembre-2017-ed-13>.

UNAH-IUDPAS. 2018. Boletín Especial sobre muerte violenta de mujeres (enero a diciembre de 2017) N.° 60 de marzo.

6

Communities, Crime Control and Policy Change for Safer Spaces in Jamaica

Tarik Weekes,[1] Deanna Ashley,[2] Ricardo Williams,[3] Nadia Robinson[4]

Introduction

The reduction of violent crime, particularly the high number of homicides, has been a major concern for decades in Jamaica (Bunting, 2014; 2013; Ministry of National Security, 2010, UNODC, 2007; Harriott, 2003). While annual counts have dipped in particular years or for short periods, most recently 2010-2014 (Jones, 2014), the average homicide rate has remained above 30 per 100 000 (chart 6.1). Jamaica's homicide rate has consistently ranked the highest over ten-year case periods amongst nations in the Caribbean sub region (Harriott, Lewis & Zechmeister, 2015) and for English Speaking Caribbean countries (Harriott & Jones, 2016) and with Central American countries such as Honduras and El Salvador (Dalby, 2018) and the world (Campbell & Clarke, 2017).

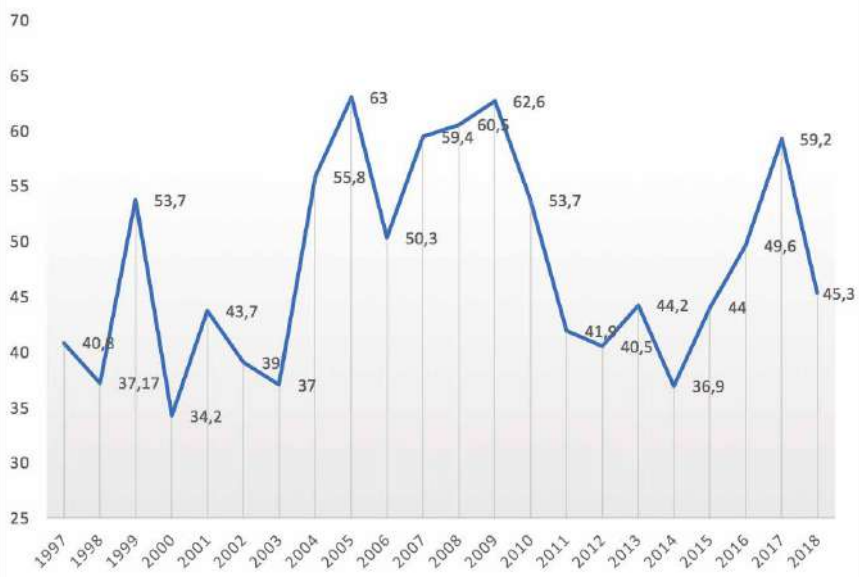
1 Research Fellow, Institute of Criminal Justice and Security.

2 Executive Director, Violence Prevention Alliance-Jamaica Chapter.

3 Community Researcher in Almond, Violence Prevention Alliance-Jamaica Chapter.

4 Community Researcher in Richmond, Violence Prevention Alliance-Jamaica Chapter.

Chart 6.1
Homicide rate for Jamaica per 100 000 1997-2018



Source: Based on data from the Jamaica Constabulary Force Statistical Unit (OSAC, 2019).

Country and community studies of homicides and violence have humanized the cost of violent incidents in Kingston, Jamaica's capital, and reinforced the crippling impact on health (VPA, 2017; PIOJ, 2010), gross domestic product (UNDP, 2016), community way of life and other development outcomes for Jamaica (Jones, 2014) such as the movement of persons out of poverty and general investment in social infrastructure. These realities have made Jamaica even more anxious than it was two decades ago about solving the crime and homicide problem because of the amount of financing that is given to security that should go towards the development of other sectors. High homicide rates have accompanied over three decades of a fragile fiscal position. A 2017 Inter-American Development Bank quarterly bulletin noted the progress in the islands fiscal position but maintained that challenges remain. Some of the progress is the decline in external debt composition as a percent of Gross Domestic Product (GDP). Before 1995, the ratio soared to as much as 200 %. Overall debt servicing as a percentage of total expenditure has floated between 54 % in 2013 and 66 % in 2017 (PIOJ, 2019). Since signing an Extended Funded Facility (EFF) with the International Monetary Found (IMF) in 2013, Jamaica's fiscal situation has been lauded and described as evolving (IDB, 2017).

For decades expenditure outfitting the police force and national security architecture to fight crime has been occurring against stagnated and slow growth, high debt servicing, high unemployment —especially youth unemployment and poverty which intensified with the beginning of Jamaica's market-oriented strategy under the neoliberal agenda. According to Francis, Gibbison, Harriott & Kirton (2009) these conditions made citizens vulnerable. There have been slight improvements in the fiscal position of Jamaica within the 21st century and measures of wellbeing such as the number of people living below the poverty line have decreased to an extent with this improvement. In 1990, 28.4 % of the population lived in poverty. In 2007 the percentage was 9.9 %; 20.3% in 2009; 19.9% in 2012; 21.1 % in 2015, and 17.1 % in 2016. Between 1990 and 2015, Jamaica's ranking on the Human Development Index (HDI) increased by 12 %. In 2015, its value was .730 which moved it into the set of High Human Development (HHD) countries but was still lower than the average value (.746) for the HHD country grouping and also below the average (.751) for Latin American and Caribbean countries. Since 2013, unemployment has fallen and been declining from 15.2 % (2013), 13.7 % (2014), 13.5 (2015), 13.2 % (2016) and 11.7 % (2017). These improvements in development outcomes and macro-economic stability should not be deemed an effective tool for lowering violent crime, especially homicide. Other English-Speaking Caribbean countries such as Trinidad and Tobago and St. Kitts and Nevis are part of the high human development group and in 2017 had better HDI rankings than Jamaica but also have homicide rates above regional and global average homicide rates (Seepersad, 2016; UNODC, 2011; 2013; 2019).

In this chapter we highlight some of the issues that have evolved out of the country's efforts to reduce the homicide count and to what extent these decisions are part of shared involvement by the citizenry. We present findings that indicate that alongside Jamaica's hard line approach to actors such as armed groups, community involvement specific to the reduction of violent crime such as homicide continues to be halted by distrust of the police. We hope to contribute to the wider body of knowledge on security measures that involve joining up of police and military in controlling community violence. We make this contribution based on twenty months of ethnographic and participatory data collection methods in one rural and urban community setting. Before and during the research both communities experienced violent crimes that warranted special policing measures and security arrangements to disrupt the activities of mostly armed groups in the communities. This chapter is set out as follows: we first present an overview of the Jamaican context and a background of the two communities involved in the study. We then describe the methodology used and present core themes coded from the textual data and a conclusion.

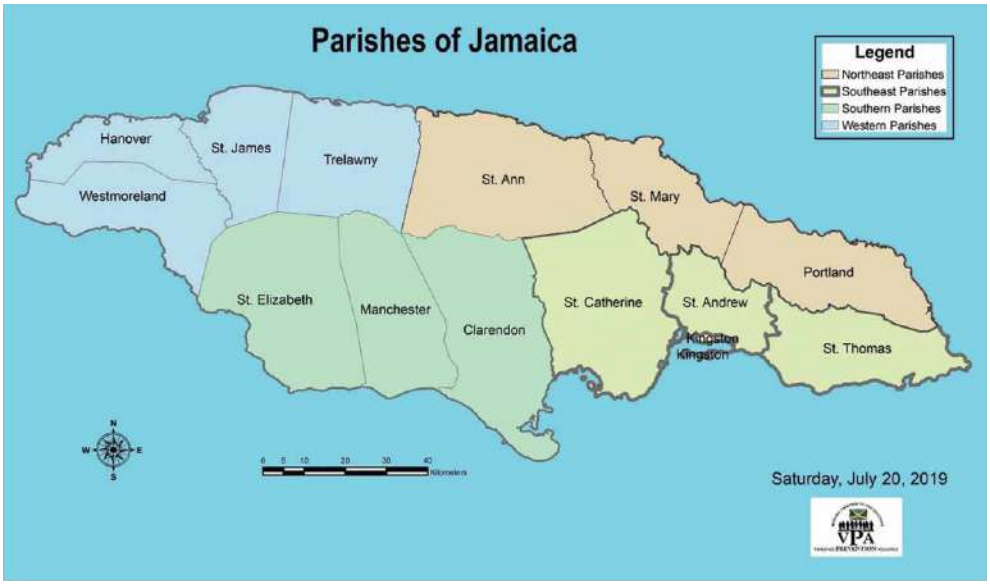
Overview of the Security Context: The Anxiety to Reduce Homicide Rates

Jamaicans identification of crime as one of the most pressing issues affecting the country has conjured up attitudes and responses to the problem that now include an increasing tolerance for tougher measures for the individuals, criminal groups and organizations seen as responsible for the crime problem. A finding from the Latin American Public Opinion Project (LAPOP) published in 2018 noted an increase in the percentage of Jamaicans who agree that authorities can "cross the line" in efforts to catch suspected criminals. The disclosure of the finding followed the recently implemented The Law Reform Act (Zone of Special Operations (ZOSO), Special Security and Community Development Measures), in September 2017 a security intervention that combined suppression and social intervention in selected communities, characterized by rampant criminality, escalating violent crimes, gang warfare and threats to rule of law and public order.

In January 2018, a State of Emergency (SOE) was declared in St. James, a major tourist area in the North West area of the island, which is also the parish in which the first ZOSO community was chosen. Both interventions continued the legacy of joint police military operations used to control crime, but it is important to recognize that the ZOSO's Act clearly outlines that the approach involves joint police military operation alongside social intervention, coordination and implementation. It is important to highlight this change in approach, because it is the first of its kind in a litany of institutional approaches to homicide reduction that have crowded out an integrated violence reduction approach in legislation. This success has to be carefully gauged however in terms of its promise because the social intervention approach is not a clearly defined model which would have informed the suitability of various violence reduction approaches to be used within the communities experiencing ZOSO.

It appears that there is consensus across government, private sector and civil society that crime and victimization are widespread but also under —reported due to norms and systems that have shaped the perception of individuals along with other factors such as views of the police. Homicides happen nationwide (Harriott & Jones, 2016) but the distribution is uneven and influenced by different factors such as intimate partner violence or gang related and gang motivated activities. Data from the Jamaica Constabulary Force (JCF) shows that over the last 15 years, five of nineteen police divisions have contributed more to the yearly homicide counts. In terms of parishes and locations in the island, these divisions fall within Clarendon, Kingston and St. Andrew, St. Catherine and St. James.

Map 6.1
Jamaica



Source: VPA. Violence Prevention Alliance, 2019.

The parliamentary approval for the SOE allowed the police enhanced powers, joint police military presence, and suspension of some rights in sections of the St. James parish. These were welcomed by residents of different age groups and occupations, as well as by the poorer and wealthier communities within the parish (GOJ Memo, July 2018). When the SOE was implemented in January 2018, in St. James, the parish began to experience a reduction in murders. There were 24 homicides between January 1st and February 10th in 2017, when there was no SOE and 12 homicides in 2018 for the same period when the SOE was in place (The Gleaner-Jamaica, February 11, 2018). The SOE allowed the detention of non-gang members and gang members and this may have disrupted the routine activities of those engaged in aggressive and criminal behavior. The detainees were also slow to be released and there were complaints of improper record keeping of detainees. Residents in St. James also raised an alarm about the slow space in the release of their family members while appreciating the peace the SOE had brought to their communities and the parish. The support for what the SOE would do for communities aligns with a shifting tolerance of residents to accommodate more firmness by the state in its employment of all levers available to control crime. But it does not mean

negating freedoms and rights in doing so. In this dispensation of joint police military operations and presence to control crime supported by legislation, the State has required police officers to be trained in human rights to allay fears of abuses by police.

Policy making involves processes and capacities that may build on accumulated knowledge and beliefs about how a problem should be solved (Moyston & Scholten, 2018). The change in managerial thinking about how homicides and connected problems such as gangs should be approached is shared between the police and the Ministry of National Security who have been the key decision-making holders of the crime control strategy. This sharing is characterized by a ministerial and operational approach to policing and how it should be done. For several years this twining of authority on reducing crime and violence has been supportive of hardline approaches. Since 2010 to present, there have been changes in approaches to how homicide reduction is pursued and that has been triggered by a mix of external events and failures in reducing the homicide rate. This proposal of a change may be challenged however more so as window-dressing, because suppression approaches—police sweeps, stop and search and curfews remain central to managing opportunities for crime and reductions in homicides in regions like St. James under the SOE, lend support to their effectiveness. Notwithstanding, in July 2019 the Commissioner of Police presented his seven point crime plan at a forum organized by The Gleaner-Jamaica and in which citizens security was included, supporting the perceived shift in crime control.

Events such as the extradition of drug lord and political influencer Christopher 'Dudus' Coke in 2010 and the processes, civil society and private sector members involved that pressured governmental thinking on the renewal of communities can be cited as an example of how policy change happens. In the aftermath of the Dudus incursion in which 73 civilian lives were lost, civil society actors were able to penetrate the elite decision-making subsystems and have influence on government thinking to adopt strategies such as the public health approach to violence prevention. This success may have also coincided with the change in leadership at the Ministry of National Security due to a change in government.

The public health approach as a response to the violence in the country was articulated and operationalized by a non-governmental organization whose own approach to violence interruption found support in the North American Cure Violence model. The model aims to prevent shootings and retaliatory killings by targeting

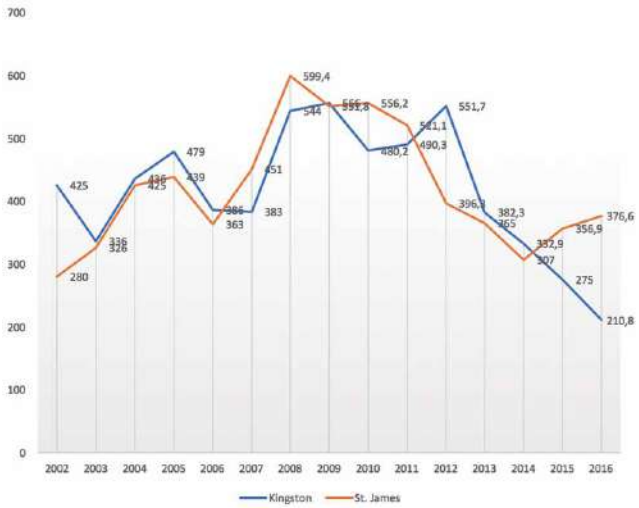
at risk youth and gang members with individual norm changing activities and has demonstrated measures of success in communities where it has been implemented. (Maguire, Oakely & Corsaro, 2018; Ritter, 2009; Skogan, Harnett, Bump & Dubois, 2009). The subsequent policy-buy in by the Ministry of National Security resulted in alignment of policy beliefs about how the problem could be approached. The results from this alignment cannot be exhausted here but one has been the formalization, strengthening and expansion of the violence interruption programme in Jamaica, as well as maintaining support for the work of violence reduction organizations such as the Peace Management Initiative. In spite of the learning and convergence on beliefs by politicians, academia, civil society and other actors that has occurred, homicides trend upwards. This reality may jeopardize the durability of gains made by civil society. Since 2018 the success of the SOE has already tilted policy belief towards suppression measures. This is evident by the further implementation of SOE in April 2019 in St. James after it was discontinued at the end of 2018.

Data obtained from the JCF for 2010-2017 Kingston and St. James show that violent crimes rates have fluctuated but most significant was the sharp decline in rates occurring after 2011 (See chart 6.2). According to Harriott and Jones (2016) between 2009 and 2013 in Jamaica homicides declined by 30.2 %, shootings by 25.8 % and robberies by 12.5 % Analysis of JCF data between 2014 and present suggest however that by 2014 the country began to experience an increase in the same serious crimes. Between 2014 and 2017, homicides increased by 60 %, shootings by 33 % and robberies by 45 %.

The causes of decline in violent crime in Jamaica have become very complex and may be described as multi-causal. Empirical work has been lacking to offer explanations and much of the decline has been attributed to police pressure or the dismantling of gangs. Gangs are legally classified as criminal organizations in Jamaica and analysis of data obtained from the Statistics Unit of the JCF indicates that between 2005 and 2015 gang activity has been held responsible for 6878 or 45% of the total homicide count within that period.

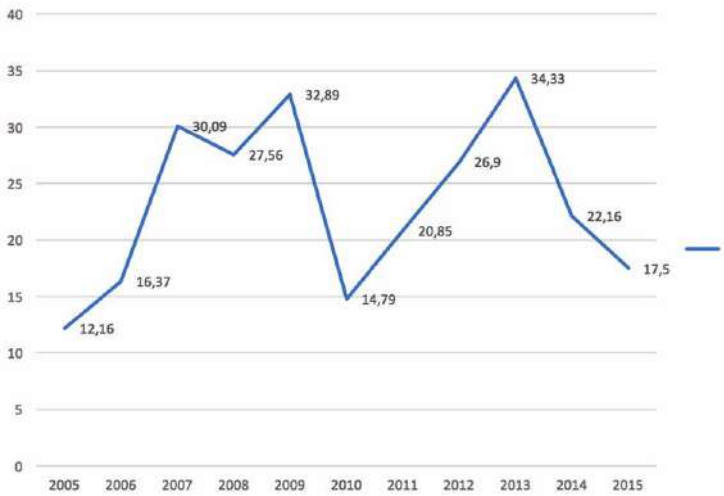
The characteristics of the homicide and the gang problems are somewhat the same. The most consistent commonalities have been the youth-on-youth, male-on-male gun related violence in poor communities (Harriott, 2008) and the small percentage of females as victims of violent crimes excluding rape. In the last decade females victims of homicide have consistently been between 10-12 %. Between 2016 and 2018, 21 % (2016), 19 % (2017) and 22 % (2018) of the males who were victims

Chart 6.2
Violent Crimes Rates per 100,000 population Kingston and St. James 2010-2017 (OSAC, 2019)



Source: Based on data from the Jamaica Constabulary Force Statistical Unit.

Chart 6.3
Gang Related Murder Rate 2005-2015



Source: Based on data from the Jamaica Constabulary Force Statistical Unit (OSAC, 2019).

of murder were 15-24 years old (PIOJ, 2019). Over the three-year period 2016-2018, 41-42 % of the males arrested for murder were 15-24 years old (chart 6.3).

Homicide together with reported and recorded gang activity data that's available indicate a gender imbalance in violent crime perpetration but this may not be entirely accurate due to the invisible roles that females perform. As girl-friends of gang members they are often privy to information and sometimes assist in the planning and concealing of illegal activities. This has become more evident in the revelations in the trial of the leadership of the Uchence Gang. At the time of writing this chapter the trial was ongoing but widely publicized in the local newspapers. While data on women's involvement in gang related activity is limited, their contribution to the perpetuation of violent crime can be analyzed through the existence of looser co-offending networks or groups, which can be unmeasurable using criminal organization definitional characteristics. An example of female involvement in such a co-offending network can be found in lotto scamming operations, where women play mostly subordinate specialist roles, but still integral to the procedural task involved in lotto scamming success and concealment (GOJ Memo, February 2018). Another useful lens is the subculture of violence spoken about in Jamaica (Harriott, 2008). This lens offers a discussion about how women and men should situate themselves as guardians in their households, preventing aggression as the first part of the internalized response in response hierarchies for situations of disagreement or perceived unfairness between persons. Breaking this through reorganizing normative behavior at institutional levels like in the family is critical for lessening exposure and transmitting of this response hierarchy to children and their likelihood of becoming violent offenders later in life.

The Communities Selected

The communities selected for this study are part of the St. Andrew Central and St. James police divisions. Both divisions are infamous for their challenges with violent crimes associated with the activities of turf and street-oriented gangs and organized crime. St. Andrew Central is amongst six police divisions spanning Kingston capital (see chart 6.4) and shares in a potent history of political violence with other divisions in the region such as Kingston Western, St. Andrew South and Kingston Eastern.

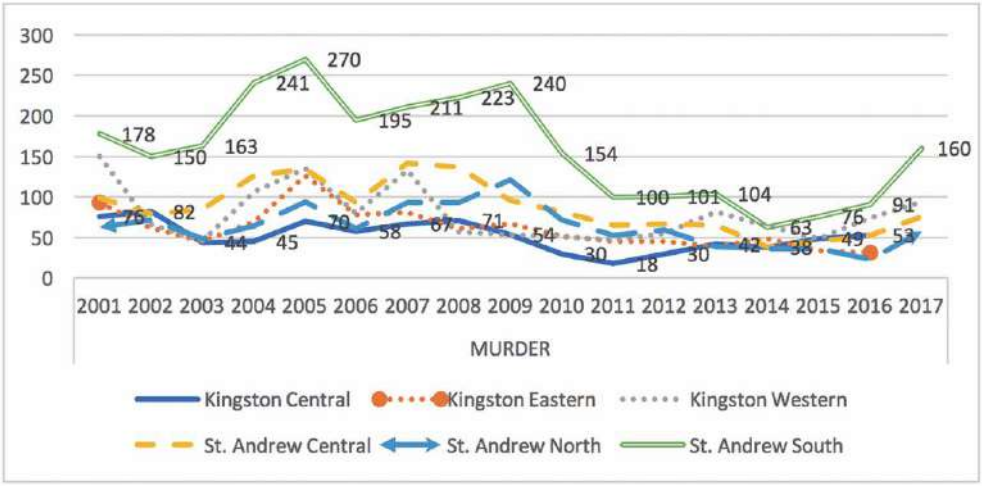
St. James has had its own experiences of political violence. It continues to have a globalized interconnectedness with high and low developed countries because of its entrenchment as a Free Trade Zone, its tourism focus and gaze and thriving illegal economies such as drug smuggling and trafficking of marijuana (Haughton, 2011).

For decades, St. James has been the main tourism hub for Jamaica but has also had a homicide rate rivaling other police divisions. Although it has had a worrying homicide rate, it wasn't till 2014, policy makers and law enforcement began to pay serious attention to the spate of homicides now associated with lotto scamming. Data from the JCF indicate that the homicide rate moved from 89.64 per 100,000 inhabitants in 2014 to 185 per 100,000 in 2017. The urgency directed to St. James is surprising and reflects the neglect at serious efforts at crime control in the police division given, its long trending history of a homicide rate above the national average.

The SOE was applied to sections of Richmond in St James, a community which was identified as having a high number of gun crime incidents between the 2016 and 2018 period. This community was selected for the research because of the relationship partners had with the community and its importance to the crime displacement occurring in St. James. At the time of consultations with partners a gang truce had just been signed between two warring sections in the community. This gang truce was not as robust with conditions and expectations on the parties when compared to Almond (in Kingston), the other community selected, which went through its own gang truce experience in 2008. Both truces were initiated by workers of the Peace Management Initiative (PMI). The PMI in both instances was responding with the intention of a ceasefire which would be followed by trust building and mediation activities building on the truce. The truce in Richmond between the two warring factions was also different because of the type of factions. The associated gun violence with the two factions resulted from lotto scamming feuding over turf and control which had emerged because one party decided to become independent of another. In Almond, the nature of the turf control was related to a history of competitive political campaigning in urban Kingston and the creation and securing of safe seats for guaranteed victory at elections. This political behavior has its roots in 1940s, pre-independence Jamaica (Sives, 2003). Aside from the convenience of working with existing partners such as the PMI, the study of the two communities provided an entry point to understand how much learning in violence prevention had occurred within state agencies and across state and non-state actors. This inter and multi-sectoral approach to violence prevention services is at the heart of the citizen security approach which also has been in use in Jamaica since 2005, but with its own iterations.

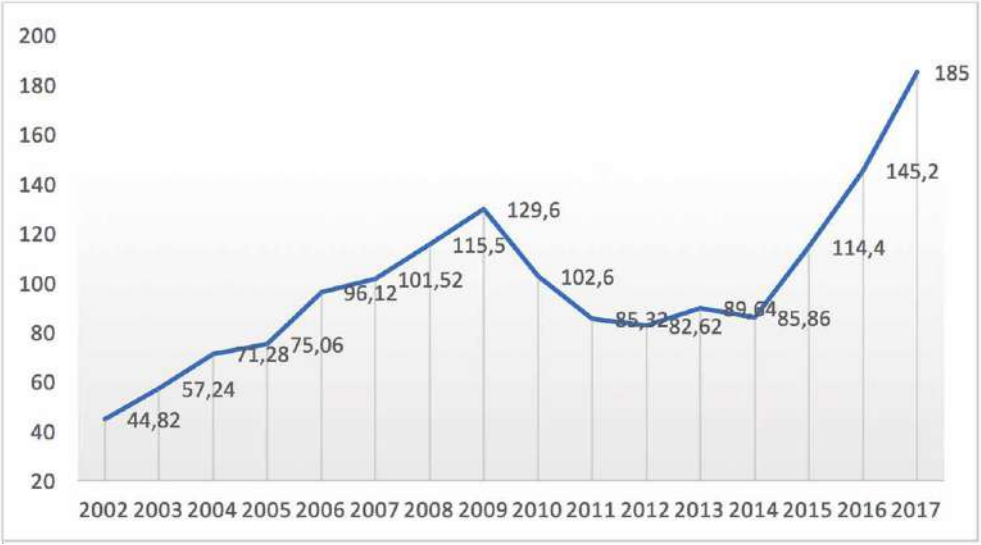
Almond, has been experiencing community, gun-related violence since the 1970s while Richmond saw its onset in 2015. The earlier onset and length of violence and its prevention in Almond provided the opportunity of a retrospective analysis and an

Chart 6.4
Homicides (counts) for six police divisions in Kingston 2001-2017



Source: Based on data from the Jamaica Constabulary Force Statistical Unit (OSAC, 2019).

Chart 6.5
Homicide Rate for St. James 2002-2017



Source: Based on data from the Jamaica Constabulary Force Statistical Unit (OSAC, 2019).

identification of lessons learnt which could reinforce experiences of change in state intervention in crime and violence, if any at all.

Richmond, in St. James

Richmond is a community approximately 18 miles away from the tourism center of St. James. The 2011 census identified that there were 4073 residents and 1162 households in the community. A 2009 community profile conducted by the Social Development Commission (SDC) noted a youthful population existed, with more than 50% of the population being under 30 years old. The profile also records the historical production of bananas and later coffee as examples of Richmond being a farming community. Farming went on decline in the 1990s due to new world trading rules and for those involved there was displacement of income and way of life (personal communication February 2019). The younger generation did not try to resuscitate the traditional industries and gravitated towards the service industry. Today the spread of income earning activities across the community ranges from low skilled long hour jobs, hustling, small scale farming, transportation and construction work in call centers and business processing out sourcing centers.

The decline in bananas and coffee production and transition into service industry reinforced the peripheral relationship of Richmond to the rest of the parish in geographic and domestic production terms and created a new norm for resident interaction. As labour shifted to the hotel and tourism sector, Richmond maintained just a residential life and less of a space with large scale economic activity. The transition was a shift in production of crops to the production of labour for low level positions and earnings. In its classic period, banana and coffee production involved entire families and households and activities such as transporting produce to the depot in the town center brought families together with other families. A craft industry had thrived alongside the coffee and banana sector and still exists but much smaller. The sector is male dominated and family based, with the males inheriting skills and the business from their fathers. These craftsmen are also dependent on the demand for their craft in Montego Bay, but this remains challenging as they have to also compete with other craft providers from across the island.

Resources were also created around the needs of those involved in the sector. The gravitation to the services industry meant that resources that were once important were abandoned, or reconfigured for a different purpose. For example, the banana depot is now partially abandoned and dilapidated and part of the facility is a home. An old, derelict railway station now houses a barber shop. The widening of occupational categories in the community and the differentiation in roles and tasks

according to one's skills in the services industry now present in the community, supported the need for residents to create new structures that would serve to organize energies and capital of residents around a vision and shared expectation for living in Richmond. Richmond has a Community Development Committee (CDC) which comprises of all the community- based organizations working within it. There is an active parent-teacher association and more than ten religious' organizations in the community. The areas of SOE concentration in Richmond have also had one political representative over ten years.

Almond, in St. Andrew

Almond, a community in eastern St. Andrew has been part of a conflict geography for more than 40 years. This 40-year history can be segmented in to four different periods. The first being the beginning of community violence in the 1970s tied to competitive political campaigning and the solidifying of sections of the community as political strongholds, monitored and enforced by armed groups. The second period (1988-1999) saw greater organization of small sections of the community and imaginary lines drawn inhibiting the freedom of movement of residents. In the years 1996-97, gun violence tied to political and electoral campaigning amplified to levels disrupted community life in way that forced community owned responses such as peacemaking to assist in it violence interruption. By then the community had garnered a perception of its volatility and violence was serving as a protection for individuals and a barrier to community development.

In the new period (1998-2008), armed groups became more confident in the social and symbolic capital they had garnered from their relationships with the upper echelon of society and the result of this was the intensifying and integration of the community into sophisticated criminal networks across Kingston, enmeshed in criminal activities (such as visa racketeering) for profit and expansion of resources that would support their violence. The earlier part of this period also saw intervention from the Peace Management Initiative and the structuring of efforts to realize peace alongside the use of social development approaches to provide pathways out of crime. Within this period a peace treaty was signed in the community between warring factions. Data from the JCF indicates that this has been the most successful period of homicide decline. In 2016 the community had zero murders. But it is also the period where deaths of key street gang leaders created a transition to leadership more closely aligned to organized crime.

According to the 2011 census, Almond has 5958 residents, 1902 households and fifty percent of the population being under 30 years. Almond, a residential community like Richmond has had stable residential placement, but without data it is challenging to measure the number of residents who have left the community due to the violence. This is not a practice being recorded in Jamaica. At the time of the 2011 census, the violence in the community was already on decline due to wider crime displacement associated with the signing of the 2008 peace treaty, a national decline in homicide rates already occurring and violence prevention efforts in other communities networked with Almond. There was also the extradition of Coke in 2010, which stunned the upward trend of homicide for Kingston and affected the violence in the community.

Residents in Almond are organized around religious fellowship, sports and entertainment. All three have been significant to the strengthening of ties between residents and mobilizing them around issues such as the reduction of crime and violence. For example, various leaders of the community's Minister's Fraternal have jointly organized with the police, community leaders and state agencies, peace vigils and marches in the community. Across the globe sports and football have been recognized for their contributing to promoting pro-social behavior and social inclusion (Bloyce & Smith, 2010). According to Burke, Costen and Weekes (2015) the playing of football in the community is an essential part of resident way of life. It also requires organizational development and leadership. Knowledge of these skills sets could do motivated community organizers to use community football to engage those in the violence or on the margins of joining. Police officers in the Community Safety and Security branch have also used the sport for the same purpose. These efforts have been aimed at building resilience and avoidance of armed group activity and membership and were supported by sanctions that were incorporated into community football (corner league) matches. These included decrease in points for teams whose players and supporters support behavior that encourages violence. Connected with the religious fellowship that binds residents in the community is the involvement of residents as song writers, musicians, performers in Jamaica's reggae and dancehall industry. Some of these artistes are portrayed in murals throughout the community.

Unemployment is high in Almond especially amongst the youth. The occupation of residents in the community varies and resident's occupation cut across sectors such as hotel and tourism, education, sole trading, construction work, transport and farming. Different reports compiled by the Social Development Commission highlight the variation in unemployment amongst household heads in the community, not-

ing that females headed households have a higher unemployment percentage than their male counterparts. In the last decade certain homeowners have been able to augment their income through the offering of student accommodation.

Researching Safer Spaces (Methods)

Qualitative techniques were used to collect information from individuals between 15-29 years old and females of older age groups in the two communities. These techniques were used to probe and gather information related to three key questions.

1. What is a 'safer space' and how and who are involved in creating it?

2. What collaborative activities were present in both spaces that led to residents feeling or becoming safer?

3. How has gun violence reduction incorporated collaboration for a safer space?

Semi-structured interviews, focus groups, forums, actions workshops with one community-based organization (CBO) in each of the communities were used to gather and also verify information (see table 6.1). Action workshops brought residents of the two community-based organizations together to discuss data and the situation in their community towards them developing solutions and priorities for developing and improving their community. Memoing was also used to collect information on occurrences in the community. This was done while data was being collected in the activities below. We also attended three meetings in Almond that focused on reducing crime, organized by a community-based group, two workshops in St. James that focused on at risk youth and the other on peacebuilding and a town hall meeting in St. James discussing partnerships for violence reduction. In Richmond we also attended a workshop that exposed parents in Richmond to parenting and knowledge on human trafficking.

Participatory methods were also utilized with particular groups of residents more than others because of the time constraints. For example, it was challenging using PLA methods with unemployed males in focus groups because they never had enough time to visualize and discuss the issues pertaining to a safer space. In keeping with general guidelines of participatory research in the last half a century, the participatory approach involved a lot of diagramming, listening closely, being non-directive and allowing for residents in this study to present different perspectives of the social world (Campbell, 2001). Whatever is produced as a result of the analysis of community is given back to them so that they could use it for their planning of the

Table 6.1
Participation methods. Main Data Collection Techniques used in the study

Data Collection Technique	Number of Times Used	Purpose	Participant Profile
Transect walks	4	To become familiar with the physical and social terrain of the research sites. Assisted with the introduction of the academic researcher to residents.	The academic and community researcher
15-40-minute semi-structured interviews with residents	21	To obtain background information on the community and resident perception of their safety	11 in Almond and 10 in Richmond with persons above 30 years old
15-35-minute semi structured interviews with agency heads and leaders of community-based organizations	12	To identify activities by state agencies geared towards safer spaces	6 in Richmond, 6 in Almond
Focus groups	8	Consists of 8 persons. Our groups mostly had 8 individuals To validate information gathered on the community. To employ techniques in the PL approach to map the community	Richmond: Three (2 female groups) with school going youth 14-16 years old Almond: 2 unemployed females 15-29, 1 school going femal 15-24 Richmond, 1 unemployed male youth 17-24
Forums	4	Forums 9 persons and happened in closed spaces like yards or balconies	Almond: 1 out of school youth 15-24, 1 school going femal 15-22 Richmond: 1 unemployed male youth 1 employed and unemployed females 29+ years old

community. Levy (2001) who utilized participatory methods in the study of poverty and violence in urban Kingston stressed the importance of ownership in the making of plans and the documentation. Levy again used PLA methods to explore the connections between youth violence and organize crime years later. Levy (2012) noted:

> It must be emphasised that, unlike quantitative methods, PLA conducts interviews not with pre-set questions, but only a check-list of broad areas of interest, allowing interviewees, by their responses from the outset, to guide the course and pace of the interaction. This clearly indicates a great deal of respect for those being interviewed, which is a distinguishing and basic feature of PLA. It requires regular stops to review the process and re-shape it in order to focus more on surprising elements or to confirm matters requiring confirmation from multiple sources. It demands interviewer creativ- ity and considerable flexibility in charting interview direction to reach a fruitful outcome (p. 13).

The participatory methods were employed in focus groups (but not as many as desired) and all action workshops and included items 1-6.

1. Community mapping: Participants were placed in small groups of three and four and were asked to draw their community and label their drawing with important landmarks, places people frequent, services and places people can and cannot go. We also asked participants to label their maps with any recent homicides. Each group was given an opportunity to present and comment on each other's presentation. There were times in the community mapping where residents could not recall where a homicide took place within the last year or six months before the project. To address this we used Geographic Information Systems (GIS) and geocoded popular locations identified by the residents and then relied on data on shootings and homicides from the JCF to do composite maps showing the community points and homicide and shooting data.
2. Listing: In this exercise participants noted what they liked and did not like about their community. They were also divided into groups and asked to present and comment on each other's presentation.
3. Venn Diagrams/Roti: The diagram was used to identify actors supportive of a space in the communities. Actors' proximity to the circle is the measure of their contribution to a safer space as perceived by the community.
4. Pair wise ranking/matrix: This was used to assist participants in identify the priority problems to their space. All of the problems (duplicates removed) listed by participants were written onto a large piece of paper in a matrix format and participants were asked to identify which problem was more important than the other in achieving a safer space.

5. Problem and Solution Trees: This diagram was completed in small groups and participants came to a consensus first in their group on the root and consequences of a problem, presented to each other and commented on each other's presentation. Participants only did diagrams for the main problem identified from the ranking matrix.
6. Force field analysis: Having identified problems and solutions, participants were asked to further identify what and/or who would help, or block them achieving the solutions.

In this study, two residents from the community who were also part of a community-based organization working in the communities were asked to join the research team as community researchers. They received a briefing on the study objectives and were introduced to the data collection methods as part of a half day training. The inclusion of the community researcher strengthened local knowledge of the communities for everyone participating in the project because they assisted with memory of events and the management of subjectivities held by participants by cross checking information given with non-participants. These individuals were called community researchers and assisted with the development of security protocols, interview and questionnaire schedules. They also helped with cross checking information given by their fellow residents.

Action Workshops

Participants in the action workshops belonged to the same community organization and the organizations were selected based on the association between its ongoing work and objectives of the study. Both communities had community youth organizations for example but inactive or non-existent women's groups. The leadership of these groups were contacted and briefing meetings to explain the research and what would be required were held between September and October 2018.

A total of seven action workshops with community-based organizations were held. These workshops co-produced knowledge about the problems affecting the community and how they could be solved with existing resources and the capacities of different actors. The result has been one action plan for the community of Richmond.

Limitations

First of all, heads of state agencies and community organizations were tight-lipped about crime and violence reduction because there was a general feeling that speaking about it could compromise their safety. This affected the collection of data

about youth who were members of gangs in St. James, that could give more insight into the triggers of the gun violence. This did not allow the researchers to compare safer spaces experiences between Almond and Richmond through the lens of gang involved youth.

Second, the eruptions of violence in both communities also affected residents willingness to participate in the study because they were often fearful of venturing beyond their dwellings. Curfews enforced by the police also delayed venturing into Almond and how much time could be spent in the community. As a result, the amount of data that could be collected was affected.

And third, the study did not probe the communities that were on the periphery of Almond and Richmond. This is particularly important for Almond which has had a conflictual relationship with neighbours, Time did not allow the probing of these other communities and therefore the study only highlights the problems, priorities and barriers to a safer space within the community and not from neighbouring commmunities.

Perspectives from the Community About a Safer Space (Findings)

We open this section with two observations regarding our immersion in the communities and engagement with different stakeholders. Both are applicable to Richmond and Almond. The first, women were not at the helm of any violence reduction response, or initiative. The charge against community and gun related violence involved male leadership and while there these are efforts to lead community ownership of a response to the problem and a safer space, it was indicative of how women and men participation in the community is organized. But it is also questionable how much of a voice and the issues that would come with that type of voice, being represented. In Almond there was a women's group, but this group struggled with membership and during the research it was inactive.

The second observation was the call for employment and the seemingly automatic ceasing of violence by those who were responsible if it was provided. There are contradicting views on this relationship. We heard from males youth and non-youth, about the relationship with being employed and resisting violence which we talk about later in the section but we also spoke with individuals and males participating in the research that there were young males employed and still engaging in criminal offences and violence. Generally, both men and women despite occupational status

or category felt employment was important to stopping the violence. It was interesting however how people associated violence and crime as one and not two separate anti-social acts when they spoke of unemployment and male youth.

We heard from representatives from two state agencies about employment possibilities they had presented to youth but these youth did not gravitate to these opportunities. Voices such as this articulating the experience of employment provision suggest differences in expectation of available employment and the earning rewards held by both state actors and youth. The factors responsible for this disconnect with employment expectations may be a device of the reported earnings of those involved in 'lotto' scamming who have bypassed the normal channels for high earnings by engaging directly in the scamming of mostly elderly persons or offering peripheral services required for the maintenance of the lotto scamming operations.

Co-offending, Male Youth and Expectations

Focus group discussions with adolescent males and females point to the involvement of pre-adolescent and adolescent males in facilitating and doing acts of armed violence, such as using a gun to make attempts on the life of others. In Almond, we found many descriptions across interviews and focus groups referring these distinct groups of males. We were also able to observe a few of these categories to support the presentation of categories below. These young persons were also identified as school going and were spoken about in different categories. Below we outline these categories found only in Almond.

- School-going youth who lived with their mother, but no father present due to his death in community violence. These were now seeking vengeance.
- School-going youth who lived with a sister or grandparent and were being influenced by peers.
- School-going youth who joined peers (school going and non-school going) to engage in shootings at night.
- School-going and youth of school-going age who were in the violence because they were 'blessed' into the group based on family history or legacy.
- School going and non-school adolescent males who seem to be greatly influenced by what their peers say. No one else could talk to them.

The conversations on street corners with residents introduced other categories but these were not as consistently mentioned as the aforementioned.

- Pre-adolescent and adolescent males who were encouraged by street corner youth to attend and do well in school. These youths were praised by the street corner youth but they were not expected to frequent the corner much because «man and man a pree certain tings pon the corner». These could include seeing guns and being exposed to the pressures of being part of the group which becomes a necessity if they have rivals who know you are associated with the corner. While we heard of this experience in one only section of a community, our engagement with two other corner groups reinforced the existence of an expectation of oneness among members of the corner. In one of the corner groups which included members who had contact with the justice system, a way of life for them was checking on each other as soon as they woke from their beds, eating together or sharing food with each other which sometimes meant first thinking together about what would be eaten or could be bought to eat each day.

In Richmond, the relationship between youth and a safer space was discrete, but not as elaborate as what we heard of in Almond. The trigger for the violence and a gang truce in December 2017 involved adult males in a built-up area of the community. However, the gun violence involving adolescent males occurred in a heavily forested district of Richmond. We obtained description of these and other categories of youth from interviews and focus groups with employed females living in the community.

These other categories included:

- Males with no certifications, unemployed, in their late adolescence but less than 25 years old associated with gun violence and homicides due to lotto scamming related activity.
- Males with 2-3 secondary level certifications but in between employment, involved in gun violence.

Like Almond we heard from interviews with residents about co-offending males in the sexual abuse of females which was described as having sexual relations with under-age females as part of a sacrificial ritual to give them protection from others who wish them dead. In Almond the sexual abuse of females involved the victimization of older females but the cases we told about always involved a male who they knew and seemingly trusted or had been cohabitating with.

In both sites, women were said to be contributing to violence and supportive of violent acts, but each site had a different description for this type of support. In both sites however, references to this were not countable but in focus groups and interviews people spoke to situations along with the descriptions. In Almond, women

were described in situations where they would be commuting in a vehicle and telephoning to inform about the location of a male who would later be the victim of violence such as a shooting or homicide. In Richmond, community participants in focus groups described women as directly involved in gun violence because of positions they hold such as the main person in a lotto scamming operation who would give orders for the killing of individuals.

Problematic Relations with the Police

There has been no evaluation of the effectiveness of using joint police and military operations in Jamaica, but the practice persists and in every case like in Almond and Richmond, there are reports of police excesses. These excesses are based on citizen reports and complaints but occur against continuous training of officers. This research did not probe if officers trained were the ones also deployed during the SOE and we only know of such officers being part of the ZOSO intervention. Residents in Richmond for example spoke highly of military personnel but showed less favour for JCF officers. The joint police military crime control strategy has been transferred from use in urban, dense, inner city communities to rural, heavily forested communities like Richmond without the evaluative knowledge appreciative of the different social and community forces that would make the strategy successful or not. In terms of police treatment of citizens while they are carrying out their duties, participants in focus groups across both spaces spoke of police entry into their homes or in their yards without communication to them while they were sometimes present relaxing or sleeping during the entry and aggressive handling of non-suspect, non-gang members in exercising their duties. The excesses that we heard of at a Town Hall meeting in July specific to Richmond and neighborhoods in the parish were not confined to one age group and were not gender specific.

Perception held by residents of how police treat them communicated in focus groups and semi-structured interviews in the Richmond and Almond suggest that residents do not feel they are treated fairly and equally. This interpretation of the conversations was reinforced in action workshops. In roti diagrams participants never placed the police at the core in helping to promote a safer space. They spoke of police slow response to reports of threats and other types of victimization and processing of these reports. They also expressed concern about how and when police approached individuals who offended or assaulted victims who had reported the matter to the police. In both settings, young males in action workshops spoke about them being pressured more as opposed to others who should also be approached by the police. Probing this further, it was interesting that the males did not discount being

approached but just wanted those who they were in conflict with to also experience the same treatment. In the absence of this treatment of their rivals or groups with law violations they interpreted unfairness, preferential treatment or bias and what may be a lack of knowledge on the part of the police.

In both settings, males and females participating in the research did not always report offences to the police. Males and females reported the practice of not reporting because of fear of retaliation from assailants who they said also receive information from police. In one site young males identified situations where crime was reported or non-reported. Rape (of a female) or robbery (within the community) was not reported to the police but was reported and judged by the community and leaders who were also the leaders of gangs. Shootings (attempts on the life of others) and gun fire and gun salutes) were not reported. Residents were however very vocal about police treatment/mistreatment of them. Young males in Almond felt it was necessary to report such treatment by the police that infringed on their rights.

Police patrols may go into a community and hold several young males, put them at the back of a truck and transport them to a station for processing. Some of these youths may or may not be charged for a crime partly because there is no evidence against them. Some may also be part of state efforts such as gang demobilization programmes, but still face this potential targeting by police. There are also those caught up in the stereotyping but there are also potentials who are screened by the police and sent back into the communities. Between being in contact with law enforcement and returning to their communities, many of these young males were not connected to any organizations that would help reinforce expected social norms. The absence of an organic approach to treating these individuals who come into contact with the police may be hurting the control and prevention of violence. Some of the the young males return to their communities without information on their "attachment" and 'status' in society being recorded and passed on to other agencies and specializations such as social work to provide the information and system for connecting them to services specific to their needs. In the 2018 State of Emergency for St. James, youths in one community were gathered by police and taken to a main station and screened there. For some of these youths, a state agency connection has only been with the police. Normally they are returned to the community and return to a life of 'hustling'. The incarceration by the police under the SOE means that some who were hustling may lose a job. The routine gathering of them and their peers by the police was described by a few in a focus group as part of their way of life. This type of normalization weakens any lasting

deterring effect and the only immediate deterrent effect that is realized for policing is the break in routine activities that may seize, but only for a period of time.

'Residents' Perceptions of 'Feeling Safer'

In the discussions that followed the community mapping exercises by participants in focus groups and in the action workshops, participants spoke of nowhere being safe. It is important to understand the categorical nature of this feeling. The gun violence before the SOE in Richmond or curfews in Almond caused residents to live in fear. They exhibited this fear by confining their movements, commuting to work and from work by particular times, with little involvement in community activities. While their homes were regarded as safer than being in the streets in their communities, they still held the fear of gunshot piercing through their homes. Or in the case of Almond, the gun violence following the curfews. One female living in Almond for more than 10 years who participated in a semi-structured interview spoke of the love for her community and what the different actors are doing to boost education and promote peace in the community but lamented the violence which is occurring alongside all of these positives in the community.

> I love how the… is helping the youths with their education and home work, she said. I do not like the violence, too much gunmen. The church, the prayer group, and the police help to create a safe space.

Women spoke of the gun violence affecting their commute to and from work and it also affecting their children psycho-socially. They also felt nowhere was safe and also spoke about particular issues such *cat-calling* by males whilst they walked the street. In Richmond the absence of streetlights in lanes within sections of the community that had eruptions of violence placed a burden on women to find extra funds to pay taxi drivers to transport them to the doorsteps of their homes instead of disembarking at designated terminals or venues in the community.

The community mapping revealed that in Almond, areas that were highlighted as places to stay away from have a historical connection with gun violence, reprisals and armed groups that have become embedded in the community. This however was not the case in Richmond. No historical connections with violence were made. There was a clustering of gun violence in sections of the community and the drivers of this violence included lotto scamming and reprisals. Participants in the action workshop and residents we spoke to were not always able to remember places and incidents that would make a section of their community bad. This was experienced more in Richmond.

When we used Geographic Information System (GIS) technology to geo-reference the location of churches and recreational areas and then added crime data as another map layer to triangulate information this confirmed the spread of the gun violence in Richmond that we were told about in interviews with residents and the concentration of the violence in the south eastern part of Almond. In Almond, the mapping of assets in the community and homicide and shooting crimes supported the identification of unsafe spaces and spaces that have become less safe that were mentioned by participants in interviews and focus groups. The maps revealed the historical, spatial representation of street-based gun violence across the community perpetuated by armed groups and the shifts in this representation which indicated how long the violence enacted by these groups had persisted. These maps are not included here to protect confidentially and resident identification, but these groups have persisted symbolically by claiming areas and demarcating them through the use of murals for example. Residents who have experienced victimization by these groups, still live with the memory and refrain from visiting these parts. The memory of the violence and individual experiences of victimization are accompanied by expressions of hurt.

Building Safer Spaces: Community Perspectives and Current Responses

How a safer space may be conceptualized was similar across the two sites and transferable across gender to some extent. In both sites when men were asked about what a safe space was or describe it, they spoke of it in relation to their unemployment and their desire to provide for their families. They have not been able to do so because they have remained without a job. A job for them meant they could provide for their households, an expectation of being a man in the society. For them, not being able to do so put their image and perception of being a man at risk. Risks included, the attraction to gangs but also the consequence of having to face incarceration or leaving the community and leaving their women and household behind. In Richmond, men who were self-employed associated their safe space with their ability to earn more and the factors blocking them from not realizing this. These included the State of Emergency requirement for businesses to close at 7pm. Residents in both sites lamented how State supported polices to have community movement restricted by a particular time affected them negatively.

> Police and soldiers cannot solve the crime and violence, they can assist in pausing it for a period of time, but it is going to take the community to come to together sustain the peace.

People spoke to nowhere being safe but this was obviously confined to the perception of their physical space. Our discussions and walk-through of the communities revealed that residents had their networks that were either family or peer based and provided emotional safety and protection for them. Both males and females were found to have crews or particular persons that they routinely associate or could be found with. We came across these particular groups: 1) Females of all age groups who were siblings and mothers looking out for each other through support to children or playing card games for money, and 2) Pre-adolescent males who routinely came together to dance and lived in proximity to each other in a big yard area. These males had gone to the same school and showed care for one another by giving advice to each other on females they showed interest or about the performance statistics for a favorite football player on a European team.

Residents spoke to unemployment as a reason for youth involvement in the unsafe spaces, but other reasons were given and if solved would help with the creation of safer spaces. Box 6.1 below lists police respect for example as one input for a safer space in Richmond. When participants listed freedom of movement they were speaking about the restrictions the violence brought as well as it being a consequence of the SOE and police operations.

Box 6.1

A perspective on a safer space by residents in Richmond

What is Need for a Safer Space: Itemized Listing.

Police respect citizen in the community

Freedom of movement

Youth club

More entertainment (party, football netball competition)

More jobs

Business in the community

More church

Less police brutality

Freedom of speech

Right to vote

Community development planning in Jamaica involves participatory methods such as consultation with community-based organization representatives who are members of a Community Development Committee (CDC) that has an executive committee. The outputs of these consultations usually is a community safety profile. Between 2011 and 2017, two community safety profiles were done for Almond. We did not receive any for Richmond. The CDC for the community is part of a wider governance architecture and feeds up into a development area committee and into a parish development committee. Both Richmond and Almond have CDCs which have produced community development and priority plans. In Almond, successive priority plans have cited unemployment and crime as worrying factors for the community and for the most part there is convergence with other actors such as the police and other state agencies promoting Restorative Justice. Almond has a restorative justice unit but despite these efforts crime and violence persist. Interviews with actors done at the beginning of the study point to the failure of family and the lack of resources targeting the problem. Semi-structured interviews with residents in Almond also hint at frustration with overall efforts and some residents believe only those involved in the violence can stop it. This view was echoed by several youths. One male youth who has lived in the community for 18 years was asked who can stop the violence and he said "the gunmen".

> I have been living in the community for 22 years. I don't like the crime and the violence in the community, it does not allow me to feel safe at all. The police and the soldiers have been trying to stop the violence, but it is the gunmen who have to come together and decide to stop […] I am sick of this foolishness, the place a mash up. We need more clubs and more organizations to help to make the place safe. Clubs come with opportunities, too much idleness on the corners, the community needs Jesus in order to be well safe. Jesus alone can stop this madness" said another male youth who we spoke with during a walk through in the community.

Female and male youth in focus groups often used the word gunman to describe collectively men in the community who had access to weapons and also police officers. Male youth in Almond when speaking of police officers as gunmen did this in relation to a perception of the police as being unfair in the dispensation of their duties and facilitation of criminal activities sometimes in concord with armed groups in the community. Although it wasn't a core theme, distrust between actors hampered the integration of responses. The distrust was spoken of in interviews and observed in the communities and centered around the relationship actors such as violence interrupters and peace builders or the police had with armed groups with either manifesting distrust by withholding information fearing it would impact police work

or the lives of the interrupters. This disconnection between police and violence interrupter in treating armed groups made it difficult for the legitimacy of interventions put forward by the VIs and created a for and against situation in the communities with the police viewed as antagonistic. The history and debate on this nuance is too wide to be exhausted in this chapter.

However, a comprehensive response to the problem exist in Almond which cannot be said for Richmond but is understandable given the longer history of violence and problem-solving strategies from different actors that has occurred in Almond. A comprehensive response is a response involving all actors that seeks to address all possible causes of violence and crime and such a response includes suppression, interruption and prevention. In Almond, The Peace Management Initiative (PMI), the police and other actors- church network, sports groups are part of the response whenever there is gang violence. Table 6.2 below categorizes the presence of actors by type, working to build a safer space in the two communities.

During the research, no women's groups were identified as actors assisting with violence prevention. In Almond, a women's group did exist but facilities and resources among other factors affected the women coming together. The women's group emerged out of the need to have women's voices represented in the violence reduction efforts.

Table 6.2

Breakdown of Actor Involvement in Violence Prevention in Research Sites X=no +=yes

Actor	Almond	Richmond
Religious denominations (various)	+	+
State Actor-Police	+	+
State Actor-Interruption and Referral (PMI)	+	+
Community Council and State Actor-Social Intervention Projects	+	+
Community Based Orgs. In Direct Violence Prevention	+	X
Educational Institutions	+	X

Residents in Almond and Richmond have their views on what can be done to stop the gun violence and create a safer space. They are aware of the resources and constraints but they are also not utilizing the resources fully. In the Venn diagram

exercises done in focus groups and action workshops, youth groups were identified as close actors to the safer space construction. However, when youth, particularly males are spoken about it is connected to the problem and the solution is one that involves the police. In Almond the police youth club was felt to be close to the core of creating a safer space but not many youths are part of this group because of the long-held fear of being labelled an informant by residents. The example of the police youth club is one that applies to Richmond. In Richmond the work of the police youth club is mentioned by youth positively but the club meets at an office located on the police compound and it is also far for the medium to high risk youth who reside in the troubled section of the community.

In Richmond the views on who can help with the construction of a safer space is also based on belief in the capacity and past support for the community. The actors are few and this may also be because of the lack of investment in the community. Residents constantly complain about the community being under-served and justify this by pointing to most services they need being outside of the community. These services include access to banking and other financial services.

Conclusion

The findings from the study suggest that there is some degree of consideration for softer approaches to making the communities safer and not a total reliance on law enforcement to do so. Most importantly residents and the state show agreement for this but not all approaches that were innovated to respond to violence in Richmond and Almond actually supported safer spaces related outcomes. This has not been the result of just inadequate sensitivity and targeting but also how responses are prioritized. Much of the focus of residents and those involved in curing the violence in the communities focuses on street-based violence and not enough is being paid to domestic violence prevention programmes. This is rather peculiar given the criminological and public health evidence suggesting the importance of reducing risk factors at individual family and community spheres and the likely behavioural outcomes once interventions are integrated.

The communities in the study both have systems and processes that facilitate resident participation in decisions about what should happen in their community. But this level of participation does not seem integrated in how their communities are policed. Both communities have levels of distrust. There is distrust for those who are involved in the violence directly and supportive of it by frustrating the capturing of these individuals. The other dimension of distrust concerns the police.

The current strategies to deal with controlling crime in the communities continue to suffer because dimensions of distrust. The intervention by the State does not only involve the police. There are programmes being implemented by other state agencies to boost cohesion of residents and integrate them into mainstream society but there is also not enough of resources supporting these positive efforts. For communities like Almond which has had a history of violence, the State's intervention has been perceived inadequate.

It was not within the remit of this study to probe the scale of the interventions that would need to be carried out in each community by the State to address citizen safety but the experiences of Almond suggest that the efforts could do with greater participation in owning and solving the problem, especially on the part of women. This is a missing element in the comprehensiveness of the approach being employed to reduce gun violence. There are a few lessons from Almond's experience that could be learnt for the benefit of Richmond which is very young in the experience of gun violence. These lessons do not apply in any sequential manner but include the preservation of rights and projection of fairness in crime control strategies and the importance of history and the memories that carry along with it and how it affects collective efficacy and involvement in communities.

Citizens in both communities support a level of State policing intervention that would allow them to conduct their daily activities, which usually requires them to also be restricted in their movement. However, they also recognize that when terminated it usually follows a return of violence. Both the problem and the response are unsustainable for them. At the time of submission of this chapter, another SOE was declared in St. James indicating the government's to continue exhausting the benefits of homicide reduction associated with the crime control measure. Should the use of SOE's continue beyond 2019, it would become imperative that the government support increased consultations with residents to assure them that other interventions are going to be given the same support that recognizes their voices and how they would like crime control to be done.

Jamaica's violence reduction efforts are comprehensive, meaning there is no single approach being implemented to reduce the problem. It is also multi-sectoral and pluralistic as there are many different agencies involved in its design and delivery of violence prevention outputs. However, there are systemic weaknesses that affects its comprehensiveness and the democratization of its violence reduction approach. The symptoms of this weakness include police corruption, poor resource coordination and inadequate evidence-based informed planning, coordination, implementation

and sustaining of violence prevention interventions. It is clear that policies on how homicide rate should be controlled involves suppression, prevention and interruption strategies but within each of these sectors are constraints which involves resources both financial and human. Political will to reform the JCF with stronger accountability structures that would assist with diminishing its para-military culture and boosting citizen police trust is still lagging.

References

Bloyce, D & Smith, A. 2010. *Sport Policy for Development: An introduction.* London and New York: Routeledge. Taylor and Francis Group.

Bunting, Peter. 2013. *Making Strides Towards a Safe and Secure Jamaica: Presentation in the Sectoral Debate.* Jamaica: Ministry of National Security, Government of Jamaica.

Bunting, Peter. 2014. *Working Together to Build a Safer and Secure Jamaica. Presentation in the Sectoral Debate.* Jamaica: Ministry of National Security, Government of Jamaica.

Campbell, John. 2001. «Participatory Rural Appraisal as Qualitative Research: Distinguishing Methodological Issues from Participatory Claims» in *Human Organization,* 60(4), 380-389. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/44127502>.

Campbell, Yonique & Clarke, Colin. 2017. «The Garrison Community, in Kingston and Its Implications for Violence, Policing, De Facto Rights and Security in Jamaica» in Hilgers, Tina and MacDonald, Laura (eds.) *Violence in Latin America and the Caribbean- Subnational Structures, Institutions and Clientelistic Networks.* United Kingdom: Cambridge University Press.

Dalby, J. 2018. «Homicide in Jamaica Since the Eighteenth Century» in *Caribbean Journal of Criminology.* Vol. I. N.º 3. Kingston: The University of the West Indies.

Francis, A.; Gibbison, G.; Harriott, A. & Kirton, C. 2009. *Crime and Development. The Jamaican Experience.* Kingston: Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies. The University of the West Indies.

GOJ -Government of Jamaica Ministry of National Security-. 2010. *National Crime Prevention and Community Safety Strategy.* Kingston: Crime Prevention and Community Safety Unit.

GOJ -Government of Jamaica Ministry of National Security-. 2017. *Five Pillar Strategy for Crime Prevention and Citizen Security.* Kingston. Retrieved from <https://mns.gov.jm/sites/default/files/Documents/five-pillar%20strategy.pdf>.

GOJ -Government of Jamaica. 2018. *Jamaica Information Service.* Kingston: Crime Prevention and Community Safety Unit.

Harriott, Anthony & Jones, Marlyn. 2016. *Crime and Violence in the Caribbean.* IDB Series on Crime and Violence in the Caribbean. Inter-American Development Bank.

Harriott, Anthony & Lewis, Balford. 2018. «Police-Community Relations in Jamaica: Attitudes and Perception of the Police in a Context of Increasing Public Insecurity» in The Political Culture of Democracy in Jamaica and in the Americas, 2016/17: A Comparative Study of Democracy and Governance. Kingston: United States Agency for International Development, USAID.

Harriott, Anthony. 2002. *Crime Trends in the Caribbean and Responses.* Kingston: University of the West Indies, Mona. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from <https://www.unodc.org/pdf/barbados/caribbean_report_crime-trends.pdf>.

Harriott, Anthony. 2003. «The Jamaica Crime Problem: New Developments and New Challenges for Public Policy» in Harriott, Anthony (Ed.) *Understanding Crime in Jamaica: New Challenges for Public Policy.* Kingston: University of the West Indies Press.

Harriott, Anthony. 2008. «Bending the Trend Line. The Challenge of Controlling Violence in Jamaica and the High Violence Societies of the Caribbean». *Professorial Inaugural Lecture.* Kingston: Department of Government and the Institute of Criminal Justice and Security. The University of the West Indies.

Harriott, Anthony; Lewis, Balford & Zechmeister, Elizabeth. 2015. *Political Culture of Democracy in Jamaica and in the Americas: Democratic Governance across 10 years of the America's Barometer.* Kingston: USAID.

Haughton, Suzette. 2011. *Drugged Out. Globalization and Jamaica's Resilience to Drug Trafficking.* Lanham: University Press of America.

IDB -Inter-American Development Bank-. 2017. «*Caribbean Region Quarterly Bulletin.* Revisiting the Fiscal Challenges». Vol. 6. Issue 3. Retrieved from <https://publications.iadb.org/en/caribbean-region-quarterly-bulletin-volume-6-issue-3-september-2017>.

Jones, Marlyn. 2014. «Crime Related Events: A Path to Policy Change in Jamaica?» in *Caribbean Journal of Criminology.* Kingston: The University of the West Indies. Vol I, N.º 1.

Levy, Horace. 2001. They cry 'respect'! : urban violence and poverty in Jamaica». Kingston: Department of Sociology and Social Work. Centre for Population, Community and Social Change. University of the West Indies.

Levy, Horace. 2012. Youth Violence and Organized Crime in Jamaica: Causes and Countermeasures. An Examination of the Linkages and Disconnections. Kingston: The University of the West Indies (UWI), Institute of Criminal Justice and Security. International Development Research Centre. Retrieved from https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/51348/IDL-51348.pdf

Loop News. 2019, June 12. «Five point Crime Plan unveiled by Dr. Horace Chang». Retrieved from <http://www.loopjamaica.com/content/five-point-crime-plan-unveiled-dr-horace-chang>.

Maguire, Edward; Oakley, Megan and Corsaro, Nicholas. 2018. «Evaluating Cure Violence in Trinidad and Tobago». Phoenix: Arizona State University, Inter-American Development Bank. Retrieved from <https://publications.iadb.org/en/evaluating-cure-violence-trinidad-and-tobago>.

Manwaring, Max G. 2007. *A Contemporary Challenge to State Sovereignty: Gangs and Other Illicit Transnational Criminal Organizational in Central America, El Salvador, Mexico, Jamaica and Brazil.* Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.

Moncrieffe, Joy. 2012. *Qualitative Survey of Youth in Jamaica.* Kingston: Ministry of Youth and Culture. Government of Jamaica.

Moyson, Stéphane & Scholten, Peter. 2018. «Theories on Policy Learning: Existing Approaches and Future Challenges» in Dotti, Nicola Francesco (ed.) *Knowledge Policy Making and Learning for European Cities and Regions. From Research to Practice.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

OSAC -Overseas Security Advisory Council-. 2019. Informe de crimen y seguridad de Jamaica 2019. En: https://www.osac.gov/Country/Jamaica/Content/Detail/Report/1d98b2df-fd4b-485f-aa62-15f4aed245ef

PIOJ -Planning Institute of Jamaica-. 2010. *Report of the Macro Socio-Economic Effects of the Events in Western Kingston Area.* Kingston. May 22 - June 7. Retrieved from: https://webstore.pioj.gov.jm/reportyear.aspx?SectionId=4

PIOJ -Planning Institute of Jamaica-. 2019. *Economic and Social Survey of Jamaica.* Retrieved from: https://webstore.pioj.gov.jm/reportyear.aspx?SectionId=4

Ritter, Nancy. 2009. «Ceasefire: A Public Health Approach to Reduce Shootings and Killings. National Institute of Justice» in *NIJ Journal.* Issue N.º 264. Retrieved from <https://www.nij.gov/journals/264/pages/ceasefire.aspx>.

Seepersad, Randy. 2016. «Crime and Violence in Trinidad and Tobago» in *IDB Series on Crime and Violence in the Caribbean.* Retrieved from <https://publications.iadb.org/en/publication/12509/crime-and-violence-trinidad-and-tobago-idb-series-crime-and-violence-caribbean>.

Sives, Amanda. 2003. «The Historical Roots of Violence in Jamaica: The Hearne Report 1949» in Anthony (ed.) *Understanding Crime in Jamaica: New Challenges for Public Policy.* Kingston: University of the West Indies Press.

Skogan, Wesley; Harnett, Susan; Bump, Natalies and Dubois, Jill. 2009. «Evaluation of Ceasefire Chicago» in *National Institute of Justice, Office of Justice Programmes U.S.A.* Retrieved from <https://www.ipr.northwestern.edu/publications/papers/urban-policy-and-community-development/docs/ceasefire-pdfs/mainreport.pdf>.

The Gleaner-Jamaica. 2018, February 11. «Big Drop in Murders in St. James As Other Parishes Face Pressure». Retrieved from <http://jamaica-gleaner.com/article/news/20180211/big-drop-murders-st-james-other-parishes-face-pressure>.

The Gleaner-Jamaica. 2018, January 18. «Prime Minister Declares State of Emergency in St. James». Retrieved from <http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20180118/prime-minister-declares-state-emergency-st-james>.

The Gleaner-Jamaica. 2018, January 18. «What is a State of Emergency?... Things You Should Know». Retrieved from <http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20180118/whats-state-emergency-things-you-should-know>.

The Gleaner-Jamaica. 2018, January 24. «Peace At Last- But Parents Worry About Teens Detained Under State of Emergency». Retrieved from <http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20180124/peace-last-parents-worry-about-teens-detained-under-state-emergency>.

The Gleaner-Jamaica. 2019, April 22. «Latest police stats show spike in murders for St. James after SOE». Retrieved from <http://jamaica-gleaner.com/article/news/20190422/latest-police-stats-show-spike-murders-st-james-after-soe>.

UNDP -United Nations Development Programme. 2016. Human Development Report. 2016. Jamaica: UNDP. Retrieved from <https://www.undp.org/content/dam/jamaica/docs/HDR/JM-Jamaica_Country%20Explanatory%20Note_HDR2016.pdf>.

UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime-. 2007. *Crime, Violence and Development: Trends Costs and Policy Options in the Caribbean.* Retrieved from <https://www.unodc.org/pdf/research/Cr_and_Vio_Car_E.pdf>.

UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime-. 2011. *Global Study on Homicide 2011.* Vienna: Trends, Contexts, Data.

UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime-. 2013. *Global Study on Homicide 2013* Trends, Contexts, Data. Vienna: United Nations publications. N.º 14 IV 1.

UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime-. 2019. *Global Study on Homicide, Booklet 2: Homicide: extent, patterns, trends and criminal justice response.* Vienna: United Nations publications.

Virtue, Erica. 2019. «Forum. Police Commissioner's Seven Point Anti-crime Plan, JCF outlines Intelligence and Forensics-based Strategy» in The Jamaica Gleaner, july 7. Retrieved from <http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20190707/editors-forum-police-commissioners-seven-point-anti-crime-plan-jcf>.

VPA -The Violence Prevention Alliance - Jamaica Chapter. 2017. *Cost of Care. The Burden of Violence Related Injuries and Road Traffic Crashes to the Health Care System of Jamaica.* Kingston: University of the West Indies, Mona Campus.

VPA -The Violence Prevention Alliance. 2019. *Create a violence-free and safe Jamaica.* Kingston: University of the West Indies, Mona Campus. Retrieved from <https://www.vpajamaica.org/>

Wilson, N. 2019. «Uchence Wilson Gang Trial Witness Says Wilson's Girlfriend Threatened Him After Arrest» in *The Jamaica Gleaner,* april 5. Retrieved from <http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20190405/uchence-wilson-gang-trial-witness-says-wilsons-girlfriend-threatened>.

Reglas de
Comunicación

7

El caso de la comunidad autónoma de Cherán, México, y la resistencia de sus mujeres

Laura Romero Ríos, Ana Mireya Campanur Sánchez, Rebeca Cucue Campus, Araceli García Jerónimo[1] y Óscar Daniel Torres Rosales[2]

Introducción

En este capítulo se presentan los resultados de una investigación que, entre sus principales objetivos, buscó contribuir a la construcción de espacios seguros para reducir la violencia contra las poblaciones más vulnerables, particularmente mujeres y jóvenes, en los municipios de Tancítaro y Cherán del estado de Michoacán, México. Esta investigación permitió, además, incidir en las intervenciones realizadas por las instituciones estatales y las iniciativas de las comunidades, mediante la coproducción de conocimiento con personas residentes de comunidades vulnerables de seis países de América Latina y el Caribe: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Jamaica.

En este proceso trabajaron de manera conjunta investigadores académicos del Centro de Investigación Acción Social por la Paz (CIAS) e investigadoras comunitarias del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social de Cherán. Dicho proyecto surgió en el año 2015 como parte de un plan nacional de la Compañía de Jesús en México, para construir condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitieran el buen convivir entre las personas y con su entorno (González y Mendoza, 2016). Jorge Atilano, director del proyecto, fue quien comenzó el diálogo con actores del municipio de Cherán y con el movimiento comunitario en defensa de sus bosques.

---

1 Investigadoras comunitarias de Cherán

2 Investigador del Centro de Investigación Acción Social por la Paz.

A finales de 2015, con el asesinato de un joven de la «fogata baile», se hizo más evidente la existencia de otras problemáticas que afectaban la seguridad de la comunidad, como el incremento del consumo del alcohol, el aumento de las detenciones de jóvenes bajo los efectos de drogas, el aumento de casos de violencia en el interior del hogar y la ausencia de coordinación interinstitucional para la atención de las necesidades de los jóvenes. En vista de esto, los pobladores de Cherán consideraron necesario llevar a cabo acciones para mejorar la convivencia y reforzar la seguridad en su comunidad.

En este contexto se convocó a representantes del Gobierno Comunal y de la parroquia de Cherán para analizar la situación del tejido social en el municipio y hacer un plan para su fortalecimiento. Para septiembre de 2015 estas reuniones llevaron a la creación del «Proyecto comunitario: Reconstitución de la familia purépecha», que propuso la llegada de cuatro jóvenes profesionistas para el acompañamiento de los componentes de Economía Social y Solidaria, Reconciliación Familiar, Educación para el Buen Convivir, Gobierno Comunitario y Espiritualidad Eco-comunitaria. La experiencia de trabajo del CIAS en el municipio de Cherán concluyó en diciembre de 2018, después de tres años de trabajo, con distintos aprendizajes acerca del acompañamiento de reconstrucción del tejido social en una comunidad indígena[3] regida por sus usos y costumbres.

Una de las experiencias más significativas del proyecto fue la trasmisión de habilidades a un equipo local de cuatro mujeres, que ahora son las encargadas de dar seguimiento a los procesos de reconstrucción que la comunidad ha considerado prioritarios. Estas mujeres son las investigadoras comunitarias que participaron en la implementación de la metodología de Coproducción de conocimiento 'desde abajo' del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, dentro del proyecto de «Voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros en América Latina y el Caribe». El trabajo de estas mujeres ayudó a profundizar la reflexión sobre los retos que tienen los pobladores en los próximos años para construir y mantener condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que fortalezcan el buen convivir en Cherán.

Los espacios de diálogo entre las investigadoras comunitarias de Cherán y los investigadores académicos del CIAS generaron reflexiones acerca de la necesidad de visibilizar, comprender y atender las violencias que aún se viven dentro de la localidad. En general, este capítulo ofrece un diagnóstico amplio y complejo del panorama de seguridad en Cherán, a través de la perspectiva de mujeres de la comunidad. Además, devela varios retos que enfrentan los pobladores de este municipio ante

3 Nombre que se le da a las comunidades que tienen origen pre colonial en el territorio de México.

el complejo fenómeno de violencia que va más allá de las dinámicas criminales y atraviesa las relaciones interpersonales y comunitarias generando consecuencias profundas y traumatizantes en la población. Finalmente, el capítulo brinda algunas ideas y propuestas para enfrentar estos retos, ideas que pasan por promover la reflexión crítica de las personas, repensar tradiciones arraigadas y desarrollar nuevas formas de relacionarse que permitan a todas y todos vivir con dignidad.

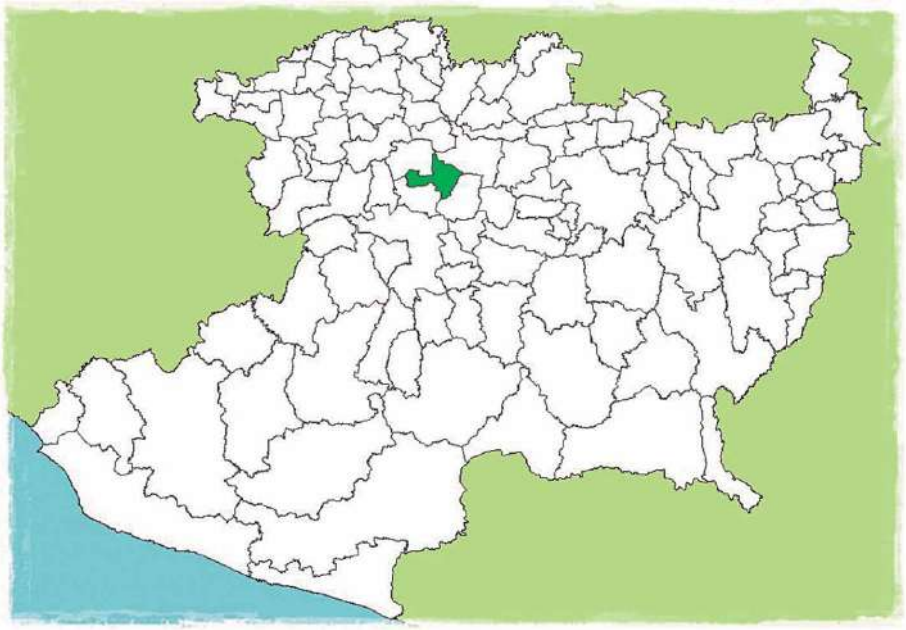
En la primera parte del capítulo se aborda el contexto de violencia del municipio en los últimos diez años; en la segunda, se presentan algunos datos de la metodología con la cual se realizó esta investigación; en la tercera, relatos sobre la violencia que viven los pobladores fuera de su territorio; en la cuarta, los tipos de violencias que se identifican en el interior de la localidad; en el quinto, un resumen de las agresiones que se viven dentro de las familias; y, en la sexta parte se muestra la propuesta que hicieron los mismos pobladores para la atención de estas problemáticas en la localidad.

Contexto estatal y violencia en el municipio de Cherán

Michoacán es una de las entidades en México en la que se ha registrado uno de los más altos índices de violencia en los últimos diez años. Distintos grupos armados asociados al narcotráfico han intentado controlar el territorio michoacano, como los Zetas (2001), La Familia Michoacana (2006) y los Caballeros Templarios (2011). Pero, conforme pasa el tiempo, estos han perdido relevancia y en su lugar han surgido otros, como el Cartel de Jalisco Nueva Generación y La Nueva Familia Michoacana. Uno de los hitos más importantes que explican está realidad fue el inicio de la Operación Conjunta Michoacán. El día 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa, quien tomara posesión de la presidencia días antes, anunció el inicio de la primera etapa de lo que más adelante se denominaría Guerra contra el Narcotráfico. A partir de ese momento la violencia asociada al narcotráfico en dicha entidad se incrementó año tras año y hasta convertirse en uno de los problemas más preocupantes que enfrenta México. Para el año 2019, Michoacán ya era uno de los estados que, aun después de haber sido intervenido de diferentes formas por el Gobierno Federal, no ha logrado revertir la violencia. Desde octubre de 2015 y hasta el mes de mayo de 2019 se tuvieron, en promedio, 127 asesinatos cada mes, cifra que muestra la gravedad de la situación de seguridad en la región (México Evalúa, 2019).

Dentro de este contexto estatal se desenvuelve la vida social del pueblo de Cherán, ubicado en la parte noreste del estado de Michoacán, en un altiplano con importantes montañas en la meseta purépecha, zona de infiltración de agua que recarga los mantos acuíferos que drenan principalmente las zonas agrícolas y aguacateras (CONAFOR, 2016).

Mapa 7.1
Ubicación del municipio de Cherán, Michoacán



Fuente: elaboración propia con imágenes de INEGI, 2017.

Cherán cuenta con 19 081 habitantes, de los cuales 9 054 son mujeres y 10 017 son hombres, lo que equivale al 47,5 % y a 52,5 %, respectivamente. Del total, el 56 % son jóvenes de 15 a 29 años de edad lo que equivale a 5078 personas: 2381 hombres y 2697 mujeres (SEDESOL, 2017). Hasta el año 2010, había en el municipio 4310 personas de más de cinco años hablantes de lengua indígena (INEGI, 2017).

En cuanto a la violencia que ha vivido el municipio de Cherán en los últimos años, se puede decir que la presencia de redes de delincuencia organizada en la región de la Meseta Purépecha aumentó considerablemente durante el año 2008. Grupos como el Cartel de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios, impulsaron y controlaron la economía ilegal en la zona usando la fuerza. Los negocios ilícitos de estos grupos en la región se concentraban, sobre todo, en la producción y tráfico de drogas; así como en la tala clandestina a gran escala de los pinos del territorio comunal de Cherán y otros municipios aledaños (Gasparello, 2018). Las acciones emprendidas por la delincuencia organizada o la «gente mala», como hasta la fecha los pobladores se refieren a estos grupos, generaron una situación de inseguridad en la localidad. Para uno de los miembros del primer Concejo de Administración Local de

Cherán este fue un momento muy tenso en el cual «había temor de salir a las calles y a ser extorsionado». En gran parte, este miedo surgió al darse cuenta que detrás de los talamontes, que devastaban sus bosques, había grupos del crimen organizado (González, 2014). Un ejemplo de esta escalada de violencia, dentro de la comunidad y en sus alrededores, fue el asesinato del exalcalde de Cherán Leopoldo Juárez Urbina que, junto con otras personas, había tomado la alcaldía para exigir la salida de los funcionarios públicos de la localidad debido al asesinato del joven Mariano Ramos Tapia, activista de la Coordinadora Estudiantil Indígena y Campesina, en manos de la policía municipal (Martínez, 2008).

Para el año 2010, las operaciones de los grupos criminales se intensificaron, ejemplo de ello fueron los cobros de «cuotas» a los dueños de las tiendas comerciales situadas en el centro de la localidad, los secuestros y las extorsiones a las familias. Dicha violencia criminal cobró al menos veintiuna vidas en Cherán, quince comuneros fueron asesinados y seis desaparecidos (Gasparello, 2018). Por otro lado, la Comisión Nacional Forestal señala que, durante los años 2009 y 2010, los habitantes de Cherán denunciaron constantemente la tala clandestina de sus bosques sin tener respuesta de sus autoridades, lo que originó enfrentamientos entre ejidatarios y talamontes, secuestros y la muerte de varios pobladores que trataban de defender el bosque (CONAFOR, 2016).

A raíz de estos eventos, la mayoría de los habitantes tendieron a aislarse en sus hogares y resguardarse sobre todo por las noches debido al tránsito de talamontes por sus calles. La inseguridad causada por la presencia de estos hombres armados trastocó de manera particular la vida de jóvenes y adolescentes que no se sentían seguros para caminar por la localidad por miedo a ser golpeados por miembros de los grupos delictivos. Los efectos de la violencia criminal que experimentaron los pobladores de Cherán se manifestaron en forma de una parálisis comunitaria y en la instauración del miedo generalizado de las familias que no les permitía comunicarse ni organizarse de forma efectiva (Gasparello, 2018).

Otras investigaciones sobre la situación de Cherán señalan otras vulneraciones directas que sufrieron los habitantes en su integridad física y comunitaria por acciones de los grupos criminales, como amenazas, privación de la libertad y tortura. Cada una de estas acciones violentas sobre algunas personas tenía efectos comunitarios, ya que implicaba un cambio drástico en el modo de vida de los cheranenses (Márquez, 2016).

En tal contexto, se cancelaron paulatinamente las celebraciones de las fiestas y de las faenas comunitarias, ya que ambas actividades representaban peligro para gran cantidad de personas en espacios públicos y abiertos (plaza, calle o bosque).

Con esta reducción de la vida pública también menguaron las actividades productivas y del campo (Gasparello, 2018).

Hacia el año 2011 se hizo común el tránsito de personas en camionetas que transportaban madera talada ilegalmente de sus bosques, en complicidad con los funcionarios públicos de la localidad (Enlace Zapatista, 2011). Después de estos años de miedo e incertidumbre, la madrugada del 15 de abril de 2011, los habitantes de Cherán, con el hartazgo acumulado por la pérdida de su patrimonio natural y los recurrentes actos de violencia en su contra, decidieron frenar a los madereros clandestinos y detener a cinco choferes en la capilla del Calvario, situada a las orillas del pueblo. Estas personas detenidas fueron entregadas a las autoridades correspondientes varios días después en las afueras del municipio y la comunidad decidió cerrar las vías de acceso a su territorio. Para resguardarse construyeron barricadas en las entradas y salidas a la comunidad con el fin de impedir el paso de grupos armados que comenzaron a amenazarlos (González, 2014).

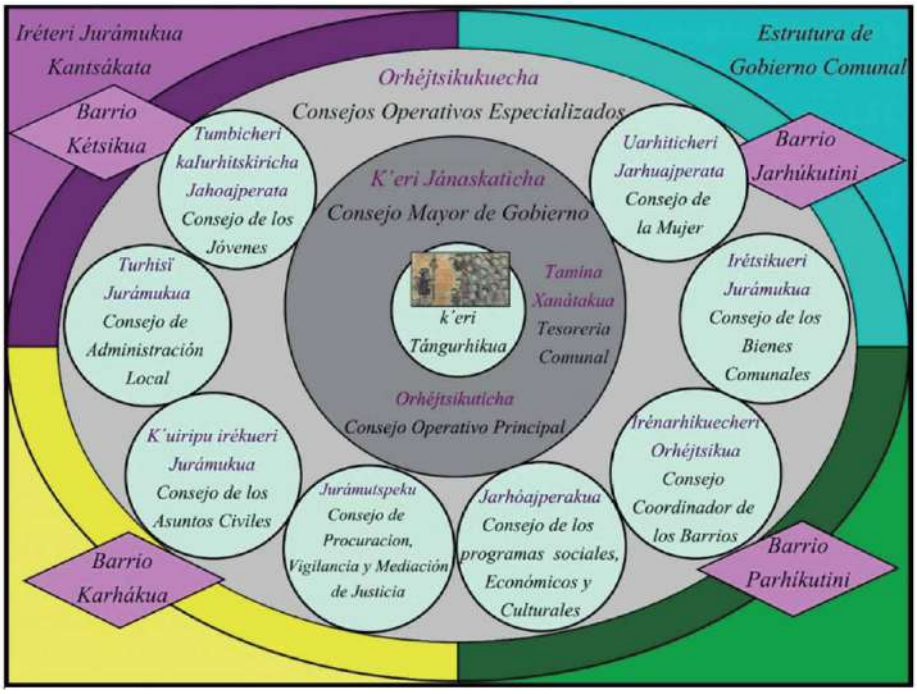
Además, los pobladores exigieron el despido de la policía municipal, ya que habían perdido la confianza en ella por estar aliada con el crimen organizado. El presidente municipal aceptó la solicitud entregando las camionetas y las armas de la policía a la nueva organización comunal (González, 2014). Para salvaguardarse, los comuneros organizaron rondines y lo que hasta la fecha se llaman «fogatas» como lugares de encuentro y alerta ubicados en cada una de las esquinas de los barrios.

Foto 7.1
Reunión alrededor de la fogata

Fuente: archivo general CIAS, 2017.

La progresiva organización de los grupos defensa del bosque de Cherán no pasó desapercibida para el crimen organizado y, en una forma de generar miedo e intimidar a la población, persiguió a las personas que participaron en los intentos de frenar la tala clandestina. Para ello retuvieron y torturaron a comuneros golpeándolos e interrogándolos para que delataran a las personas que les ayudaban a cuidar el bosque. Esta situación de violencia, por la presencia del crimen organizado en los municipios colindantes, puso en gran vulnerabilidad a las personas que salían de la localidad (Ruiz, 2015).

Gráfico 7.1
Estructura del Gobierno Comunal de Cherán K'eri



Fuente: Informe del Consejo Mayor de Gobierno, 2012.

Sin embargo, estas acciones de los grupos delictivos no frenaron la organización de los pobladores de Cherán, que vieron en la conformación de un autogobierno la forma de contrarrestar la inseguridad en la que vivían. Por ello, se pusieron en marcha asambleas comunales en las que deliberaron las estrategias y propuesta organizativas que llevarían a la consolidación de una petición para el reconocimiento

de su autonomía como comunidad indígena por parte de las distintas instituciones estatales y federales. Al mismo tiempo, los habitantes de Cherán decidieron no participar en los comicios de ese año y, en su lugar, iniciaron un proceso para elegir a sus autoridades a través de sus propios sistemas normativos de «usos y costumbres». La primera solicitud formal de autogobierno fue rechazada por el Instituto Electoral de Michoacán, sin embargo, después de una revisión del caso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se revocó la sentencia anterior y se reconoció que la comunidad indígena de Cherán tenía derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a sus derechos humanos y con base en las legislaciones internacionales (TEPJF, 2012).

En enero de 2012 se eligió al primer Consejo Mayor de Gobierno Municipal, aun con la zozobra producida por la presencia de grupos criminales que rondaban los límites del municipio. Este consejo quedó constituido por doce integrantes conocidos como K'eris o mayores, tres por cada cuatro barrios que conforman la comunidad. Respecto a la seguridad del pueblo y el territorio, también se logró que se reconociera a la Ronda Comunitaria y al Grupo de Guardabosques (integradas por los propios vecinos) como las únicas instituciones encargadas de la seguridad del municipio.

Ya con esta nueva estructura de gobierno, lo últimos datos sobre actos violentos en Cherán, son del año 2012 y se refieren a delitos del fuero común, registrados en intervenciones de la policía municipal dentro de la localidad, en la etapa en la cual Cherán ganó su autonomía (INEGI, 2015). De acuerdo con distintos medios, desde 2013 y hasta 2017, el porcentaje de «delitos de alto impacto» en la localidad es nulo. Sin embargo, en el segundo informe de gobierno de la administración por usos y costumbres de Cherán (2016-2018), el Consejo de Procuración de Vigilancia y Mediación de Justicia (Jurámutspekua) informó que las conductas anticomunales más registradas en la localidad fueron la posesión y consumo de drogas; las riñas entre pobladores (probando lesiones y en consecuencia actas de reparación de daño) y el decomiso de objetos prohibidos y peligrosos a personas de la localidad (Gobierno Comunal, 2017).

Cuadro 7.1

Atención anual del área penal del Consejo de Procuración de Vigilancia y Mediación de Justicia, Cherán 2015-2018

Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.
49	68	74	60	89	95	78	52	87	56	55	32

Fuente: segundo Informe gobierno comunal 2015-2018. Trabajo en comunidad.

Con estos datos, se puede dar cuenta de que, aun cuando las fronteras del municipio de Cherán están resguardadas del crimen organizado, en el interior de la comunidad aparecen otro tipo de violencias que afectan a las familias y a los pobladores.

A continuación, se describen los métodos que fueron usados por el equipo de investigación para entender mejor esos otros fenómenos de violencia que parecían estar afectando a la comunidad a pesar de los avances que habían logrado en materia de seguridad en Cherán.

Desarrollando perspectivas críticas sobre la violencia en Cherán

Mediante técnicas vivenciales, como el conversatorio, el juego de roles, el mapeo de actores y el mapa histórico, se buscó estimular las emociones, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los y las participantes para generar aprendizajes cara a cara y de manera interactiva acerca de la violencia. En los espacios de encuentro en los que se llevaron a cabo estas sesiones participaron las personas que se muestran en el cuadro 7.2.

Cuadro 7.2
Participantes en el proceso de investigación

Sesión	Número de personas
Conversatorio sobre las violencias	9 mujeres: 4 jóvenes y 5 adultas
Juego de roles, mapeo de actores y mapa histórico	10 mujeres: 3 jóvenes y 7 adultas
Historias de las violencias	15 mujeres: 5 jóvenes y 10 adultas
Conversatorio sobre violencias y asambleas de paz	82 personas: 26 mujeres y 56 hombres En cuatro mesas de trabajo se contó con participación de jóvenes de secundaria y maestros de distintos planteles educativos
Tres sesiones de sistematización y análisis	4 mujeres investigadoras comunitarias y 2 investigadores académicos

Fuente: elaboración propia.

La técnica del *conversatorio* propició la reflexión interna, crítica y tolerante del tema de violencias. El espacio se conformó de tal manera que las personas pudieran compartir sus sentires y pensares desde las propias experiencias. El *juego de roles* se utilizó para que, primero, dos o más personas representaran una situación o un caso de violencia en la localidad, un hecho al que necesita se le da una solución, luego se

abrió un espacio de reflexión entre los participantes y los que representaron el papel. La técnica conocida como *los rostros de la violencia* permitió que los participantes hicieran contacto real desde sus experiencias individuales con el fin de reflexionar sobre el origen de sus violencias y cómo estas se anclan de maneras inconscientes en el sentir del ser humano para, posteriormente, exteriorizarse en actitudes.

Cuadro 7.3
Metodología del proyecto

Etapas	Objetivo específico	Temática
Etapa 1: Reconocimiento de las violencias	Generar reconocimiento sobre las prácticas de violencia que hay en la comunidad entre las personas que participarán en el proyecto	Talleres vivenciales sobre violencias
Etapa 2: Formación de investigadores comunitarios	Facilitar técnicas de investigación a los investigadores comunitarios	Impartición de técnicas de investigación cualitativa
Etapa 3: Análisis comunitarios	Describir prácticas que inciden en las violencias e iniciativas comunitarias de seguridad	Impartición de talleres por parte de las investigadoras comunitarias
Etapa 4: Análisis de datos y sistematización	Generar el análisis de la información para realizar la sistematización	Análisis de la información
Etapa 5: Devolución de la investigación	Abrir un espacio de diálogo y reflexiones en torno a lo encontrado por las investigadoras comunitarias y por los investigadores académicos	Realizar un conversatorio para reflexionar sobre las hipótesis, el desarrollo de las investigaciones y las conclusiones obtenidas
Etapa 6: Difusión y publicación de la investigación	Difundir la investigación conjunta en diversos espacios académicos y no académicos	Reflexionar con académicos y con público

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, se usaron algunas técnicas participativas para reconocer la historia y el contexto de la localidad, así como para comprender las aspiraciones que tenían los pobladores acerca de su comunidad. *La historia de la comunidad* fue una técnica que se utilizó para reconstruir la historia local recuperando los hechos importantes de sobrevivencia y de organización comunitaria. Mientras que la *lluvia de aspiraciones* ayudó a conocer los principales anhelos de hombres y mujeres sobre su localidad, en relación con las posibilidades reales de mejorar su condición individual y comunitaria. Finalmente, la reunión entre profesores y alumnos permitió recoger mayores aprendizajes en el conversatorio de *Violencias y asambleas de paz.*

Así, se partió de métodos generales para llegar a técnicas particulares que generaron análisis, reflexiones, críticas y sentires en las personas de Cherán que participaron en esta investigación. En el cuadro 7.3 se muestra el proceso realizado.

La propia implementación de la metodología de coproducción de conocimiento 'desde abajo' (OSHM, 2014). entre investigadores académicos y comunitarios supuso grandes retos. En la primera parte, la formación en herramientas participativas de los investigadores comunitarios como la aplicación de talleres por parte de ellos a grupos poblacionales de Cherán, fueron los espacios en los cual se interactuó de manera más fluida y coordinada. Sin embargo, en el análisis y la presentación de la información quedaron varias deudas para llegar a acuerdos sobre lo que se sistematizaba o los medios óptimos para su socialización. Aun con estas limitaciones, se logró que investigadoras comunitarias e investigadores académicos participaran creativamente en la redacción del presente documento, tratando de exponer los resultados más importantes.

La construcción de seguridad y los espacios seguros en la comunidad de Cherán

El análisis de los talleres y las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto en la comunidad de Cherán, llevaron a la generación de una tipología sobre las violencias que se viven dentro de la comunidad y que afectan especialmente a jóvenes y mujeres. Las categorías desde las cuales describiremos la violencia en esta localidad serán la territorial, la comunitaria y la familiar. Al final presentamos un esquema sobre la construcción de espacios más seguros.

El autogobierno y la seguridad en las fronteras

Para quienes participaron en los diferentes talleres y conversatorios de esta investigación, Cherán es un lugar seguro en comparación con otros municipios del país. Para Mirna, por ejemplo, la ciudad de Veracruz tiene menor nivel de seguridad que Cherán, debido al riesgo que, de día o de noche, se tiene en las calles y caminos por la presencia de grupos del crimen organizado. Para la joven, el nivel de seguridad de un territorio se ve afectado, primero, por el número de personas que habiten en él; segundo, por la relación que establecen las personas entre ellas y, tercero, por «el valor que dan a la vida».

> Creo que es peor en otras partes, porque si hacemos un comparativo con Cherán, aquí es un nivel de tranquilidad amplio, vaya. Yo veo a mis hermanas o a mi familia, que relativamente están tranquilos, en Veracruz mi mamá le prohíbe a mi hermana salir de día o de tarde o si te adentras en la ciudad tienes que cuidarte mucho. Ahora cuando voy,

> es una ciudad distinta a la que yo crecí; y digo, en Cherán claro que no me va a pasar nada. Allá [en la ciudad] hay tanta gente, que te vuelves invisible, pero aquí, al ser un pueblo pequeño, pues cualquier persona te ubica y sabe si algo te pasa. También creo que tiene que ver con el tipo de ciudadanos que somos, si no le damos el valor a la vida invisibilizamos las muertes, los secuestros, las violaciones y eso habla de una sociedad que está en decadencia (mujer joven, taller sobre violencias, Cherán, 2018).

En el mismo sentido, para Alma, mujer que participa en la organización comunitaria del pueblo, la falta de sensibilidad y la normalización de la violencia también acontece en municipios cercanos al suyo, como por ejemplo en Uruapan, una ciudad de Michoacán, a 52 kilómetros de Cherán:

> En Uruapan, cuando vamos a comer o algo así, te dicen de manera bien natural lo que pasa: «Mira, aquí mataron a estos». A nosotros nos dicen que ya ni cuenta se dan. A mí me da inseguridad ir a Uruapan, porque la última fue que una muchacha se subió a un taxi y la mataron, y dicen «por algo ha de ser», por eso prefiero irme en camioncito. Algunas personas dicen que si pasó algo es porque en algo debían estar metidos. Y ya se queda eso en el olvido (mujer joven 1, conversatorio sobre violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

Con lo anterior, se crea un estigma hacia el agredido que lo revictimiza y que disminuye las posibilidades de que se exija justicia por su muerte. En este tipo de contexto, actos delictivos como los asesinatos no son denunciados por los pobladores, no solo por la indiferencia o la indolencia, sino para mantener la propia seguridad, lo que ha instalado una práctica de «ver y callar» ante dichas situaciones en esta región.

> La cosa está cruel, está fea. Y de ver que personas que aparentemente se ven seguras, pero en realidad es de callarse o soportar eso y mejor es encerrarse y no ver nada de afuera. Esa es la parte más fea porque callar es una forma de olvidarnos que los demás existen (mujer joven 2, conversatorio sobre violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

Los ejemplos de Mirna y Alma esbozan la opinión de la mayoría de los entrevistados acerca de la violencia que existe en la región. Para ellos hay varios factores que inciden en la generación de violencia y la disminución de su seguridad. Algunos de estos son la presencia de grupos del narcotráfico en el territorio, la omisión o incapacidad de las autoridades estatales y federales para cuidar a la población de las agresiones de estos grupos, la falta de organización comunitaria que permita aumentar la seguridad en la región y la pérdida de asombro ante las situaciones de violencia que permiten su repetición e impunidad. También se consideran otros factores como las prácticas culturales que afectan particularmente a las mujeres de estos municipios, la desintegración familiar, la pobreza y la falta de oportunidades

que lleva a los jóvenes a pertenecer a grupos delictivos. Estos factores permiten entender las crecientes cifras de asesinatos de jóvenes en municipios de Michoacán en los últimos tres años, y resaltar que la resolución de la problemática no pasa por estrategias simplistas sino por respuestas multifactoriales que permitan disminuir sus efectos estatales y nacionales.

En tanto, para hacer frente a esta realidad de la región, los pobladores de Cherán han implementado una serie de estrategias para alcanzar mayor certeza en su tránsito, estancia y retorno de otros municipios. Para evitar riesgos que vulneren su seguridad, los pobladores refirieron que, entre los miembros de la familia, se monitorean constantemente y se alertan sobre los lugares en los cuales ha crecido la inseguridad. Además, los padres realizan recomendaciones a sus hijos e hijas para que estos se expongan lo menos posible a los riegos del viaje. Estas prevenciones constantes les han ayudado a apartarse de ciertos riegos cuando salen del municipio, aunque también han generado pensamientos y sensaciones de miedo en ellos que, en algunos casos, los llevan a encerrarse en el interior de la localidad.

> Tenemos un negocio y tenemos que salir fuera todos los días y mi papá sale a otros lugares, pero siempre nos decimos: «cuidado porque andan asaltando por acá o por allá». Y así nos advertimos de los nuevos peligros que puedan presentarse. Esto ayuda a cuidarnos, pero como que luego pues te transmiten su miedo y también tú andas así con miedo todo el tiempo, al grado de que unos prefieren ya no salir (mujer joven 4, conversatorio sobre violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

Las prácticas de cuidado referidas han sido resultado de las experiencias de violencia que han vivido los pobladores con los grupos criminales de la región. Las secuelas de estos hechos han impactado fuertemente a algunos adultos que, en muchos casos, buscan poner a sus familias y a sí mismos a salvo ante cualquier signo que les recuerde aquella situación de inseguridad. Los efectos del trauma colectivo que experimentaron las personas de la localidad, entre 2008 y 2012, aún no han sido superados y son actualizados constantemente.

> A mi papá le tocó ver cuando aquí hubo muchos enfrentamientos y nos decía: «métanse a donde sea». Él sale, pero sale con mucho miedo; a veces escucha un ruido, un cohete, y salta del miedo. Lo superó, aunque no del todo, pero dice que la vida sigue. Ni modo que se quede encerrado (mujer joven 3, taller Historia de las violencias, Cherán, 2018).

Otro ejemplo de ello es el de una investigadora comunitaria que describe cómo su madre reacciona con miedo ante situaciones de potencial peligro:

> Yo lo veo con mi mamá, no es como una sensación. Hay miedo en lo profundo, pero se queda con la sensación de estar volteando y ver a un tipo, o ese carro ya lleva mucho tiempo allí. Está en un estado de alerta permanente que es desgastante, no solo por ella misma, sino por mi hermana y mi hermano, quiere cuidarnos y saber que estamos bien, pero también sabe que no depende de ella. A mí me da tristeza, porque mi mamá dice «me siento como vacía del estómago». Y yo aquí salgo a las diez de la noche (mujer 2, taller Historia de las violencias, Cherán, 2018).

Como hemos visto, la seguridad fuera de los límites territoriales de Cherán es compleja debido a diversos factores. Para los pobladores, salir de la localidad es necesario, pero deben tomar todas las precauciones, personales y familiares, para regresar sin incidentes a sus hogares. En este sentido, las alianzas con otros municipios organizados es una posibilidad para ampliar sus márgenes de seguridad y defensa ante los grupos del crimen organizado. Para lograr esta meta, algunos de los pobladores consideran que hacen falta habilidades y disposición para el diálogo entre sus gobernantes y los de otros municipios, que permitan llegar a acuerdos sobre la seguridad de la región.

> Es muy difícil comunicarnos entre pueblos y vecinos, de ahí surgen mucho los malentendidos. Entre los dos nos conviene que haya seguridad, nos conviene trabajar juntos; pero nos cuesta tanto comunicarnos, es más fácil es pelearnos. Somos muy complicados. Si es difícil entenderse a veces entre dos, cuando son entre muchos, es más complicado (mujer 2, taller mapeo de las violencias, Cherán, 2018).

Un dato muy importante que surgió durante estas reflexiones fue que, para las personas de Cherán, la violencia en México se ha convertido en un modo de hacer que las cosas sucedan para el beneficio de algunos y, además, ha permeado en la vida cotidiana de los hogares, las escuelas, los centros de trabajo e incluso las iglesias. El asesinato de Guadalupe Campanur, mujer joven y activista que dedicaba su tiempo al cuidado de los bosques de Cherán, sucedido a las afueras de la localidad, volvió a poner en cuestión la forma en la que establecen estos acuerdos de seguridad en la región. Además, reactivó la conversación en el interior de la comunidad sobre las causas de las violencias dentro de su territorio.

La seguridad en el interior de la comunidad

El sistema de autogobierno y autogestión que se estableció en Cherán desde el año 2012, ha permitido conformar una Ronda Comunitaria[4] autónoma que responde al Consejo de Honor y Justicia.[5] Con el reconocimiento e instalación de este grupo de

4 Cuerpo policial de Cherán, para el cuidado comunitario y la atención de las conductas anticomunales.

5 Es uno de los doce consejos en los que se divide la estructura de gobierno de Cherán.

seguridad, autoridades y ciudadanos del municipio han establecido una serie de mecanismos que han garantizado hasta la fecha la seguridad de sus fronteras.

Todos los actores que participaron en los talleres sobre violencia y espacios seguros coincidieron en que dentro de la localidad se sienten a salvo de la violencia ejercida por los grupos de crimen organizado; aunque reconocen que existen otros aspectos que vulneran la seguridad en la comunidad, tales como el exceso en el consumo de alcohol, la venta y consumo de drogas, las peleas entre pobladores, el deterioro de los espacios públicos y los accidentes automovilísticos.

Cuadro 7.4
Violencias por barrios de Cherán

Barrio 1	Barrio 2
• Consumo de marihuana • Alcoholismo • Mucha basura	• Calles y barrancas sucias • Venta y consumo de drogas a menores de edad en varios puntos específicos • Mucha basura tirada en la carretera • Robos en tiendas • Competencia en abrir tiendas, maquinitas • Accidentes y mucha basura
Barrio 3	**Barrio 4**
• Venta de alcohol • Basura en barrancas • Tiran basura en crecientes de agua	• Venta de alcohol, vinaterías • Violencia física, venta y consumo de alcohol y marihuana

Fuente: elaboración propia con datos del conversatorio: «La asamblea como espacio de construcción de paz y deliberación democrática en el horizonte de una educación para el buen convivir».

Para atender algunas de estas situaciones, en los dos últimos planes de desarrollo, el Gobierno Comunal de Cherán se planteó estrategias que permitieran reducir el consumo de drogas en los jóvenes, hacer la recolección de basura con un sistema eficiente de reciclaje y la regulación de la venta de alcohol en tiendas, entre otras estrategias para reintegrar a la dinámica comunitaria a las personas que tienen conductas «anticomunales».

El resultado de dichas estrategias ha sido variado dependiendo de la problemática atendida. En el caso de la recolección de basura y limpieza de los espacios públicos,

en un corto tiempo, Cherán ha logrado transformar prácticas comunitarias arraigadas que deterioraban su entorno, y cuentan con un sistema eficiente de reciclaje que abona al mejor cuidado de la madre Tierra.[6] En relación con la regulación de la venta de alcohol, se han implementado diversas campañas de concientización sobre las consecuencias de su abuso, pero aún no se ha logrado un apoyo general de los dueños de las tiendas que siguen vendiendo a jóvenes menores de edad.

Con respecto al campo del consumo de drogas han establecido una estrategia para la rehabilitación de las personas que sean detenidas en posesión de bajos gramajes de marihuana o bajo los efectos de sustancias adictivas. Sin embargo, según el segundo informe de gobierno de Cherán 2015-2018, sigue siendo alto el número de detenciones que se registraron durante esos años. De igual forma, en el Consejo de Honor y Justicia se ha establecido un reglamento de conductas anticomunales con sanciones de trabajo comunitario o procedimientos de justicia restaurativa, debido a algunos casos de arbitrariedades por parte de los miembros de la Ronda Comunitaria y la falta de una norma que permita establecer sanciones. Esta medida busca generar una verdadera reintegración, de las personas que han cometido un delito, a la localidad y tener un marco de trabajo para la Ronda Comunitaria. Dicho reglamento se ha empezado a implementar en el año 2019.

Las estrategias establecidas por la estructura de gobierno y la Asamblea Comunitaria han rendido sus frutos en su localidad. Además, han sido fortalecidas e implementadas con ayuda de la Ronda Comunitaria. Los habitantes de Cherán consideran como una ventaja, que este cuerpo de seguridad esté conformado por personas cuyas familias están dentro de Cherán, ya que esto disminuye la probabilidad de que se corrompan o cometan arbitrariedades. Además, suponen que los miembros de la Ronda Comunitaria son conscientes de las normas implícitas de la localidad sobre el respeto y la honestidad; y del castigo comunitario que supone hacer un «mal ejercicio de su función».

El resultado de las estrategias mencionadas y del fortalecimiento de la Ronda Comunitaria se evidencia en las cifras oficiales acerca de eventos violentos de alto impacto dentro de la localidad: prácticamente nulos desde 2013 hasta la fecha (Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, 2018). Esto es un gran logro debido al contexto de violencia del estado de Michoacán que, para el año 2012, se ubicaba arriba de la media nacional en delitos de alto impacto (INEGI, 2012). Aun con estos resultados hay varias situaciones por atender en torno a la profesionalización de este grupo municipal de seguridad y a los protocolos que deben seguir para atender alguna situación de violencia.

6 Nombre que dan a la tierra, sus recursos naturales y su entorno.

La ilusión de la comunidad ideal y la violencia hacia las mujeres

La certeza de los límites territoriales de Cherán ha sido resultado de su organización comunitaria y de la apropiación de la seguridad de sus habitantes. Sin embargo, en su comunidad no todos los actores se sienten seguros. Tal es el caso de las mujeres de la localidad que identificaron otro tipo de violencias y agresiones que afectan a todos los actores, pero, sobre todo, a ellas. Los espacios en los cuales se identificaron las violencias que más dañaban a las mujeres fueron tres: las que existen dentro de los organismos de toma de decisiones de la comunidad; las que acontecen en los espacios familiares; y las que viven en las calles y los espacios públicos de Cherán. Dichas violencias no han sido abordadas aún por los órganos de gobierno comunitario y se ejemplifican en el cuadro 7.5.

Cuadro 7.5
Tipos de violencias hacia las mujeres

Tipo de violencia	Descripción de este tipo de violencia	Acciones que se realizan
Verbal	Acoso verbal y visual hacia la mujer, comentarios y acciones sexuales de los hombres alusivos a su persona en espacios públicos	Los hombres dicen «cumplidos» o usan expresiones sexuales implícitas o explícitas, la mayoría de las veces con frases con doble sentido, es decir con insinuaciones sexuales
Económica--laboral	Se privilegia al hombre sobre la mujer respecto a las condiciones laborales	Se dan puestos de menor rango Disminución del poder en la esfera laboral. Menor retribución económica
Control sobre su persona	Se controla el ser, de diferentes formas. La función del hombre: Hacer-tener La función de la mujer: Tener (aspecto físico)-ser	Se cosifica a la mujer, su valor como persona se pone por debajo del valor del hombre No tiene libertad de hacer actividades libremente porque siempre está siendo agredida por comentarios de la familia y la misma sociedad La mujer está vigilada socialmente y se hace sentir dicha vigilancia, que guía sus actos Las mujeres vigilan a las mujeres, incluso de forma más agresiva Competencia por ser vista. Sentido de inferioridad. Se fomenta en los roles familiares

Fuente: elaboración propia.

Lo primero que resulta interesante es que las mujeres consideran que ahora es posible prestar atención a estas violencias debido a que los ataques de los grupos del crimen organizado han casi desaparecido de su territorio y eso permite mirar otras problemáticas en su comunidad. También es llamativo que, después de los momentos álgidos de violencia dentro de su localidad, los procesos reflexivos han sido propicios para identificar las problemáticas que deben atenderse en el contexto actual de su comunidad. Y consideran que, aun cuando sus autoridades locales y las personas que participan de las asambleas comunitarias tienen claro que se necesita revalorar el papel de la mujer y el modo de relacionarse con ellas, todavía se dan varias prácticas que las violentan o disminuyen su seguridad. Trataremos de describir la dinámica de las violencias señaladas en los siguientes apartados.

La desvalorización de la participación de la mujer en las decisiones comunitarias

En el municipio de Cherán existen dos instituciones que permiten el autogobierno. Por una parte, está la estructura de gobierno representada por doce consejos operativos y, por la otra, la Asamblea Comunitaria que aglutina a los cuatro barrios de la localidad mediante representantes de las fogatas.[7] El diálogo entre estas dos entidades es el que permite la vida organizativa, participativa y de toma de decisiones de la comunidad. Este modelo de autogobierno en Cherán ha sido ejemplo para otros municipios de la región y del resto del país que buscan su propia autogestión mediante el restablecimiento de sus usos y costumbres.

Ahora bien, el autogobierno del pueblo de Cherán ha llegado en la actualidad hasta los umbrales de su tercera administración municipal. Sin embargo, para las mujeres dentro de la estructura de gobierno sigue siendo un lugar en el cual son violentadas cuando deciden participar o son elegidas para algún cargo comunitario. En estos espacios pueden ser cuestionadas y agredidas, sobre todo, cuando ocupan un cargo dentro de la estructura de gobierno.

> Yo a veces tengo una sensación, como cuando nos ponen en cargos públicos, nos violentan en las Asambleas, y a las que estamos dentro nos ponen muy vulnerables. Nos sentimos muy aparte, sientes que tienes las miradas sobre ti, y se te exige no de manera pacífica, sino agresiva; te contratacan, es uno o es otro (mujer joven 3, taller mapa de violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

7 Las fogatas son la forma de organización comunitaria por calles y barrios de Cherán. Durante el levantamiento de 2011, las personas sacaban a la calle altares y prendían fogatas para cuidar que no regresaran los talamontes a la comunidad. Esto permitió que los vecinos retomaran confianza entre ellos y, todas las noches, comentaran temas de relevancia para la comunidad. Aun después de finalizado el tiempo de emergencias, las fogatas se mantuvieron como representación de la organización.

La violencia ejercida hacia las mujeres se manifiesta también a la hora de tomar decisiones en el interior de la estructura de gobierno. Para Alicia, en los órganos de participación y administración municipal, los hombres son los que deciden, siendo minimizada la opinión de las mujeres aun cuando el tema discutido les ataña. Esta práctica repetitiva mina el ánimo de ellas de participar en la organización comunitaria y, en algunos casos, las lleva a desvalorizarse a sí mismas.

> Parece que en la asamblea solo deciden los hombres, pero las decisiones también afectan a las mujeres. Muchas mujeres que no participan no van porque se creyeron lo que dicen los hombres de que no sirven para nada y no toman en cuenta su opinión (mujer joven 2, taller mapa de violencias y espacios seguros).

Por otro lado, Lila considera que la repetición de los discursos que las minimizan no vienen solamente de los varones; también vienen de otras mujeres, lo que las lleva a autocensurarse en los espacios públicos y a preferir que sus compañeros varones expresen sus opiniones o presenten sus propuestas. Evidenciar esta realidad llevó a que el grupo de mujeres que participó en los talleres señalara que hay una introyección profunda de una cultura que demerita a las mujeres y que es tan fuerte que ha permeado en ellas mismas.

> En el gobierno, a veces no nos hacemos escuchar. Como venimos arrastrando todo esto, toda la cultura, no nos hacemos escuchar. Trabajamos mucho, aportamos ideas y organizamos mucho. Pero en las asambleas, a la hora de dar discursos, no nos damos a notar, dejamos que nuestro trabajo se lo queden otros. También [sucede esto] en el gobierno, entre mujeres. Nos cuesta mucho hacer un equipo de mujeres, porque nos ponemos el pie, nos estorbamos. La violencia en grupos de mujeres es muy fuerte, en lo que se dice. Es más fácil en grupos mixtos. (mujer joven 1, taller mapa de violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

Uno de los factores más importantes que sostienen estas descalificaciones y agresiones en las reuniones de gobierno son las prácticas pasadas de su sistema de usos y costumbres que dañan tanto a las mujeres como a los jóvenes. Los participantes de los talleres señalan que dentro de la localidad hay una búsqueda errónea de algunas autoridades de restituir prácticas violentas que no favorecen la integración de todos y todas en las decisiones comunitarias.

> Los [miembros] de Honor y Justicia decían que había pros y contras del sistema de usos y costumbres, porque en la comunidad se justifican muchas cosas, con la creencia de que el pasado era bueno y el presente es malo. En esta lucha, este sistema ha ayudado en muchas cosas, pero también [está] volviendo a prácticas muy feas del pasado contra las mujeres y los jóvenes. Creo que se tendría que cuestionar… hay que construir de nuevo en forma conjunta y cuestionando. Las mujeres ya no se van a

callar y los jóvenes tampoco; pero no se quieren hacer cargo o afrontar los desafíos de ahora (mujer joven 1, Conversatorio sobre violencia y espacios seguros, Cherán, 2018).

Para superar este trance en la localidad, las investigadoras comunitarias propusieron, ante todo, que las prácticas de su sistema de usos y costumbres sean cuestionadas por todas las personas de la comunidad y, a partir de esta reflexión crítica, se construya un modelo que considere verdaderamente tanto a los hombres como a las mujeres de todas las edades. Para ellas, la construcción de un gobierno comunitario con mayor integración y dignificación de las mujeres permitirá que los espacios de la estructura de gobierno también sean espacios seguros desde los cuales todos y todas puedan construir el Cherán que anhelan.

Este modo de actuar en las estructuras de gobierno y organización tiene raíces más profundas que se conectan con la cultura de la comunidad y con las prácticas familiares, como se verá en el siguiente apartado.

La imagen familiar y la invisibilización de sus violencias

Quienes participaron en esta investigación reconocieron la importancia del caso de la comunidad de Cherán, ya que ha logrado su autonomía y la consolidación de su seguridad ante los grupos del crimen organizado. Sin embargo, es importante señalar que dentro de la misma localidad se han gestado, durante un largo tiempo, otro tipo de amenazas a la seguridad de las mujeres.

Si cualquier persona busca en la Internet la palabra 'Cherán' inmediatamente aparece una serie de artículos que resaltan la gesta heroica de sus habitantes para librarse del crimen organizado. En la mayoría de estos artículos se menciona el papel de las mujeres para iniciar y mantener «vivo el movimiento» en contra de los talamontes. Lo que no es invisible es la violencia por la que pasan las mujeres del municipio. Es un «secreto a voces» que pocas veces es aludido en aras de «cuidar la imagen de Cherán», lo que lleva a que estas situaciones sigan reproduciéndose y justificándose en los modos de proceder comunitarios. La primera de estas violencias es la que viven debido al control económico que ejercen sus esposos sobre sus ingresos; la segunda es la violencia que viven sobre sus cuerpos; y, la última, es la violencia que viven las nueras en la casa de los padres de sus esposos.

El control económico sobre las mujeres de Cherán

Para las mujeres que participaron en los grupos de discusión, uno de los casos más puntuales de violencia hacia ellas es la obligada administración de los varones sobre los recursos que ellas generan. Las investigadoras complementaron esta información al comentar que las mujeres de Cherán han realizado varios esfuerzos a lo largo de

los últimos treinta años para ser independientes, como contar con una educación superior; sin embargo, estos avances cualitativos en su desarrollo profesional no suponen en todos los casos mayor equidad en sus hogares. Ellas señalan que, en muchos casos, los padres o esposos deciden sin objeción la forma en la cual se gastará el capital generado por su trabajo.

Una de las mujeres resaltó que, aun cuando ellas sean las que aportan mayor cantidad de capital, ellos administran los recursos. Desde su visión, esto llega a ser aceptado tanto por hombres como por mujeres debido a las prácticas culturales dentro del sistema familiar que privilegia a los varones y minimiza a las mujeres.

> Les imponen, aunque sean profesionistas, en qué se va a usar su dinero. A [los hombres] se les enseña a ser líderes, a tener más derechos; hay un sobrerreconocimiento hacia el hombre, aunque hagamos lo mismo y hacemos más y más cosas (mujer joven 3, conversatorio sobre violencia y espacios seguros, Cherán, 2018).

Una de las consecuencias de este control del capital familiar por parte de los varones es que las mujeres no se sienten lo suficientemente independientes para salir de relaciones de pareja violentas, incluso muchas de ellas se resigan a quedarse dentro de los hogares por miedo a no tener la capacidad para generar los recursos suficientes para sobrevivir solas con sus hijos e hijas.

A pesar de lo extendidas que son estas prácticas de control sobre los recursos económicos de las mujeres, en algunas familias se establecen nuevas formas de relación en las cuales ambos sujetos participan de las decisiones sobre este asunto.

En términos educativos, las mujeres dentro del municipio han establecido relaciones más equitativas, sin embargo, queda mucho por hacer en cuanto a la toma de decisiones en los entornos familiares.

El control del tiempo, el espacio y el cuerpo de las mujeres

Para comprender la forma en que se controla el tiempo, el espacio y el cuerpo de las mujeres en Cherán precisamos describir cómo los matrimonios se llevan a cabo dentro de la localidad. Cuando una mujer se casa, existe una norma implícita que señala que ella pasa a formar parte de la familia de su esposo. Esto implica que la responsabilidad sobre su cuidado y sostenimiento, que hasta ese momento era de sus padres, pasa ahora a los padres del varón.

Antes de que la mujer se case y se vaya a vivir a casa de sus suegros, sus padres le hacen diversas «advertencias» recordándole que su decisión la separa del hogar familiar sin posibilidad de regresar y asumiendo soportar la «vida que le tocó vivir» con su nueva familia. Del mismo modo, los padres del varón le sugieren a este que

evalúe las características de la mujer con la cual se casará ya que deberá participar de su vida familiar y no podrá separarse de ella. En caso de que luego sus hijos quieran separarse, en dichas recomendaciones se basan padres y suegros para justificar las acciones para procurar que no se separen. Para los pobladores de Cherán tiene una connotación negativa que las dos personas que conforman un matrimonio decidan divorciarse, ya que implica afectar la «imagen familiar», que es muy preciada para sus miembros. «Te dicen, es lo que te tocó, si te sales con él es para siempre. Si es borracho, golpeador, pues es lo que te tocó y te aguantas» (mujer joven 3, conversatorio sobre violencia y espacios seguros, Cherán, 2018).

Desde muy pequeñas se forma a las mujeres para pedirles permiso a sus padres, como una forma en la que los adultos cuidan de su seguridad. Sin embargo, el «pedir permiso» es una práctica que no termina cuando ellas ya son adultas, al contrario, continúa incluso cuando ya son profesionistas, y se transfiere a sus esposos cuando se casan, manteniendo una relación jerárquica entre ellos,

> El amor se confunde con el control. Se hace visible que las mujeres somos propiedad de las parejas, y nada más él la puede tener. A las mujeres nos han reducido a alguien pasivo, no alguien que puede decidir. Va reduciendo su papel de la vida en la sociedad (mujer joven 3, taller mapeo de las violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

La forma en la que se ejerce el control sobre las mujeres puede ir más allá del tiempo y de las actividades que realizan, e incluso afectar directamente su integridad física. Una de las investigadoras comunitarias identificó que en el pueblo han aumentado las denuncias de las mujeres por abusos sexuales de sus parejas ante el Consejo de Honor y Justicia. Reconoce que dentro de los matrimonios se tenía la costumbre de que las mujeres aceptaran tener relaciones sexuales con sus esposos, aun en contra de su propia voluntad; pero que la formación que han recibido en espacios de diálogo promovidos por el Consejo de la Mujer y por el Proyecto de Reconstrucción de Tejido Social, entre otros, han servido para que la situación se deje de normalizar y sea denunciada.

> En estos años se ha hecho visibles las violencias de la comunidad; ahora las mujeres denuncian la violencia sexual que viven con sus parejas; pero lo importante es crear conciencia y cortar esos patrones de violencia. A veces se les revictimiza; a veces es ignorancia porque no se reconocen las violencias. En el Consejo de Honor y Justicia veo cómo ha aumentado la denuncia por violación y abuso sexual. Y, a partir de la historia que me cuentan en algunos talleres, es que apenas lo están hablando, las mujeres no podían decirles a los hombres, sus esposos, que no querían tener relaciones sexuales, y ahora eso es violación (mujer joven 4, conversatorio sobre violencia y espacios seguros, Cherán, 2018).

La violencia psicológica y física que llegan a padecer las mujeres que se integran a la familia de algunos varones, tiene efectos en ellas como la pérdida de confianza, la autocensura, el autorreproche, problemas para dormir, pérdida de la esperanza y resignación ante las situaciones que viven. Esta situación se agrava cuando el control de su vida pasa a manos de sus suegros. Es importante señalar estos relatos y reconocer que entre los informes del Concejo Comunal no se han desglosado y evidenciado las cifras sobre violaciones dentro de la familia, que también son consideradas como parte de los llamados delitos de «alto impacto».

La vida en la familia y la sucesión de la violencia

Las situaciones mencionadas no son sostenidas solamente por los varones, debido a que en varias ocasiones también las suegras y cuñadas participan de la reproducción de la violencia en los hogares. En los primeros dos planes de gobierno de Cherán se mencionaba que, dentro de las familias, había casos de violencia que era necesario atender y para ello se propusieron talleres de sensibilización que, como hemos mencionado, han llevado a que las violaciones por parte de los esposos sean denunciadas ante el Consejo de Honor y Justicia.

Sin embargo, la violencia por la que pasan las nueras en el hogar de sus suegros aún no ha sido visibilizada y ha costado mucho trabajo atenderla, primero, porque es un tema interno que dañaría la imagen de varios grupos familiares y, segundo, debido a las prácticas culturales que no les permiten a las nueras dejar sus matrimonios. Como ejemplo de esta situación, una de las mujeres mencionó que algunas suegras realizan constantes señalamientos negativos en contra de las nueras, cuestionando sus capacidades para cuidar sus hogares y denigrándolas ante otros familiares, lo que va minando poco a poco su confianza.

> La suegra o la cuñada se sienten con ese poder, las tienen asustadas. Les dicen que son inútiles. En muchas familias, cuando se van a Estados Unidos [los hombres], te dicen «el que ha trabajado es mi hijo, el que tiene es él, no tú», aunque también la mujer haya aportado o administrado. Muchas mujeres soportan eso porque se les van los años, o regresan todos enfermos, o no tienen nada. Es como todo contra ellas (mujer joven 1, taller mapeo de violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

La desvalorización que viven las nueras las lleva a considerar que no tienen posibilidades de sobrevivir fuera de la familia de su esposo, recordando que, la norma es que no pueden separarse y regresar con su familia. Esto las lleva a soportar ambientes tóxicos durante muchos años e incluso reproducir la misma violencia con las futuras esposas de sus hijos. Estos casos son cada vez más nombrados entre las

personas de Cherán, sin embargo, aún no existe un espacio en el que puedan darse discusiones acerca de la situación en el cual participe tanto la comunidad como los concejos de gobierno.

> A qué grado nos manipulan en una violencia psicológica, y llegas a decirte «soy inútil, ya lo sé, no tengo nada, no tengo adónde ir». Y te la crees y cuesta mucho trabajo salir. Como que cuando te casas vas con toda la ilusión de voy a florecer, pero no, te apagas. En una comunidad como está no es tan sencillo florecer (mujer joven 3, taller mapeo de violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

Por otro lado, es de resaltar la forma en que los problemas familiares se trasladan al ambiente comunitario, en donde las mujeres también son juzgadas si comenten alguna «falta» a las normas. En este sentido, la comunidad se convierte para ellas en un juez implacable que reafirma el maltrato que ellas mismas reciben en sus hogares.

> Como mujer, el rol que te ha puesto la comunidad es ser servidora de un hombre, te guste o no te guste. También que la comunidad se siente el juez, especialmente los hombres, si las mujeres se equivocan te juzgan. Si un hombre se equivoca, no pasa nada, pero si una mujer se equivoca te destruyen. Como en las infidelidades, o cuando hay madres solteras, que se dicen que «se echan a perder», como si fueran manzanas. Y así somos jueces, decimos que los otros se merecen el sufrimiento porque hizo cosas. Toda la comunidad es juez, y pesa mucho, especialmente a las mujeres (mujer joven 5, taller mapeo de violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

Así, la comunidad de Cherán, que personifica los valores de unión y esperanza que los llevaron a liberarse de los grupos del crimen organizado, también personifica una figura siempre vigilante de las conductas de todas las personas, sobre todo de las mujeres. Este señalamiento hace que quienes han sido agredidas piensen dos veces en salir de la casa de sus suegros, aunque vivan en condiciones indignas. Para las investigadoras comunitarias, estos juicios comunitarios implícitos en Cherán son justificados por los pobladores en su sistema de usos y costumbres, por lo que insisten en que se cuestionen dichas normas y se integre un mejor sistema de reglas en el cual se salvaguarde la dignidad de todos y todas.

Las raíces culturales de esta problemática han superado, hasta el día de hoy, el enfoque de derechos humanos que intenta promover la estructura de gobierno de Cherán desde el año 2015. El tema sigue de cierto modo velado y las agresiones son soportadas por el miedo a la pérdida del prestigio familiar. En los relatos de las mujeres que participaron de la investigación apreciamos el miedo que existe frente a dejar el hogar y el peso que tienen las críticas de la propia familia en caso de hacerlo. El

discurso común, bajo el cual se justifica esta práctica, señala que las nueras son las únicas responsables de su situación, por lo cual, a saber de sus vecinos y familiares, deben cargar con las consecuencias, dejándolas en el desamparo y el aislamiento.

Muchas jóvenes sugieren que el camino para mejorar las relaciones en las familias pasa por visibilizar y atender las prácticas violentas; pero también por un proceso de sanación personal y comunitaria que permita prevenir la reproducción de los círculos de violencia entre mujeres.

> Las suegras también continúan siendo violentadas por sus parejas y por eso también violentan a sus nueras, que son «más débiles»; y les dicen «da gracias que mi hijo se fijó en ti». Pero esto no va a parar si no pasamos por procesos de reflexión personal y de trabajo personal. Las cosas no van a cambiar solamente con discursos o talleres, hay que entrarle a lo personal, aunque creo que para eso nos falta todavía (mujer joven 6, taller mapeo de violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

No importando las descalificaciones que puedan recaer sobre ellas, algunas de las mujeres que participaron en los talleres, siguen buscando formas de evidenciar la violencia que se vive en el interior de las familias de Cherán, tratando de quitarle peso a la reputación familiar y poniendo por delante la dignidad humana de las mujeres. Esta investigación, en sí misma, la consideran como un punto de partida para que esto sea posible en la localidad.

La transversalidad de las violencias y la construcción de espacios seguros

En este breve recuento sobre las violencias que viven las mujeres de Cherán, hemos intentado hacer una distinción entre sus tipos y los diferentes espacios en los cuales ocurren. Sin embargo, en los grupos de mujeres se señaló que estas violencias están interconectadas, son transversales a la vida de la comunidad y se fortalecen unas a otras. El carácter histórico de estas formas culturales que transgreden su dignidad, es un factor que debe analizarse y discutirse dentro de la localidad. Para las mujeres que participaron en este espacio de coproducción de conocimiento, no puede haber una solución sin primero hacer un recuento histórico de lo que hasta ahora ha sucedido.

> Las violencias son parejas, en lo estructural, la comunitaria y la interpersonal; son interdependientes. Las violencias vienen desde siempre; no surgen de apenas. Las violencias las hemos recibido y las damos como herencia; son naturalizadas y por ello no han cambiado (mujer joven 8, taller mapeo de violencias y espacios seguros, Cherán, 2018).

Recapitulando, la violencia hacia las mujeres dentro del municipio de Cherán no es un fenómeno reciente, ni se terminó con la instalación de su gobierno por usos y costumbres. Es una práctica heredada que se reproduce de generación en generación, pero que se ha ido transformando gracias a factores contextuales y a la lucha de las propias mujeres en la comunidad. Los elementos que permiten entender la nueva conciencia que existe frente a la violencia hacia las mujeres son resumidos por una de las investigadoras comunitarias de la siguiente manera:

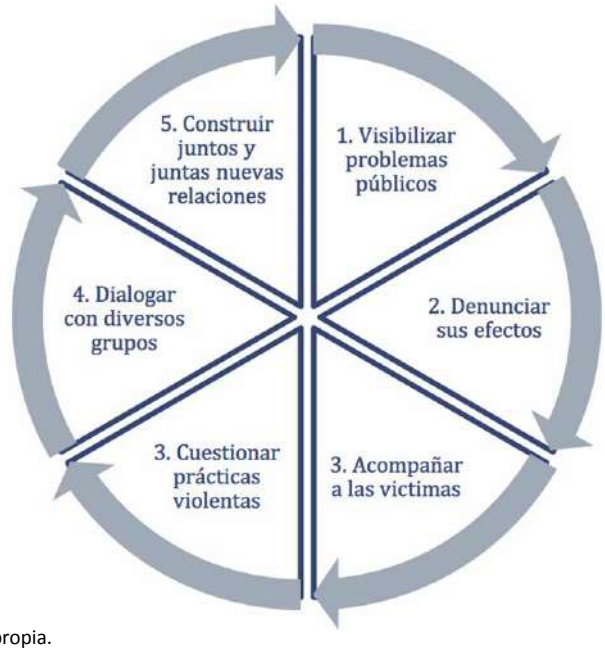
> Desde el momento que se le dio la oportunidad a la mujer para ir a la escuela, desde allí se aportaba esa diferenciación. Yo creo que la necesidad de la mujer de querer superarse o algo así [la llevó a tener que], enfrentarse a esta situación de «rebelarse». El salir a otro lugar permite que se expanda el pensamiento y se vio que eso no era lo que se debía de ser. Estaban en una ignorancia donde no conocían sus derechos... Tuvo que ver también la migración, donde se vivieron nuevas ideas de otras culturas. La apertura de la carretera hizo que las mujeres empezaran a sacar negocios y eso permitió nuevos ingresos en las casas; esto fue entre los setenta u ochenta y a partir de eso vieron nuevas formas de ver la vida. Eso lo han relacionado con que la vida en el campo no alcanzaba y lo que los esposos llevaban no es suficiente para sobrevivir y garantizarles la vida a los hijos (mujer joven 3, conversatorio sobre violencias, Cherán, 2018).

Esta descripción permite hacer un resumen de algunas condiciones que han permitido el cuestionamiento progresivo de las prácticas culturales que subyugan a las mujeres del municipio. Entre dichas condiciones están la ampliación de sus oportunidades para estudiar, la generación de capital debido a sus negocios surgidos de la ampliación de las vías de comunicación terrestre, el reconocimiento de sus derechos y la integración de nuevas ideas a su cultura por la migración. A estos elementos se suma la reciente formación en perspectiva de género que han tenido las mujeres dentro de la comunidad por iniciativa del gobierno comunal o por la participación de asociaciones civiles que han brindado talleres sobre este tema.

Para estas mujeres con una nueva conciencia y herramientas para transformar su realidad, avanzar en la construcción de nuevas relaciones entre hombres y mujeres requiere la integración de lo mejor del pasado y lo mejor del presente, para vislumbrar muchos futuros posibles en donde no sea sacrificada la dignidad de nadie.

Finalmente, presentamos un esquema de las etapas que las mujeres de la localidad identifican como necesarias para la construcción de espacios seguros. Esta ruta nos puede dar una idea de lo que ellas sugieren para elevar el nivel de seguridad en la localidad, sobre todo, para las mujeres y otras poblaciones vulnerables.

Gráfico 7.2
Ciclo para la atención de violencias hacia las mujeres



Fuente: elaboración propia.

Las etapas que plantean no ocurren en realidad una tras otra, a veces se cruzan entre ellas o incluso puede que no se pase por alguna cuando se intenta responder a situaciones de manera emergente.

Lo que en general se plantea es que la construcción de seguridad pasa por la identificación de los problemas públicos de violencia que es necesario atender; emitir denuncias que evidencien los efectos de la problemática; acompañar a quienes han sido violentados para atenderles en sus necesidades y evitar la reproducción de los círculos de violencia. También es importante cuestionar dichas prácticas que afectan a los pobladores haciendo un análisis de sus raíces sociales, y dialogar alrededor de los resultados de este análisis con diversos actores que quieran sumarse a su atención. Esto permitirá construir en conjunto nuevas formas de relacionarse soportadas por acuerdos públicos integrales e incluyentes. Este ciclo de construcción de seguridad no debe paralizarse, sino que debe seguir de manera cíclica de tal forma que al atenderse una de las causas de las violencias, se siga con la atención de otras.

Desde la perspectiva sobre la atención de la violencia y la construcción de espacios seguros, los elementos evaluativos que brindan tanto los conceptos de seguridad humana y la perspectiva del tejido social son importantes ya que permiten diagnosticar y presentar resultados como insumo para la construcción de problemas públicos, el cuestionamiento de las prácticas violentas, el análisis de sus causas y vislumbrar posibilidades para su atención.

Conclusiones. El tercer gobierno comunal y los desafíos en la atención de la violencia hacia las mujeres

Los hallazgos de esta investigación son importantes debido a que muchos de los esfuerzos de los gobiernos, tanto de Michoacán como del Estado mexicano, se han centrado en la defensa de los territorios ante los grupos del narcotráfico y han dejado en segundo plano, o ignorado, los procesos de fortalecimiento en las localidades entre vecinos, familias, trabajadores e instituciones para promover el cuidado de la vida. Entre los esfuerzos del Estado mexicano puede nombrarse la actual estrategia de seguridad y constitución de la Guardia Nacional.[8] Esto implicará un despliegue militar en varias regiones del país, que aún no cuenta con el respaldo de una política pública que reconstruya los lazos de cuidado y confianza entre las personas, así como con sus instituciones.

Esta historia muestra que resguardar las fronteras de las comunidades no asegura el fin de las violencias, sino que hay que iniciar procesos de reflexión comunitarias en los cuales participen la mayor cantidad de actores posibles. La violencia en nuestro país tiene una raíz cultural e histórica que se ve expresada de diversas maneras, una de las más visibles es la relacionada al narcotráfico, pero también son importantes otras que no han sido vistas o son ignoradas. Estas últimas, tal vez, porque implican procesos de transformación personal y social profundos para los cuales hacen falta recursos que permitan llevarlos a cabo. Y en otros casos por la falta de voluntad de las personas que la ejercen y de las autoridades que deciden dejarlas de lado.

Consideramos que estos resultados darán cuenta de que la solución a la violencia no pasa solamente por el uso de estrategias que contengan a los grupos delictivos, sino que es necesario identificar qué pasa en los territorios en los cuales los limites comunitarios están asegurados, cómo repercuten los hechos violentos vividos en las poblaciones liberadas, qué otras violencias aparecen y cómo deben de atenderse,

8 Órgano con funciones policiales compuesto por militares con un mando civil.

y cómo estas otras violencias podrían vulnerar la reproducción de la vida social de todos y todas.

El caso de Cherán muestra que existen factores que contribuyen a que ocurran múltiples violencias en la localidad, tales como una identidad que excluye otras identidades y no permite la construcción de una agenda de seguridad regional con otros municipios; el descuido de las instituciones de gobierno comunal sobre los asuntos relacionados con el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la organización comunitaria y sobre la violencia que viven en los hogares; las prácticas culturales que validan y naturalizan la violencia hacia las mujeres; y las pocas habilidades dentro de las familias para el manejo del conflicto sin violencia.

Se entiende que lugares seguros comunitarios son aquellos en donde las personas se conocen; en donde se reconoce el «valor de la vida» y en donde se transita de manera segura. Por su parte, los espacios seguros interpersonales son aquellos en donde las personas pueden ser ellas mismas, habiendo lazos de confianza entre miembros de la familia y vecinos. Allí, la comunicación es constante y diversa y pueden construirse estrategias de cuidado común.

En 2018, el Gobierno Comunal de Cherán inició una nueva administración local que evalúa aquellas problemáticas emergentes que son necesarias atender en el municipio. En este contexto, se gesta la oportunidad de poner sobre la mesa las prácticas culturales que no permiten a todas las personas de la comunidad vivir con dignidad; sobre todo aquellas que ponen en entredicho la vida y el bienestar de las mujeres. Está investigación tiene un valor invaluable por lo que supuso el trabajo en equipo entre investigadores comunitarios y académicos, que ayudó a generar una mejor comprensión del problema público planteado. Los aportes de esta investigación a la construcción de espacios seguros y para la comprensión de la violencia quedan para la posteridad, pero la responsabilidad de construir un futuro integrador en Cherán queda entre sus habitantes. Los resultados presentados a la localidad ayudarán en ese proceso largo y continuo que nos recuerda una de las investigadoras:

> Caben muchas cosas, pero se necesitan respuestas enormes y esfuerzos, pero necesitas de constancia, porque en un proceso tan amplio me parece absurdo que de hoy a mañana vamos a estar seguros. Saber que lo que hagas hoy te va a dar resultados en 10 años. Me gustaría que dejáramos de castigarnos, que las mujeres no fuéramos violentadas porque somos mujeres y que solo nos respetáramos por lo que somos y no somos (mujer joven 5, taller historia de las violencias, Cherán, 2018).

Referencias

Archivo General del CIAS por la Paz A. C. (2017). Reunión alrededor de la fogata. Foto. Cherán, México.

CONAFOR -Comisión Nacional Forestal-. 2016. «Primavera Purepecha. Caso de restauración de suelo en la comunidad indígena de Cherán». En: <https://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/?p=2172>.

Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán K´eri. 2012. *Estructura de gobierno comunal.* En: < https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9tdGu88flAhWKq1kKHT6AA4MQMwhAKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.concejomayor.gob.mx%2Fgobierno.html&psig=AOvVaw1jHoKlJpIaN_2jLbF3eJ1x&ust=1572659514155297&ictx=3&uact=3>.

Della, Ricardo. 2018. «Un feminicidio abre viejas heridas en Cherán, icono de autogobierno en México» en *El País* (España). En: <https://elpais.com/internacional/2018/01/19/america/1516332208_984179.html>.

Enlace Zapatista. 2011. «Alto al exterminio de nuestra madre tierra». En: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2011/09/20/la-otra-en-michoacan-convoca-a-la-campana-alto-al-exterminio-de-la-madre-tierra-en-apoyo-a-ostula-y-cheran/>.

Gasparello, Giovanna. 2018. «Análisis del conflicto y de la violencia en Cherán, Michoacán». En: <http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v39i155.289>.

Gobierno Comunal de Cherán. 2015. *Plan de desarrollo de la comunidad de Cherán 2015-2018.* Michoacán: Gobierno Comunal de Cherán.

Gobierno Comunal de Cherán. 2017. *Segundo informe de gobierno comunal 2015-2018. Trabajando en comunidad.* Michoacán: Gobierno Comunal de Cherán.

González, Jorge y Mendoza, Gabriel. 2016. *Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz*. Ciudad de México: Buena Prensa.

González, Jorge y Torres, Daniel. 2019. *Un Camino para la Paz: Experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social.* Ciudad de México: Buena Prensa.

González, Jorge. 2014. «Estrategias de políticas públicas de seguridad: un análisis desde el enfoque comunitario», tesis de maestría. Chile: Universidad Alberto Hurtado.

INEGI- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 2017. «Características de las víctimas del delito, los delitos y los daños. Base de datos". En: <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/>.

INEGI -Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 2012. *Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes.* Información acerca del número de eventos individuales de victimización delictiva reportados. En: <https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/>

Márquez, Carolina. 2016. «Revaloración de la vida: la comunidad p'urhépecha de Cherán Michoacán ante la violencia, 2008-2016», tesis de maestría. Chihuahua: Colegio de la Frontera Norte.

Martínez, Ernesto. 2008. «Hallan el cuerpo del ex edil [sic] michoacano secuestrado la mañana del jueves». *La Jornada* (México). En: <https://www.jornada.com.mx/2008/05/10/index.php?section=estados&article=026n1est>.

México Evalúa. 2019. "Michoacán, deja vú [sic] de la violencia" en: <https://www.mexicoevalua.org/2019/07/09/michoacan-deja-vu-la-violencia/>.

OSHM -Observatorio de Seguridad Humana de Medellín-. 2014. *Nuestras voces sobre seguridad humana en Medellín. Diálogos sobre seguridad.* Medellín: Universidad de Antioquia.

Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. 2018. *Reporte sobre delitos de alto impacto*, México: Observatorio Nacional Ciudadano se Seguridad, Justicia y Legalidad.

Purepecha. 2011. «El presidente de Cherán, Michoacán: Roberto Bautista Chapina, ha sido despedido por la población indígena». En: <http://www.purepecha.mx/threads/4445-El-Presidente-municipal-de-Cher%C3%A1n-Michoac%C3%A1n-Roberto-Bautista-Chapina-ha-sido-despedido-por-la-poblaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena>.

Ruiz, Héctor. 2015. «Cherán K'éri: La defensa del territorio y el gobierno comunitario en tiempos del estado cooptado», tesis de maestría. Oaxaca: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

SEDESOL -Secretaria de Desarrollo Social. 2017. «Michoacán, Cherán», en *Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 201*7. En: <diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Michoacan_024.pdf>.

TEPJF -Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2012. «Confirma la Sala Superior del TEPJF validez de la elección en Cherán». En: <http://www.trife.gob.mx/en/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/18/2012>.

CCBC

8

El sentido del cuidado en la seguridad comunitaria del municipio de Tancítaro, Michoacán, México

Pedro Olivera Gutiérrez,[1] Rosalinda Piedra Ledezma,[2] Paulina Reyes Sánchez,[3] Blanca Cristal Torres Espinoza[4] y Gilberto Lenin Torres Lázaro[5]

Introducción

Tancítaro es uno de los tres municipios en el estado de Michoacán que, junto con Cherán y Morelia, se negaron a firmar el Mando Único Policial[6] propuesto por el gobierno federal en el período del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) como esquema para la coordinación de los tres niveles de gobierno. El municipio ha mantenido una estrategia de seguridad distinta a la estrategia federal desde el año 2013. En esta se coordinan 82 elementos de la policía de elite del Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro (CUSEPT), 34 elementos de la policía michoacana y varios cientos de ciudadanos que cuidan las entradas y salidas de las localidades. En estas comunidades se encuentran las casetas de vigilancia que se construyeron para mejorar las condiciones de las primeras *barricadas*[7] instaladas después de la entrada de los grupos de autodefensas[8] al municipio en el año 2013.

---

1 Investigador comunitario e integrante del equipo de Educación del Buen Convivir del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social (PRTS) en Tancítaro.

2 Investigadora comunitaria e integrante del equipo de Gobierno Comunitario del PRTS en Tancítaro.

3 Investigadora comunitaria e integrante del equipo de Educación del Buen Convivir del PRTS en Tancítaro.

4 Investigadora comunitaria e integrante del equipo de Reconciliación Familiar del PRTS en Tancítaro.

5 Investigador académico y colaborador del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz A. C.

6 Sistema Policial Centralizado que pretende garantizar la unidad del mando. Se presenta por primera vez durante la administración encabezada por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

7 Puestos de vigilancia improvisados con sacos de arena, troncos, piedras que sirven para protegerse e impedir el paso al territorio del municipio.

8 En México, las autodefensas surgen de la alianza entre campesinos, productores, comerciantes, funcionarios y otros actores que con el uso de armamento se oponen a la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país. En muchos casos las autodefensas cuentan con la simpatía y apoyo de la

Durante la década anterior, el municipio de Tancítaro, así como el estado de Michoacán, sufrieron una ola de violencia derivada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control del territorio. Las estrategias de seguridad implementadas por el Estado no atendieron las causas profundas de las violencias, en lugar de ello promovieron acciones de persecución y confrontación contra los grupos del narcotráfico cuya reacción dejó claro que su gran poder económico, político y armamentista estaba por encima de las diversas instituciones de seguridad federales, estatales y municipales.

La violencia en México alcanzó niveles sin precedentes en su historia. Durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en el año 2011 se registró el mayor número de homicidios dolosos: 27 199 (Pérez, 2017).[9] La violencia se triplicó en menos de cuatro años. En este escenario se conformaron los grupos de autodefensas que se han declarado públicamente como un movimiento en contra de los grupos del crimen organizado. Su intervención incrementó la complejidad de la conflictividad social en el estado de Michoacán.

En la actualidad, la mayoría de los grupos de autodefensa se han desintegrado y el crimen organizado ha ido recuperando territorio michoacano sin encontrarse con la oposición del Estado. En el caso de Tancítaro, este movimiento se conformó principalmente con gente del propio municipio, lo que generó un clima de confianza y participación que más tarde derivó en la conformación de la iniciativa comunitaria del Grupo por la Paz y la Unidad de Tancítaro, conformado por tres integrantes de cada uno de los principales partidos políticos (Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática), un integrante del Partido del Trabajo, tres miembros del consejo de vigilancia, comités de autodefensa de las comunidades, el párroco y un grupo de seis ciudadanos. Su objetivo principal fue configurar un proyecto de seguridad y desarrollo para el municipio que permitiera mantener la unidad y fomentara la organización entre los distintos actores de la comunidad. Los espacios de diálogo que se animaron entre la ciudadanía permitieron identificar otras necesidades y problemáticas en torno a la seguridad de la población que no se habían tomado en cuenta o que sistemáticamente se habían invisibilizado.

Sobre esto último, este capítulo presenta los resultados del proceso de investigación desarrollado por el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz A. C.,

---

ciudadanía, el reconocimiento de algunos sectores de la izquierda y en algunos casos se han legalizado para el desarrollo de labores de seguridad pública. A diferencia de Colombia, en México no se han relacionado a las autodefensas con grupos paramilitares. Existen experiencias muy diversas entre las que encontramos a las policías comunitarios que son la institución de seguridad de algunas comunidades indígenas basadas en los usos y costumbres.

9 Aunque 2011 había sido el año más violento en la historia de México, los índices de 2017 y 2018 lo superaron con 29.168 y 33.341 homicidios dolosos, respectivamente (Gutiérrez, 2018).

a través de su Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social[10] en Tancítaro como parte del proyecto internacional «Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios seguros en América Latina y el Caribe». Este esfuerzo está centrado en el desarrollo de metodologías de investigación-acción participativa para la coproducción de conocimientos que permitan explicar la realidad de violencia que persiste en el municipio, así como las condiciones y factores que permiten la construcción de espacios más seguros en la comunidad, especialmente para los jóvenes y las mujeres como poblaciones vulnerables.

El texto está organizado en cuatro bloques. Inicialmente se hace un breve recuento de las condiciones geográficas, sociales y económicas que convierten al municipio de Tancítaro en un territorio estratégico que se disputan los grupos del crimen organizado. Más adelante, se realiza una caracterización general de la situación que viven las mujeres y los jóvenes como poblaciones objetivo de esta investigación. Para continuar, se presentan los hallazgos sobre violencia y seguridad que se generaron durante el proceso de investigación en los espacios de reflexión colectiva. Finalmente, se exponen las acciones que se realizan desde el Estado en materia de seguridad, se exploran las dimensiones y los configuradores de la seguridad que se construye desde las propias personas y se esbozan algunas conclusiones a partir de los principales hallazgos de la investigación.

El escenario de la investigación

El municipio de Tancítaro está localizado al occidente de Michoacán en una de las zonas más elevadas del Estado. Limita al norte con Uruapan, al este con Nuevo Parangaricutiro, al sureste con Parácuaro, al sur con Apatzingán, al oeste con Buenavista y al noreste con el municipio de Peribán. En su territorio se ubica el Pico de Tancítaro, el volcán de mayor elevación del Estado de Michoacán y uno de los más altos de México. Aunque fue declarado como Parque Nacional en 1940 y como Área de Protección de Flora y Fauna en 2009 (CONANP, 2018), en la actualidad los bosques presentan alto grado de deforestación debido a la sobreexplotación en la siembra de árboles de aguacate.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2017), en 1991 la superficie plantada de aguacate era de 7 394 hectáreas, solo por debajo de Uruapan que tenía 9 019 hectáreas. Para el año 2015, Tancítaro pasó a tener la mayor superficie de aguacate en el país,

10 Este Proyecto consiste en desarrollar diferentes metodologías para mejorar la convivencia mediante el fortalecimiento de una identidad vinculante, que lleve a renovar los vínculos de confianza y a la construcción de acuerdos incluyentes en la familia, el barrio, la escuela, el trabajo, el gobierno y la iglesia.

con casi 23 000 hectáreas certificadas. Con estas 146 000 toneladas de producción, el municipio aporta más del 21 % de la exportación nacional, producto que llega principalmente a Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea. Si bien para el momento de la investigación no se encontró una cifra oficial, la mayoría de las referencias periodísticas consultadas refieren que el sector aguacatero trae una derrama económica de más de mil cien millones de dólares al año para México.

No obstante, estas cantidades no representan un desarrollo equilibrado para la población en Tancítaro. Los testimonios de habitantes refieren que el crecimiento fue desigual:

> […] la zona sur del municipio, donde no se da el aguacate, quedó rezagada, y la zona norte, donde sí se produce el aguacate, tuvo mucha oportunidad de dinero. Esta desigualdad llevó a que las familias de la zona sur optaran por el cultivo de la mariguana, pretendiendo estar en condiciones de «igualdad» con los habitantes del norte del municipio (Suárez-González y Hernández-Baqueiro, 2015).

Los recursos económicos obtenidos de la producción del aguacate son un importante objeto de interés del crimen organizado. Para el año 2008, las instituciones en Tancítaro habían sido rebasadas (Contralínea, 2011), y los secuestros y asesinatos aumentaron de manera preocupante dejando como víctimas a personas de la comunidad, policías y funcionarios públicos (Suárez-González y Hernández-Baqueiro, 2015).

De igual modo, Michoacán es uno de los estados en México en donde se han registrado mayores índices de violencia asociada al crimen organizado. Distintos grupos armados han intentado controlar el territorio: los Zetas (2001), La Familia Michoacana (2006) y los Caballeros Templarios (2011). En particular, la ubicación de este municipio lo hace un territorio estratégico para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que realizan carteles como Los Viagras y el Cartel de Jalisco Nueva Generación que, desde hace cinco años, se disputan el control de las *plazas* que se encuentran en las entidades con las que colinda el municipio.

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa anunció el inicio de lo que se llamó *Operación Conjunta Michoacán,* la primera etapa de lo que más adelante denominó *Guerra contra el narcotráfico.* Las operaciones emprendidas por los distintos niveles, más que atender las causas profundas de la violencia y garantizar la gobernabilidad del país, se dirigieron a la aprehensión de los dirigentes, lo que intensificó la violencia en las distintas entidades y trajo consigo una serie de violaciones a los derechos humanos en Michoacán y en todo el país. Más tarde, en el año 2010, promovió una de las iniciativas más difundidas por el gobierno federal en materia de seguridad: el *Modelo Policial de Mando Único,* que proponía unificar las distintas fuerzas policiales y estatales para garantizar la unidad del mando, profesionalizar la labor policial y fortalecer la coordinación y estrategia.

Posteriormente, el primero de diciembre de 2017, Enrique Peña Nieto retomó la iniciativa y volvió a proponerla al Senado de la República. La iniciativa fue rechazada de nuevo y, en su lugar, la Cámara Alta elaboró un dictamen en el cual se mantenían en funcionamiento las policías municipales en el país y cuyo mando sería intervenido, únicamente, en caso de situaciones graves y a solicitud del propio presidente municipal. Finalmente, propuso una nueva Ley de Seguridad Pública Interior en la cual se limitan los criterios y condiciones en los que se coordinan los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal.

En Tancítaro, ninguna de estas estrategias dio resultados positivos pues «la delincuencia seguía igual; ellos [las fuerzas de seguridad] sólo hacían presencia y decían que no tenían orden de actuar, de fondo los criminales andaban libremente porque estaban *arreglados,* al grado que los representantes del ayuntamiento estaban involucrados» (entrevista individual, hombre adulto, líder comunitario, agosto de 2018). Los hechos anteriores han generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía sobre la inoperancia e incapacidad de las instituciones de seguridad en Michoacán.

Hasta el año 2015, las instancias que cuentan con mayor grado de confianza por parte de la población de la entidad son la Marina, con el 90,6 %; el Ejército, con 86,3 %, y la Policía Federal, con 59,6 % que, durante el último año, tuvo un ligero incremento (INEGI, 2015). Por el contrario, las instituciones que cuentan con menor grado de confianza son la Policía de Tránsito, con el 40,2%; la Policía Ministerial o Judicial, con el 47,4 %; la Policía Estatal, que mantiene el 48,1 %, y la Policía Preventiva Municipal, que supera la media de la desconfianza con el 50,1 % (INEGI, 2015).

La actuación de las fuerzas armadas y los agentes del Estado ha sido cuestionada constantemente. Existen decenas de miles de casos documentados por las organizaciones de la sociedad civil en los que se involucran a estas fuerzas con prácticas de desaparición forzada. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Michoacán ocupa el lugar número once en todo el país, con 1106 casos de personas que se han extraviado o desaparecido y que permanecen sin localizar el período comprendido entre enero de 2014 y septiembre de 2017. De estos, 1 059 se relacionan con el fuero común (entidades locales) y 47 con el fuero federal (territorio nacional).

En medio de un ambiente de demanda de resultados y exigencia ciudadana al gobierno federal, durante el año 2013 surgen los llamados Grupos de Autodefensa, que tuvieron especial relevancia en Michoacán. Este movimiento generó gran polémica por su inclinación por la vía armada y la movilización de distintos sectores civiles y comunitarios para enfrentar a los grupos delictivos. Las dudas que existieron sobre el origen y el financiamiento de estos grupos polarizaron a la opinión pública.

Hubo quienes las consideraron legítimas por su origen comunitario y quienes sospecharon que atrás de las autodefensas existía un financiamiento de particulares con intereses económicos en la región. También se hablaba de los nexos que estos grupos pudieran tener con el crimen organizado.

El 16 de noviembre de 2013, el grupo de autodefensas liderado por el médico Juan Manuel Mireles, proveniente de Buenavista y Tepalcatepec, incursionaron en la comunidad de Pareo del municipio de Tancítaro para extender el movimiento. En la actualidad, aún continúan las barricadas que se instauraron al paso de las autodefensas en las entradas y salidas de cada una de las comunidades del municipio, y son resguardadas por personas de la misma comunidad mediante turnos que ellos mismos programan.

Aunque en Tancítaro la entrada de las autodefensas motivó un clima de simpatía y apoyo entre su población, existieron otros casos en los que las actuaciones de estos grupos complejizaron las dinámicas de violencia que se vivían en el territorio. De acuerdo con el *Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto,* elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2016), tan solo durante el año 2015 se documentó el caso de 483 personas desplazadas a causa de la violencia propiciada por los enfrentamientos entre autodefensas y los grupos de la delincuencia organizada en el estado de Michoacán.

Mujeres y jóvenes en el contexto de violencia

La realidad de violencia que viven las mujeres en México es preocupante. La revista *Forbes* publicó en 2013 un artículo titulado «Mujeres, las más vulnerables ante el narcotráfico en México» en donde se describe la relación que existe entre la presencia de grupos asociados al narcotráfico y el aumento de la violencia feminicida. Según esta publicación "los crímenes de mujeres en México se dispararon un 155 % entre 2007 y 2012 cuando, según el Instituto Nacional de Estadísticas, fueron registradas 2.764 muertes" (*Forbes,* 2013, párr. 12).

La comparación de distintas fuentes estadísticas sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios dejan en evidencia la falta de rigor en los registros. Mientras que la ONU Mujeres documentó 12 801 casos de muertes violentas, el Censo Nacional de Procuración de Justicia registró para el mismo año tan solo 7648 mujeres víctimas de homicidio y de feminicidio (ONU Mujeres, 2016).

En ese mismo sentido, hasta hace once años el país no contaba con un marco normativo específico (CONAVIM, 2017). Sin embargo, a partir de la denuncia pública nacional sobre los feminicidios en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, la

sociedad civil comenzó a observar y a documentar tales casos (*Proceso,* 2007). En respuesta a la exigencia nacional e internacional, en el año 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (CONAVIM, 2017).

El 30 de abril de 2012, el poder legislativo aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reformó el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en donde se tipifica el delito de feminicidio (*Diario Oficial de la Nación*, 14 de junio de 2012). En el estado de Michoacán, el 21 de enero de 2014 se tipificó en el Código Penal como feminicidio «el homicidio doloso de una mujer» (Congreso de Michoacán de Ocampo, 2014). La «Alerta de género» es uno de los mecanismos de protección instaurados en dicha ley.[11] El 27 de junio del año 2016, Michoacán se convirtió en la tercera entidad que se declaró en alerta para 14 municipios de sus 113 municipios, tres de los cuales colindan con Tancítaro: Uruapan, Apatzingán y Los Reyes (INM, 2017).

Aunque se cuenta con un banco estatal de datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres del gobierno de Michoacán, la información documentada en este sistema solo permite realizar una descripción superficial de la situación e imposibilita conocer el carácter específico de la violencia a la que se enfrentan las mujeres en la entidad. El Plan de Desarrollo Municipal de Tancítaro —PLADEMUN— (ATM, 2015) da cuenta de algunas de las problemáticas que viven las mujeres. Respecto a ellas, el ayuntamiento propone algunas actividades y programas:

- La atención en salud de las mujeres, a través de la cual se pretende reducir la incidencia de cáncer de mama y cervicouterino, mediante una unidad móvil para la realización de mastografías y pruebas del *papanicolau,* y un programa de pláticas, conferencias e información en torno al tema.
- La mejora de la calidad de vida a partir de la atención de la pobreza alimentaria y la distribución de recursos a las mujeres madres de familia en situación de pobreza y la entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas entre los 6 y 23 meses, y con desnutrición entre los 2 y 5 años, y a mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- La mejora de la calidad de vida a partir de la atención a los hogares que no tienen los servicios básicos de alimentación, seguridad social, vivienda y que padecen de rezago educativo para subsanar la pobreza de servicios.

11 Según el artículo 22, de la *Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,* la Alerta de violencia de género es: "el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad" (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2007).

- El desarrollo de un programa para sensibilizar a la población tancitarence sobre la importancia de la equidad de género y junto con ello la creación de una nueva cultura de relación en la que se comience a erradicar la violencia hacia la mujer y la violencia intrafamiliar.

Por su parte, la realidad que viven los jóvenes los pone como uno de los grupos más vulnerables frente al crimen organizado en México, ya sea por su reclutamiento forzado o voluntario (Cauce Ciudadano, 2015), o por ser una de las poblaciones con mayores índices de consumo de drogas (CONACYT, 2015).

El diagnóstico incluido en el PLADEMUN 2015-2018 de Tancítaro da cuenta de algunas de las grandes problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes del municipio en la actualidad, como la exclusión, el crecimiento del consumo de drogas y las dinámicas familiares que llevan a los jóvenes y adultos a unirse al crimen organizado.

En primer lugar, se manifiesta la exclusión hacia los jóvenes derivada de las dinámicas de violencia generadas por los grupos del narcotráfico durante su presencia. Al respecto se pretende

> […] brindar atención a todos, en especial a los grupos vulnerables, hemos de coordinar los esfuerzos para que a través actividades culturales, deportivas y de recreación practiquemos la prevención de conductas destructivas y delictivas entre los niños y jóvenes, sin descuidar la atención de aquellos que ya presentan alguna alteración en su conducta. Esto lo haremos buscando atender la raíz de su problema, que facilite su reincorporación a la comunidad en lugar de su alejamiento de ella (ATM, 2015).

En cuanto al crecimiento del consumo de drogas,

> […] se recogieron muchas problemáticas y necesidades de los ciudadanos durante los diagnósticos comunitarios, zonales y locales; se plantea, por ejemplo, que en muchas comunidades hay problemas relacionados con las adicciones, es decir, problemas de alcoholismo y drogadicción, en su mayoría de consumidores jóvenes y, la venta, en el caso del alcohol, se realiza sin cumplir las regulaciones aplicables y en el caso de las drogas, de forma ilegal» (ATM, 2015).

Se han observado también las dinámicas familiares que generaron condiciones para el ingreso de jóvenes y adultos al crimen organizado.

> El crecimiento económico que tuvieron los campesinos de Tancítaro llevó a que los hijos crecieran con una idea de libertad relacionada con el acceso a las cosas, libertad para consumir y divertirse, y esto llevó a que los padres perdieran autoridad para la formación de los hijos y con ello el involucramiento de adultos y jóvenes en los grupos delictivos (ATM, 2015).

El proyecto de Gobierno de Unidad y la nueva administración

Después del período de violencia que se vivió en el municipio y con la entrada de los grupos de autodefensas, un grupo de habitantes y miembros de los tres principales partidos de la comunidad (Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional) decidieron conformar un proyecto de Gobierno por la Unidad y la Seguridad en Tancítaro. Su objetivo fue mantener las condiciones de *paz* que se habían generado en el municipio sin que la preferencia por algún partido político los desvinculara. A la par se conformó el Consejo Ciudadano del Buen Convivir (CCBC) para encargarse de tres particulares: desarrollo, transparencia y paz. Este consejo estuvo integrado por ciudadanos seleccionados en sus propias comunidades (ATM, 2015) para

> […] promover y organizar la participación ciudadana en las localidades y zonas del municipio, para trabajar por la reconstrucción del tejido social, vinculado a las familias, barrios, instituciones, escuelas y demás sujetos que integran la comunidad, y atender las necesidades de infraestructura que favorezcan este proceso de mejoramiento de la convivencia familiar y comunitaria, en coordinación con el ayuntamiento (ATM, 2015).

En las elecciones del año 2018, no logró consolidarse un movimiento ciudadano similar al del año 2015 que permitiera dar continuidad al proyecto del Gobierno de Unidad. El proceso electoral se desarrolló mediante la contienda entre los partidos políticos locales, en el cual quedó electa Araceli Solórzano Solórzano como presidenta municipal del Partido de Acción Nacional (PAN) para el período 2018-2021.[12] Esto cambió la relación de la ciudadanía con el ayuntamiento y generó un distanciamiento de ambas partes, por ejemplo respecto a la instalación del Consejo de Seguridad Municipal en el que distintos actores y representantes de la ciudadanía acordaban estrategias para mantener la seguridad en el municipio o del Consejo Ciudadano del Buen Convivir, y que permitía un ejercicio de presupuesto participativo y una evaluación del desempeño del ayuntamiento en los temas de desarrollo, paz y transparencia.

Hallazgos de la investigación

La mayoría de los trabajos de investigación asociados al tema de seguridad se centran en explicar las causas de la violencia y sus expresiones públicas, especialmente en macrocontextos que cuentan con grandes índices de criminalidad y violencia letal. Una de las limitantes de esta visión es que deja de lado aquellas prácticas de violencia

12 La presente investigación se desarrolló durante el último año y medio de la gestión en el ayuntamiento, de Arturo Olivera Gutiérrez, por lo que muchas de las referencias a las instituciones que realizaremos en este capítulo tienen como marco la administración 2015-2018.

y de seguridad que emergen en los microcontextos y que cobran forma en la vida cotidiana de las personas.

De tal forma, para conocer de cerca la realidad de violencia que se vive en Tancítaro, se conformó un equipo de investigadoras comunitarias y académicas que implementaron un aparato metodológico de investigación-acción para el reconocimiento de las prácticas cotidianas que nos permitieran progresar hacia una coproducción de conocimientos sobre la violencia y la seguridad en Tancítaro y Cherán.

La investigación incluyó una serie de conversatorios, talleres y entrevistas grupales e individuales con agentes clave que participan en procesos de reconstrucción del tejido social y que representan a instituciones locales como la Comunidad Terapéutica 16 de Noviembre, la Escuela Secundaria Técnica N.° 41, las Comunidades del Buen Convivir, el Consejo Ciudadano del Buen Convivir, el Consejo Municipal de Seguridad, la Pastoral Social de la Parroquia de Tancítaro y algunos otros ciudadanos que colaboran en el Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social (Cuadro 8.1).

Cuadro 8.1
Formulación y desarrollo metodológico

Población municipio Tancítaro	
Formulación metodológica	**Desarrollo metodológico**
Comunidad Terapéutica «16 de Noviembre», Escuela Secundaria Técnica N.° 41, colaboradores locales del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social, Comunidades del Buen Convivir, y Agentes de pastoral (18 personas: 5 hombres jóvenes, 3 hombres adultos, 3 mujeres jóvenes y 7 mujeres adultas).	Asistencia promedio: 13 personas (77 %)
El proyecto integra a hombres y mujeres, adultos y jóvenes con 4 grupos de: mujeres jóvenes (6-10), mujeres adultas (6-10), hombres jóvenes (6-10) y hombres adultos (6-10).	De las 13 personas con quienes se ha trabajado: 3 son mujeres jóvenes (23 %), 4 mujeres adultas (31 %), 2 hombres adultos (15 %) y 4 hombres jóvenes (31 %)
El núcleo base (equipo de IC) estará integrado por dos mujeres jóvenes y dos hombres jóvenes de la comunidad	El equipo de IC se conformó por 2 mujeres jóvenes, 2 mujeres adultas, 2 hombres jóvenes y 1 hombre adulto
El proyecto propone la implementación de conversatorios (1), talleres de formación (3), talleres de análisis de la información (1), entrevistas grupales (4) y entrevistas individuales (4)	El proyecto contempló la implementación de conversatorios sobre la violencia (2); talleres de formación (3) sobre la Historia de la violencia, mapeo de violencias y técnicas de facilitación; un taller de análisis de la información (1); entrevistas grupales (3) y entrevistas individuales (4)

Fuente: elaboración propia.

El proceso de investigación tuvo tres fases de análisis: 1) descripción y comprensión de las violencias en el municipio, 2) reflexión crítica sobre la seguridad en el municipio y 3) identificación de los configuradores de los espacios seguros.

La configuración de violencia

Expresiones de la violencia

De acuerdo con las participantes en el proceso de investigación (investigadoras y personas de la comunidad asistentes a las actividades), la violencia es cualquier acción u omisión humana individual o grupal que limite, restrinja e imposibilite la existencia o desarrollo de cualquier otro ser vivo. En el caso de las personas, atenta contra su dignidad al impedir o tratar de restringir su libertad de *ser;* es decir, interfiere en las condiciones de su integridad y plenitud humana. Podemos categorizar en tres grupos las expresiones de violencia de las que emerge esta definición: violencia por trato diferenciado injusto, descarga o contención por violencia y omisión de la violencia.

Para comenzar, la violencia por trato diferenciado es identificada en acciones que son consideradas injustas, es decir, cuando una persona o grupo discrimina, excluye o rechaza por diferencias sociales, económicas o culturales a otra persona o grupo. En Tancítaro se identifica un trato diferenciado injusto, por ejemplo, hacia las madres solteras o hacia quienes tienen recursos materiales o económicos limitados. La economía del aguacate ha profundizado la brecha económica en el municipio y con ello las prácticas de discriminación económica.

En el entorno familiar, los entrevistados refirieron que este tipo de diferenciación es vivido desde muy temprana edad, ya que los padres «califican, etiquetan o rechazan» a sus hijos. Estas acciones se replican en la escuela y traen como resultado que los afectados busquen espacios de reconocimiento, aceptación y pertenencia fuera de su grupo familiar y escolar e incurran en espacios o situaciones que muchas veces ponen en riesgo su propia integridad.

> Lo que pasa es que se aprovechan de las personas, por ejemplo, si llegamos ella y yo a la escuela [señala a la participante de un lado], pero yo soy más pobrecita [se señala a sí misma], ella [quien en su ejemplo aparenta tener mejores condiciones económicas] puede ingresar completamente y nadie va a decir que la golpeen u otra cosa. Entonces ella es aceptada en automático y como que se ha dado que lo niños de dinero son los populares y son los que incitan más a los otros. Y los pobrecitos tienen que pelear

para ser aceptados (mujer adulta, funcionaria pública, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

Otra expresión es la práctica de descarga o contención por violencia, que introduce el carácter cíclico de la violencia. En las entrevistas realizadas se concluyó que las personas o grupos que actúan con violencia, en algún momento fueron víctimas. Por tanto, aquel que es violentado (carga) recurre al uso de la violencia en su relación con otros (descarga). La experiencia de la violencia genera sentimientos de «frustración, impotencia o enojo», pues la situación no coincide con lo que esperaba, no se resolvió de acuerdo con sus expectativas o los medios utilizados para resolver o controlar la situación no han sido suficientes.

> Yo siento que es lo mismo, por ejemplo, si se fija hay mucho dolor y frustración de la gente, problemas que inconscientemente arrastras. Yo veía que muchos de los que en algunas asambleas están enojados, son muchas personas que perdieron un familiar y que de alguna forma ven al gobierno con los delincuentes y para ellos, dicen que todos son iguales y que todos los gobernantes son bandidos (mujer adulta, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

Existe otra práctica en la que la violencia no se ejerce sobre otras personas, sino contra sí misma (contención). Esto pasa, por ejemplo, al «dejar de ser ellas mismas» debido al miedo que les causa la restricción de oportunidades o el rechazo de otra persona o grupo, es decir, por miedo a la violencia por trato diferenciado injusto. Los grupos entrevistados refirieron que esta violencia por contención lleva a las personas afectadas a agredirse física y emocionalmente y, en algunos casos, a segregarse de los grupos con los que regularmente interactúan y a buscar otros con los que logre identificarse.

> La violencia, puede pasar que se ejerce contra otros, pero si no es atendida también se puede ejercer contra uno mismo y, si no se comenta con alguien, incluso puede llegar al suicidio […] En estos días ha habido también varios suicidios, te refleja que los muchachos están siendo violentados en las escuelas. Jóvenes de 17 a 18 años. En casa no se tiene la atención para los chicos y eso también hace que busquen esa atención en otros lugares. O los están violentando en casa y a lo mejor puede ser un tío o el papá (mujer joven, equipo del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social, primer conversatorio, 9 de abril de 2018).

De acuerdo con las personas entrevistadas, la contención o segregación tiene consecuencias que ponen en riesgo la integridad de quienes la ejercen.

> Vemos que tenemos una paz aparente debido a que los jóvenes están consumiendo drogas y alcohol y las armas, es un polvorín[13] y una amenaza para todos […] Las personas que tienen dinero del aguacate dan a sus hijos su terreno, su carro del año, un dinero, y con eso le quitamos la ilusión al muchacho de hacer algo o de esforzarse y se va a las drogas y al alcohol (hombre joven, Comunidad Terapéutica, segundo conversatorio, 9 de abril de 2018).

En cuanto a la violencia por omisión, hemos visto que existen violencias que aun cuando no se ejercen sobre un tercero, son identificadas como tales por los daños que causan. En ese mismo sentido, la negligencia, la desatención, la apatía o la indolencia son calificadas como violentas cuando en alguna situación dada *se espera* que un actor intervenga y atienda la violencia que está ejerciendo y este solo «se queda a la expectativa y no hace nada». Simultáneamente, existen prácticas de tolerancia frente a acciones que, aunque consideradas como violentas, son justificadas bajo ciertos principios de *orden* que, además, influyen en la forma en la que se priorizan y evalúan las violencias en la comunidad.

> La sociedad es como un árbol que estuvo muy lleno de vida, pero que lo fueron tirando poco a poco. Se contaminaron las aguas y no le están dejando forma de vida y su tronco está dañado, y se resiste a dar sus retoños porque está queriendo vivir. Pero el ser humano está viendo qué pasa. Veo la violencia como quedarse a la expectativa, solamente señalamos, pero no hacemos nada ni proponemos. Estamos destruyendo miles de formas de vida (mujer adulta, maestra de secundaria y líder comunitaria, primer conversatorio, 9 de abril de 2018).

¿Qué tanto nos pueden afectar? Son violencias que si no me afectan a mí y a mi familia son menores. Y una violencia es más grande cuando más me afecte a mí (mujer joven, equipo local de Educación para el Buen Convivir [EBC] del Programa de Reconstrucción del Tejido Social (PRTS), taller de Historia de las violencias, 26 de agosto de 2018).

Uno de esos principios de *orden* es, por ejemplo, «no meterse en la vida de los demás», ya que «mientras a mí no me pase nada, no hago nada». Esto incorpora la dimensión de lo privado en la mirada de las violencias en el municipio, en donde el ámbito familiar fue uno de los que contó con más referencias. Las participantes consideraron que existen agresiones físicas y verbales que realizan los padres a sus hijos y que son toleradas e incluso promovidas por la propia comunidad, ya que se realizan para «corregir las faltas a las normas y valores que se les han transmitido».

---

13 Palabra usada originalmente para referirse a instalaciones militares que almacenan pólvora o explosivos, el entrevistado se refiere a la gran cantidad de armas que posee la población de Tancítaro.

Estas acciones no solo suceden en el *espacio íntimo,* sino que se mantienen en privado; es decir, las familias procuran mantener estas violencias dentro del hogar y, si se hacen públicamente, los testigos no *deben* intervenir pues no es «su asunto». Aunque estas prácticas son vistas como violentas por omisión, al mismo tiempo salvaguardan «la imagen y el prestigio de la familia».

> Yo creo que está normalizado, por ejemplo, ver que el papá le esté pegando al niño o la mamá le esté gritando; que le pegue a la mamá como que sí hay una cierta alarma, pero se llega a tolerar. Yo he notado que hay muchas familias que aparentan no ejercer violencia, por miedo a la crítica y el «qué dirán», porque quieren ser la familia ejemplar (mujer joven, asistente CCBC, primer conversatorio, 9 de abril de 2018).

Por último, otra característica de esta violencia es el «ver y callar», una práctica que se reafirmó con la presencia de los grupos criminales. Hacer una crítica de forma abierta a las actividades de los grupos del crimen organizado traía consigo el riesgo de ser desaparecido, secuestrado o asesinado. El «ver y callar» puede identificarse en otros ámbitos como el familiar, el laboral o el comunitario en los que existe temor por las represalias que los actores con más poder y que cuentan con mayores recursos económicos, políticos o de armamento puedan realizar a quienes los cuestionen.

Dimensiones de la violencia

Teniendo en cuenta las prácticas descritas anteriormente, hemos podido identificar distintas dimensiones en las que se vive la violencia. En el cuadro 8.2 sintetizamos los conocimientos obtenidos.

Cuadro 8.2
Ámbitos en los que se identifica la violencia

Dimensiones	Expresiones de la violencia	Evidencias (Testimonios)
Personal	Heridas personales y frustración: cuando estas no son atendidas se incrementa la posibilidad de optar por la violencia Falta de habilidades para la regulación personal: asociado a historias de violencia familiar que generan vacíos que buscan ser satisfechos mediante la búsqueda del poder, el placer y el reconocimiento mediante formas violentas	«Tiene que ver con que la violencia psicológica son heridas interiores y las heridas físicas dejan marca, pero sí sanan. Las de dentro no sanan tan fácil y son como cuando una gota está cayendo diariamente ahí y va mermando o lastimando». (hombre joven, Comunidad Terapéutica, taller de Historia de las violencias, 9 de septiembre de 2018)

Cuadro 8.2
(Continuación)

Familiar	Violencia en la familia: las prácticas de diferenciación negativa de los hijos, la falta de escucha/comunicación, el deterioro de la confianza para expresar sentimientos e ideas, la sobreprotección de los padres, generan ciclos de violencia que impactan en los integrantes de la familia y trascienden a ámbitos comunitarios La falta de formación en los límites: la ausencia de corrección, por sobreprotección o descuido de los hijos dentro del entorno familiar, es una condición que posibilita el ejercicio de la violencia por parte de estos niños hacia otros actores. Los investigadores y las investigadoras comunitarias comentan que la corrección es necesaria para convivir, al saber que sus acciones tienen consecuencias	«Hay muchos ámbitos en los que está presente la violencia, los jóvenes no son reconocidos y llegan a otros lugares en los cuales sí lo son y sienten pertenencia. Creo que el origen es en la casa y no sabemos reconocerles lo que hacen en el hogar y lo que son como personas» (hombre adulto, integrante del equipo del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social, taller de Historia de las violencias, 9 de septiembre de 2018) «La raíz de los problemas de los hijos en la familia es la falta de escucha al interior [sic]. Yo creo que mucho se debe a la sobreprotección de los hijos, como que les dan todo. Un padre que dice «Yo le doy todo a mis hijos para que no sufran» es un padre que hace que su hijo no sea tolerante al fracaso puede caer en las drogas» (mujer joven, integrante del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018)
Comunitario	Sucesión generacional de la violencia: las prácticas de la violencia son aprendidas generacionalmente. El uso y permisión de la violencia en el interior de la familia la reproduce y la valida como opción Venta y consumo de drogas y alcohol en la comunidad: están identificados como elementos que deforman la percepción de la realidad de las personas y que influyen en las formas de relacionarse con el resto de la comunidad Acoso en los espacios públicos: esta es una de las violencias que padecen espacialmente las mujeres. Más adelante se abordará con mayor detalle	«Se va pasando por herencia del abuelo al papá, algunas conductas que no son correctas pero que se van pasando. Hay una parte desde atrás que debes de tener claro, si no lo vas a explotar [la violencia] siendo mayordomo, policía, y vas a ejercer las conductas que llevas atrás» (hombre adulto, Ayuntamiento Municipal, primer conversatorio, 3 de junio de 2018) «Vemos que tenemos una paz aparente, debido a que los jóvenes están consumiendo drogas y alcohol y las armas». (hombre adulto, PRTS Participación Comunitaria, primer conversatorio, 3 de junio de 2018)

Fuente: elaboración propia.

El cuadro 8.2 permite ver los ámbitos en los que se identifican expresiones de violencia. Para las y los participantes de esta investigación, la familia tiene gran relevancia para comprender las dinámicas de violencia que existen en la comunidad ya

que es allí en donde las personas obtienen sus primeros referentes y recursos para la sociabilidad. Entre las dimensiones personal, familiar/comunitaria e institucional/estructural existe interacción permanente de influencia mutua en las que se insertan los ciclos de violencia a los que nos hemos referido.

Configurantes de la violencia

La reflexión de las participantes permitió identificar tres narrativas comunitarias que dan sentido positivo al «uso de la violencia»: el valor, la autoridad y la corrección. Estas tres narrativas se relacionan para mantener cierto orden, aquel en el que se considera de manera positiva el uso de la violencia. A continuación, profundizaremos en estas tres narrativas.

Para empezar, nos referimos al sentido de valor. El desarrollo económico exponencial que tuvo el municipio y la región por medio de la producción del aguacate trajo consigo una transformación de los referentes normativos y de valores. El valor de las prácticas de solidaridad comunitaria y buen trato fue sustituido por el dinero como valor de cambio para la adquisición, «vale más quien tiene más». Estas condiciones influyen en la sensación de autonomía, ya que quienes tienen mayores recursos no *dependen* de otros.

> También contribuyó el crecimiento económico, no supimos tenerlo y se nos fue de las manos, nos llevó a que el tener era más importante que el ser. Todo se nos fue en tener cosas, poder comprar 'yo todo'. Darle[s] lo más importante a los que estaban en mi familia era lo importante, no mi tiempo, ni mis consejos (mujer adulta, Pastoral social, primer conversatorio, 9 de abril de 2018).

En cuanto a la autoridad, en las entrevistas se refiere una relación entre la autorización para el ejercicio de la violencia y el poder económico, de armamento o institucional que ostente quien la ejecuta. La ausencia de estos elementos resta poder y deja vulnerables a la violencia a las personas que carezcan de él. El ejercicio de la violencia promueve un orden jerárquico y vertical, y aquellos que ostentan el poder deben mantenerlo. «Yo veía, que antes había otro tipo de policías que nadie les decía nada; sin embargo, ahora sí son muy amables los quieren golpear la misma gente ebria quiere golpearlos, porque traen armas y sienten que pueden» (hombre adulto, Ayuntamiento Municipal, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

Finalmente, se menciona la corrección. De acuerdo con el análisis de los testimonios recuperados, aunque el *orden* es establecido socialmente, quienes tienen más poder y más recursos tienen mayor influencia en la definición de dicho orden, lo que, al mismo tiempo, les autoriza para *castigar* las faltas que se cometan contra las normas, muchas veces haciendo uso de la violencia. Estas violencias son justificadas

por «el bien de la persona», para enseñar a distinguir entre «lo que está bien y lo que no está bien». Al parecer, en Tancítaro mientras más ejemplar sea el castigo, mayor será la afirmación del orden social.

> Veía el día de ayer unas imágenes de unos jóvenes que detuvieron en una barricada por vender droga. Los golpearon y les pusieron un letrero, subieron la foto [a las redes sociales] y eso también es violencia. Decía «esto les va a pasar a los que sigan sin entender por consumir o por vender» (mujer Adulta, Escuela Secundaria, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

Las personas entrevistadas explican que esta relación entre las faltas y el uso de la violencia para su corrección se debe a que la mayoría de las personas buscan soluciones inmediatas a sus problemáticas y sus conflictos, a diferencia del diálogo que es más lento y requiere un proceso de mediación más profundo. Al avanzar en la reflexión, las participantes reconocieron que los resultados del uso de la violencia solo son a corto plazo, pues para mantener el cambio de actitud o la aplicación de la corrección, muchas veces se requiere su uso constante y cada vez de mayor intensidad.

> La otra opción no es tan rápida, esta te duele y te corrige luego-luego, la otra es más de diálogo y de tiempo y de que la gente entienda esa corrección. Pero la más rápida son los tablazos convencen rápido y han funcionado (hombre adulto, Comunidad Terapéutica, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

Las razones de la violencia en Tancítaro

El proceso de análisis y comprensión nos llevó a considerar que el uso de la violencia no es un acto *irracional,* sino que las personas y grupos tienen *razones prácticas* para su uso. Es decir, que las prácticas que son calificadas como violentas muchas veces trascienden el campo de lo moral y posibilitan la identificación de las discontinuidades físicas o comportamentales que las personas emplean para justificar sus acciones. A continuación, exploraremos brevemente algunas de las razones que se identificaron alrededor de la violencia.

En general, hemos visto que la violencia es un *modo* de responder/proceder que las personas hemos aprendido. Es decir que, aunque en muchos casos se considera que la única opción ante alguna necesidad o problemática específica es el uso de la violencia, ahora sabemos que existen opciones distintas a la violencia y que no tienen las consecuencias negativas de esta. «Yo considero que vivimos en una cultura acostumbrada al golpe o al castigo y lo reproducimos de forma colectiva como cultura» (mujer joven, integrante del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social, taller de análisis de la información, 4 de noviembre de 2018).

La idea de inmediatez y efectividad que se le ha atribuido a la violencia, dificulta la búsqueda o construcción de alterativas. La violencia se ha establecido como un modo en el que «las cosas funcionen»; sin embargo, cuando la violencia deja de ejercerse, las cosas dejan de funcionar. Las y los participantes atribuyen lo anterior a que la violencia no permite un proceso de reflexión sobre «cómo funcionan las cosas y por qué deberían funcionar de tal modo»; es decir, que la violencia se basa en imponer un *orden* e impide la promoción de cualquier otro.

> Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que las cosas se solucionen en el momento [...]. Lo mismo pasa cuando se usa la violencia, momentáneamente se puede corregir, pero si las personas no tienen la convicción, al rato vuelven de nuevo a lo mismo. Por eso la mayoría, tal vez, elegimos la opción de «te voy a dar unos trancazos para que entiendas». Porque me da miedo, me voy a portar bien, pero cuando tenga la oportunidad me voy a volver a las andadas, por decirlo así (hombre adulto, Ayuntamiento Municipal, taller de análisis de la información, 4 de noviembre de 2018).

Las y los participantes identificaron que existen, además, unas violencias que son reacciones a otras. En estas prácticas, es posible identificar la cadena de acciones y, por lo tanto, de participación de los actores en la violencia. Esto no significa que la violencia es vista como una situación concreta con un principio y un fin muy definidos, sino que, al rastrear las trayectorias que se cruzan en un hecho violento es posible clarificar las razones de los actores para accionar de un modo. Al final, la violencia es vista más como un ciclo envolvente de trayectorias violentas, lo que en Tancítaro confirma la difundida idea de que «la violencia trae más violencia». «Siento que a raíz que sucedió esto de la violencia en 2013 y después del levantamiento, aprendimos a resolver problemas con más violencia» (mujer adulta, escuela secundaria, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

En Tancítaro, la violencia que se ejerció por parte de las autodefensas a las personas que, se presumía, participaban con los grupos del crimen organizado, no es considerada violencia por todas las personas, sino como un acto de defensa. Así, las violencias cuya finalidad es resolver o parar la tensión que ha mantenido a una persona o comunidad en un estado de alerta constante, de maltrato o de estrés, son vistas como un acto de justicia.

> En la casa había un muchacho que siempre nos pegaba a mi hermano y a mí. Le teníamos miedo y tratábamos de no pasar por su casa. Entonces con mi hermano juntamos dinero para comprar una navaja del 007, porque ya no encontrábamos otra forma y decíamos que lo íbamos a matar [...]. Al final no fue así, pero aprovechamos una ocasión para pegarle entre los dos. A pesar de eso, él siguió golpeando a otros niños, pero con nosotros nunca se volvió a meter (hombre joven, Comunidad Terapéutica, primer conversatorio, 9 de abril de 2018).

El testimonio anterior refleja la forma como los propios ciclos de violencia *obedecen* a ciertos límites que no se *deben* transgredir, de lo contrario se autoriza a otros el uso de la violencia para *defenderse.* Aunque esto genera cambios en las relaciones de poder, no cambia la cultura de la violencia. Un ejemplo de lo anterior son las comunidades en donde «se permitieron las armas, como para cuidarse». Así, los ciclos de la violencia son progresivos y presentan *ajustes* en los que se balancea el poder.

> Yo siento que no en todos los casos la violencia es opcional. Hay casos en los que la violencia genera más violencia. Como cuando los policías me golpearon y quería golpearlos yo de nuevo o matarlos. Pero yo me puse a pensar que iba a tener consecuencias si pasaba eso y que tenía una familia y cosas por las que luchar. Pero hay ocasiones en que otros sí se desquitan (hombre joven, Comunidad Terapéutica, taller de análisis, 4 de noviembre de 2018).

Así, el orden que mantiene el uso de la violencia sin transgredir los límites e, incluso, hacerlos cumplir, ostenta a los actores involucrados como la máxima autoridad a la que se le permite conservar el monopolio sobre el uso de la violencia. Lo mismo pasa con la posesión y comparación de las armas que se poseen y que para muchas personas representa un sinónimo de estatus y poder.

> En la época de la delincuencia, al que trataba mal a su esposa se lo llevaban, era como el rumor, o si eras infiel. Como que daba miedo hacer ese tipo de cosas porque sabías que te iba a pasar algo. Esos malos eran como la autoridad y como que todos andaban agachados y cuidándose (hombre adulto, escuela secundaria, taller de análisis, 4 de noviembre de 2018).

La violencia contra las mujeres

Las mujeres, en especial las jóvenes, son de las más vulnerables ante las expresiones de violencia que hemos referido. A continuación, hacemos una breve síntesis de las violencias que identificaron en los grupos de reflexión de las mujeres.

El acoso sexual en los espacios públicos es la forma en las que los hombres «se ganan el respeto» de otros hombres y son aceptados. «Se dicen *cumplidos,* la mayoría de las veces con frases de doble sentido, con insinuaciones sexuales» (mujer joven, comunidades del Buen Convivir, entrevista grupal a mujeres jóvenes, 15 de octubre de 2018). Estas acciones impactan el desarrollo de la vida cotidiana de las mujeres ya que consideran un riesgo salir solas por el miedo a ser agredidas.

La discriminación laboral de género es otro tipo de violencia. Se cree que los hombres tienen mejores capacidades y son más productivos. Es una forma de mantener las jerarquías sociales. *«Se dan puestos de menor rango a las mujeres y se les*

paga menos que a los hombres» (mujer adulta, Ayuntamiento Municipal, entrevista grupal a mujeres adultas, 16 de octubre de 2018). Esta idea se confirma socialmente con el discurso de que los conflictos familiares se deben en gran medida al ingreso de las mujeres al campo laboral.

La mujer como objeto de protección fue otra de las violencias identificadas. La idea de que la mujer debe mantenerse en el hogar por su seguridad se ha reproducido generacionalmente. «Se cosifica la mujer, tratan como un objeto a la mujer, no tiene libertad en su ser» (mujer adulta, Ayuntamiento Municipal, entrevista grupal a mujeres adultas, 16 de octubre del 2018). «Se restringen sus relaciones personales y en su participación en el ámbito público» (mujer joven, PRTS Gobierno Comunitario, entrevista grupal a mujeres jóvenes, 15 de octubre de 2018). «En el nombre de su seguridad se limita la libertad de la mujer» (mujer joven, integrante del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social, entrevista grupal a mujeres jóvenes, 15 de octubre de 2018).

Las reflexiones de los grupos de mujeres permitieron comprender que muchas de las prácticas de violencia que realizan los hombres han sido aprendidas por ellos desde la familia, son las formas en las que han aprendido a relacionarse, pero que al mismo tiempo les permite a los hombres conservar sus posiciones de poder. Para los hombres «ser es igual a tener», «quien tienen más dinero, coches o mujeres, es más hombre». Esto genera la idea de que las mujeres son objetos para los hombres. «Por ejemplo, si la mujer anda con otro hombre es una puta, pero si un hombre anda con otra mujer es que es más hombre y se le ve con más fuerza. A la mujer se le castiga y al hombre no en la misma acción» (mujer joven, integrante del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social, taller Historia de las violencias, 26 de septiembre de 2018).

Mientras tanto, a las mujeres, desde niñas, se les restringe y no se fortalecen sus habilidades para relacionarse y participar en espacios públicos como sí se hace con los niños. Es decir, se les dicta una forma de ser, comportarse y vestirse. Se les excluye considerando que hay «horarios y lugares que no son para mujeres»; se les considera como objetos de protección y no se les reconoce su capacidad de agencia para construir seguridad. Los padres reproducen estos idearios cuando se llevan a sus hijos varones a trabajar o a los lugares donde se reúnen con otros hombres y dejan a sus hijas en los hogares.

Estas restricciones se activan cuando alguna mujer actúa de manera distinta a como se espera y «son juzgadas y amenazadas de que algo les pase en la calle» e, incluso, cuando exigen justicia por algún tipo de violencia se les responsabiliza de lo sucedido.

> Me tocó conocer una experiencia, estaba yo ahí, cercano a una señora soltera con su hija de seis años. Ella trabajaba en su casa, vivía sola con su hija y se metieron a su casa y la

violaron, y vino y puso una demanda y en el ayuntamiento le dijeron que ella tenía la culpa (hombre adulto, maestro de secundaria, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

Estos escenarios de impunidad generan la sensación de indefensión en detrimento de las iniciativas de denuncia.

México es un país muy violento contra las mujeres, en la familia y en lo político; me asusta que la mujer aún no sea considerada como alguien con dignidad. Que no veamos la importancia de denunciar los feminicidios, aunque aún no nos llegue aquí. Hay muchas mujeres que guardan sus historias de violencia física, mental y espiritual (mujer adulta, grupo parroquial, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

De esta forma, la violencia contra las mujeres se normaliza. Sin embargo, al mismo tiempo se construyen espacios de resistencia entre las propias mujeres como en los grupos parroquiales, en los grupos de autoapoyo o los grupos económicos, en los que además socializan su descontento ante la problemática y generan vínculos de solidaridad y de confianza.

La seguridad en Tancítaro

Como hemos visto, en Tancítaro ha imperado una perspectiva que considera que las causas de la violencia son externas a la comunidad. Esto genera la idea de que estar adentro del municipio es estar seguro. En parte eso es cierto, si se piensa en los municipios colindantes que tienen índices mayores de violencia homicida. Para abordar de lleno las consideraciones sobre la seguridad que emergen de esta investigación, primeramente, haremos un breve repaso de las acciones del Estado.

Las acciones del Estado para la seguridad

El Consejo Municipal de Seguridad en Tancítaro es un espacio de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad en el municipio: Presidencia Municipal, Funcionarios Públicos Municipales, jefes de tenencia, Comisión de Paz del CCBC, Policía Michoacán y CUSEPT, que se desarrolló durante la administración del año 2015 al 2018. Este espacio permitió compartir un diagnóstico común sobre la seguridad en el municipio y al mismo tiempo permitió establecer actividades coordinadas que permitieran tener impacto mayor.

Durante el año 2016, las diferentes instancias priorizaron los temas de interés que podrían abordarse en ese espacio: 1) el aumento en el consumo de alcohol y drogas en el municipio, especialmente por parte de los jóvenes, 2) el aumento en la tala inmoderada e ilegal de los bosques y 3) la necesidad de coordinación entre las distintas fuerzas de municipio para la atención de la seguridad. Esta instancia tuvo

notables avances gracias al análisis de la realidad sobre el municipio que se hacía de manera constante, y que se traducía en acciones conjuntas en comunicación y coordinación con las autoridades locales comunitarias.

Junto con esto, el Gobierno de Unidad inició un proceso de reconstrucción del tejido social, asesorado por el CIAS Jesuitas por la Paz, que promovió el trabajo interinstitucional para el desarrollo de procesos de fortalecimiento de los vínculos, la identidad y la generación de acuerdos incluyentes. Estos procesos generaron un clima de participación y de diálogo que a su vez animó la confianza en las instituciones. De acuerdo con el testimonio de uno de los integrantes del CUSEPT, en la actualidad

> […] la gente tiene una confianza en nosotros [Consejo de Seguridad Municipal], ya que antes la misma ciudadanía quería hacer justicia por su propia mano y no reportaban a las instancias correspondientes. Las reuniones han servido para que la gente disipe dudas y nosotros como seguridad podamos explicar cuáles son los procedimientos que se deben de seguir frente a una falta y que sepan que ellos no pueden castigar (hombre adulto, entrevista individual, Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro, 25 de noviembre de 2018).

No obstante, este proceso no estuvo exento de tensiones con distintos actores del municipio que vieron amenazados sus propios intereses. En la actualidad, aunque muchas de las instancias antes referidas aún existen, el ayuntamiento no ha dado seguimiento a las reuniones del Consejo Municipal de Seguridad, del Consejo Ciudadano del Buen Convivir, ni atiende las solicitudes de los grupos locales del Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social que ha hecho un trabajo de incidencia en la construcción de paz desde el año 2015 y que motiva la colaboración interinstitucional para dar continuidad a los procesos locales de reconstrucción del tejido social desde el ámbito educativo, familiar, económico, espiritual, barrial y de gobierno.

Las personas participantes de la investigación reconocen que la seguridad territorial que se ha logrado ha mantenido un «municipio en calma» que, a su vez, ha permitido voltear la mirada hacia otras necesidades y problemáticas de su realidad.

Repensar la seguridad en Tancítaro

Como hemos visto en el apartado de violencia, las mujeres jóvenes distinguen la violencia, mientras que el resto de los grupos (mujeres adultas, hombres jóvenes y hombres adultos) no lo hacen. Durante la reflexión en los espacios de análisis, las investigadoras comunitarias, todas ellas mujeres jóvenes, introdujeron dos elementos críticos a las dimensiones de seguridad que se han construido, la dimensión personal y de cuidado. Esto nos lleva a repensar radicalmente la seguridad en Tancítaro.

La primera fue sobre la seguridad comunitaria, en la que la mayoría de los participantes manifestaron sentirse seguros en su municipio, mientras que las mujeres

jóvenes declararon sentirse amenazadas constantemente frente al acoso que viven en las calles del municipio.

Lo segundo fue sobre la familia como espacio de seguridad, donde las mujeres jóvenes subrayaron que, aunque la familia puede ser un espacio en el que se practique el cuidado, la protección y la comunicación, la realidad es que en muchos hogares del municipio se vive una realidad de violencia que no sale a la luz pública e impide que la comunidad se dé cuenta de la magnitud del problema.

En tercer lugar, se cuestionó el *orden exclusivo,* en el que se establecen relaciones jerárquicas de los hombres sobre las mujeres, en lugar de un *orden inclusivo* en el que se responda a las necesidades de mujeres y hombres. Por último, existe la idea de que la seguridad debe ser un concepto en el que se incluya la libertad de expresiones de las emociones y los sentimientos; de lo contrario, seguirá siendo una seguridad superficial que solo se preocupa por las fronteras y que no trata desde lo profundo las causas de la violencia que muchas veces tiene efectos dañinos, principalmente en los hombres, por ejemplo en su salud por el uso y abuso del alcohol y las drogas, o por el uso de la violencia física para hacer frente a sus problemas.

Dimensiones y generadores de la seguridad

La idea de seguridad en Tancítaro ha estado profundamente ligada con la protección de las autodefensas y la ciudadanía organizada ante el ingreso de *amenazas externas* que representan los grupos de crimen organizado. Esta seguridad ha sido el resultado de la coordinación entre diferentes instituciones y depende hasta ahora de «un grupo de personas que están organizadas, las cuales son apoyadas por la comunidad en momentos críticos» (hombre adulto, CCBC, entrevista individual, 21 de noviembre de 2018) que resguardan las *barricadas* que se encuentran en las entradas y las salidas de las localidades y del municipio.

Derivado del proceso de investigación-acción, ahora comprendemos que la idea de seguridad en Tancítaro requiere ampliarse e incluir las necesidades de toda la población. De acuerdo con las participantes de este proyecto, la seguridad es la *certeza* en los vínculos y en la *confianza* de las personas en los espacios donde participan. Estos factores generan las condiciones para la vivencia y la construcción de espacios seguros en donde las personas pueden realizar sus actividades cotidianas, resolver sus problemáticas y apoyarse unas a otras, así como sentir que pueden ser ellas mismas y expresar libremente lo que sienten y piensan.

Así como con la violencia, es posible identificar las dimensiones que permiten sentirse *seguras*. En el cuadro 8.3 resumimos los aprendizajes.

Cuadro 8.3
Dimensiones para construcción de espacios seguros

Dimensiones	Expresiones de la violencia	Evidencias (Testimonios)
Personal	El cuidado de sí mismo, del cuerpo, de la vida anímica y psicosocial: de acuerdo con los testimonios esta es una de las dimensiones más descuidadas y al mismo tiempo una de las que más riesgo corre en el ejercicio de la violencia por descarga	«Es la que cada uno tiene como persona, que depende mucho de normas, cuidados y de los valores que te dan en casa, que te den cariño, que te den amor, que te hagan sentir querido y con la libertad de poderte expresar. Esto es lo que hace de ti un joven que puede salir a la vida y expresarse bien y que seas amiguero y que hagas lo que quieras sin que dañes a los otros» (mujer joven, Ayuntamiento Municipal, taller de Mapeo de las violencias, 9 de septiembre de 2018) «La seguridad que nos está faltando ahorita es aquella donde hay que llenar los vacíos que tienen las personas» (mujer adulta, Ayuntamiento Municipal, taller de Historia de las violencias, 9 de septiembre de 2018)
Familiar	La certeza de que los seres queridos estén seguros: un lugar en el que sean cuidados y sin riesgos de ser agredidos. Aquí no solo se incluye el hogar como entorno familiar, también aquellos espacios en los que existen vinculaciones afectivas como la iglesia, las escuelas y el barrio El ambiente de respeto y cordialidad, de diálogo y escucha: en el que se puedan expresar emociones, que exista comprensión, apoyo en las adversidades y se establezcan límites sanos	«Seguridad se trata de tener plena confianza en que esos que quieres estarán bien» (hombre adulto, CCBC, Historia de las violencias, 9 de septiembre de 2018) «En mi familia sí se da el rol de poderte expresar y sentirte cuidado, y si lo vas reproduciendo con los vecinos, se va haciendo segura la comunidad porque sabes el tipo de personas que hay a tu alrededor y que no te van a dañar y que puedes hablar y te van a escuchar» (mujer Joven, Comunidades del Buen Convivir, taller de Mapeo de las violencias, 9 de septiembre de 2018)

Cuadro 8.3
(Continuación)

Comunitaria	Es la confianza de poder transitar libremente en el municipio: para realizar las actividades cotidianas con la certeza de no ser agredido física o verbalmente	«Ahora que he escuchado en los talleres creo que la seguridad es la capacidad de hacer mis actividades cotidianas en tranquilidad» (mujer joven, entrevista individual, Comunidad Terapéutica, 16 de noviembre de 2018)
Territorial	Es la confianza de que no entren grupos del crimen organizado: este generador de la seguridad está puesto en el cuidado de las barricadas por parte de las autodefensas en los límites del municipio y, al mismo tiempo, en la capacidad de reacción de la ciudadanía cuando ve amenazado su territorio	«Depende de nosotros, que estamos cuidando, pero también depende de los municipios vecinos. Porque si los otros municipios estuvieran cuidando no deberíamos estar tan alertas físicamente de cuidar». (hombre adulto, autodefensas, taller de Historia de las violencias, 9 de septiembre de 2018)

Fuente: elaboración propia.

De tal forma que, para garantizar la seguridad territorial a mediano y largo plazo, se requiere necesariamente atender las violencias en el interior de la comunidad. Así, la transformación de los ciclos de violencia a ciclos de seguridad/cuidado requiere que se tomen en cuenta ciertos aspectos que a continuación mencionaremos.

Configuradores del cuidado y la seguridad

Cuando nos referimos a los configuradores de la violencia, hablamos de tres narrativas que se desarrollan en el municipio con las cuales se mantiene cierto orden, pero que, de fondo, dicho orden está asociado al poder que se sostiene mediante el ejercicio de la violencia. En principio, ni el orden ni el poder son vistos en la comunidad como negativos, considerando que ambos permiten dinamizar y regular la vida en el municipio. En realidad, el cuestionamiento se dirige a la forma en que estas se desarrollan mediante el uso de la violencia e imponen un orden y un poder *injustos.*

De esta manera, surge el cuestionamiento sobre la posibilidad de construir espacios de orden y poder *justos,* más allá de la idea de seguridad. Se exploró el concepto de *cuidado* que se consideró representa una idea profunda en la que se involucran los afectos como elementos de cohesión. La reflexión ha integrado algunos elementos que podrían llevarnos a esto.

Tomar conciencia de las propias violencias

El proceso de investigación nos permite identificar que la violencia se ha configurado como una opción, un modo para resolver alguna necesidad, problemática o hacer frente a alguna situación. Esto quiere decir que existen otros modos posibles de actuar, distintos a la violencia. Los entrevistados coinciden en que el primer paso para iniciar un ciclo de cuidado es cobrar conciencia de la violencia. Es claro que esta situación no es espontánea, sino que se trata de un proceso en el que se identifican las causas profundas de las violencias del contexto y luego se reflexiona la participación individual o colectiva en ellas.

Se trata de comprender que la violencia es una opción y por lo tanto puedo optar por otras opciones. Esto implica considerar que aun cuando la violencia genera resultados a corto plazo, estos no son sostenibles, por el contrario, traen nuevos ciclos de violencia. Así, las alternativas de seguridad/cuidado implican mayor esfuerzo; sin embargo, traen resultados a mediano y largo plazo que además garantizan su sostenibilidad.

> Yo creo que es opcional hasta cuando la persona toma conciencia del daño que hace al generar violencia y educar con violencia. En el momento que se genera conciencia entonces ya se toma opción. La violencia sí es opcional y ante cada situación de violencia que ejercemos siempre tenemos una pausa de diez segundos. Un momento en el que te paras y decides hacerlo o no hacerlo. Sabes que tiene consecuencias y a veces lo paras y a veces no (hombre adulto, escuela secundaria, taller de análisis, 4 de noviembre de 2018)

Construir un orden dialógico

De acuerdo con las participantes, en Tancítaro los padres y los abuelos comienzan a tomar conciencia de los efectos del uso de la violencia. Se ha empezado a reconocer que el diálogo, la conversación y el convencimiento «no alteran la forma en la que convives, no [son] agresivos, tardas más tiempo, dejan cosas más buenas y no dejan alterado el ambiente».

> Yo, dice mi mamá, era inquieto desde pequeño. Sin embargo, yo con mi mamá y mi papá siempre me llevo bien, fuimos como amigos, pero me pegaban cuando algo hacía mal. Yo creo que hubiera entendido igual si dialogáramos que si me pegaba, pero él [papá] nunca platicó con su mamá, dice que lo colgaba de los pies y le pegaba con un palo (hombre adulto, Ayuntamiento Municipal, taller de análisis, 4 de noviembre de 2018).

Para esto es necesario realizar un diálogo diverso entre los diferentes sectores, padres e hijos, hombres y mujeres, gobierno y ciudadanía, entre otros. Junto con esto, reformular las reglas y los valores en la familia y en la comunidad se considera muy importante. Esto implica un «proceso doloroso» pues se deben abandonar las formas que hasta el momento han dado *seguridad*. En las reflexiones se señala la importancia de optar por formas no violentas para garantizar la seguridad en el municipio y que permita a las nuevas generaciones experimentar la construcción de espacios seguros.

> A lo mejor tendríamos que sacar adelante una generación, porque yo mismo no sé cómo educar a mi hijo, también de repente exploto, me enojo y le grito, pero no conozco otra forma, no estudie, no he leído un libro para saber cómo ser papá ni nada. Conozco la forma en la que me educó mi papá. Siempre trato de sacar la otra parte de dialogar y esa parte que he trabajado conmigo (hombre adulto, autodefensa, taller de análisis, 4 de noviembre de 2018).

Las redes de apoyo

Optar por alternativas de cuidado en un contexto en el que la violencia es aceptada y promovida para mantener el orden, no es sencillo. Frente a esto, la promoción de espacios salvos y de confianza en los que se promueva el diálogo como práctica principal, es un buen inicio. Estos espacios permiten *resistir* el contexto, así como fortalecer las prácticas de seguridad/cuidado entre sus participantes y ampliar los espacios seguros a otras personas que no cuentan con las herramientas para iniciar este proceso de transformación.

> Yo creo que es opcional e incluso vemos en personas que no se corrigen rápido, pero podemos apoyar. En las familias se está manejando de que ya no se ve golpear ni maltratar, pero debemos dar herramientas a las personas para hacerlo diferente (mujer adulta, comunidad del Buen Convivir, entrevista individual, 14 de noviembre de 2018).

Se requieren redes de apoyo activas, que salgan de sus espacios cómodos y se arriesguen para ampliar el espacio de cuidado y de confianza, ya que solo la ex-

periencia de cuidado y protección permite identificar que existen alternativas a la violencia por la que podemos optar. La comunicación es un elemento transversal de estos tres configurantes. Ya sea por el diálogo con *pares* para la reflexión personal o por la conversación en grupos para el trabajo en red, la comunicación permite sacar a la luz las violencias que se han ignorado o invisibilizado. Comunicar lleva a la reflexión pública las problemáticas y necesidades que muchas veces se mantienen en la sombra de lo *privado.*

> Yo creo que ese tipo de violencia que no se ve, es porque hemos vivido tanto con ella que no nos damos cuenta de que nos afecta, me refiero al machismo. Estamos tan acostumbrados que hasta que salimos nos damos cuenta de que eso no es normal, pero es algo de generaciones atrás. Con las mujeres ahorita se habla más de la violencia hacia ellas. Antes no lo hablaban y ahorita sí se está escuchando y está apareciendo, la mujer está diciendo y está hablando (mujer adulta, escuela secundaria, segundo conversatorio, 3 de junio de 2018).

Conclusiones

En este capítulo se ha repasado la experiencia de seguridad y violencia que viven las personas en el municipio de Tancítaro. Allí se han mantenido los índices de violencia muy por debajo de los registrados en los municipios vecinos, al haberse consolidado un sistema de seguridad territorial en el que la coordinación y la participación de la ciudadanía es fundamental.

Se trató de rescatar las voces que, en medio del esfuerzo comunitario por mantener la seguridad en las fronteras, consideran necesario seguir trabajando para atender las violencias que vienen desde adentro y que, al mismo tiempo, subrayan la potencialidad de los afectos para la promoción de prácticas de solidaridad y de cuidado para la construcción de espacios seguros.

Esta investigación permitió reconocer las razones de la violencia que muchas veces se ignoran para señalar más fácilmente a los *culpables* y construir una mirada crítica de la seguridad. Los espacios de reflexión permitieron a las y los participantes compartir sus *inseguridades* y alegrarse de sentirse *seguras* en el proceso. Se encontraron frente al difícil paso de reconocer sus violencias y sus cuidados. Escarbaron en las raíces, en las causas de las violencias y desde allí imaginaron formas de seguridad y de cuidado. En ese sentido, el proceso permitió dar cuenta de que la idea de seguridad debe dialogarse entre lo *personal* y lo *colectivo,* entre lo propio y lo ajeno, entre lo público y lo privado, entre las normas y las libertades.

Este proceso generó la inspiración a no conformarse, a buscar la plenitud de la dignidad humana. Las voces críticas de las mujeres adultas y jóvenes plantearon la imperiosa necesidad de cuestionar el orden injusto que las ignora y las violenta. Invitaron al resto de los participantes a emprender procesos de cuestionamiento personal y colectivo sobre las formas de ser mujeres y hombres, así como de las violencias que se reproducen socialmente.

Queda el desafío de continuar la reflexión crítica de la seguridad, para no darla por hecho; de pensar la forma de construir espacios seguros extensivos e inclusivos, sobre todo con las poblaciones más vulnerables.

Al final, queda también el deber de compartir los nuevos saberes sobre la violencia y la construcción de espacios seguros, el llamado a dialogar sobre las realidades y compartir las experiencias, a hacer comunidad para fortalecer la gran capacidad humana para el diálogo y la comunicación en la construcción de la paz.

Referencias

ATM -Ayuntamiento de Tancítaro, Michoacán-. 2015. *Plan de desarrollo estatal de Tancítaro, Michoacán.* En: http://www.ayuntamientotancitaro.gob.mx/wp-content/uploads/archivosayunta/rcc2016.pdf.

BBC Mundo. 2013. «¿Por qué el narco recluta a miles de menores en México?» en <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131217_mexico_menores_adolescentes_reclutados_narcotrafico_chapo_guzman_zetas_sinaloa_an>.

Cauce Ciudadano. (2015). México la guerra invisible. En: http://cauceciudadano.org.mx/wp-content/uploads/2013/11/Dossier_LIBERA_Mexico_La-Guerra_Invisible.pdf.

CNDH -Comisión Nacional de los Derechos Humanos-. 2016. *Informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI) en México*. En: < http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_Inf_esp_dfi_mexico.pdf>.

CONACYT –Agencia Informativa-. 2015. *Epidemiología del consumo de drogas en México*. En: http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/salud/3725-drogadiccion-mexico.

CONANP -Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas-. 2018. *Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de México*. En: <https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo>.

Congreso de Michoacán de Ocampo. 2014. *Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.* En: <http://www.educacion.michoacan.gob.mx/wpcontent/uploads/2016/08/CO%C2%A6%C3%BCDIGO-PENAL-PARA-EL-ESTADO-DE-MICHOACA%C2%A6%C3%BCN-DE-OCAMPO.pdf>

Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos .2007. Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf>.

Contralínea. 2011. Más de 17 mil 500 tomas clandestinas en ductos de Pemex, de 2011 a 2016: ASF. En: <https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/>

Diario Oficial de la Nación. 2012. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En: http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5253274

Forbes. 2013. «Mujeres, las más vulnerables ante el narcotráfico en México», diciembre 12. En: <https://www.forbes.com.mx/mujeres-en-el-ojo-del-huracan-del-narcotrafico-en-mexico/>

Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 2016. «Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil a las Respuestas Remitidas por el Estado Mexicano sobre las Recomendaciones Prioritarias del Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas». En: <http://fundar.org.mx/organizaciones-de-familiares-de-personas-desaparecidas-y-de-derechos-humanos-exigen-ampliacion-de-presupuesto-para-busqueda/>

Guerrero Gutiérrez, Eduardo. 2018. «La segunda ola de violencia» en <https://www.nexos.com.mx/?p=36947> acceso 1 de abril de 2018.

INEGI. 2015. "Desempeño institucional" en: *Tabulados de la Encuesta Intercensal* 2015 Base de datos. Acceso 9 de septiembre de 2017.

INM -Instituto Nacional de las Mujeres-. 2017. «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres». En: <https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739>

ONU Mujeres. 2017. «La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016». En: <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101258.pdf>

Pérez, David M. (2017). «México cerrará 2017 como el más violento en 20 años» en *El País,* 23 de diciembre. En: https://elpais.com/internacional/2017/12/23/actualidad/1513997748_288693.html

Proceso. 2007. «Impunes, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez: ONG». En: <http://www.proceso.com.mx/209504/impunes-los-asesinatos-de-mujeres-en-ciudad-juarez-ong>

SAGARPA -Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-. 2017. *Aguacate mexicano*. En: <https://www.gob.mx/agricultura>

Suárez-González, Andrés y Hernández-Baqueiro, Alberto. 2015. *Perspectivas éticas de la seguridad ciudadana en Chile y Méxic*o. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.

9

Construcción de espacios seguros. Lecciones del diálogo de saberes con jóvenes y mujeres de América Latina y el Caribe[1]

Alexandra Abello Colak[2] y Pablo E. Angarita Cañas[3]

Introducción

En este capítulo se presenta un análisis transversal de los principales hallazgos y de la metodología participativa usada en el desarrollo de la investigación «Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios seguros en América Latina y el Caribe», cuyos resultados más relevantes se ofrecen en los primeros capítulos de esta misma obra. No se trata de un resumen de los múltiples aspectos tratados en los otros capítulos, ni de establecer comparaciones entre los casos seleccionados en este proyecto, tarea que excedería los propósitos del mismo. Contrario a ello, centramos el análisis en las lecciones que deja el proyecto a partir de los resultados de esta investigación, cuyo propósito fue indagar por la construcción de espacios seguros junto con residentes de comunidades particularmente afectadas por la crisis de violencia e inseguridad que viven varias ciudades de América Latina y el Caribe.

En este capítulo se develan aspectos comunes y disímiles del proceso de indagación y de los resultados obtenidos en los seis países y se resalta la importancia

1 Los autores agradecen los aportes que hicieron al borrador inicial de este capítulo los investigadores de los países participantes en este proyecto, en particular las colegas de Honduras, los de México y de Guatemala, así como Natalia Cardona de Medellín y la profesora Jenny Pearce. Al mismo tiempo, los exonera de la responsabilidad por las ideas aquí expresadas.

2 Investigadora del Centro de América Latina y el Caribe en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Email: a.l.abello-colak@lse.ac.uk

3 Profesor Titular de la Universidad de Antioquia. Co-fundador del Grupo de investigación Conflictos, Violencias y Seguridad Humana y del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. E. mail: pabloangarita@gmail.com.

de desarrollar procesos de generación simultánea de conocimiento y agencia en las comunidades más afectadas, que permitan no solo la mejor compresión de la complejidad de fenómenos como la violencia y la inseguridad, sino también formas de ciudadanía críticas, democráticas y no violentas. Con base en los hallazgos, el capítulo resalta también la noción integral y multidimensional que jóvenes y mujeres de la región tienen de un *espacio seguro* y para cuya construcción son vitales no solamente unas condiciones materiales que garanticen la dignidad y el bienestar, sino también un tipo particular de relaciones y vínculos con propios y extraños y con las instituciones. A pesar de las diferencias en los contextos socioculturales de cada localidad, es claro que la construcción de «espacios seguros» para las mujeres y jóvenes de la región, involucra procesos complejos que sobrepasan las capacidades policivas del Estado y requieren la acción mancomunada de diversas agencias gubernamentales, de organizaciones civiles y comunitarias y de las comunidades.

Iniciamos el capítulo con una breve alusión al contexto de violencia e inseguridad que viven los países en los que se desarrolló el proyecto, y las particularidades de los equipos que participaron en su implementación. Luego, analizamos tres asuntos que consideramos fundamentales. El primero es el uso de una metodología participativa para indagar sobre procesos de construcción de «espacios seguros» en la región, su utilidad, potencialidades y desafíos. El segundo asunto está referido a la noción de espacios seguros, y cómo se articuló esta en cada país a través de la mirada de la juventud y de las mujeres. Aquí destacamos las implicaciones de dicha noción en el orden conceptual y práctico, así como sus posibles rendimientos y limitaciones. El tercero se refiere a los hallazgos de los equipos con respecto a las políticas y medidas del Estado frente a la violencia y la inseguridad; analizamos similitudes y diferencias en el tipo de respuestas ofrecidas por las instituciones públicas, así como sus desaciertos frente a las expectativas de la gente respecto a qué es y cómo se construyen «espacios seguros». En el último acápite, a manera de conclusión y a la luz de los resultados globales del estudio, señalamos algunos retos que deja esta investigación para las comunidades, la academia, las instituciones del Estado y para otros actores como las agencias de cooperación.

Nuestra investigación en el contexto de la crisis regional

La violencia y la inseguridad que viven varios países de América Latina y el Caribe y que convierten al subcontinente en la región con la de mayor tasa de homicidios a nivel mundial,[4] han sido una constante preocupación de los gobiernos, la sociedad

4 El Latinobarómetro revela que los dos problemas más destacados para ciudadanos y ciudadanas de América Latina son "las penurias económicas y la delincuencia" (2018, p.5). En la escala del municipio o

civil, así como de diversos organismos internacionales. Esto ha llevado a invertir ingentes recursos en el diseño de políticas y estrategias tendientes a disminuir los altos niveles de violencia e inseguridad que, a pesar de estos esfuerzos, siguen creciendo en nuestros países. Las consecuencias de esta situación son diversas, además de las implicaciones humanas, la afectación al tejido social y a valores fundamentales como la confianza y la solidaridad, lo que conlleva profundas repercusiones en el orden político, como la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en sus gobiernos, cuya legitimidad se encuentra debilitada, así como en la democracia y sus instituciones, que frecuentemente son puestas en duda por una sociedad atemorizada.

Seis de los países del continente americano que están entre los que muestran las mayores tasas de homicidios (véase cuadro 9.1) fueron los lugares seleccionados para adelantar este proyecto de investigación, realizado con el propósito de aportar a la comprensión de estos problemas y sus posibles soluciones. El proyecto fue implementado por equipos plurales de investigadores académicos y comunitarios en Colombia,[5] El Salvador,[6] Guatemala,[7] Honduras,[8] México[9] y Jamaica.[10] Este proyecto empleó métodos de investigación-acción participativos, con el propósito de indagar las respuestas civiles e institucionales frente a la violencia y a la inseguridad, con miras a lograr la mejor comprensión de sus impactos en la construcción de espacios seguros. Más allá de la investigación, este trabajo facilitó una acción-reflexión mancomunada entre académicos y residentes de diferentes localidades y obtuvo mejor conocimiento de los factores y los actores generadores de múltiples violencias en las comunidades seleccionadas.

---

la comuna “el principal problema es la delincuencia con el 24%, seguido de los problemas económicos con el 20%” (p.5).

5 El equipo estuvo conformado por investigadores del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, línea Observatorio de Seguridad Humana de Medellín; la Coordinación de Mujeres de la Zona nororiental, comuna 1 Popular; y Núcleo de Pensamiento, de la comuna 6 Doce de Octubre.

6 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador (UCA). Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños (ANTRAIVEAS). Grupo Parroquial Popotlán. Mesa de Prevención “Unidos por la paz”, La Chacra, (San Salvador). Centro Escolar José Martín Vilaseca.

7 Se desarrolló en dos lugares: En Sanarate, El Progreso, el equipo estuvo conformado por investigadores del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE) de la Universidad Rafael Landívar (URL), y un grupo de investigadoras comunitarias. Y en la población de Nebaj: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), junto con Loida Ceto Brito e Hilaria Guzmán, mujeres profesionales ixiles.

8 Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT), Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H) y OXFAM (Honduras).

9 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Jesuitas por la Paz.

10 Violence Prevention Alliance y University of West Indies.

Asimismo, este proyecto identificó el impacto diferenciado de esas violencias y de la inseguridad, según el género y la edad de los y las participantes gracias a que las actividades estuvieron focalizadas en dos grupos poblacionales (jóvenes y mujeres) que, siendo segmentos altamente afectados, a menudo están ausentes en los debates y las decisiones políticas sobre asuntos de seguridad. En las políticas públicas para los jóvenes en América Latina predomina un enfoque adultocéntrico que desconoce el sentir de estos, además de ser implementadas en un contexto sociocultural que, al tiempo que los estigmatiza asociándolos con actores generadores de violencia e inseguridad, los excluye de los espacios de participación y decisión efectiva. Por ello, para esta investigación, este grupo poblacional de jóvenes adquirió interés privilegiado por constituir el presente y el futuro de las sociedades. Más allá de la comprensión de las problemáticas, se avanzó en identificar iniciativas comunitarias, así como políticas públicas que inciden en la construcción de espacios seguros en las comunidades.

Cuadro 9.1
Tasas de homicidios (2016-2018)

	País y sus tasas correspondientes					
Año	*México*	*Colombia*	*Guatemala*	*Honduras*	*Jamaica*	*El Salvador*
2016	16,2	24,4	27,3	59,0	50,0	81,2
2017	19,5	24,0	26,1	42,8	55,7	60,0
2018	25,8	25,0	22,4	40,0	47,0	51,0

Fuente: InSight Crime (2017, 2018, 2019)

Uno de los rasgos más peculiares del proceso de investigación y acción de este proyecto fue su intento de construir conocimientos a partir de un diálogo convergente entre líderes y lideresas de las comunidades, considerados *investigadores comunitarios,* junto a profesionales formados en el mundo académico. La participación de ambos se estableció dentro de una dinámica de interacción y reflexión sobre los problemas específicos de inseguridad y violencia en cada contexto, donde los equipos de investigación de cada país elaboraron productos conjuntamente. Algunos de esos resultados tuvieron un impacto inmediato y de otros se espera que sean visibles en el mediano y largo plazo. Entre todos sobresale el proceso de organización, fortalecimiento institucional, empoderamiento de las comunidades y su mayor capacidad para incidir en las políticas públicas y en acciones orientadas a disminuir los niveles de violencia y a mejorar la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes.

En este capítulo reflexionamos sobre la pluralidad de aprendizajes que deja este proyecto que se desarrolló en diversos contextos socioculturales: un país caribeño y angloparlante como Jamaica, tres países centroamericanos con sus problemáticas y potencialidades, la diversidad cultural de México y la realidad de una nación suramericana como Colombia en medio de sus guerras y sus anhelos de paz. Este proyecto, como un cuadro policromático, trató de juntar la diversidad de matices que representa cada experiencia con sus particularidades culturales, de manera que se enriqueciera la comprensión de la problemática regional, al tiempo que se nutrían las variadas iniciativas que afloran en cada localidad. Adicionalmente, en cada caso, el vigor con el que se estableció la relación entre los investigadores profesionales y los comunitarios fue tan diferente, como disímil la interacción entre los equipos de trabajo con las comunidades y con las autoridades locales. Un valioso aprendizaje para otros proyectos similares es la importancia de mantener una continua y fluida comunicación, tanto virtual como presencial, en la que se consulten y se expliciten los enfoques y las metodologías; se reflexione y debata, e igualmente se compartan las contingencias del camino a fin de establecer acuerdos durante todo el recorrido. Esta dinámica de trabajo cooperativo fue una de las estrategias que permitió alcanzar los buenos resultados y también evidenciar las limitaciones de cada equipo.

Un elemento importante y pocas veces mencionado en trabajos académicos es el factor humano. Resaltamos aquí que la metodología de coproducción de conocimientos para la seguridad desde abajo contribuyó a fortalecer la sensibilidad social de las y los participantes y a estrechar lazos de solidaridad y sororidad alrededor de la problemática de la violencia que trascienden los estrechos límites de las fronteras nacionales. Además, es claro que las redes de afecto y de acción establecidas durante esta investigación perdurarán más allá de los marcos temporales establecidos en un proyecto subvencionado. Esto último se ha visto materializado en la construcción de una red social virtual y presencial de académicos y de líderes comunitarios interesados en la problemática de violencia e inseguridad en la región, red que era además uno de los cinco objetivos específicos del proyecto.[11]

Potencialidades de la *coproducción de seguridad desde abajo*

Como ya se mencionó, la implementación de este proyecto en los seis países se llevó a cabo siguiendo la metodología de coproducción de seguridad desde abajo[12]

11 La Red viene funcionando desde finales de 2018 en múltiples espacios virtuales y redes sociales como una página de Facebook (https://www.facebook.com/voceseiniciativascomunitarias/), un grupo de WhatsApp y a través de la página del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (www.repensandolaseguridad.org).

12 Esta metodología surgió en Medellín, producto del esfuerzo conjunto del equipo del Observatorio de Seguridad Humana, de organizaciones comunitarias de esa ciudad y de investigadoras del Departamento

(Abello-Colak y Pearce, 2015, 2018, 2019; OSHM, 2012, 2014). El propósito fue no solo generar conocimiento sobre seguridad con la activa participación de las personas más afectadas por los complejos fenómenos de violencia en la región, sino encontrar formas de incidir en los debates y las políticas de seguridad y de mejorar las respuestas institucionales y ciudadanas con respecto a estos problemas. Dos elementos fundamentales de esta metodología fueron acogidos por todos los equipos de investigación locales para la implementación del proyecto: el primero fue la participación de miembros de la comunidad en el proceso de investigación a través de la figura de las «investigadoras comunitarias» y los «investigadores comunitarios»[13] y el segundo, la construcción de conocimiento a partir del diálogo de saberes entre investigadores comunitarios y académicos, y entre cada equipo de investigación local y la comunidad en donde se llevó a cabo la investigación.

Este tipo de metodología plantea varios retos a los investigadores académicos y las investigadoras académicas que deben encontrar nuevas formas de trabajo no extractivo con las comunidades que propicien relaciones, así como métodos de recolección y análisis de información que permitan generar confianza en comunidades con un tejido social debilitado por la violencia y reconocer las múltiples experiencias y tipos de conocimiento que poseemos los agentes involucrados. Esto con miras a coproducir conocimiento que resulte relevante para las y los participantes, para sus comunidades y para funcionarios y organizaciones civiles que trabajan en ellas. En el caso de Cherán, México, por ejemplo, el equipo de investigación reconocía que, en cada fase de implementación del proyecto, aparecieron retos diferentes en la interacción entre investigadores académicos y comunitarios, siendo las fases de análisis y sistematización de la información en las que fue más difícil llegar a acuerdos. En Nebaj, Guatemala, la metodología conllevó retos relacionados con las diferencias etarias, académicas, de identidad étnica y de entorno urbano-rural, situación que intentaron ir superando en la marcha hasta lograr «formular una propuesta reflexionada en colectivo y ubicarla en el análisis» (capítulo 3).

La revisión de la experiencia de los diversos equipos de investigación en cada país revela, sin embargo, que, a pesar de retos y dificultades, este tipo de metodología participativa puede ofrecer mejor compresión de los problemas de inseguridad y violencia para generar espacios en los que sea posible adelantar procesos de con-

---

de Estudios de Paz de la Universidad de Bradford. Se inspira en la investigación-acción participativa, la educación popular, en los Estudios de Paz, la noción de epistemologías del sur de Boaventura de S. Santos y en enfoques etnográficos críticos.

13 En El Salvador, en algunos lugares prefirieron llamar "facilitadores" a estos miembros del equipo con roles cercanos a los investigadores comunitarios y, en lugares como el Complejo Educativo Católico Padre José Martín Vilaseca (Apopa), las personas voluntarias participaron en un proceso de formación como investigadores comunitarios, que convirtió a este centro educativo en un referente comunitario (capítulo 2).

cientización y fortalecimiento de la agencia de las y los participantes. A continuación, ofrecemos algunos ejemplos concretos que ilustran estas potencialidades del uso de la metodología de coproducción de seguridad desde abajo.

En cuanto a la producción de conocimiento sobre violencia y seguridad en la región, fue evidente que en la mayoría de los casos los equipos lograron identificar con más nitidez la forma compleja en que se manifiesta la violencia en las comunidades e incluso visibilizar problemas asociados a la inseguridad que permanecen invisibilizados en los diagnósticos y reportes oficiales. Los casos de Cherán en México y Medellín, Colombia, ilustran muy bien este punto. Ambos lugares son vistos a nivel nacional e internacional. En el caso de Medellín, como ejemplo exitoso de la reducción de la violencia. En Cherán, como se explica en el capítulo 7, este éxito es visto como el resultado de la organización de la comunidad local y el rescate de formas de autogobierno que lograron generar mecanismos de protección de la comunidad frente a las acciones del crimen organizado, y en el caso de Medellín, como se explica en el capítulo 1, el éxito de la ciudad es medido por las reducciones en los niveles de homicidios, consideradas como resultado de intervenciones del Estado en comunidades históricamente marginadas. En ambos casos, la investigación reveló que tras esas narrativas de éxito persisten otras formas de inseguridad y de violencia que afectan a las mujeres y a la juventud. Estas «otras» violencias, que no son vistas como prioridades, son, sin embargo, parte del engranaje de la violencia crónica (Pearce, 2007; Adams, 2017). Es importante también señalar que estos capítulos nos permiten profundizar en este fenómeno dentro de Latinoamérica y reconocer algunas de las razones por las cuales se ejerce violencia en los diferentes territorios y unidades sociales, lo cual es un aporte para identificar estrategias para la construcción de espacios más seguros.

La investigación en estos y otros casos ofreció entonces un panorama sobre la violencia que es mucho más complejo y que no se limita a las formas de violencia letal asociadas al crimen organizado, que son las que tienden a ser objeto de atención por parte de los medios de comunicación y de los gobiernos. Las violencias que afectan a las mujeres y a los y las jóvenes son diversas, ocurren en varios espacios, incluidos el hogar, la escuela, la calle, y se entrelazan con la violencia criminal, de ahí la importancia de reconocerlas y abordarlas. La inclusión de las voces y experiencias de mujeres y jóvenes permitió en varios de los casos, construir diagnósticos más amplios del problema y visibilizar cómo factores históricos, culturales, socioeconómicos e institucionales influyen en la creación de contextos comunitarios y urbanos inseguros, incluso cuando los niveles de homicidios se reducen.

En cuanto a las mujeres, consecuencia del predominio de la cultura patriarcal, padecen discriminación en el espacio público y privado, como lo resaltaron las mujeres en Tegucigalpa, quienes consideran que la violencia en el entorno doméstico

hace que este sea uno de los más inseguros de la comunidad, un espacio que «las entrena para sentir miedo, reflejando una antítesis sobre los espacios domésticos (familiares) como la primera red de protección y apoyo de todo ser humano» (capítulo 5). Allí, las mujeres están sometidas a prácticas autoritarias de violencia, como ocurre en Cherán, en donde, al momento de casarse, comienzan a estar sometidas no solo a la autoridad del marido sino «también las suegras y cuñadas participan de la reproducción de la violencia en los hogares» (véase capítulo 7), en una relación vertical que se reproduce de generación en generación. Asimismo, se evidencian las múltiples formas de agresión sexual, de las cuales solo una pequeña parte es denunciada y entra a las estadísticas oficiales, pues la inmensa mayoría de estas violencias son naturalizadas o no se denuncian por temor a las consecuencias que ello puede traer como lo revelan las mujeres de Medellín, Nebaj, Sanarate y Tegucigalpa (capítulos 1, 3, 4 y 5, respectivamente).

En el caso de los jóvenes, especialmente los que viven en barrios con grandes limitaciones socioeconómicas, siguen siendo un sector social altamente estigmatizado por los cuerpos de seguridad del Estado quienes los ven como sospechosos de hacer parte de organismos ilegales por su forma de vestir, sus costumbres, sus gustos musicales o por el simple hecho de estar en grupo en espacios públicos. En otros casos, padecen grandes restricciones al ejercicio de sus libertades básicas debido al ambiente de temor generado por la presencia de grupos armados. Este señalamiento hacia los jóvenes lo realizan además de agentes estatales y vecinos que, desde una mirada adulto-céntrica, los recriminan y los excluyen, como se evidenció en varios países, particularmente en Colombia y en El Salvador.

Estos diagnósticos obligan a cuestionar la forma reduccionista en la que frecuentemente se entiende el problema de la violencia en la región, como un problema asociado al tráfico de drogas y otras economías ilegales controladas por el crimen organizado. La metodología usada cuestiona las narrativas y comprensiones que tienen las y los participantes de los problemas de seguridad, que en muchos casos invisibilizan algunos problemas de violencia e inseguridad en sus comunidades. En San Salvador, por ejemplo, el equipo encontró que la población suele asociar el término *seguridad* a la represión en la que ha estado implicada directamente la Policía Nacional Civil. Por ello, y sin dejar de reconocer las virtudes que pueden ofrecer conceptos como el de seguridad humana, no obstante, optaron por remplazar la categoría de espacios seguros por la de construcción de paz, entendida esta como la manera de transformar la dinámica violenta de los conflictos y en los que están presentes relaciones de poder (véase capítulo 2). En ese sentido, la transformación pacífica de los conflictos violentos y la inseguridad, incluyen trabajar con el ofensor

y con la víctima, como en buena medida se vio reflejado en el trabajo adelantado por el equipo en cinco comunidades.

En el caso de Sanarate, Guatemala, la investigación reveló que el municipio enfrenta tres grandes obstáculos a la hora de construir espacios seguros. El primero es la aceptación social de ciertas formas de violencia, la invisibilización de la violencia doméstica o la poca tolerancia a las personas que no son del municipio y la preponderancia de nociones ciudadanas muy restrictivas de la seguridad ligadas al libre movimiento y circulación de personas y bienes por la calle y el territorio. A esto se suma una débil organización de la comunidad, autoridades poco democráticas que limitan la posibilidad de generar visiones y propuestas alternativas a las respuestas tradicionales que surgen de visiones militaristas y autoritarias de la seguridad.

A partir de ese diagnóstico, como se explica en el capítulo 4, se propuso adelantar un proceso de formación que incluyó temas de seguridad humana y construcción de paz con miembros de la comunidad, lo que permitió ahondar en la reflexión sobre esos problemas con los y las participantes. En este sentido, la metodología de coproducción de seguridad desde abajo, que en varias ocasiones ha estado acompañada de procesos de formación como los diplomados que se llevaron a cabo en El Salvador,[14] en México y en Nebaj, Guatemala, anima a los y las participantes a analizar más críticamente el contexto en el que viven y los factores que se relacionan con la violencia, y también a cuestionar su propio rol en la transformación de esos factores y contextos de inseguridad.

Un caso en el que los ejercicios de formación revistieron especial importancia durante la puesta en marcha del proyecto, fue el del municipio de Nebaj, un territorio indígena Ixil, perteneciente a la cultura maya, en donde participaron un grupo de mujeres jóvenes estudiantes. Allí el proceso de investigación incluyó momentos previos de formación que buscaban fortalecer sus capacidades de «intuición, curiosidad, búsqueda de datos y compromiso con la historia personal y social de cada una de las jóvenes participantes y de su comunidad» (capítulo 3). Con base en este proceso de formación, las jóvenes pudieron rediseñar y profundizar la investigación involucrando a sus familias, a otros jóvenes y adultos de sus comunidades. Este proceso fue crucial para lograr una reflexión colectiva entre investigadoras académicas, facilitadoras comunitarias y demás miembros del equipo, que les permitió mejor comprensión de la perspectiva del buen vivir a partir de historias personales, familiares y sociales vinculadas a cada uno de los círculos de la red del buen vivir.[15] Esta

14 Allí, con los participantes de la comunidad, se realizó un Diplomado en Transformación de conflictos y construcción de paz en el que se promovió la reflexión crítica sobre prevención de la violencia.

15 Como lo explican ampliamente en el capítulo 3, los tres círculos articulados a la red, corresponden a tres perspectivas integradas e interdependientes: el primero se encuentra en el centro y contiene los

perspectiva se convirtió en una «propuesta política de reconstitución y transformación de los pueblos originarios, basada en acuerdos entre personas y con la naturaleza, sin jerarquizar ninguna expresión de vida». Como se explica en el capítulo 3, este equipo de investigación logró entonces ampliar el horizonte conceptual de todas las participantes, incluso más allá de los conceptos propuestos durante la formulación del proyecto y develó la importancia de ser creativos al retomar los lineamientos generales del proyecto y aplicarlos a las especificidades concretas del territorio en el cual se realizó el proyecto, lo cual, a su vez, constituyó un aporte intercultural a los equipos de las demás localidades.

En varios de los países en donde se implementó el proyecto, develando problemas de inseguridad y violencia, puede afirmarse que, gracias a la metodología, se generaron oportunidades para que las y los participantes construyeran diagnósticos y pensaran en posibles acciones e iniciativas que toman en cuenta los múltiples factores asociados a estos. Este tipo de concientización y capacidad de agencia se evidenció también en el caso de Cherán, México, donde grupos de mujeres que participaron en este proyecto formularon propuestas para repensar prácticas culturales arraigadas en su comunidad y desarrollar nuevas formas de relacionamiento que permitan a todas y todos vivir con dignidad. En Medellín, mediante un ejercicio de coformación, mujeres participantes del proyecto lograron analizar problemáticas de inseguridad con autoridades locales y proponer estrategias de visibilización de los factores que se identificaron como esenciales para la construcción de espacios seguros en este proyecto, en emisoras comunitarias y redes sociales. Fue similar la experiencia de las mujeres que participaron en el proceso en Honduras y de representantes de diversas organizaciones civiles e instituciones locales del municipio de Tancítaro, México.[16] Allí la investigación incluyó actores clave que trabajan en procesos de reconstrucción del tejido social (capítulo 8).

Este tipo de agencia, que busca contribuir a la construcción de espacios seguros por medio de prácticas que no reproducen violencias e inseguridad, es fundamental en el contexto de América Latina y el Caribe, en donde cada vez más ciudadanos y ciudadanas parecen estar dispuestos a sacrificar libertades y derechos para apoyar respuestas antidemocráticas y militaristas en medio del pánico y la desesperanza que

---

elementos del cosmos como fuente originaria de vida. En el segundo círculo está todo lo que surge de esa fuente originaria (ahí están los seres humanos, en igualdad de estatus con otras expresiones de vida del entorno). En el tercer círculo están los elementos de las relaciones concretamente humanas, interconectadas desde lo *sentií-pensante.*

16 La Comunidad Terapéutica "16 de noviembre", Escuela Secundaria Técnica #41, Comunidades del Buen Convivir, Consejo Ciudadano del Buen Convivir, Consejo Municipal de Seguridad, Pastoral Social de la Parroquia de Tancítaro. Todos participantes del "Proyecto de Reconstrucción del Tejido Social"(Capitulo 8).

generan los altos niveles de violencia con los que tienen que vivir a diario. La implementación de la metodología resalta que, aunque los latinoamericanos y caribeños se inclinan por apoyar respuestas cada vez más autoritarias, como lo revelan los últimos resultados de las encuestas realizadas por *Latinobarómetro* (2018), cuando se abren oportunidades para analizar y reflexionar con la gente sobre los problemas de violencia e inseguridad, las personas reconocen no solo la complejidad del problema, sino también de las soluciones que este demanda.

Elementos, dimensiones y dinámicas para la construcción de espacios seguros

El proceso de investigación de este proyecto buscaba, entre otros objetivos, develar qué prácticas comunitarias, políticas de seguridad e iniciativas gubernamentales o de la comunidad internacional posibilitan o impiden la construcción de «espacios seguros». En el proceso de reflexión con mujeres y jóvenes de comunidades afectadas por la violencia y la inseguridad, varios de los equipos locales lograron identificar los elementos esenciales de un espacio seguro, a partir de las vivencias de los y las participantes. En varios de los casos de estudio, la noción de espacio seguro coconstruida a través del proceso de investigación incluyó varios componentes, o esferas, como las denominó el equipo de investigación en Medellín (capítulo 1).

En las dos comunidades de Jamaica, en Cherán, México; en Sanarate, Guatemala; en Tegucigalpa, Honduras, y en Medellín, Colombia, los y las participantes hicieron énfasis en que la posibilidad de hacer uso del espacio urbano, sin temor o riesgos de agresiones, es un elemento esencial de un espacio seguro. Sin embargo, luego de reflexionar críticamente sobre los problemas que les afectan, los y las participantes reconocieron que esta dimensión espacial no es suficiente.

Un «espacio seguro» debía entonces incluir un componente relacional y uno material. En el caso de las comunidades de Jamaica, Medellín y Cherán, por ejemplo, la noción de seguridad de las personas estuvo ligada a la existencia de redes de apoyo y de protección (capítulo 6 sobre Jamaica), a la generación de vínculos positivos y de confianza que les permitan a las personas libre expresión y desarrollo (capítulo 1 sobre Medellín) y el acompañamiento a quienes han sido violentados por parte de otros miembros de la comunidad, esto para atender sus necesidades y evitar la reproducción de violencia (capítulo 7, Cherán). En El Salvador, el equipo coincidió en señalar que los espacios seguros serán posibles en la medida en que se fortalezcan las relaciones comunitarias, interpersonales, sociales o familiares, pues ellas constituyen «una plataforma para la dignificación y la superación del miedo» (capítulo 2). En el mismo sentido, en Tancítaro (Mé-

xico), un espacio seguro es «en el que las personas pueden realizar sus actividades cotidianas, resolver sus problemáticas y apoyarse unas a otras, así como sentir que pueden ser ellas mismas y expresar libremente lo que sienten y lo que piensan» (capítulo 8). Los espacios seguros se materializan en varias dimensiones: la *dimensión personal,* que se refiere al «cuidado de sí mismo, del cuerpo, de la vida anímica y psicosocial»; la *familiar,* que comprende dos modalidades: «La certeza de que los seres queridos estén seguros», y «el ambiente de respeto y cordialidad, de diálogo y escucha»; la dimensión *comunitaria* entendida como «la confianza de poder transitar libremente por el municipio», y la *territorial,* referida a la «confianza de que al municipio no entren grupos del crimen organizado» (capítulo 8).

La investigación en el municipio de Nebaj, en donde participaron jóvenes indígenas, resaltó la importancia del ámbito relacional de la construcción de seguridad. En la cosmovisión e idioma maya no existe el término «espacio seguro», pero el concepto que más se asemeja es el del «buen vivir» o *Ti´ichajil* en ixil. Este concepto –como se mencionó antes– se representa con una red compuesta por tres círculos interdependientes (véase capítulo 3), cuya «ruptura en cualquiera de las conexiones supone un daño, un quiebre de vínculos que requieren ser sanados personal, colectiva y socialmente». En ese sentido, la seguridad, en tanto vivencia, se traduce en confianza entre las personas que componen la familia, la comunidad, la escuela y las autoridades. Para la comunidad ixil, la confianza es impactada por agresiones contra la tierra, el territorio, el agua, el aire, los bosques y la relación con todos los seres del cosmos. Por ello, desde la cosmogonía maya, más que espacios seguros o prevención de violencias, el pueblo ixil «requiere recuperar confianzas entre sí, las cuales han sido rotas por las lógicas del sistema de acumulación capitalista, racista y patriarcal, que no reconoce los pueblos y las personas indígenas como sujetos sociales de derecho» (capítulo 3). Quienes hemos sido formados en la cultura occidental, aún tenemos mucho por conocer y aprender de esta visión maya que constituye una lectura crítica a nuestras tradicionales ideas acerca de la «seguridad» y los «espacios seguros».

En el caso de Medellín y de Sanarate, las mujeres y las y los jóvenes reconocieron que la construcción de espacios seguros requiere también la posibilidad de organizarse y de emprender acciones colectivas que permitan la materialización de sus derechos. Esto concuerda también con el énfasis que participantes en Cherán, México, pusieron en «construir en conjunto nuevas formas de relacionarse soportadas por acuerdos públicos integrales e incluyentes» (capítulo 7) como un requisito para construir seguridad en su comunidad. La posibilidad de organizarse hace que, como en el caso de Tancítaro, los espacios seguros puedan convertirse también en espacios de resistencia. Allí las mujeres han construido grupos parroquiales, de

autoapoyo o grupos económicos, en los que además socializan su descontento ante la problemática social y generan vínculos de solidaridad y de confianza (capítulo 8).

Además de este componente relacional, la investigación reveló que un espacio seguro también está definido por una serie de condiciones materiales que hacen posible la vida digna, y por la capacidad de las agencias del Estado de proveer servicios oportunos y de calidad en esos espacios. En el caso de Tegucigalpa y de las comunidades jamaiquinas, por ejemplo, las y los participantes resaltaron que su percepción de seguridad está estrechamente ligada a la posibilidad de tener un empleo digno y de estar en condiciones de sostener a sus familias. Además, resaltaron que los espacios seguros están caracterizados por ser lugares en donde las instituciones públicas, incluidas la policía, proveen bienes y servicios de una manera justa. La importancia de que existan relaciones respetuosas, eficientes y dignificantes entre ciudadanos y actores estatales fue un asunto clave para los participantes en Medellín.

La noción integral de espacio seguro que resultó de la investigación en los seis países se refleja en las expectativas de las mujeres de los 13 barrios y colonias de Tegucigalpa, que identificaron la seguridad con la libertad, entendida como el derecho a una movilización libre de intimidación y temores de que acaben con sus vidas y las de sus hijos e hijas. También, transitar libremente por el espacio público, sin ser desvalorizadas con insultos, acoso o discriminación y también con la posibilidad de recibir servicios de calidad. Estas mujeres relacionan la seguridad con democratizar el cuidado de sus hijas e hijos, los cuales podrían ser atendidos en las comunidades, para que ellas puedan realizar sus actividades laborales sin el riesgo de dejar a sus hijas e hijos solos en sus casas; asimismo, consideran necesaria la depuración de los servidores públicos, especialmente la policía, al igual que mejoras en la calidad de la educación formal, y la creación de infraestructura para la recreación y la realización de actividades extracurriculares de arte y deporte para la juventud (capítulo 5). Los espacios seguros, desde la perspectiva de las mujeres, además incluyen un componente estético al que le asignan alto valor y que hace alusión a comunidades sin basura, con agua potable y con parques y espacios de recreación que cuenten con diversidad de árboles y flores.

La definición de los componentes esenciales de un espacio seguro permitió a los equipos de Honduras y Colombia identificar una crítica de las mujeres de las comunidades a la visión urbanística patriarcal que ha predominado en la organización de sus barrios y colonias y que les impide el disfrute de los espacios públicos comunitarios. Señalan la inexistencia de lugares específicos para que ellas puedan hablar de su problemática, ya que, mientras en Medellín los grupos armados se apropian de los espacios públicos, en el caso de Honduras, los presidentes de patronatos se

comportan como dueños de las instalaciones comunitarias, por lo que, para poder utilizarlas, las mujeres se ven obligadas a pedir su autorización.

Estas claras coincidencias en cuanto a la identificación de las características de un «espacio seguro» en los seis países, tiene implicaciones a nivel conceptual y práctico. Por un lado, la investigación revela que las expectativas de seguridad de las personas que viven en algunas de las comunidades más afectadas por problemas de violencia en la región, apelan a un concepto de seguridad amplio y multidimensional, de tipo integral, como el de la seguridad humana e incluso otros van más allá de este ubicándose en perspectivas biocéntricas como el caso de Nebaj. Y por otro, la investigación deja en claro que las expectativas de seguridad de las mujeres, así como las de jóvenes que viven en estas comunidades, sobrepasan los diagnósticos de la crisis regional, que se concentran en las dinámicas criminales y en la contención de la violencia letal medida por índices de homicidios.

Esto implica que, si se toman en serio estas voces y las perspectivas de la gente respecto del problema y las posibles soluciones, deben privilegiarse, fortalecerse y desarrollarse todavía más los enfoques de seguridad comprehensivos que involucren a múltiples actores/actoras, que tengan en cuenta las dimensiones espaciales, relacionales y materiales de la construcción de espacios seguros. En otras palabras, las nociones de espacio seguro que se desarrollan en varios de los capítulos de este libro pueden servir de referencia para analizar las estrategias de seguridad actuales, que como se verá a continuación tienen todavía muchas limitaciones.

Respuestas institucionales frente a la violencia y la construcción de espacios seguros

En el proceso de investigación también se analizaron las respuestas de las autoridades ante los problemas de inseguridad y violencia que viven las comunidades seleccionadas y su capacidad para aportar a la construcción de espacios seguros. La investigación dio cuenta de tendencias regionales, sobre todo con respecto al énfasis en el uso de modelos de policía represivos y al creciente involucramiento de las fuerzas militares en la contención de complejos problemas de violencia urbana. En El Salvador, las políticas de «mano dura« y «redura» no han producido los resultados esperados de disminución significativa de la violencia, por el contrario, como lo destacan los investigadores locales, la Policía Nacional Civil, nacida de los Acuerdos de Paz de 1992, ha desempeñado un papel represivo en los últimos años, lo cual ha llevado a la pérdida de legitimidad y a que la población desconfíe de su

actuación, incluso existen serios cuestionamientos de vinculación con «presuntos grupos paramilitares de exterminio» (capítulo 3).

En otros casos, como el de Medellín y las comunidades estudiadas en Jamaica, hay evidencia del intento por implementar estrategias que complementan acciones policíacas y militares con iniciativas preventivas. En Medellín, por ejemplo, además de operaciones de ocupación en comunidades marginalizadas, se han hecho esfuerzos por desarrollar capacidad institucional para atender las necesidades de mujeres y jóvenes y mejorar infraestructura importante (capítulo 1), y en Jamaica, en el marco de las llamadas Zonas de Operaciones Especiales, además de aumentar los poderes de la policía e implementar operaciones conjuntas entre la policía y los militares, se han institucionalizado programas para reducir la violencia armada desde un enfoque epidemiológico y se ha propuesto llevar a cabo intervenciones sociales en áreas especialmente afectadas (capítulo 6). A pesar de estos esfuerzos, los componentes preventivos de estas intervenciones son a menudo vistos como secundarios o complementarios y esto implica que el apoyo que reciben, además de ser insuficiente e insostenible, terminan fácilmente siendo relegados en momentos de crisis.

Las políticas implementadas por cada Estado en la región siguen dejando la responsabilidad de afrontar la compleja crisis de violencia en manos de policías y militares. La esperanza ciega en que las fuerzas de seguridad de los Estados pueden lidiar con estos problemas, es el resultado de un análisis cortoplacista de los resultados de las intervenciones represivas, que pueden generar reducciones temporales en los niveles de violencia letal, pero que no impiden el resurgimiento de nuevos ciclos de violencia. También es el resultado de un diagnóstico simplista del problema, que concentra la atención en ciertas actividades criminales y en actores ligados a estas, pero invisibiliza el contexto social, económico, comunitario, institucional e histórico en el que estas se desarrollan, así como las múltiples formas de violencia que afectan la vida de los habitantes de una forma diferencial.

Esta investigación puso en perspectiva las intervenciones de seguridad que se han implementado en la región y resaltó la importancia de revisar los diagnósticos desde los cuales se diseñan e implementan estrategias, con la participación de las comunidades más afectadas y reconociendo su diversidad. Incluso en casos que son vistos como exitosos, como el de Medellín y Cherán, la investigación mostró la importancia de ampliar la perspectiva desde la cual se analiza y se provee la seguridad, que se ha restringido a la protección del territorio de la influencia del crimen organizado. Esta perspectiva omite el análisis de dinámicas comunitarias y sociales que pueden perpetuar violencias e inseguridad para ciertos grupos, a pesar de reducciones en manifestaciones directas y visibles como los homicidios y los ataques armados.

En ese sentido, la mirada crítica del equipo en Tancítaro les condujo a afirmar que, incluso para garantizar la seguridad territorial a mediano y largo plazo, se requiere necesariamente atender las distintas modalidades de violencias en el interior de la comunidad, de ahí la importancia de optar por formas no violentas para garantizar la seguridad en el municipio, que les permita a las nuevas generaciones experimentar la construcción de espacios seguros, que sean también «espacios de confianza en los que se promueva el diálogo», espacios en los que sea posible *resistir* el contexto, así como fortalecer las prácticas de cuidado en las que se involucran los afectos, las emociones y los sentimientos como elementos de cohesión y herramientas para iniciar procesos de transformación social (capítulo 8).

Las políticas implementadas en varios de los países incluidos en esta investigación ponen su mayor énfasis en el uso de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad, que tienen serios problemas de capacidad, entrenamiento y corrupción. En no pocos casos los habitantes de las comunidades tenían la certeza de las vinculaciones de miembros de las fuerzas de seguridad con organizaciones criminales o habían sido víctimas de prácticas corruptas que terminan por agravar el problema. El trabajo de investigación puso en evidencia las problemáticas relaciones de las comunidades con la policía. En Jamaica, por ejemplo, a pesar de que muchos residentes apoyan las intervenciones especiales que se han venido implementado en respuesta a la crisis de violencia en sus comunidades, y aceptan la pérdida de algunos derechos que estas conllevan, los habitantes no confían en la policía y se sienten tratados de manera injusta. Varios de ellos reportaron haber sido víctimas de excesos policiales, lo que ha llevado a bajos niveles de denuncias de crímenes, incluyendo crímenes serios como violaciones (capítulo 6).

Es muy diciente que, a excepción de Cherán y Tancítaro, en México, con sus organizaciones de autodefensa ciudadana,[17] en ninguno de los casos, los y las participantes en la investigación confiaran en las personas directamente encargadas de proveerles protección. En la experiencia de los dos municipios de Michoacán, en donde de manera valiente y organizada las comunidades se enfrentaron al crimen organizado e incluso a las estrategias de seguridad del Gobierno, las formas de autodefensa, por diversos factores, no logran perdurar aisladamente y, con el paso del tiempo, esas formas autónomas de seguridad se van debilitando si no se construye una estrategia regional en la cual se den intercambios de estrategias y experiencias que permitan establecer nuevas formas y acuerdos de seguridad (capítulo 8), lo cual

17 Como narran en este libro (capítulo 8), Las autodefensas en México surgen de la alianza entre campesinos, productores, comerciantes, funcionarios y otros actores para enfrentar militarmente al crimen organizado. A diferencia de la experiencia colombiana, en México no se han relacionado a las autodefensas con grupos paramilitares. Existen experiencias muy diversas entre las que encontramos a las policías comunitarios que son la institución de seguridad de algunas comunidades indígenas basadas en los usos y costumbres.

amerita una reflexión que conduzca a la búsqueda de nuevas estrategias y aliados que, sin debilitar la capacidad de agencia de las comunidades, fortalezcan el tejido social y las formas democráticas y pacíficas de convivencia.

En Jamaica, los participantes nunca identificaron a la policía como un actor que ayudara a promover la construcción de espacios seguros, y en el caso de Medellín, a pesar de la implementación de un Plan Cuadrantes inspirado en principios de modelos de policía comunitaria, persiste también una relación problemática con las comunidades y hay mucha desconfianza por la connivencia de miembros de la policía con actores criminales.

En Nebaj, algunas funcionarias y algunos funcionarios dieron cuenta de las dificultades internas para hacer frente a la problemática de inseguridad, dado que las lógicas burocráticas están permeadas por la corrupción. Además, se presenta dificultad para la coordinación interinstitucional y, en algunos casos, la amenaza de actores del crimen organizado impide el cumplimiento de las funciones estatales. Las mujeres de Tegucigalpa coincidían en resaltar que uno de los factores generadores de violencia en su comunidad es la debilidad en la respuesta institucional para garantizar los derechos de las mujeres. Esta debilidad se manifiesta cuando los funcionarios a menudo reproducen patrones patriarcales y machistas y cuando la atención es tardía y con pocos recursos. Como en los casos mencionados antes, en Tegucigalpa las comunidades acusan a funcionarios de ser corruptos, protectores o informantes de los agresores y, por tanto, de ser generadores de mayor inseguridad para las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar. A esto se suma el alto nivel de impunidad, que aumenta cuando el agresor en el hogar es un policía o un militar.

Con respecto a los problemas de violencia e inseguridad que afectan a las mujeres, las participantes eran conscientes de que su seguridad implica tener un real acceso a la justicia, con un trato digno, sin ser revictimizadas cuando acuden a las instancias judiciales, y acceso a procesos que no sean tediosos, tardíos y que lleven a fallos. En casi todos los países se han ido creando leyes protectoras de los derechos de las mujeres, no obstante, el principal problema radica en su falta de aplicación efectiva y adecuada. Por ejemplo, en Honduras, la División de Género de la policía ha capacitado a agentes en la temática de violencia contra las mujeres, pero su personal es insuficiente para dar cobertura a las necesidades de seguridad en las colonias.

La perspectiva de mujeres y jóvenes sobre los problemas de violencia e inseguridad en sus comunidades y sobre lo que implica la construcción de espacios seguros resalta la debilidad de las actuales respuestas institucionales y la necesidad de enfoques más comprensivos para abordar el problema. Tomando como punto de referencia la noción integral de seguridad que subyace a los conceptos de espacio seguro construidos con los y las participantes en este proceso de investigación,

es claro que las respuestas de seguridad que se necesitan en estos contextos son aquellas que no solo logren contener la violencia letal y la influencia del crimen organizado, sino también las que posibiliten y generen procesos sociales que permitan la generación de relaciones positivas entre los habitantes, entre estos y las agencias del Estado e incluso entre estos y su entorno. Es evidente que las fuerzas policiales y militares resultan insuficientes para adelantar esta compleja tarea, por lo que se requiere el trabajo mancomunado de varios actores institucionales y civiles, así como de la participación de las comunidades con el apoyo y protección de las autoridades.

A manera de conclusión: retos que sugiere la investigación

La indagación de procesos de construcción de espacios seguros en seis países de la región, privilegiando la perspectiva de mujeres y jóvenes de comunidades particularmente afectadas, llevó a los equipos y a los participantes a pensar en propuestas que eran relevantes a cada una de las localidades en las que se adelantó el proyecto. Estas propuestas que se exploran en los capítulos aportan ideas sobre cómo podrían aportar la academia y las comunidades a la construcción de espacios seguros.

A nivel analítico, involucrar a las comunidades en el proceso de indagación sobre los problemas de inseguridad y violencia puede ayudar a revisar y reformular los marcos conceptuales para entender la dinámica de inseguridad y violencia en la región. Uno de los aprendizajes de este proyecto, expresado por el equipo de El Salvador y las coinvestigadoras de Nebaj, es que, pese a las dificultades para armonizar los tiempos de todas las personas integrantes de los equipos de investigación, se dio la posibilidad de «superar el análisis plano e iniciar una reflexión crítica» que, si bien tuvo como punto de partida la seguridad, condujo a implicar otras dimensiones de la convivencia social y comunitaria (capítulos 2 y 3). Además de esta ampliación del marco conceptual, el análisis con las comunidades y en especial con grupos de mujeres, hizo evidente que múltiples violencias que ocurren en el espacio comunitario están interconectadas, son transversales a la vida de la comunidad y se refuerzan unas a otras (capítulo 7). Esto tiene implicaciones para el diseño de estrategias de seguridad, las cuales deben reconocer y abordar esas interconexiones.

Como lo reiteraron los colegas salvadoreños «el conocimiento no es una prerrogativa de la academia, las experiencias de vida, la recuperación de las memorias y el reconocimiento de la historia producen saberes que constituyen una fortaleza para las propuestas de reconstitución del ser y de los pueblos» (capítulo 2). Sin embargo, para lograr la reflexión, el reconocimiento y la combinación de diferentes tipos de conocimiento y el involucramiento de la comunidad, la academia debe hacer un esfuerzo por generar no solo relaciones horizontales y respetuosas con las comunidades, sino,

además, crear espacios, nuevas formas de trabajo, incluso nuevos roles y procesos que les permitan a los pobladores participar de manera activa en las diferentes fases del proceso de investigación. Esto implica gran flexibilidad y creatividad por parte de investigadores y políticas de investigación de las universidades para ajustar las dinámicas académicas con las dinámicas comunitarias y lograr que el conocimiento producido sea relevante tanto para los debates académicos y prácticos como para las comunidades involucradas.

Esta investigación, con su enfoque desde abajo y su metodología empleada de coproducción de conocimiento, envía un mensaje de alerta al mundo académico especialmente a las ciencias sociales y a las disciplinas involucradas en el diseño y la planeación de políticas públicas y estrategias concernientes a la seguridad, en el sentido de darles más protagonismo a agentes sociales como las comunidades y sus líderes y lideresas, quienes conocen de las dinámicas particulares de sus territorios, y que desde ese saber específico pueden contribuir a generar nuevos conocimientos que conllevan, incluso, la resignificación de categorías teóricas como ocurrió en este caso con la de espacio seguro. Además, desde sus experiencias cotidianas, los liderazgos comunitarios y los agentes gubernamentales también pueden hacer valiosos aportes metodológicos a un proyecto como este, en el cual una fluida y constante relación dialógica con los referentes teóricos y metodológicos construidos en el mundo académico logran el enriquecimiento tanto de la teoría como de los métodos aplicados hasta ahora.

El proceso adelantado en este proyecto evidenció que la confluencia de múltiples saberes conlleva igualmente ciertas tensiones en las que subyacen relaciones de poder que exigen un adecuado tratamiento democrático, guiado por el horizonte de transformación de la realidad. Más que alarmarse ante el natural surgimiento de conflictos propios de la coproducción de conocimientos, se debe procurar una transformación positiva de estas contradicciones y, de esta manera, impedir que ellas constituyan un obstáculo al avance del conocimiento y conduzcan al fraccionamiento de las organizaciones o a ejercicios autoritarios por parte de algunos de los involucrados.

Proyectos como este, en el que los sujetos participantes (académicos, comunitarios y otros) involucran no solo sus conocimientos racionales sino sus emociones y sentimientos, conllevan exigencias de sensibilidad y compromiso con los propósitos transformadores del mismo, en el cual –para los académicos– se traduce en aspectos puntuales como flexibilidad en el manejo de los tiempos, pues se debe adecuar los horarios según la disponibilidad de las comunidades; en estos procesos, al igual que surgen conocimientos, la interacción genera afectos y vínculos más allá de los estrictos marcos establecidos en las jornadas laborales definidos en los planes de trabajo de los universitarios.

Como se mencionó antes, este proyecto demostró que el uso de metodologías de investigación participativas como las empleadas por los equipos, puede generar conocimiento contextualizado sobre las problemáticas, e igualmente producir formas de interacción y reflexión que ayudan a deslegitimar violencias e involucrar a miembros de la comunidad en repensar estrategias de acción. Esto, sin embargo, a veces obliga a las académicas y a los académicos a estar dispuestos a escuchar y reformular sus propias definiciones y los marcos conceptuales con los que se han movido tradicionalmente. Así lo resaltó, por ejemplo, el equipo de El Salvador que, al explorar la seguridad en su contexto, encontró que la demanda social y principal preocupación de las comunidades era más por la paz que por la seguridad. De ahí la urgencia de clarificar estos dos conceptos en lo teórico y en la práctica. Del análisis sobre el terreno específico surge la invitación a tener una mirada diferente frente a las pandillas y las maras, en el entendido que, desde la perspectiva de construcción de paz, no existen personas ilegales, y estas, en tanto actores, deberían ser incluidas en procesos de transformación social que lleven a parar ciclos de violencia (capítulo 2). Esta experiencia nos deja profundas reflexiones para el debate sobre la seguridad, nuestro accionar en las comunidades y las políticas públicas implementadas al respecto.

La interacción con actores armados presentes en las comunidades es, sin duda, un punto controversial en el proceso de construcción de espacios seguros. En este proyecto de investigación solo se intentó trabajar con miembros de pandillas en El Salvador, en donde el equipo de trabajo tenía experiencia previa de interacción social. Este es un tema muy sensible para líderes y lideresas de las comunidades, quienes consideran necesario establecer diálogos con miembros de maras y pandillas, dado que son actores clave con presencia en las comunidades, pero aún existe prevención y temor, algunas veces por desconocimiento de encontrar las mejores estrategias para trabajar con estos grupos, en otros casos porque hay recelos por las consecuencias legales que ello pueda implicar. Estos riesgos son advertidos por líderes de comunidades en Honduras, El Salvador y Colombia, con relación a cómo evitar legitimar la violencia que ejercen en estos contextos, y cómo no exponer la seguridad de otros participantes en los procesos. De ahí la importancia de tener en cuenta las diferentes dinámicas locales y los niveles de cooptación de grupos juveniles por parte del crimen organizado, así como explorar las formas en que se involucran estos actores en las dinámicas comunitarias, especialmente diseñar y aplicar estrategias para prevenir que otros jóvenes, y niños y niñas formen parte de estos grupos y aplicar apropiadas rutas de acción.

Un reto identificado en varios de los países, fue la importancia de desarrollar y fortalecer las capacidades de habitantes de las zonas más afectadas para ejercer formas de ciudadanía que contribuyan a la construcción de comunidades más seguras.

En varios de los casos, en especial en Sanarate, México, y en Jamaica, las posibilidades de organización ciudadana, así como la capacidad de incidencia y de auditoria social sobre las autoridades locales, son muy reducidas. La construcción de espacios seguros, como se argumentó antes, requiere ciertas capacidades organizativas y esto hace indispensable la creación de espacios y procesos de acompañamiento ciudadano, sobre todo en estos contextos en donde la violencia ha debilitado el tejido social. En estos espacios se puede facilitar la reflexión sobre problemáticas locales, generar procesos de concientización y mejorar las capacidades de responder de manera no violenta a los problemas de inseguridad. Una ciudadanía crítica, democrática y consciente de su realidad y de sus problemáticas es vital para diseñar estrategias de seguridad, que como lo devela la investigación, se basan en la construcción de relaciones de convivencia, que más allá de la estrecha mirada de lo legal/ilegal promueva el tratamiento pacífico de los conflictos.

Un hallazgo promisorio en todos los casos es que las comunidades urbanas son muy receptivas a metodologías que parten de la cotidianidad y en donde la experiencia de cada individuo es tomada en cuenta (véase capítulo 4). Las herramientas participativas que promueven el diálogo y la reflexión pueden tener impacto significativo en las actitudes hacia la violencia y, además, pueden proveerles mecanismos a los y las participantes para convertirse en agentes multiplicadores de transformación social. Esto fue evidente en el desarrollo del proyecto a través de los investigadores comunitarios y las investigadoras comunitarias que han adquirido habilidades y se han convertido en referentes para otros miembros de la comunidad. Un reto, sin embargo, es la continuidad y la sostenibilidad de los procesos de acompañamiento.

El caso de Medellín ofrece significativas lecciones sobre la importancia de apoyar procesos organizativos ciudadanos. En esta ciudad, a pesar de los altos niveles de violencia, se han logrado consolidar colectivos sociales y procesos comunitarios, agrupaciones que fueron identificadas por las y los participantes como espacios seguros que facilitan la articulación de iniciativas colectivas y ayudan a mejorar la seguridad de jóvenes y mujeres, dado que ellos valoran estos espacios en donde se vive un ambiente de tranquilidad y libertad, donde se desarrollan estrategias para enfrentar los efectos negativos de la violencia y la inseguridad, y donde se llevan a cabo acciones de mediación y de acompañamiento a víctimas.

La construcción de políticas públicas también requiere mayor participación de las comunidades, en particular de mujeres y jóvenes que conocen la dinámica de las violencias en sus territorios. En algunos países de la región se han hecho intentos por generar mecanismos de participación ciudadana en asuntos relacionados con

la seguridad, sin embargo, a menudo el rol de la gente se mantiene supeditado al de informantes o al de legitimar las estrategias planteadas por las instituciones de seguridad. En otros casos, ante la desprotección por parte del Estado, como en Cherán y en Tancítaro, las mismas comunidades se han apropiado de la provisión de seguridad y del gobierno de sus territorios. En ambos casos es importante mantener algunas formas de participación ciudadana o comunitaria y repensar otras posibles que puedan ayudar a establecer mejores diagnósticos de los problemas, a visibilizar problemáticas ampliamente aceptadas por razones culturales o históricas que afectan la seguridad de ciertos grupos, a propiciar nuevas formas de evaluación de las estrategias de seguridad que se implementan y a identificar acciones que pueden coadyuvar a la construcción de comunidades más seguras.

Referencias

Abello-Colak, Alexandra y Pearce, Jenny. 2015. «Securing the Global City?: An Analysis of the «Medellin Model» through Participatory Research» en *Conflict Security and Development*. Vol. 15, N.º 3.

Abello-Colak, Alexandra y Pearce, Jenny. 2018. ««Security from Below» in Contexts of Chronic Violence», en *Inclusive Peace and Security, IDS Bulletin Archive Collection.* R. Luckham (ed.) Vol. 49, 1A.

Abello-Colak, Alexandra y Pearce, Jenny. 2019. «Co-construyendo seguridad «desde abajo»: una metodología para repensar y transformar la seguridad en contextos de violencia crónica» en: Kloppe-Santamaría, Gema y Abello-Colak, Alexandra (eds.). *Seguridad humana y violencia crónica en México: nuevas lecturas y propuestas desde abajo.* México: Instituto Tecnológico Autónomo de México: Miguel Ángel Porrúa.

Adams, Tani M. 2017. *How Chronic Violence Affects Human Development, Social Relations, and the Practice of Citizenship: A Systematic Framework for Action.* Washington: Woodrow Wilson Centre. En: <https://www.wilsoncenter.org/publication/how-chronic-violence-affects-human-development-social-relations-and-the-practice>.

Angarita, Pablo Emilio; Abello-Colak, Alexandra; Pearce, Jenny *et al.* 2019. *Vínculos. Espacios seguros para mujeres y jóvenes en América Latina y el Caribe.* Buenos Aires: CLACSO.

InSight Crime. 2017. «Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2016». En: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-insight-crime-sobre-homicidios-2016/>.

InSight Crime. 2018. «Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2017». En: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/>

InSight Crime. 2019. «Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2018». En: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/>

Kloppe-Santamaría, Gema y Abello-Colak, Alexandra (Eds.) 2019. *Seguridad humana y violencia crónica en México: nuevas lecturas y propuestas desde abajo.* México: Instituto Tecnológico Autónomo de México: Miguel Ángel Porrúa.

Latinobarómetro. 2018. *Informe 2018.* En: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp>.

OSHM -Observatorio de Seguridad Humana de Medellín-. 2012. *Control territorial y resistencias: una lectura desde la seguridad humana*. Medellín: Universidad de Antioquia.

OSHM -Observatorio de Seguridad Humana de Medellín-. 2014. *Nuestras voces sobre seguridad humana en Medellín. Diálogos sobre seguridad*. Medellín: Universidad de Antioquia.

Pearce, Jenny. 2007. «Violence, Power and Participation: Building Citizenship in the Contexts of Chronic Violence» en: *IDS Working Paper*, 274. Brighton: IDS.

Entidades de adscripción de autores y autoras

Colombia: Grupo de investigación interdisciplinario sobre *Conflictos, Violencias y Seguridad Humana* línea *Observatorio de Seguridad Humana de Medellín* Universidad de Antioquia. Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental (Comuna 1). Núcleo de Pensamiento (Comuna 6).

El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Equipo de Construcción de Paz Desde Abajo (CPDA). Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños (ANTRAIVEAS), Mesa de Prevención de la Violencia.

Guatemala: Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Universidad Rafael Landívar. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP).

Honduras: Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H). OXFAM (Honduras).

Jamaica: University of West Indies. Violence Prevention Alliance. New Generation Youth Club. Cambridge Police Youth Club.

México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Centro de Investigación y Acción Social (CIAS). Consejo ciudadano del Buen Convivir y Programa de reconstrucción del tejido Social (PRTS)

Gran Bretaña: London School of Economics and Political Science.

Entidades financiadoras

International Development Research Centre (IDRC) de Canadá.
Catholic Relief Services (CRS) de Guatemala.

Este libro se puede leer en muchos niveles. Uno de ellos puede no ser muy obvio para aquellos que están acostumbrados a leer sobre violencia e inseguridad en América Latina. Es el nivel que le da a este libro un estatus de originalidad y una contribución que va más allá de la región: el ser una forma de conocimiento destinada no solo a interpretar el mundo, sino a cambiarlo [...], visibiliza la importancia de un *proceso de investigación* ajustado al tipo de conocimiento que produce. Aquí se conectan el proceso y el resultado, lo que debería propiciar un debate más amplio con respecto a *cómo* y *qué* sabemos de la naturaleza de la violencia y la agencia social para reducirla [...]. Esta visión es particularmente relevante en contextos donde el Estado reproduce la violencia, con terribles impactos, en especial en periferias excluidas.

[...] El proceso de investigación abordado en este libro transgredió muchas fronteras. Hubo fronteras entre países, barreras lingüísticas, fronteras en torno a la educación, el conocimiento y la experiencia, y entre etnias, géneros y generaciones. [...] este proceso reunió a académicos, activistas y líderes comunitarios de cinco países de América Latina y uno del Caribe, incluyendo comunidades indígenas en México y Guatemala [...]. La violencia está en el tiempo y en el espacio y se reproduce entre las generaciones en diversos espacios de socialización. Este proceso de investigación que trasciende las fronteras, plantea una discusión que atraviesa los diferentes casos sobre cómo los déficits y las desigualdades materiales, las violencias estatales en nombre de la 'seguridad', las especificidades culturales, de género y generacionales de la experiencia y la comprensión de la violencia, así como las diversas formas de criminalidad, se cruzan y se reproducen a través del tiempo y el espacio.

Jenny Pearce, investigadora y profesora en el Latin American and Caribbean Centre (LACC) de la London School of Economics and Political Science.

This book can be read on many levels. One level may not be so obvious to those who are used to reading about violence and insecurity in Latin America. It is the level which gives this book a claim to true originality and a contribution beyond the region. This contribution is to form of scholarship aimed not only to interpret the world but to change it [...], this text visibilizes the significance of the *research process* to the kind of knowledge that is produced. It connects process and outcome, and this should start a wider debate about *how* as well as *what* we know about the nature of violence and the social agency to reduce it [...]. This is particularly relevant in contexts where the State reproduces violence, with terrible impacts on the margins.

The research process discussed in this book transgressed many boundaries. There were inter-country borders, linguistic barriers, boundaries around education, knowledge and experience and between ethnicities, genders and generations. [...] the research process brought together scholars and community activists and actors from five Latin American and one Caribbean country. And within Latin America there were indigenous communities in Mexico and Guatemala who participated [...]. Violence is located in time and space. It is reproduced inter-generationally through varied socialisation spaces. The boundary crossing research process, raises cross case discussion about how material deficits and inequalities, state violences in the name of 'security', cultural, gender and generational specificities of experience and understanding of violence, and varied forms of criminality, intersect and reproduce through time and space.

Professor *Jenny Pearce*.
Latin American and Caribbean Centre (LACC), London School of Economics and Political Science.

Observatorio de Seguridad Humana
Medellín

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Instituto de Estudios Regionales
—INER—

IDRC | CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international
Canada

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

ISBNe: 978-958-5596-35-1
9 789585 596351